



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

**MOVILIZACIÓN SOCIAL EN ECUADOR Y BOLIVIA EN
EL SIGLO XXI: ENTRE LA LUCHA ANTINEOLIBERAL Y
LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS**

TESIS QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
MAESTRA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

PRESENTA

GRACE DIANA NOGALES HARO

ASESOR: DR. MASSIMO MODONESI

CES-UNAM

CIUDAD UNIVERSITARIA, SEPTIEMBRE 2015



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

Con infinita gratitud, al pueblo mexicano y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por abrirme las puertas de esta maravillosa experiencia, la cual me ha hecho crecer no solo como profesionalista sino como ser humano. Los colores, sabores y paisajes de México son tesoros que siempre guardaré entre los más gratos recuerdos de mi vida.

A mi familia, con especial reconocimiento a mi madre, por su apoyo incondicional a todos mis proyectos, aunque estos impliquen distancia y ausencias.

A mi tutor, el Dr. Massimo Modonesi, y mis sinodales, las Doctoras Margarita Favela, Berenice Ramírez, Diana Guillén y Alejandra González, por sus orientaciones e invaluable aportes a mi trabajo.

A mis compañeros y compañeras de la Maestría en Estudios Latinoamericanos por su hospitalidad y calidez, especialmente a Mariana y Fabiola, queridas amigas.

A mis compañeros del colectivo Bulla Zurda, por los espacios de discusión y de trabajo compartidos, y por su apoyo y amistad fraterna.

A Miguel Ángel, por todas las alegrías y luchas compartidas estos dos años, por ser parte primordial de la hermosa aventura que ha significado esta etapa, y por el cariño y la compañía brindados aún en los momentos más difíciles.

Mobilización social en Ecuador y Bolivia en el siglo XXI: de la lucha antineoliberal a los gobiernos progresistas

	Pag.
Introducción	3
Capítulo 1. Organización y lucha social en América Latina: los casos de Ecuador y Bolivia.....	26
1.1 El contexto regional: una aproximación al fenómeno de la movilización social en América Latina	26
1.2 La movilización social en el Ecuador.....	44
1.3 La Movilización Social en Bolivia.....	61
Capítulo 2. La izquierda en el poder: los proyectos políticos de Rafael Correa y Evo Morales.....	82
2.1. La ruptura del paradigma político boliviano y la emergencia del MAS	82
2.2 De la crisis del paradigma político al proyecto de la Revolución Ciudadana: la emergencia de Alianza País	99
2.3 La construcción del nuevo pacto social en Ecuador y Bolivia: entre la irrupción de los movimientos sociales y la continuidad de las dinámicas de la vieja clase política.....	113
Capítulo 3. La organización social en el gobierno de Rafael Correa	127
3.1 La correlación de fuerzas en el gobierno de Movimiento PAIS: escenarios de la disputa por el proyecto	127
3.2 Organizaciones sociales y Estado: entre la institucionalización y el antagonismo	149
3.3. A modo de balance: avances y desafíos a ocho años de gobierno	171
Capítulo 4. La organización social en el gobierno de Evo Morales.....	189

4.1 La correlación de fuerzas en el gobierno del MAS: escenarios y sentidos de la disputa por el proyecto	189
4.2. Organizaciones sociales y Estado: entre la institucionalización y el antagonismo	213
4.3. A modo de balance: avances y desafíos a nueve años de gobierno	233
Conclusiones	250
Bibliografía.....	263

Introducción

El comienzo del nuevo siglo se convirtió, para gran parte de América Latina, en un escenario de ruptura con la hegemonía del modelo neoliberal, en el marco de la aparición de nuevas dinámicas de organización y movilización social, las cuales han ido gestando varios caminos hacia la configuración de lo que en palabras de Massimo Modonesi constituiría un “cambio de época”¹.

En este sentido, la primera década del siglo XXI representó el espacio en el cual tomaron forma los procesos de resistencia que venían articulándose desde la década de los noventa como respuesta al recrudecimiento del despojo, auspiciado por el neoliberalismo, y en el marco del reacomodo de las luchas sociales a los nuevos ciclos del capital.

La revisión del proceso mediante el cual se han ido configurando las luchas sociales a lo largo de la historia del siglo XXI, así como el análisis de la emergencia y el desarrollo de las nuevas formas de movilización social que marcan este siglo, representarán para la presente investigación el eje por el cual se articulan dos proyectos que aparecen como alternativos en este nuevo escenario: Ecuador y Bolivia, países en los que nos enfocaremos a desenmarañar los tejidos a través de los cuales se establecen las relaciones entre los movimientos sociales y los proyectos políticos que se están desarrollando, es decir, los nuevos espacios de participación que se han abierto para los sujetos sociales tanto dentro como fuera de la esfera institucional.

¹ Ver más en Modonesi, Massimo, Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época. A contra corriente. Vol. 5, No. 2, invierno 2008, pp. 123-124.

La presente tesis tiene el objetivo de analizar la trayectoria de los movimientos sociales de Ecuador y Bolivia a los largo del siglo XXI, partiendo de la consideración de que en ambos países la movilización social ha pasado de la resistencia al modelo neoliberal a la ruptura del paradigma político, mediante la consecución de gobiernos emanados de la movilización, los cuales son considerados por los analistas como parte del giro progresista de la región, que inicia con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.

En tal sentido, lo que se busca es distinguir las relaciones que permitan desmenuzar los complejos procesos políticos que atraviesan estos países con la finalidad de contrastar con la realidad las hipótesis que orientan la presente investigación y que se enumeran a continuación:

- La movilización social en Ecuador y Bolivia es un elemento que permite canalizar los intereses en contradicción de las diversas clases políticas y actores sociales hacia la construcción de un nuevo pacto, encabezado por los sectores autodenominados progresistas, en cuyos casos se plantea la transición desde la resistencia al neoliberalismo hacia la construcción de un escenario pos neoliberal.
- Derivados de las diferentes coyunturas políticas generadas tanto en Ecuador como en Bolivia, las cuales se encuentran marcadas por la inserción del modelo neoliberal, aparecen movimientos como Alianza País-AP y el Movimiento al Socialismo-MAS, los cuales rompen con el hegemon de la clase política tradicional y, a su vez, constituyen las herramientas en disputa para la generación de un nuevo pacto social (constituyentes).
- AP y el MAS, al constituirse como gobiernos se insertan de igual modo en las dinámicas de la política tradicional, por tanto, y derivado también de que estas organizaciones tienen su origen en la necesidad de servir como herramienta política de los movimientos sociales en la dinámica de la institucionalidad, tienden a configurarse en un filtro para excluir a actores

sociales cuyo discurso no se inserta dentro del sistema de representación tradicional, encabezado fundamentalmente por los partidos políticos.

- Como producto de los procesos de consolidación de los gobiernos que encabezan Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador encontramos el desplazamiento de los sectores que representan a los movimientos sociales de mayor tradición (sindical e indígena) en favor de la emergencia de nuevas élites políticas que se van a caracterizar por tener un origen vinculado, en el caso boliviano, al sector indígena cocalero más acomodado y, en el caso ecuatoriano, a una élite académica de clase media alta y, en muchos, casos ajena a los movimientos sociales.

En tal sentido, la presente investigación se planteó varias preguntas para vislumbrar los elementos por los cuales se desarrolló el proceso social y político que aquí se revisa: ¿cuáles son los procesos históricos que configuran la movilización social en Ecuador y Bolivia y que posibilitan que estos países pasen de la resistencia al neoliberalismo a la posible apertura de escenarios pos neoliberales, partiendo del contexto regional en el que se hace presente una ola de gobiernos identificados con la izquierda?, ¿cómo se configura el escenario (crisis del neoliberalismo) en el que irrumpen los movimientos de AP y el MAS, el cual culminará con la construcción de nuevos pactos sociales y cómo se componen y estructuran estos pactos (constituciones)?, ¿cuáles son las fuerzas que configuran los movimientos de AP y el MAS y cuál es la capacidad de acción y decisión de los movimientos sociales en la conducción del proyecto político de ambas organizaciones?

Así también, ¿cuál ha sido el rol de los movimientos sociales en el nuevo escenario institucional abierto por los gobiernos de AP y el MAS, en qué medida han logrado insertarse en dicho escenario y, en tal sentido, han sido AP y el MAS realmente herramientas al servicio de los movimientos sociales para su incidencia en el nuevo escenario político?, ¿son estos procesos políticos capaces de

proponer alternativas que respondan a los proyectos impulsados por los movimientos sociales que les dieron sentido en un inicio y que tenían la intención de establecer una dinámica social bajo un escenario posneoliberal? Y, finalmente, ¿derivado del reposicionamiento de las clases dominantes que conducían la política tanto en Ecuador como en Bolivia, existe desde sus gobiernos un distanciamiento con las bases hasta el punto de permitir a las “nuevas élites” contener o refrenar los procesos de movilización social que encabezaron los sectores subalternos que componían AP y el MAS?

Para responder a las preguntas planteadas se hizo necesario construir un marco teórico y conceptual orientado a establecer el análisis de las problemáticas planteadas: la movilización social y la participación política en Ecuador y Bolivia. La construcción analítica de la cual parte el desarrollo de esta investigación retoma elementos derivados de la perspectiva materialista histórica y de los posicionamientos teórico-analíticos más recientes de autores y especialistas de la región. A continuación se presentan algunas aproximaciones teóricas cuyos aportes fueron de utilidad para adentrarnos en el fenómeno de la movilización social que va a caracterizar a los procesos ecuatoriano y boliviano.

Al respecto de la noción de movilización social existen varias visiones y caracterizaciones que se han ido modificando en función del contexto y que para efectos del análisis de los fenómenos sociales que han auspiciado el cambio de época, parecen quedarse cortos o enfocar solo un nivel de estas formas de organización, atravesadas por varias y novedosas dimensiones como la emergencia de mecanismos comunitarios de articulación social y el surgimiento de reivindicaciones con capacidad de cuestionar no solo el orden económico y social, sino todos los dispositivos mediante los cuales se construye la hegemonía².

² “Conforme a la noción de hegemonía, la «iniciativa de la clase dominante» se refiere al uso del poder tendencialmente como consenso y no necesaria o principalmente como coerción (...)

En este debate respecto a cómo definir a los movimientos sociales inmersos en estas nuevas dinámicas, es necesario rescatar la perspectiva que propone el marxismo, la cual contiene elementos que siguen vigentes en los nuevos escenarios de conflicto. Esta tradición se plantea como base la noción de la lucha de clases para explicar las condiciones que dan lugar a la articulación de procesos resistencia, en contraposición con la noción de las clases dominantes que identifican a los sujetos organizados como “masas alienadas” que responden a un comportamiento colectivo e “irracional”.

La teoría marxista parte de la identificación de las contradicciones estructurales de la sociedad capitalista en la cual la polarización entre los dueños de los medios de producción y las clases trabajadoras coloca a las segundas en una posición antagonista con los primeros, de cuya lucha debería surgir un nuevo orden económico y político liderado por las clases obreras y orientado a la socialización de los medios de producción. En tal sentido, si bien el marxismo no expresa directamente una definición de movilización social, sí permite comprender los elementos que la generan. Como lo señala Luis Alberto Tuaza:

Para Marx, la gente se suma a las acciones colectivas, cuando la clase social a la que pertenece está en contradicción plenamente desarrollada con sus

Gramsci contrapone dominación (hegemonía) y subalternidad creando un binomio que acompañará su reflexión teórica y sellará la especificidad de su pensamiento al interior del marxismo. Este énfasis en la relación de dominación marca la preocupación del autor por la superestructura –distinguiendo metodológicamente dimensiones en su interior (sociedad política y sociedad civil)– y su interrelación con la base económica. La acepción de la noción de sociedad civil que –junto a la de hegemonía– se asumió como un gran aporte de Gramsci no solo a la teoría marxista sino a la teoría política en general, es una derivación lógica del problema de la dominación como contraparte superestructural de la explotación”. En Modonesi, Massimo, Subalternidad, antagonismo, autonomía: marxismos y subjetivación política, CLACSO, Buenos Aires, 2010, p. 31.

antagonistas. La movilización social, por tanto, sería la consecuencia de la toma de conciencia de clase y la organización (Marx y Engels, 1985: 45). Marx pensaba que el problema de la lucha de clases entre la burguesía y los proletarios se resolvería cuando las contradicciones del capitalismo y la solidaridad que habría de surgir después de años de trabajar junto a otros obreros abrieran los ojos de los trabajadores a sus intereses reales³.

El análisis propuesto desde la teoría marxista abona al entendimiento de las problemáticas sociales y económicas que tuvieron lugar en los albores del proceso capitalista, entre finales del siglo XIX y principios del XX, además de que fue útil para comprender los procesos históricos y políticos que marcaron el rumbo del siglo pasado.

Así, bajo la influencia de la óptica marxista se condujeron un gran número de teorías y corrientes que tomaron como eje dicha perspectiva. En este contexto en el que emergieron los procesos revolucionarios de principios del siglo XX se destaca fundamentalmente la perspectiva analítica de Antonio Gramsci, la cual logró arrojar un entendimiento concreto sobre la realidad política de su país (Italia).

Es a la luz de la teoría gramsciana que se desarrollan nuevas perspectivas que tienen su origen en el materialismo histórico y que integran en el análisis a otras realidades de la dimensión política. En este sentido, y para efectos de la presente investigación, uno de los enfoques que considero que puede aportar más elementos al análisis de los procesos de control hegemónico ejercido en Ecuador y Bolivia es la comprensión de las formas de dominación no solo a partir de los mecanismos de sujeción económica y del uso de la violencia como medio de coerción, sino también en función de la construcción de dispositivos culturales que afianzan la hegemonía de las clases dominantes. Como lo señala Isabel Rauber:

³ Tuaza, Luis Alberto, Las principales teorías sobre los movimientos sociales. En Mancero, Monica y Polo, Rafael (coomp.), *Ciencia, política y poder. Debates contemporáneos desde Ecuador*, FLACSO, Quito, 2010, p. 164.

El modo de articulación política sociocultural que impone, reafirma y recrea el tipo de poder dominante fue definido por Gramsci como *hegemonía*, concepto que hoy cobra peculiar significación práctica en el proceso de confrontación de los oprimidos con el poder dominante, en el que se desarrollan también las construcciones de poder propio (hegemonía popular) desde abajo.⁴

En este sentido podemos observar la pertinencia de la perspectiva gramsciana, la cual es la base para entender los mecanismos de control y coerción social, en el marco de dinámicas sociales que se mueven entre el consenso y la resistencia. Además nos permite comprender el análisis que desarrolla Massimo Modonesi al respecto de la movilización social, partiendo de las categorías propuestas originalmente por Gramsci, pero ajustadas a la realidad política y cultural contemporánea, principalmente latinoamericana.

Massimo Modonesi estudia la relación entre tres procesos de subjetivación política que constituyen una constante en las dinámicas de movilización y participación social: la subalternidad (en tanto subordinación), el antagonismo (como insubordinación) y la autonomía (como emancipación). La interacción entre estos tres elementos estará presente en las acciones generadas por los movimientos sociales, así como en la profundidad de las transformaciones que estos logren alcanzar⁵.

En este sentido, la propuesta de Modonesi se puede integrar al análisis de la realidad política latinoamericana, en donde la movilización social ha sido determinante para la formación de proyectos políticos y la emergencia esas nuevas dinámicas organizativas ha tenido un rol protagónico en la construcción de

⁴ Rauber, Isabel. Poderes y hegemonías. Gramsci en el debate actual latinoamericano, Sindicato Luz y Fuerza Mar de Plata, Argentina. Septiembre 2010, p. 5.

⁵ Ver más en Modonesi, Massimo, Subalternidad, antagonismo, autonomía: marxismos y subjetivación política, CLACSO, Buenos Aires, 2010.

dichos proyectos de gobierno, los cuales actualmente plantean un nuevo escenario de disputa de la hegemonía desde dentro de la esfera estatal.

Para comprender los procesos de lucha desarrollados en estos países es importante revisar, primero, la noción de subalternidad construida por Gramsci y retomada por Modonesi, la cual amplía la concepción de la clase obrera como sujeto histórico de cambio hacia todos los ámbitos de la sociedad que se encuentran en relación de subordinación, con lo cual podemos entender la emergencia de nuevos actores sociales en la región andina, caracterizados por diversas formas de expresión y organización.

Sobre la comprensión de las clases subalternas Modonesi afirma que “usada como sinónimo de oprimidos o dominados, la palabra subalterno permite, por un lado, evitar las connotaciones economicistas o ideologizantes de la noción de explotados y, por otro, ampliar y pluralizar la noción de clase trabajadora, obrera o proletaria al incluir otras formas y modalidades populares”⁶.

En este sentido, la perspectiva gramsciana abona al entendimiento de los procesos socio políticos que se están desarrollando en Ecuador y Bolivia. Aquí la aparición de los diversos movimientos que dieron forma a lo que después serían los gobiernos de Alianza País (AP) y el Movimiento al Socialismo (MAS) es el resultado de la confluencia de los diferentes actores sociales que se aglutinaron ya sea por cuenta propia o de forma colectiva al proyecto político que encabezaron dichas organizaciones.

Esto pone en evidencia la potencialidad transformadora y la capacidad de negociación de las diferentes esferas de lo político en Ecuador y Bolivia, las cuales revelaron, durante las coyunturas que dieron pie al cambio de gobierno, la

⁶ *Ibíd.*, p. 25.

emergencia de las clases subalternas así como la conformación de dinámicas de resistencia social que pueden ser entendidas como un periodo de antagonismo, en el cual la confrontación de los diversos sectores sociales en pugna se puso de manifiesto a la luz de la crisis de los gobiernos que precedieron a AP y al MAS.

Estas clases movilizadas han entrado en un proceso de disputa de la construcción de una nueva hegemonía que, como se verá a lo largo de este trabajo, todavía está en ciernes y, si bien puede tener como horizonte la autonomía, es un proceso que no se ha concretado aún.

Bajo esta lógica la categoría de subalterno se revela como el eje analítico a través del cual se constituyen los movimientos sociales como una expresión de las diversas clases populares, las cuales se articulan a su vez en función de distintas reivindicaciones (sociales, políticas, culturales, económicas, étnicas). Por ello, no es de extrañarnos que una vez constituidos los nuevos gobiernos en Ecuador y Bolivia hayan tenido como condición fundamental (impuesta desde la movilización social) la construcción de una nueva Constitución política, con la finalidad de generar un nuevo pacto social. Sin la categoría de subalterno no sería posible entender la conformación de los procesos de movilización social que en los últimos años han caracterizado a la región.

Por otro lado, retomaremos reflexiones de autores que desde la perspectiva del materialismo histórico han trabajado el tema de la movilización social a la luz de las nuevas coyunturas sociopolíticas de la región. En ese sentido, Raquel Gutiérrez Aguilar, quien estudia las movilizaciones desarrolladas en Bolivia entre 2000 y 2005, define a los movimientos sociales como “configuraciones más o menos fijas de sujetos aglutinados a partir de intereses que son defendidos contra los de otros proyectos económicos, sociales y políticos, impulsados por «otros» sujetos igualmente identificables y cuyo comportamiento es descifrable a partir de algunos principios, a los que se les otorga la calidad de «racionales», que dan

coherencia al conjunto de sus acciones”⁷. Si bien la autora no se distancia de la identificación de la lucha de clases como motor de la acción social, su análisis integra tanto el horizonte simbólico como los alcances prácticos de la lucha social.

Partiendo de esta visión, Gutiérrez Aguilar plantea una estrategia teórico-metodológica para *comprender* (no solo explicar) el sentido de las luchas sociales en el momento mismo en que ellas se desarrollan, con el fin de superar sesgos teóricos e ideológicos que asumen a la emancipación como una necesidad histórica, es decir como un proceso lineal, en donde las acciones de resistencia encontrarían su punto climático en la construcción de una nueva institucionalidad, en el marco de la cual se vería agotado el proceso de emancipación.

Para Gutiérrez Aguilar la emancipación constituye el desarrollo mismo de las luchas sociales, pues en medio del conflicto se inauguran espacios alternativos de política, que no necesariamente están centrados en el poder institucional sino en la potencia de la decisión colectiva. Son momentos en que el pueblo recupera su capacidad de decidir, en base a la autorregulación social autónoma. Al pertenecer al tiempo-espacio vital, la emancipación constituye, entonces, un “conjunto infinito aunque discontinuo, cambiante e intermitente de acciones colectivas de insubordinación, autonomía y, tendencialmente, de autogobierno”⁸.

Para leer los momentos de resistencia y lograr anticipar los espacios de sentido colectivo que aquellos inauguran, así como sus posibilidades de permanencia en el tiempo y el espacio, la autora propone como estrategia la recreación del antagonismo, es decir, la comprensión de la forma en que se

⁷ Gutiérrez Aguilar, Raquel. Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005). Sísifo ediciones, Bajo Tierra Ediciones y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vález Pliego” de la BUAP, México, 2009, p. 35.

⁸ *Ibíd.*, p. 58.

articulan los fines colectivos durante la acción, para ir estableciendo el sentido general de la lucha.

Para la autora, lo anterior se constituye como el “horizonte de deseo” de la movilización social, entendido como el contenido profundo de las luchas, noción que permitirá ampliar las lecturas de lo que las acciones de resistencia entrañan en tanto trastocamiento de la hegemonía y que, en casos como los de Ecuador y Bolivia, si bien han decantado en la toma del poder estatal no se agotan allí pues la disputa se ha extendido hacia todas las esferas de la vida social.

Así, la comprensión del sentido del conflicto que dio nacimiento a estos gobiernos (Ecuador y Bolivia), a partir del análisis de su configuración histórica, es una condición necesaria para comprender la dificultad que afrontan hoy estos procesos de frente a su consolidación, así como la disputa por la vigencia del proceso emancipatorio más allá del proyecto electoral.

Otra visión útil para comprender las realidades políticas que enfrenta la movilización social es la de Salvador Martí I. Puig quien afirma que los movimientos sociales se incluyen en la categoría de actores políticos colectivos, ya que a pesar de las grandes diferencias que estos mantienen con los partidos políticos y los grupos de presión e interés, los actores políticos colectivos comparten una relativa estabilidad organizativa; una comunidad de objetivos, ideas e intereses entre sus miembros; una línea de acción coordinada y organizada; y, finalmente, la voluntad de intervenir en la política, incidiendo así en la gestión del conflicto social⁹.

9

Ver

más

en

<http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/Losmovimientossociales.pdf>

Al respecto de lo señalado es importante resaltar que estas características se encuentran presentes en la conformación de los procesos de organización social generados en Ecuador y Bolivia. Aquí la participación articulada entre los diversos actores sociales (colectivos y movimientos) va a delimitar el rumbo de la situación política contemporánea, pues dichos actores que bien podrían encajar en la categorización de clases subalternas se aglutinan en alianza con la finalidad de establecer un nuevo estado de cosas.

En tal sentido, entender la participación social como el mecanismo de interacción e incidencia entre la sociedad civil -constituida fundamentalmente por los diversos bloques de actores colectivos- y el Estado nos permitirá más adelante realizar un acercamiento que aporte mayor claridad en la conformación de las actuales estructuras de poder en Ecuador y Bolivia.

Ahora, es importante entender a la movilización social más allá de las estructuras organizativas, sobre todo en momentos de conflicto en los que puede haber una presencia espontánea de actores, sin que necesariamente se adscriban a una organización o incluso a una posición ideológica, pero que se sienten convocados por un horizonte aspiracional común, el cambio de la estructura sociopolítica. Son momentos en que las clases subalternas entran en dinámicas de antagonismo que pueden generar nuevos espacios organizativos.

Entonces bien, a diferencia de Bolivia, en donde primaron estructuras sindicales y confederaciones a la cabeza del conflicto y de la lucha social, el proceso ecuatoriano se caracterizó por la irrupción de una “multitud” -como la denomina Franklin Ramírez- en el escenario político, sin necesariamente pertenecer a los movimientos que tradicionalmente dominaron el escenario del conflicto social (obreros, estudiantes, indígenas, etc.), mismos que se vieron incluso superados por la coyuntura en medio de la cual se produjo la salida del

entonces presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), antecedente de la llegada de Rafael Correa al poder. Como lo afirma el autor:

Algunos han interpretado tal dinámica como expresión de la actividad de un movimiento social: el “movimiento de abril” o el “movimiento forajido”. Tales tesis sobreestiman la convergencia en la calle de los ciudadanos y organizaciones con heterogéneas procedencias y filiaciones políticas e ideológicas, y tienden a dotarlos de un horizonte político común. Desde un inicio las acciones contenciosas, por el contrario, las razones, intereses y proyecciones de los manifestantes fueron por vías disímiles y divergentes. La identidad colectiva que en el curso de las protestas supo otorgar el mismo ex presidente a la multitud indignada cuando la bautizó como “forajida” fue disolviéndose y contestándose mientras emergía a la luz, precisamente, la diversidad –y las mismas contradicciones– de individuos, organizaciones, intereses y discursos que habían nutrido a la revuelta. Más que de una identidad, entonces, cabría hablar de un provisorio mecanismo de identificación colectiva, útil para fines tácticos de los manifestantes en los días de cólera, para utilizar la expresión de Pérez Ledesma¹⁰.

En este sentido, es importante destacar también la visión de Isabel de la Rosa Quiñonez, quien retoma la perspectiva constructivista para señalar que los movimientos sociales deben ser entendidos como espacios de articulación y no como actores colectivos con un carácter homogéneo y un sentido definido, puesto que sus dinámicas van adaptándose a la cambiante realidad que enfrentan. Al respecto la autora señala lo siguiente:

Tratamos de comprender a los movimientos sociales como signos que nos indican la orientación en la que se articulan distintas fuerzas, acciones y relaciones sociales en circunstancias específicas, ampliando esta perspectiva para estudiar también a otros productos de la interacción social, tales como la construcción y

¹⁰ Ramírez, Franklin (2010), Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010), en Observatorio Social de América Latina, Nro. 28, pp. 28, 29.

desarrollo de identidades colectivas y formas de organización específicas dentro de las movilizaciones sociales¹¹.

Lo señalado por la autora nos es útil para entender lo ocurrido principalmente en Ecuador, país en donde se evidenció la irrupción coyuntural de nuevos actores, articulados alrededor de un proyecto político en construcción, el de Alianza País.

Además, encontramos esta dinámica también en el contexto regional pues en la conformación de los movimientos sociales latinoamericanos en el siglo XXI se produce la emergencia de nuevos sujetos en la arena política entre los que se destacan -como lo veremos más adelante cuando revisemos el contexto histórico político de la lucha social en Ecuador y Bolivia- las organizaciones ecologistas, los grupos feministas, asociaciones en busca de derechos de minorías (movimiento GLBT), entre otros, en coexistencia con movimientos de mayor envergadura y con una estructura más central como los obreros, los profesionistas (clase media e intelectual), así como el sector indígena-campesino.

Para comprender dicha emergencia es fundamental retomar la discusión planteada por varios autores respecto a la pérdida de vigencia del concepto de sujeto revolucionario y de la asociación que se ha hecho de este a la clase obrera como la vanguardia de los procesos de transformación social. Así, para Sergio Tischler se puede hablar de una crisis del sujeto leninista¹², en la medida en que

¹¹ Quiñones de la Rosa, Isabel, Movimientos indígenas contemporáneos en Ecuador y México. CIALC, México, 2010, p. 32.

¹² “Lenin distingue cuidadosamente el sujeto teórico-histórico de la revolución (el proletariado como clase, que reemplaza la forma de producción) y su sujeto político-práctico (la vanguardia, que reemplaza la formación social) que representa, no ya al proletariado “en sí”, dominado económica, política e ideológicamente, sino el proletariado “para sí”, consciente del lugar que le corresponde en el proceso de producción y de sus propios intereses de clase (...) Afirma que la conciencia socialdemócrata sólo puede llegar a los trabajadores desde afuera, desde los

se ha perdido la visión dialéctica de las nociones de revolución y de lucha de clases, incurriendo en una fetichización de las leyes objetivas planteadas por la teoría marxista a la luz de una época y un contexto específicos.

En América Latina esta visión generó, como lo veremos en el apartado histórico, que los partidos y organizaciones políticas de izquierda se mantuvieran desarticulados de sectores trascendentales para la transformación política de la región, como el movimiento indígena, cuyo liderazgo en las luchas sociales del nuevo siglo puso en evidencia la crisis a la que hace referencia Tischler¹³.

Así, para comprender la configuración de los nuevos sujetos sociales que han emergido en América Latina es importante analizar las transformaciones sufridas en el contexto histórico de la región y el mundo, el cual se encuentra marcado por una nueva etapa del capitalismo, el cual ha entrado en un proceso de globalización a través del modelo neoliberal y con una reorientación hacia la hegemonía del capital transnacional financiero. Esto ha provocado, como lo señala Isabel Rauber¹⁴, que desde hace más de dos décadas la relación entre el capital y el trabajo se modifique, tanto en el ámbito de la subsunción real cuanto en el de la subsunción formal al capital.

Una vez que el capitalismo ha entrado en una nueva dinámica, y que esta situación impacta a América Latina de forma específica debido a las condiciones históricas de colonización que ha experimentado, así como a su composición

intelectuales revolucionarios portadores del conocimiento y de la comprensión global del proceso de producción. Por sus propios medios, la clase obrera no puede llegar sino a la conciencia «trade-unionista»". Bensaïd, Daniel y Naïr, Samy, El problema de la organización. Lenin y Rosa Luxemburgo. En *El desafío de Rosa Luxemburgo*, Buenos Aires, Proceso, 1972, p. 4.

¹³ Ver más en Tischler, Sergio, La crisis del sujeto leninista y la circunstancia zapatista, en Chiapas 12, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM-Era, México, 2001.

¹⁴ Ver más en Rauber, Isabel, Sujetos políticos. Rumbos estratégicos y tareas actuales de los movimientos sociales y políticos, Pasado y presente XXI, Santo Domingo, 2006.

sociocultural, es pertinente plantear un nuevo debate respecto a las características del sujeto político transformador que debe emerger en la región. Según la propuesta de Isabel Rauber, este debate empieza por pensar en la relación entre sujeto, clase y pueblo, en vista de que ya no existe una correspondencia plena entre clase obrera y sujeto histórico revolucionario¹⁵, lo cual nos lleva a pensar en el tercer elemento, el pueblo. Es más, el debate debe incluir en esta relación también y de manera prioritaria a los pueblos originarios, como ya lo planteaba a inicios del siglo XX José Carlos Mariátegui.

En tal virtud y debido a que en un escenario contemporáneo los procesos de explotación capitalista alcanzan a la sociedad en su conjunto ya no se puede hablar de un sujeto privilegiado de cambio (el proletariado), sino más bien, como propone Rauber, es indispensable pensar en la existencia de un sujeto social colectivo, plural y diverso, el cual además evidencia un encuentro de subjetividades así como de intereses. La posibilidad de que este sujeto social se torne en un actor social (lo que también puede denominarse como un actor

¹⁵ “La clase obrera juega un papel central en la formación del sujeto histórico en los tiempos de Marx y hoy lo sigue jugando a pesar de su recomposición y redimensionamiento, porque esta clase fue despojada históricamente de los medios de producción y obligada a vender su fuerza de trabajo como una mercancía para poder subsistir, condenada a una existencia miserable bajo la explotación y dominación del capital, en función del enriquecimiento de la burguesía y sus aliados. La clase obrera es por esta razón la que está llamada, principalmente, a hacer la revolución contra el capital. Asimismo, es importante destacar que señalar a la clase obrera como eje central del sujeto histórico respondió a las condiciones y características necesarias de la determinación de este sector que por ser el más oprimido y el históricamente despojado, además de ser paradójicamente el principal posibilitador del capitalismo, es el más llamado a hacer la revolución; ella recogía en sí la síntesis de toda la opresión social y su liberación como clase no sería posible sin la del resto de los oprimidos por el sistema; eso significa asumir (que se ha ido transformando en construir) de una forma consciente, como sujeto, su misión histórica (que hoy es compartida por otros muchos sectores)”. Pérez Lara, Alberto, Sujeto histórico y revolución. Articulación del movimiento político y social. En: *Filosofía Marxista I*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2009, pp. 149-168.

político) depende de la posibilidad de articulación de un proyecto estratégico alternativo.

Ahora, la existencia de un proyecto político nos pone de frente a la necesidad de gestionarlo. La historia reciente de América Latina evidencia que la ebullición de la movilización social que marcó el inicio del siglo XXI tuvo la potencialidad de cuestionar las formas tradicionales de representación política determinadas por la democracia liberal, hasta el punto de generar quiebres en el paradigma político de países como Ecuador y Bolivia en donde la acción colectiva marcó el giro de esos países hacia la elección de gobiernos denominados progresistas y cuya principal característica es la posibilidad de que el proyecto político planteado por los movimientos sociales se institucionalice (en ambos casos se ha buscado la refundación del Estado mediante la generación de un nuevo pacto social).

María Fernanda Somuano Ventura¹⁶, quien coincide con el análisis planteado en que el espacio catalizador del cambio en el siglo XXI es la movilización social, señala que aquella necesita de los partidos políticos para alcanzar la transformación de la estructura política desde dentro e identifica varias estrategias mediante las cuales estos se relacionan con partidos u organizaciones políticas con el fin de entrar en la dinámica de la disputa por el poder.

El análisis de la autora es importante en la medida en que permite comprender las dinámicas mediante las cuales los actores políticos se agencian los mecanismos para entrar en el ámbito institucional como un recurso más de la acción colectiva, sin que esto implique necesariamente un proceso de cooptación por parte de los sectores de poder.

¹⁶ Ver más en Somuano Ventura, María Fernanda, Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una relación cambiante y compleja, Revista Política y cultura, núm.27, 2007, pp. 31-53.

Los mecanismos identificados por Somuano son la articulación, estrategia en la cual los actores sociales se agrupan en torno al programa político del partido, la permeabilidad, la cual consiste en la infiltración de los movimientos sociales en los partidos políticos con el fin de orientarlos hacia su causa; la alianza generada entre partidos políticos y movimientos sociales, generalmente con fines electorales o para la colaboración mutua en temas específicos (este sería el caso de Alianza País en Ecuador); la estrategia de independencia, en la cual los movimientos sociales logran capacidad de presión sobre las decisiones de un partido político pero sin perder su capacidad auto determinativa y, finalmente, la transformación del movimiento social en partido político como ocurrió en Bolivia con el MAS.

Entonces bien, la emergencia de nuevos actores en la arena política contemporánea pone de manifiesto la necesidad de articulación entre los sectores que comprenden a las clases subalternas alrededor de la construcción y gestión de un proyecto político, dado que estos sectores son en gran medida responsables e impulsores de las condiciones políticas actuales. Así, el proceso histórico del cual devienen los nuevos gobiernos de corte progresista está determinado, como lo veremos más adelante, por situaciones de coyuntura en las cuales la sociedad civil en su conjunto, en participación directa con los movimientos ya establecidos o de forma individual, pretende integrarse a la consolidación de estos nuevos proyectos políticos.

En tal sentido, no podríamos imaginar el triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales de 2005 en Bolivia, con el respectivo proyecto de elaborar una nueva Constitución (principal demanda de los movimientos sociales), o en el Ecuador el triunfo del proyecto electoral de Rafael Correa y la reorientación política que propone, sin analizar la irrupción de estos nuevos actores políticos y su nivel de participación en las estructuras institucionales.

Por último, para comprender estos procesos, es fundamental retomar una vez más el análisis de Gramsci sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de la cual se establecen las dinámicas de dominación así como las relaciones de subordinación que nos permiten comprender las características estructurales de la subalternidad. En este sentido es también fundamental entender a la subordinación en el interior de una red de relaciones de clase que se opera a partir de dos elementos, el consenso y la resistencia, que lleva a que las clases subalternas sean parte periférica de la sociedad civil pues forman parte de ella pero no están integradas. Como lo destaca Modonesi:

El concepto de *subalterno* permite centrar la atención en los aspectos subjetivos de la subordinación en un contexto de hegemonía: la experiencia subalterna, es decir, en la incorporación y aceptación relativa de la relación de mando-obediencia y, al mismo tiempo, su contraparte de resistencia y de negociación permanente¹⁷.

Para Gramsci, la permanencia de la subalternidad hace referencia a la experiencia de los sujetos desde la subordinación, en el marco de un proceso de subjetivación que combina la espontaneidad y la conciencia. Si bien no existe en la resistencia un sentido pleno de conciencia para sí, existe una disposición hacia ella. Es por esto que la autonomía es una condición necesaria para que dichas clases subalternas puedan generar una nueva hegemonía.

Esto frente a la advertencia que hace Modonesi respecto a una posible resubalternización de las clases movilizadas una vez que sus reivindicaciones se institucionalizan, desviando los procesos emancipatorios hacia lo que en palabras de Gramsci puede constituir una “revolución pasiva”, es decir un proceso de modernización de la sociedad pero sin transformación. Se trata de un movimiento

¹⁷ Modonesi, Massimo, Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismos y subjetivación política, Prometeo-CLACSO, Buenos Aires, 2010, p. 37.

ilusorio de cambio que al ser impulsado desde las clases dominantes actuaría como elemento de contención del potencial revolucionario de las clases subalternas, auspiciando la conservación del sistema hegemónico.

Por lo anterior, uno de los elementos que orienta el presente trabajo es el análisis de los mecanismos de participación y articulación entre la dimensión institucional del Estado, entendido en los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa, y la sociedad representada en los distintos procesos de movilización social, con el fin de identificar los elementos de disputa en torno a la hegemonía de dichos procesos, así como la vigencia de elementos de lo subalterno enfrentados a posibles espacios de construcción de autonomía y emancipación, o al menos la permanencia de los horizontes de lucha que dieron nacimiento a estos proyectos.

Las categorías y conceptos aquí revisados nos serán de utilidad para el entendimiento de la construcción analítica propuesta más adelante dado que, como lo veremos, el surgimiento y posterior desarrollo de los procesos de movilización en Ecuador y Bolivia responde directamente a escenarios de confrontación y luchas de clases, pero que tienen como eje particular la emergencia de nuevos sujetos y actores sociales, así como de mecanismos de participación y articulación política alternativos. A esto habría que sumarle que, en la actualidad, los movimientos sociales, dado su nivel de articulación de demandas, han pasado a formar parte, en diversa medida de los proyectos de gobierno de dichos países, lo cual presenta nuevos horizontes para las dinámicas de movilización social en la región.

Ahora bien, bajo estas consideraciones teóricas se estructuró un capítulo que analiza los diferentes elementos históricos, políticos, económicos y culturales que van a permitir establecer un eje comparativo entre ambas naciones, revisando los elementos más novedosos de las movilizaciones sociales que llevaron, en

primer lugar a generar procesos de resistencia al neoliberalismo y, derivado de ello, a la constitución y consolidación de los proyectos de carácter progresista de ambos países.

Para comenzar se partió de una revisión histórica de lo que ha significado la movilización social, primero en un marco regional y después de manera más específica en ambas naciones a fin de establecer una línea analítica que nos permita situar al actual proceso de movilización social en el devenir histórico de dichos países.

En tal sentido el primer capítulo se enfoca a los antecedentes históricos de larga data, los cuales nos permiten comprender la idiosincrasia y la construcción socio cultural de los pueblos boliviano y ecuatoriano así como sus complejas realidades históricas, tomando como principal punto de observación los elementos que fueron distinguiendo al proceso de construcción de la movilización social en ambos países. En el periodo analizado la conducción de dichos procesos fue pasando de los movimientos liberales de principios del siglo XX a los sindicales de los años 40 y 50; de ellos a los revolucionarios de los años 60 y 70 y, de estos, a la aparición de nuevos actores sociales, principalmente el movimiento indígena.

En el segundo capítulo, se abordan los momentos clave que condujeron a la crisis institucional por la cual atravesaron ambos países, la cual se recrudece sobre la segunda parte de la década de los noventa, producto de las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales. En el marco de esta crisis y de la profunda inestabilidad económica que afectaba a ambos países van a tener lugar los escenarios de conflicto en medio de los cuales se fueron estructurando los movimientos que sirvieron como herramienta política (AP y el MAS) para canalizar la movilización social hacia la institucionalidad del sistema de partidos, mediante una propuesta electoral alternativa.

Dicha institucionalidad va a ir perfilando los rumbos de acción y participación a los cuales pueden aspirar los movimientos sociales al insertarse en las dinámicas que delimitan las posibilidades de reestructuración del Estado-nación. En este sentido, y como veremos en el segundo capítulo, serán los respectivos procesos constituyentes los puntos culminantes de los diferentes ciclos de movilización social en medio de los cuales se configuran las demandas de los nuevos sectores movilizados alrededor de la resistencia al neoliberalismo, las cuales son retomadas por AP y el MAS para impulsar su propuesta electoral.

Así, los capítulos 3 y 4 tienen como finalidad establecer una revisión más detallada de los respectivos periodos de gobierno de Evo Morales y Rafael Correa, enfocándonos en un primer momento (capítulo 3) a la formación de AP, el proceso electoral, las disputas internas entre los sectores que lo componen, y la relación existente entre el Estado y los respectivos movimientos sociales que lo conforman, para finalizar con un balance de los ocho años de gobierno de Rafael Correa. Ello permitió un acercamiento a la actual disputa existente entre las facciones que conforman AP, así como a la existencia de una oposición al proyecto que ha ido cobrando fuerza, tanto de lado de la derecha como de la izquierda.

En el capítulo 4 se hace la misma revisión con el gobierno de Evo Morales, en el cual encontramos diferencias de fondo con el caso ecuatoriano en la medida en que el MAS desde el principio muestra la existencia de un liderazgo campesino sindical, encabezado por el sector cocalero y con un fuerte componente indígena. Sin embargo, en el caso del gobierno boliviano dicho bloque se ha ido fracturando en favor de la reemergencia de la vieja clase política así como del posicionamiento de una nueva élite sindical que se ha visto favorecida por su participación en el gobierno.

En las conclusiones de este trabajo de tesis, presentadas al final del mismo, se establece un balance de índole comparativo entre los procesos políticos de

ambos países con el fin encontrar las afinidades o distancias que los caracterizan, así como de delinear algunas ideas respecto al estado que presentan ambos proyectos en el sentido de sus propias posibilidades de continuidad, así como del nivel de participación que tienen actualmente los movimientos sociales en dichos proyectos de Estado.

Capítulo 1. Organización y lucha social en América Latina: los casos de Ecuador y Bolivia

1.1 El contexto regional: una aproximación al fenómeno de la movilización social en América Latina

América Latina tiene una historia y tradición comunes entre todos los Estados que la conforman, sus países comparten incluso problemáticas y dinámicas, entre las que se pueden distinguir sin duda la pobreza, la cuestión étnica, la división de clases y el atraso económico en relación con las grandes potencias industrializadas y en particular la distancia en cuanto a lo económico y lo político con los Estados Unidos de Norte América, casi como en una relación de oposición dialéctica.

La construcción de los Estados Latinoamericanos tienen en común también la predominancia de una elite mayormente criolla y centralista, la cual tiene sus raíces en la época colonial y se afianza en el siglo XIX con el nacimiento de estas repúblicas. Estas elites condujeron el destino de las nacientes naciones a distintos rumbos, entre las interminables pugnas entre liberales y conservadores, existiendo Estados que resultaron más fortalecidos que otros en su proceso de consolidación nacional¹⁸. Bajo estas lógicas, la participación de los sectores populares y

¹⁸ Agustín Cueva, desde un enfoque marxista, explica la debilidad de los estados latinoamericanos a partir de la primarización de su economía y la ausencia de una clase dirigente local que lidere un proyecto nacional propio. Afirma que Chile es el primer país en formar un estado relativamente sólido y estable. Su originalidad, dice, se basa en el desarrollo temprano de una economía agraria con un mercado interno no dependiente de Europa, así como en la constitución de una clase terrateniente nacional en la cual basa su estabilidad política en el siglo XIX. Ver más en: Cueva, Agustín, El desarrollo del capitalismo en América Latina, Siglo XXI editores, Octava reimpresión, México DF, 2009.

marginales fue fundamental para el triunfo de los movimientos independentistas, sin embargo, la inclusión de estos sectores en la construcción de los proyectos nacionales fue prácticamente nula.

En este sentido podemos distinguir también como un elemento común y particular de Latinoamérica a la movilización social, la cual representa un componente constitutivo y característico de la región. La movilización social en Latinoamérica se caracteriza por ser mayormente transformadora de su realidad inmediata y coyuntural, así como aglutinante de los sectores populares.

Es justo decir que las demandas que llevan a la movilización social en la región son ampliamente diversas y los resultados de las mismas transitan entre el éxito y el fracaso, entre la violencia y la negociación política. Así podemos decir que no se pueden entender las historias políticas de la región sin la movilización social como un elemento incluso constitutivo de su realidad, pues en algunos casos estos episodios han evolucionado a revoluciones o reformas profundas del sistema político.

La movilización social representa en muchos casos, para América Latina, el parte aguas que caracteriza los momentos de transición de un régimen político a otro, de un tipo de Estado a otro o de un orden social a otro, en el que los actores involucrados inciden directamente en la transformación de su realidad inmediata o bien generan los precedentes que permitirán las transformaciones sociales futuras. Esto se da en el marco de las luchas por la construcción de un proyecto político distinto que, para las primeras etapas de las naciones independientes y la consolidación de los Estados nación en América Latina (ya bien entrado el siglo XX), pasa mayormente por la pugna por el Estado, pues este era visto como el único espacio desde donde se podían generar los cambios. En este sentido, para Fernando Calderón:

“El campo de conflicto histórico por excelencia fue el Estado, disputado o procurado por los diferentes actores sociales y políticos; las principales orientaciones giraban en torno al carácter de la industrialización y sus posibles formas de apropiación social. ¿Cómo controlar al Estado y desde allí promover un proceso de industrialización? Esa fue la pregunta central de los actores sociales, que a menudo hacían confluír varios intereses, muchas veces meramente particularistas, de ascenso y de movilidad social, otras de reconocimiento cultural en los marcos de los patrones ideológicos, nacional-populares o populistas. En este sentido no basta con ser revolucionario o nacionalista, era vital saber serlo y saber hacerlo (esto último fue vital para la lucha por el poder del Estado, pero más cuando se tuvo acceso a él).¹⁹

El siglo XX demuestra con claridad la trascendencia de la movilización social para la vida política de los Estados Latinoamericanos, así como la influencia y aportes que a través de sus experiencias se han generado en la región. Así se podría decir que para entender los procesos políticos de Latinoamérica no se puede desconsiderar la importancia de la movilización social como uno de los motores de la vida política de la región y que en algunos casos se transforma en verdaderos movimientos revolucionarios, un ejemplo de esto lo encontramos en la revolución mexicana, la cual se origina como un movimiento político de corte burgués hasta transformarse en un movimiento revolucionario en el que se enfrentaron diversas facciones con ideologías y planes políticos divergentes. Por ejemplo, el libro Breve historia de la revolución, se refiere a las discrepancias entre Venustiano Carranza, primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Francisco Villa, jefe de la División del Norte:

A principios de junio de 1914 las relaciones entre Carranza y Villa no eran del todo amigables (...) Villa era un hombre violento, impulsivo, rudo e inculto (...) en cambio Don Venustiano Carranza poseía una buena cultura, particularmente histórica, y pertenecía a la clase media acomodada de su estado natal (...) Las dificultades se agudizaron en el curso de la primera quincena de junio con motivo del ataque a la

¹⁹ Calderón Fernando, Movimientos sociales y política. La década de los 80s en Latinoamérica, siglo XXI, México, 1995, pp. 17,18.

ciudad de Zacatecas. Carranza no quería que Villa tomara la plaza al frente de sus fuerzas y Villa quería ser el héroe (...) el resultado fue gravísimo: la insubordinación de todos los jefes de la División del Norte. Zacatecas, ya lo sabemos, fue tomada a sangre y fuego el 23 de junio, gracias a la estrategia y al empuje de los que se habían insubordinado a la Primera Jefatura.²⁰

En este breve pasaje histórico podemos encontrar las distancias sociales que personificaban estos jefes del movimiento revolucionario, que a pesar de ser aliados, representaban proyectos políticos incompatibles entre sí.

Un poco antes de mediados del siglo XX las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales impulsadas por el Estado, que intentaban ser progresistas y de corte nacionalista, se respaldaban en la movilización popular.

Aquí es indispensable el papel que jugaron los sindicatos, los sectores populares y los campesinos organizados para respaldar los proyectos nacionales u oponérseles. Es el caso del peronismo en Argentina, en donde un gobierno militar logra amplio apoyo de los sectores más desposeídos, a los que se denominó “descamisados” y que respalda sus conquistas sociales en los sectores populares.

Otro ejemplo emblemático de este apoyo es el de la reforma agraria boliviana de 1952, en el que la movilización campesina y obrera sindicalizada fue la pieza clave para el impulsar esta medida. Una muestra de esta participación es el importantísimo papel del sector minero como uno de los protagonistas

²⁰ Silva, Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución Mexicana. La etapa constitucionalista y la lucha de facciones, Fondo de Cultura Económica, México, 1960, pp. 150, 151.

principales. Para Stefanoni, “la revolución social de 1952 la hicieron los excluidos del bienestar minero monopolizado por la «rosca» minera feudal”²¹.

La movilización social fue uno de los elementos de mayor importancia en la construcción de los proyectos alternativos en la década de los cincuentas y sesentas, pues representa el momento en que los gobiernos que se sustentaban en la participación de los movimientos sociales transitan a un modelo más autoritario y, en muchos casos, se respaldan en estos sectores ya organizados para articular la represión o las represalias a la oposición, sobre todo en los grupos organizados como los sindicatos, gremios y grupos campesinos que se encontraban dentro de la órbita estatal o formaban parte de ella. Por ejemplo, el peronismo en Argentina o el velasquismo en Ecuador, por citar algunos.

Casi a la par surgen grupos que se oponen y que son violentamente reprimidos, en la mayoría de los casos con el pretexto o la “justificación” de la amenaza de la “injerencia comunista”, pues no podemos pasar por alto que estas problemáticas se presentan bajo el contexto histórico de la llamada Guerra Fría, en la que la revolución cubana representó un dilema para la supuesta estabilidad política de la región, la cual se encontraba bajo la tutela estadounidense y, por tanto, capitalista.

Es también en este periodo que en la región se experimentó un auge en los golpes militares como una medida para contener la izquierda política de corte marxista y se incrementó la represión en todos los niveles de la vida política, social, cultural, etc., bajo la atenta dirección de la CIA, a través de las embajadas

²¹ Stefanoni, Pablo. La “indianización” del nacionalismo o la refundación permanente de Bolivia. En *Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías? Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil*, Gabriela del mata (coord.), Biblos, Buenos Aires, 2009, p.31.

estadounidenses.²² Es por esto que en este periodo la movilización social tiene un carácter antiimperialista, claramente influenciado por el proceso revolucionario cubano. En este sentido, la movilización social se caracterizó por la participación de los sectores de clase media (estudiantes y profesionistas), así como por una organización de corte profundamente clasista. El papel del movimiento estudiantil es clave para ejemplificar este fenómeno, como lo describe Jean Meyer:

- 1963: los estudiantes juegan un papel principal en el cambio política radical en Ecuador.
- 1964: participan (¿provocan?) en la caída del régimen de Ecuador y en Bolivia.
- 1966: agitación estudiantil en México (ciudad de México, Morelia, Culiacán, Hermosillo), en Ecuador, en Chile (Concepción), en Colombia (Medellín) y sobretodo en Brasil (de marzo a septiembre el movimiento de protesta contra la dictadura militar gana todas las universidades y culmina en Rio el 21 de septiembre cuando peleas muy violentas enfrentan a estudiantes con la policía) y en Venezuela (junio de 1966, motines en Caracas luego del “suicidio”, en los locales de la policía, de Ojeda, veterano de la lucha revolucionaria. El apoyo otorgado a las guerrillas y la agitación permanente llevan al gobierno a ocupar la Universidad de Caracas el 14 de diciembre).
- 1967: Venezuela, 2 de marzo, cierre temporal de la Universidad. Brasil, mayo: grandes manifestaciones en Recife contra el acuerdo cultural financiado con Estados Unidos y una reforma a la estadounidense.

²² Para Luis Maira Aguirre, “aunque hubo una permanente declaración de adhesión de los titulares de la Casa Blanca a los principios de la democracia representativa consagrados expresamente en la Carta de la OEA, en la práctica EE.UU. ayudó a establecer, o apoyó, muchos regímenes dictatoriales que se apartaban abiertamente de tales criterios, con el argumento de hacer prevalecer sus intereses nacionales. El ejemplo más significativo de esta línea fue el patrocinio a las llamadas “dictaduras militares de seguridad nacional”, mucho más represivas y sistemáticas que las tradicionales”. Maira Aguirre, Luis, Las relaciones entre América Latina y Estados Unidos: balance y perspectivas. *En Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina*. Boron, Atilio A.; Lechini, Gladys. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2006, p. 44.

- 1968: motines en Rio, escaramuzas muy violentas en Lima a partir del 20 de julio. Inicio de la crisis mexicana.²³

En lo referente a la cuestión del sector rural, en algunos casos como en Ecuador y Perú, tuvo lugar un reacomodo cultural ideológico y político, desde la década del 40, en el que los indígenas transitaron hacia un proceso de campesinización con la intención de proletarizarlos, convirtiéndolos así en ciudadanos desde una perspectiva que permitiera su integración plena a la vida productiva, ya que en estos países, como en toda América Latina, se experimentaba un periodo de desarrollo industrial que requería de grandes cantidades de obreros y fuerzas productivas organizadas.

Este reacomodo no se presentó solo en los aspectos materiales sino bajo la lógica de los proyectos nacionales de desarrollo para los cuales la raigambre indígena no tenía importancia y por tanto era prescindible en pro de generar un Estado más homogéneo y, por tanto, con mayores posibilidades de “desarrollo” económico capitalista.²⁴

Ahora, desde el punto de vista de las organizaciones sociales los sectores indígenas estaban invisibilizados en cuanto tal, pues su carácter de campesinos se correspondía con el proyecto de liberación basado en la lucha del proletariado, con reivindicaciones como la reforma agraria en Ecuador del año 1963-1964, en

²³ Meyer, Jean. El movimiento estudiantil en América Latina. Revista Sociológica, año 23, número 68, septiembre-diciembre de 2008. P.181.

²⁴ “La vocación integradora que se expresa en las políticas indigenistas corresponde, evidentemente, a la necesidad capitalista de consolidar y ampliar el mercado interno, pero va más allá; pretende la construcción de una nación en términos sociales, políticos, económicos, culturales, ideológicos que se ajusten a los supuestos implícitos en la forma de Estado impuesta a partir de la independencia política. En esta empresa no cabe el indio” (Bonfil Batalla, Guillermo. Identidad y pluralismo cultural en América Latina, Buenos Aires, CEHASS. 1992, p.52).

donde estos sectores jugaron un papel fundamental. Esto sembró la semilla para los posteriores movimientos indígenas de oposición estatal.

En las décadas de los 60 y 70 la movilización social latinoamericana se caracterizó por su oposición a los proyectos políticos de las dictaduras y por enarbolar casi de forma generalizada demandas y postulados políticos ideológicos inspirados o de corte abiertamente marxistas. Esta nueva oleada de movimientos sociales, emanados de las clases medias, pronto transitó hacia la conformación de movimientos guerrilleros con origen urbano o rural y eran consecuencia de la violenta represión estatal. Es importante decir que casi en su totalidad los movimientos guerrilleros latinoamericanos de ese periodo se inspiraron en el modelo cubano y en la filosofía del Che Guevara.

En este sentido, un buen caso para ejemplificar esta situación en donde la represión política a los movimientos sociales devino en la conformación de movimientos guerrilleros lo podemos encontrar en México con la represión estudiantil de 1968 y 1971. El gobierno cerró los puentes de diálogo y negociación, dejando la vía armada como uno de los caminos de lucha legítima para los movimientos sociales. Este fenómeno se repitió en casi todos los países de la región, con mayor incidencia en aquellos en donde se habían instalado dictaduras, como Argentina, Brasil y Uruguay²⁵.

²⁵ “Estos primeros intentos terminan con el fracaso y casi aniquilamiento de estos primeros focos. Así mismo, la llegada de Ernesto ‘El Che’ Guevara a Bolivia, que tiene por objetivo dar un nuevo impulso a la lucha armada, termina en derrota, lo cual parece marcar el fin de la guerrilla. Sin embargo, en Brasil, Uruguay y Argentina, países tradicionalmente considerados como no violentos, surge la guerrilla urbana. En Uruguay y Argentina realizan operaciones militares de gran envergadura, lo que supone organizaciones con un gran nivel de militantes, recursos y apoyo logístico. Al mismo tiempo, en países en que los grupos guerrilleros parecían totalmente extinguidos (Colombia y Nicaragua, por ejemplo) aparecen sucesores de los desaparecidos o nuevas organizaciones”. Larson, Judith, La guerrilla en América Latina ¿terrorismo o guerra popular?, revista de Sociología número 7, septiembre-diciembre de 1977, p.104.

Por otro lado, en América Latina bajo, la inspiración de la Revolución Cubana y ante todo con un corte abiertamente socialista, encontramos la experiencia de la Unidad Popular en Chile (1970-1973), en donde se aglutinaron diferentes corrientes del movimiento socialista y democrático chileno, logrando impulsar la candidatura de Salvador Allende a la presidencia del país.

En este sentido la experiencia derivada del programa de la Unidad Popular representa un parteaguas para la construcción del proyecto socialista en la región, pues a diferencia del referente principal, Cuba, en Chile la transición al pretendido modelo socialista se presentó en condiciones de disputa democrática, bajo la lógica electoral y de manera relativamente pacífica.

Es importante señalar que esta experiencia se planteó como estrategia fundamental establecer una alianza entre los diferentes sectores desde donde se podía encontrar una oposición de izquierda democrática, es decir, en el movimiento que proyectaba la Unidad Popular se integraron diversos sectores como el movimiento obrero, estudiantil y campesino, quienes además debieron pactar con la burguesía nacional.

Esta tesis, que remitía a la concertación de fuerzas, se desplomó muy rápidamente con el golpe de Estado en Chile y el establecimiento de una dictadura tremendamente represiva. El golpe fue un modelo para el establecimiento de gobiernos dictatoriales en varios países de Latinoamérica, mediante los cuales se frenó el avance de la tesis socialista en la región y se insertó el proyecto neoliberal. Así, el Estado cedía gran parte de sus roles a la iniciativa privada, principalmente de capital extranjero.

En algunos casos la respuesta al proyecto socialista fue la represión violenta, la criminalización de los partidos de izquierda y la implantación de

gobiernos emanados casi en su totalidad de golpes militares impulsados principalmente por los Estados Unidos, respondiendo a una política de contención. Un ejemplo de esto son las dictaduras de Chile y Argentina en los años 70.

Por otro lado, encontramos la experiencia de Perú y Ecuador, en donde el gobierno norteamericano auspició el establecimiento de gobiernos de corte militar nacionalistas que eran producto ya sea de un proceso democrático, como en Perú (1968), ya sea a través del pacto entre fuerzas sociales, como en el caso de los gobiernos militares de Ecuador (1963 y 1972).

La década de los 70 significó un periodo de ebullición de diferentes movimientos sociales que aun mantenían muchos de los postulados del marxismo, pero que comenzaban a enriquecer sus propuestas con visiones distintas, entre las que podemos destacar la experiencia de los grupos indígenas que se habían relacionado en algunos casos con los movimientos guerrilleros, estableciendo aportes a su filosofía, tal es el caso del Katarismo²⁶ en Bolivia o bien la propia teología de la liberación, la cual es fundamental para comprender la movilización social en Centro América.

Haciendo un balance, vemos que la movilización social en la región respondía a proyectos con un espectro más amplio, que buscaban de forma prácticamente generalizada la conquista del poder estatal para, desde ahí, establecer los proyectos que se enarbolaban en las distintas causas que los movimientos defendían. En este sentido, dos de los grandes ejes por los que transitaron hasta aquí las demandas de los movimientos sociales se estructuraban

²⁶ Se conoce así a una corriente cultural nacida en Bolivia en los 60, pero que ha ido evolucionando hacia la acción política, bajo la conducción de indígenas aimaras. Toma su nombre de Tupac Katari, el líder indígena que en 1781 condujo una rebelión en las tierras del altiplano contra la colonia española. Los movimientos creados como parte de esta corriente reivindican el carácter étnico de la lucha social en Bolivia.

bajo la lógica, primero, del nacionalismo que tiene su elemento fundante en la Revolución Mexicana y, fundamentalmente, en el reparto agrario y la creación de grandes organismos aglutinantes de las masas obreras y campesinas (la Confederación de Trabajadores de México o la Confederación Regional Obrera Mexicana) y, segundo, en la propuesta de la revolución socialista, la cual se encontraba caracterizada por la Revolución Cubana y su carácter de internacionalismo.

Podemos distinguir que la adhesión de los movimientos sociales en este periodo responde mayormente a la propuesta enarbolada por Cuba, pues esta permitía una mayor incorporación de los sectores marginados, obreros y campesinos que no lograron integrarse a las propuestas estatales reformistas. Bajo este razonamiento, encontramos mayor exclusión en los gobiernos sudamericanos, donde las distancias sociales se mantenían prácticamente inalteradas, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la región de los Andes, en donde se mantuvo por mucho tiempo un sistema de producción casi feudal en el que los indios se encontraban completamente sujetos a los gamonales.

Así pues, podemos entender la aparición de las guerrillas comunistas y también, paradójicamente, su posterior fracaso, pues estas no lograron incorporar algunos de los elementos que caracterizaban la lucha indígena a la ideología y a la práctica guerrillera. Por otro lado, no alcanzaron a generar en las ciudades un apoyo que fuese suficiente para masificar el movimiento.

Como consecuencia de las dictaduras instauradas en América Latina, la mayoría de los movimientos sociales fueron desarticulados mediante la represión o bien cooptados a través de la institucionalización del proyecto neoliberal. Alrededor de estos regímenes se configuró un imaginario social de “progreso”, pues en países como Chile, por ejemplo, se había obrado un “milagro económico”, el cual presentó un crecimiento macroeconómico. Dicha bonanza, no obstante,

estuvo basada en la cesión de los bienes y recursos estatales a la explotación de las transnacionales y las empresas de capital privado, así como en los préstamos realizados a los organismos de crédito internacional.

Con la crisis financiera de 1982, la región experimentó un escenario de recesión económica, agravado por las políticas de ajuste y estabilización tomadas por los gobiernos bajo la presión de los organismos de crédito internacional, que exigían el pago de la deuda contraída por los países latinoamericanos, con altos intereses. Dichas políticas se orientaron hacia el recorte de presupuesto al sector social y productivo e incremento del gasto destinado al pago de la deuda externa. Las consecuencias sociales en la región fueron insoslayables: inflación, ausencia de inversión en el sector productivo, desempleo, profundización de la pobreza, violencia, aumento de la delincuencia, tráfico de drogas, entre otras problemáticas.

Esta situación se insertó en las transformaciones que experimentaba el sistema capitalista a nivel mundial, impulsado por la revolución de la tecnología, el cual demandaba la configuración de estados viables a la expansión del modelo. Como lo expresa Berenice Ramírez López:

El proyecto económico que han seguido la mayoría de los países latinoamericanos desde mediados de los años 80, es también una propuesta de sociedad que conlleva supuestos políticos e ideológicos que se sustentan en el pensamiento que señala que para el funcionamiento adecuado del capitalismo, es imprescindible la libre actuación de las fuerzas del mercado. Por lo que la apertura de los mercados nacionales, los procesos de privatización, la desregularización económica y la reforma del Estado, se transforman en los principios básicos para insertarse en esta dinámica de crecimiento²⁷.

²⁷ Ramírez, López, Berenice, América Latina: los saldos de la reestructuración neoliberal. En *hacia un nuevo modelo económico*, Juan Pablos: U. de C. Juárez editorial, México, 1998, p. 40.

En este escenario, movimientos como los sindicales (a excepción de Brasil y Bolivia) pierden protagonismo pues las huelgas dejan de ser una opción en la medida en que el desempleo amenaza a los trabajadores, y existe un excedente de fuerza laboral para reemplazarlos. A ello se suma la caída de los regímenes socialistas europeos que habían constituido el referente de los movimientos sociales latinoamericanos de corte marxista y con profundas orientaciones clasistas.

La presencia de la organización popular en esa década aparece más bien ligada a temas como el ejercicio de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos, una vez que los países latinoamericanos experimentan, desde finales de los 70 y a lo largo de los 80s, la salida de los regímenes dictatoriales y el retorno a la democracia. A través de dichas reivindicaciones, se abre un camino para cuestionar los significados democráticos y los principios de refundación de los Estados. Un ejemplo de la continuidad de estas luchas lo constituyen las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina.

No se puede dejar de reconocer, además, la presencia de nuevos actores como las mujeres, los campesinos o los indígenas, quienes desde décadas anteriores habían venido cuestionando las prácticas de dominación del Estado y que en el marco de la reconstitución de los escenarios de lucha social adquieren un nuevo impulso.

Una vez que en la región se opera la recuperación de la democracia, íntimamente ligada a la implementación del modelo neoliberal, los 90 se representan bajo la concepción del “fin de la historia”, es decir, la idea de que el mundo había llegado a un tope con el neoliberalismo y lo que venía era su profundización, dejando atrás ideologías como el marxismo, que proponían la construcción de un modelo diferente, el socialismo.

En ese marco, el escenario de disputa para las clases subalternas ya no es el Estado sino el cuestionamiento de la hegemonía del sistema desde ámbitos alternativos como la cultura, la identidad étnica, el género, entre otros. Todo ello, al margen de los partidos de izquierda, los cuales habían sido permeados por las concepciones neoliberales, orientando su accionar a la búsqueda de medidas compensatorias para los trabajadores en el marco del perfeccionamiento del libre mercado. Esta tendencia fue concebida como “tercera vía”²⁸.

Para los 90, la situación económica y social en los países latinoamericanos continuó su deterioro, como consecuencia de la defensa de la autorregulación del mercado y la pérdida de las capacidades regulatorias de los Estados “democráticos”, sujetos a las medidas económicas conocidas como el Consenso de Washington, aplicadas a los países latinoamericanos por presión de los organismos de crédito internacional como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Mientras el mundo experimentaba una apertura de fronteras a través de sus mercados, en el marco del avance del proceso de globalización, América Latina afrontaba esta inserción en el mercado mundial en una situación de

²⁸ La llamada Tercera Vía constituyó una propuesta que se desarrolló en la década de los 90, la cual partía de la tesis de que no había alternativa para la concepción neoliberal de la economía, cuya expresión de eficacia era el libre mercado; no obstante, reconocía que aquel no garantizaba los derechos sociales de la población trabajadora. Bajo esta visión, era necesario combinar el neoliberalismo con un programa de políticas sociales que compensaran los efectos adversos que estaba provocando la transición hacia un modelo regulado por el libre mercado, efectos que fueron catalogados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como “provisionales”. Esta propuesta mostró rápidamente su debilidad teórica y práctica, al no poder sostenerse frente a los impactos negativos cada vez más crecientes del modelo neoliberal. Ver más en: Bruckmann, Mónica, Dos Santos, Theotonio. Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico, Revista Prokla, n°142, 2008, p. 14.

desindustrialización y reprimitización de la economía. Pese a la heterogeneidad con la que los países latinoamericanos transitaron por la fase de industrialización, “destaca el hecho de que en todos los países de América Latina se hizo presente la crisis del modelo de sustitución de importaciones y que frente a ello el camino adoptado ha sido instaurar una economía que se rija por los principios de economías de mercado, abiertas y neoliberales. Otra característica es su relación de dependencia externa”²⁹.

En este contexto, y con un escenario de empobrecimiento cada vez más alarmante, se produce un incremento de los conflictos sociales, que evidencian la emergencia de nuevos actores y nuevas estrategias de lucha, ya no solo desde la resistencia sino desde el planteamiento de propuestas de organización alternativas al Estado, tendientes al fortalecimiento de espacios locales y acciones de autodeterminación y democracia directa. Esto en función del descrédito que experimentaba la democracia formal y que abrió espacios de inestabilidad política en varios países de la región.

Un acontecimiento emblemático lo constituye el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, protagonizado por los indígenas chiapanecos (México), que además de reivindicar su carácter étnico, hace un llamamiento a la convergencia global de movimientos sociales para hacer frente a los procesos de globalización. De hecho, se puede decir que esta década está marcada por el protagonismo y el liderazgo de los sectores rurales e indígenas en las acciones de movilización de la región. Estos sectores no solo emergen de manera autónoma a los partidos y movimientos tradicionales de izquierda sino que estructuran espacios de articulación nacional y regional.

²⁹ Ramírez López, *op. cit.*, p. 49.

En 1990, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE-1986) logra convocar a representantes de 120 naciones indias, organizaciones internacionales y organizaciones fraternas en el Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios, desarrollado en Quito (Ecuador), como respuesta a la celebración de los 500 años del llamado “descubrimiento de América”. Ese mismo año la CONAIE protagonizó en Quito uno de los primeros levantamientos indígenas de la década con reivindicaciones que iban más allá de cuestión étnica, articulando las luchas de varios sectores sociales en contra de las políticas neoliberales adoptadas por el gobierno ecuatoriano. El liderazgo del movimiento indígena y campesino se mantendrá en sucesivas movilizaciones a lo largo de la década, siendo el detonante para el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000).

En este sentido también podemos destacar acciones como las de los movimientos indígenas de Bolivia y parte del Perú. Bolivia, particularmente, experimenta entre 2000 y 2005 importantes levantamientos en defensa de sus recursos naturales: la Guerra del Agua en Cochabamba, los bloqueos aimaras de caminos, las luchas cocaleras en Chapare y la Guerra del Gas, la cual alcanza su punto más álgido con la salida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Estas movilizaciones, que lograron poner freno a políticas neoliberales y privatizadoras, constituyen una etapa de inflexión que abrió un espacio de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales profundas en ese país.

La emergencia del sector indígena y campesino se verá reflejada también en las acciones de movimientos como el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST)³⁰ en Brasil, la lucha de los mapuches en Chile en defensa de su

³⁰ Este movimiento se articula en 1984 en el marco de la situación de desempleo que experimentaron la población brasileña en zonas rurales y pequeñas ciudades, exigiendo el retorno a la tierra mediante una reforma agraria.

territorio y su autonomía, la oposición de los pueblos mesoamericanos al Plan Puebla Panamá (2002), entre otros. En estos casos, se cuestiona al Estado Nación, criticando sus pretensiones homogenizadoras y planteando proyectos civilizatorios alternativos como, por ejemplo, en los casos de Ecuador y Bolivia, en donde se consigue el reconocimiento del Estado Plurinacional en las constituciones de 2008 y 2009, respectivamente.

En los albores del siglo XXI también se ponen en evidencia nuevas formas de gestión autonómicas que parten desde los espacios locales, como sucede con los caracoles zapatistas. En todos estos casos las experiencias planteadas son resultado de amplios procesos de lucha y movilización social, ya sea por el reconocimiento de la autonomía, la diversidad y la plurinacionalidad, o por el derecho a ejercer sus mecanismos políticos y culturales.

Por otro lado, en el ámbito urbano se van configurando nuevas formas de organización que atienden al rescate de formas comunitarias y autogestivas de supervivencia ante los efectos de pauperización del modelo neoliberal. “Argentina aparece en ese sentido como el caso más emblemático de este fenómeno, donde estos movimientos que reciben el nombre de piqueteros ocupan –principalmente a partir de 1999– un lugar central en el escenario de la protesta antineoliberal y en la aceleración de la crisis político social que desembocó en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001”³¹.

Para concluir, podemos decir que a partir de los 90 América Latina experimenta una remozada efervescencia social, que se expresa en formas radicales de protesta que van desde bloqueos de caminos y toma de tierras, hasta

³¹ Seoane, José; Taddei, Emilio; Algranati, Clara. Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina. En *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina*. Boron, Atilio A.; Lechini, Gladys, CLACSO, Buenos Aires, 2006, p. 234.

el derrocamiento de presidentes (Argentina, Perú, Brasil, Ecuador) y que en varios casos han desembocado en la construcción de proyectos de Gobierno que han logrado éxito en las urnas. Esto ha abierto las puertas a una nueva disputa por la hegemonía del sistema, como lo señala Massimo Modonesi:

Como señal inequívoca del cambio de época (...) existe un relativo consenso en reconocer cómo los movimientos populares, al pasar de la resistencia a la irrupción política, transitan de una lógica exclusivamente defensiva a una actitud que incluye y combina propuestas y reivindicaciones que rebasan la defensa de los derechos vulnerados por el neoliberalismo y bosquejan horizontes posneoliberales por medio de demandas que rebasan el marco de negociación establecido por el sistema existente³².

En este nuevo horizonte podemos entender la irrupción de gobiernos de “izquierda” de corte progresista y con una orientación nacionalista, los cuales se podrían representar en las figuras de Evo Morales, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, entre otros. Estos gobiernos se caracterizan por la reapropiación de los recursos naturales, así como de las industrias prioritarias para el Estado a través de nacionalizaciones y la creación de proyectos de integración nacional con tendencia antiimperialista.

Podemos decir que la aparición de estos regímenes es en gran medida resultado de la protesta social que se encarna en los distintos movimientos y movilizaciones sociales presentes en los últimos veinte años y que se articulan alrededor de las más divergentes demandas. En este sentido, es conveniente también distinguir el papel que tienen los gobiernos con los movimientos que impulsaron sus ascensos y que, en muchos casos, una vez constituidos, se han distanciado de los movimientos que los llevaron al poder o han desconocido

³² Modonesi, Massimo, Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época. Revista A Contra Corriente, Vol. 5, Nro. 2, 2008, pp. 136, 137.

dinámicas propias de participación de los mismos, que rebasan los mecanismos oficiales de participación.

Por último, es conveniente plantearse en qué medida los gobiernos progresistas representan a los movimientos sociales que impulsaron su ascenso al poder. Este es uno de los ejes que se desarrollará en los apartados posteriores, haciendo particular énfasis en la participación política que dichos movimientos han alcanzado en estos procesos, particularmente en Ecuador y Bolivia.

1.2 La movilización social en el Ecuador

Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina forman parte de las naciones que constituyen el territorio andino, por tal razón pueden tener elementos de análisis comunes, dado que comparten una tradición e historia similares. Esta relación se estrecha un poco más entre los países en los que se concentra la mayor cantidad de población indígena: Ecuador, Bolivia y Perú³³.

Estos tres países representan una unidad cultural más homogénea, pues se relacionan directamente en sus procesos históricos. En los últimos catorce años esta concordancia se deja ver en las crisis institucionales que experimentaron Ecuador y Bolivia y en los proyectos de transformación de sus sistemas políticos, los que han desencadenado procesos más amplios de movilización social. A la par

³³ Según el informe denominado “Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (Nueva York, 22 y 23 de septiembre de 2014), en Bolivia existen 6,2 millones de indígenas, los cuales representan un 62,2% de la población, en Perú hay 7 millones, es decir el 24% de sus habitantes, mientras que en Ecuador los pueblos y nacionalidades indígenas ascienden a un millón, lo cual representa un 7% de su población.

que experimentan el resurgimiento de las corrientes más retrógradas de las derechas de ambos países, las cuales han revivido los discursos más reaccionarios, que van desde la potencialización del racismo como parte de la retórica política hasta la supuesta pérdida de libertades de una clase media desclasada y despolitizada.

Dicha clase, dada su enajenación, toma como propios los discursos que se difunden en los medios de comunicación que controlan los sectores burgueses, los cuales postulan un discurso de apertura democrática neoliberal, en respuesta a las políticas de corte nacional de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa. Ahora bien, para comprender los procesos que experimentan estos países se considera conveniente introducir los antecedentes y la progresión histórica que ha tenido la movilización social en ellos, empezando por el caso de Ecuador.

La historia de este país, constituido en República en 1830, está marcada por la desigualdad, la exclusión, la concentración de la riqueza y la primarización de la economía, en favor de los intereses tanto del capital internacional, así como de las oligarquías locales puestas a su servicio. En suma, es un país que ha reproducido sistemáticamente el despojo económico y cultural impuesto desde la Colonia. Concomitantemente, su historia está marcada también por la resistencia popular y el protagonismo de una variedad de movimientos sociales que han ido constituyéndose y transformándose de acuerdo a las necesidades de la coyuntura local y regional.

El protagonismo del movimiento obrero, estudiantil y los grupos guerrilleros en un primer momento, la resistencia campesina, en otro, la posterior consolidación del sector indígena como agente de cambio, la visibilización de facciones militares progresistas, la incursión en la escena política de movimientos alternativos con nuevas reivindicaciones (culturales, étnicas, antisistémicas, ecologistas, entre otras), el surgimiento de sectores urbanos de clase media

autoconvocados representan el escenario en el que se han desarrollado los intentos de la izquierda ecuatoriana por disputar la hegemonía del proyecto nacional; con acciones generadas tanto desde la institucionalidad como fuera de ella.

Un hecho emblemático de la historia de la movilización social ecuatoriana lo constituye la Revolución Liberal del 5 de junio de 1895, acción liderada por el general Eloy Alfaro Delgado y protagonizada por sectores campesinos y de clase media de la costa ecuatoriana. Este hecho constituye la culminación de una serie de luchas armadas a través de las cuales los liberales sacan del poder a los conservadores y logran instaurar cambios trascendentales para la vida política y social del Ecuador. La unificación del país, el establecimiento del Estado laico, la expropiación de tierras concentradas en el clero y su incipiente redistribución son algunos de los logros alcanzados por dicha revolución.

No obstante, la imposición del liberalismo constitucionalista, aliado al sector terrateniente de la sierra ecuatoriana, se impuso al liberalismo radical, convirtiendo a lo que fue el proyecto alfarista en un modelo al servicio del sector financiero de la costa y del latifundio serrano (dependiente de intereses extranjeros). La insatisfacción de las clases medias urbanas, así como el desarrollo de la agroindustria y la industria textil plantan la semilla para el nacimiento de la clase obrera y artesanal, la cual integra los primeros sindicatos del país.

Bajo la influencia de la revolución rusa, que impregnó a América Latina de su espíritu transformador, se funda el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) en 1926, integrado principalmente por obreros, intelectuales y militares. Respecto a las fuerzas políticas y sociales que dieron nacimiento a la tendencia socialista en el Ecuador, el historiador Enrique Ayala Mora señala que:

Al menos cuatro corrientes habían convergido en lo que sería el Partido Socialista. Primero, lo que podemos denominar el “ala izquierda” del liberalismo (...) Segundo, un sector de vertiente latifundista serrana que postulaba un socialismo utópico y de marcado carácter agrario-artesanal (...) Tercero, núcleos de militares jóvenes contestatarios de la “plutocracia” y partidarios de la reforma política, pero con posturas ideológicas imprecisas. Cuatro, grupos de intelectuales y de dirigentes de la incipiente organización obrera y artesanal, que constituían el ala más radical del socialismo³⁴.

En 1931, un grupo de dirigentes socialistas crea el partido Comunista del Ecuador (PCE) como respuesta a la discrepancia respecto a la adhesión a la Tercera Internacional Comunista, a cuyas filas decide sumarse este sector.

Cabe destacar que si bien las organizaciones de carácter social y de izquierda en esa época están aún en proceso de configuración, desde los primeros años del siglo XX se producen acciones de resistencia que más tarde se convertirán en referentes simbólicos de la lucha social en el Ecuador por la forma en que fueron reprimidos. Un ejemplo de ello son la huelga general realizada por la Confederación Obrera de Guayaquil en 1922 y los levantamientos indígenas en las haciendas de Leyto, Simancay, Jadán, Pichibuela y Urcuquí desarrollados a lo largo de 1923.

La década del 30, no obstante, es el espacio en donde los sectores sociales se van unificando alrededor de movimientos con un carácter más definido, atravesado por una orientación clasista. En 1942 se funda la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). Y ese mismo año, bajo el impulso de la militancia del PCE se crea la Federación Ecuatoriana de Indios FEI, la cual aglutina sectores indígenas organizados de la sierra ecuatoriana, pero sin incluir reivindicaciones étnicas, sino atendiendo a la misma visión clasista de la época.

³⁴ Ayala Mora, Enrique, El Partido Socialista en la historia, Ediciones La Tierra, Quito, 1988, p. 9.

En 1944 se constituye, además, la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE).

Los esfuerzos organizativos de esos años confluyen en otro hito importante para la historia de la lucha social en el Ecuador. En 1944 se produce en Guayaquil una rebelión militar apoyada por trabajadores, estudiantes e intelectuales, quienes tomaron las armas para enfrentar al Cuerpo de Carabineros, creado por el presidente Alberto Arroyo del Río para reprimir a la sociedad civil. Este alzamiento, denominado “Gloriosa del 44”, se produce en el marco del conflicto bélico con el Perú que inició en 1941 y terminó en la cesión de un gran porcentaje de la Amazonía ecuatoriana a ese país, hecho que enardeció los ánimos de los militares guayaquileños.

“La Gloriosa” culmina en el derrocamiento de Arroyo del Río y la efímera toma del poder por parte de la izquierda ecuatoriana, pues a los pocos días se opta por una salida institucional al ceder el gobierno a José María Velasco Ibarra, caudillo populista con un discurso tan movilizador que logró gobernar al país durante cinco ocasiones, pero que representaba el comodín de la derecha para desarticular los impulsos revolucionarios de la época, dividir a la organización social y cooptar en el gobierno a militantes comunistas y socialistas³⁵.

Las siguientes décadas, en el escenario de la posguerra mundial, América Latina se inserta en un lento proceso de industrialización, marcado por el auge del capital norteamericano. Ecuador, por su parte, experimenta un periodo de bonanza económica basada en el crecimiento de la exportación de banano, hecho que contribuye a la formación de una burguesía agraria a la vez que profundiza las condiciones de despojo del campesinado ecuatoriano, mayormente indígena.

³⁵ Ver más en Rodas, German, La izquierda ecuatoriana (aproximación histórica), Abya Yala, Quito, 2004.

Al mismo tiempo, a partir de los 50, se evidencia la organización de sectores campesinos de la sierra y la costa ecuatoriana, cuyas reivindicaciones apuntan principalmente al acceso a la tierra. Aunque las organizaciones rurales de la sierra estaban integradas principalmente por indígenas, no se hizo presente ninguna reivindicación de carácter étnico, pues estos sectores habían sufrido un proceso de campesinización³⁶.

Adicionalmente, la influencia de la Revolución Cubana sirvió como referente para la formación de los primeros proyectos guerrilleros en el Ecuador, fundamentalmente en el campo, protagonizando la recuperación de tierras improductivas.

La idea de un proceso armado también cala en los sectores urbanos de clase media, principalmente en los estudiantiles y sindicales, los cuales se encontraban muy influenciados por la ideología marxista como motor de cambio. Por ejemplo, se constituyen agrupaciones como el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE-1964), formado por un grupo de militantes que se separa del Partido Comunista, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que aglutinó a jóvenes con diversos proyectos político-militares, en el mismo periodo.

³⁶ “El desconocimiento del carácter específico de las demandas del campesinado indígena retrasó el desarrollo de sus reivindicaciones étnicas durante una década, sin embargo, las luchas por la promulgación y aplicación de la Ley de Reforma Agraria favorecieron el fortalecimiento de las organizaciones locales y regionales y, a mediano plazo consiguieron ligar la demanda campesina y la reivindicación étnica (...) El retraso señalado se debe básicamente a la inexistencia previa de una base étnica diferenciada en términos de clase, capaz de impulsar una reivindicación desde intereses no exclusivamente campesinos. Su desarrollo posterior, en la sierra, es en parte resultado de la diferenciación provocada por el proceso”. Wray, Natalia, La construcción del movimiento étnico nacional indio en Ecuador. En Díaz-Polanco Héctor (compilador), *Etnia y nación en América Latina*, Conaculta, México DF, 1995, p. 282.

Del mismo modo que en el resto de países de América Latina, la creciente presencia de la ideología marxista y el surgimiento de movimientos revolucionarios, llama la atención de los Estados Unidos que, en el caso ecuatoriano, se traduce en varias acciones como el auspicio a la instalación de un gobierno de corte militar entre 1959 y 1963, así como la intervención directa en el fraccionamiento de las organizaciones sindicales, indígenas y populares que habían logrado fortalecerse en la década anterior. Al respecto, Germán Rodas afirma que:

Para afectar a la CTE, se organizó la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), así como se fundaron grupos fantasmas que se definían como anticomunistas, e incluso se intentó organizar agrupaciones políticas cuyas actividades se enmarcarían en las tareas ideológicas de desgaste de la importantísima influencia que la revolución cubana había tenido en el Ecuador³⁷.

Para frenar la efervescencia social, que se profundizaba cada vez más por la crisis económica causada por la caída de los precios del banano, el gobierno militar expidió en 1964 un decreto para implementar la primera reforma agraria en el país. Dicha reforma, sin embargo, dejó intocadas las tierras de la serranía ecuatoriana que estaban en manos de latifundistas y se orienta a la colonización de tierras en la Amazonía y la costa ecuatorianas. La reforma, además, impulsó la creación de cooperativas, pretendiendo transformar a los campesinos en pequeños propietarios, en la misma lógica de fortalecimiento de un maltrecho capitalismo.

En 1966, en un grave contexto de crisis económica y desprestigio de la junta militar, los militares son obligados a dimitir en el marco de una serie de huelgas nacionales. En este nuevo escenario de confluencia de la organización

³⁷ Rodas, German, La izquierda ecuatoriana (aproximación histórica), Abya Yala, Quito, 2004, p. 75.

social tienen un especial protagonismo los movimientos estudiantiles, principalmente universitarios, además de una importante participación para mediar en el conflicto de la oligarquía costeña ecuatoriana, que trató de conseguir una salida pactada con los militares.

El breve periodo de retorno a la democracia que duró hasta 1970 estuvo marcado por la disputa entre liberales y conservadores, proceso en el cual se profundizó la penetración ideológica de los Estados Unidos, a la par que se fueron fortaleciendo las fuerzas sociales, principalmente del sector agrario. En 1968, bajo la dinámica electoral, José María Velasco Ibarra es reelegido como Presidente del Ecuador, siguiendo una orientación claramente populista, que tenía su base electoral en los sectores más marginados del país, pero sobretodo mediante un pacto que aglutinó amplios sectores conservadores y a liberales moderados, los cuales más adelante constituirán el partido Izquierda Democrática, de orientación socialdemócrata.

Para los años 70, la aparición del “boom” petrolero transforma las relaciones políticas entre el Estado y la sociedad civil, como consecuencia de la intervención directa de los Estados Unidos, impulsando, al igual que en el resto de América Latina, una dictadura militar. Esta nueva intromisión estadounidense se orquestó, en lo económico, a través de la participación de las empresas transnacionales en el desarrollo de la industria petrolera ecuatoriana y marca también un nuevo periodo de dictadura militar con orientación “nacionalista” y “desarrollista”.³⁸

³⁸ Como resultado del derrocamiento del presidente Velasco Ibarra se da inicio al periodo de las dictaduras militares, que va desde 1972 hasta 1979, el cual estuvo encabezado en su primera etapa (del 72 al 76) por el General Guillermo Rodríguez Lara y en una segunda etapa (del 76 al 79) por el Almirante Alfredo Poveda Burbano, el cual encabezaba una Junta Militar de Gobierno. Ver más en: Maldonado, Donoso, Fernando, Militares y política en Ecuador de 1830-

Este periodo estuvo signado fundamentalmente por la mano dura que ejercían los militares, con una retórica supuestamente “revolucionaria” y por la adopción de políticas asistencialistas de las que se beneficiaron sectores populares, pero que no transformaron la estructura social del país y que además respondía a una política de corte mediatista, derivada de la gran cantidad de recursos generados por el petróleo, pero que por otro lado no respondía a las problemáticas de fondo que afectaban a los sectores más marginados y a las clases trabajadoras.

Estas políticas constituían una nueva estrategia que se puso en marcha en la región andina, y en particular en las provincias con mayor presencia indígena, esto con la finalidad de apaciguar la oposición organizada, generando la imagen de un gobierno supuestamente “progresista” e incluso “revolucionario”, pero que en realidad estaba dentro de los cánones del sistema capitalista, enfocados a “desarrollar la industria nacional” para fortalecer el mercado interno y posicionarse en un mejor sitio dentro de la dinámica regional y global del mercado.

En este periodo, la participación de los movimientos sociales y partidos de izquierda en el gobierno fue prácticamente nula y la oposición se vio mermada y perseguida. Esto respondía a una política regional en donde los movimientos de izquierda pasaron a la clandestinidad y, en Ecuador, al igual que en otros países de la región, se sembró la semilla para la aparición de los movimientos guerrilleros de corte marxista, como Alfaro Vive Carajo (AVC), el cual irrumpe en la escena política en la siguiente década.

1980, en Ayala, Mora, Enrique (coord.), *Política y Sociedad. Ecuador: 1830-1980*. Corporación Editora Nacional, 1980.

De acuerdo a la lógica desarrollista de los gobiernos militares hubo un proceso de tecnificación, modernización e intento de creación de la industria nacional, lo cual fortaleció a las fuerzas laborales, organizadas a través de diversos sindicatos y articulados a través del Frente Unitario de Trabajadores (FUT-1971). Adicionalmente, el gobierno militar impulsó un nuevo proceso de reforma agraria a través del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, con la finalidad de redistribuir tierras baldías y latifundios improductivos, hecho que se topa con la férrea oposición de sectores terratenientes. Para enfrentarlos, se fortalece la organización de los sectores campesinos de la costa y la sierra, esta vez bajo el impulso de la iglesia de corte progresista que predicaba la “teología de la liberación”.

Para la década de los 80s, Ecuador se inserta en el neoliberalismo al igual que los demás países de la región, los cuales transitaban a la democracia en condiciones de endeudamiento y una profunda crisis económica. Ecuador experimentaba la devaluación del sucre y la pauperización salarial,³⁹ por lo que la vuelta al modelo democrático de partidos en el Ecuador caminó de la mano del neoliberalismo y sus propuestas de adelgazamiento del Estado.

En lo político, la década está marcada por el retorno a la democracia o a los gobiernos civilistas y, contradictoriamente, por el surgimiento del movimiento guerrillero que en términos temporales se enmarca en un segundo momento de la

³⁹ El crecimiento económico del país en el período 1980 - 1985 fue limitado por la escasez de divisas generada por la cantidad de recursos externos que se tuvieron que dedicar al pago de la deuda externa, por el deterioro del sector exportador, y por la poca disponibilidad de nuevos créditos. Así, la tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto real de 1980 a 1985 fue de 2.5%. En 1982 el sucre sufrió continuas devaluaciones y hubo prohibiciones en las importaciones; ambas medidas limitaron la salida de divisas, pero también afectaron negativamente la actividad económica. Ver más en: Santos Alvite Eduardo, Mora Duque Mariana. “Ecuador, la década de los 80” Crisis económica y ensayo neoliberal. Corporación Editora Nacional, Quito, 1987.

lucha guerrillera latinoamericana, destacándose las guerrillas centroamericanas. Para ejemplificar esta situación, encontramos en los países vecinos al Ecuador la aparición de guerrillas como, por ejemplo, Sendero Luminoso en 1980 y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en 1985; ambos en Perú. Mientras que en Colombia tenemos a las FARC, el M-19, entre otros.

En este contexto surgen en el Ecuador, entre 1982 y 1983, las denominadas Organizaciones Político Militares (OPM) como una reconstitución de los proyectos políticos de izquierda armados, bajo la influencia del triunfo de la revolución en Nicaragua y de la conformación de las guerrillas de El Salvador y Guatemala.

De esta manera, los jóvenes que venían soportando la represión de la dictadura, vinculados al MIR y otras organizaciones de izquierda, constituyen diversas organizaciones, entre ellas las Brigadas Pintag y los Chapulos, grupos que confluyeron en las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy Alfaro y que constituyen el antecedente de la experiencia de la guerrilla urbana más significativa del Ecuador, ¡Alfaro Vive Carajo!, la cual fue conformada en 1983 y mantenía un nexo con la guerrilla colombiana.

Al respecto, German Rodas afirma que “en febrero de 1983 se realizó la primera conferencia constitutiva de este grupo insurreccional (...) a la conformación del AVC llegaron la mayor parte de las fuerzas que en el Ecuador emprendieron en el periodo de 1960 y 1980, inclusive por caminos separados, el proyecto insurreccional armado(...) AVC estableció un nexo fundamental a partir de su involucramiento en el ‘Batallón América’, que permitió tanto al AVC como al M-19 operar, en más de una ocasión, conjuntamente”⁴⁰.

⁴⁰ Rodas, German, La Izquierda Ecuatoriana (aproximación histórica), Abya Yala, Quito, 2004, pp. 142-143.

Es, sin embargo, una guerrilla que nunca logra masificarse, pues a pesar de que consigue extenderse por casi todo el territorio no supera su carácter sectario original, pues la mayoría de sus miembros y cúpulas dirigentes provenían de la clase media y media alta de los núcleos urbanos.

En la presidencia de León Febres Cordero se contuvo a AVC mediante el encarcelamiento y asesinato de muchos de sus miembros, entre los que se destaca la captura y posterior asesinato de su fundador y dirigente Arturo Jarrín en 1986. Entre sus acciones más relevantes se encuentra el secuestro del conocido banquero Nahim Isaías Barquet, en septiembre de 1985, en el que participaron también miembros del M-19 colombiano y que terminó con la muerte de los guerrilleros y el secuestrado.

La década de los 80s en el Ecuador estuvo marcada por la presencia de los denominados escuadrones de la muerte, con los cuales el gobierno y las autoridades buscaban eliminar a la llamada “izquierda radical” y por otro lado controlar y contener a todos los movimientos sociales, mediante detenciones ilegales, torturas y asesinatos. Pese a la brutal represión de la que fue víctima el AVC y a los certeros golpes que recibió, continuó con su lucha hasta pactar con el gobierno del social demócrata Rodrigo Borja, con quien se negoció el acuerdo de paz en 1991.

En lo referente a la movilización social de los grupos indígenas, esta década también es trascendente, pues para finales de los 80 se logra consolidar una agrupación de carácter nacional como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), movimiento fundado en 1986 y que agrupa a sectores indígenas y campesinos de la costa, sierra y Amazonía. Como se puede apreciar, la agitación política, económica y cultural de esta década abonó el terreno para las transformaciones que el Ecuador experimentaría en los años 90.

La década de los noventa está marcada, sin duda, por el protagonismo que tuvo el movimiento indígena en ese agitado periodo histórico y en las transformaciones conseguidas a través de la movilización social, desplegada en esos años para enfrentar a las políticas neoliberales adoptadas por los gobiernos de turno, como parte del avance del sistema capitalista en toda la región.

El movimiento indígena, ya articulado en función de un reconocimiento de su identidad étnica y su lucha por la reivindicación de historia y cultura ancestrales, no solo que se constituye en el eje de las acciones de protesta de la época sino que incluso logra llegar al poder de forma fáctica en el 2000 y, en 2003, participar directamente en el Gobierno electo, cerrando una década de inestabilidad política y abriendo otra signada por transformaciones profundas en la correlación de fuerzas políticas.

Uno de los hitos más importantes de la irrupción del movimiento indígena en la esfera política del país fue el levantamiento de 1990, el cual inició con la toma del templo católico de Santo Domingo (Quito) y devino en un paro nacional que duró casi dos semanas. Esta acción, liderada por la CONAIE, articuló a diversos movimientos sociales provenientes tanto de coordinadoras campesinas como de sectores urbanos organizados y nuevos movimientos de jóvenes cristianos, manifestando su descontento ante el modelo agroexportador impulsado por el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos (Izquierda Democrática) y que privilegiaba los intereses de los sectores empresariales sobre los de los campesinos.

En este levantamiento también se criticó el excesivo pago de la deuda externa y la apropiación de los recursos de la Amazonía por parte de las compañías petroleras, a la vez que se exigió el derecho a la autodeterminación y territorialidad, así como la salida del Instituto Lingüístico de Verano, proyecto

misionero estadounidense que era tildado por lo indígenas como un instrumento de infiltración de los Estados Unidos en las comunidades para dividir las.

Al respecto, Virgilio Hernández⁴¹, quien participó de la toma de la iglesia, afirma que “el levantamiento indígena de los noventa representa una ruptura profunda para el Estado, para la sociedad ecuatoriana y (...) para la izquierda ecuatoriana; porque, precisamente rompe esa visión dogmática de que los aliados del movimiento obrero para la revolución son solo los campesinos y, por tanto, los indígenas solo eran vistos como aliados en tanto que eran campesinos”⁴².

El mismo año del levantamiento, la CONAIE logra llevar a cabo, en Quito, el Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios, como respuesta a la celebración de los 500 años del llamado “descubrimiento de América”, y con la presencia de representantes de 120 naciones indias, organizaciones internacionales y organizaciones fraternas. Con este hecho, el movimiento indígena estaba llevando su articulación a un carácter internacional y elevando la visibilidad nacional lograda en el levantamiento de junio a un carácter regional.

Es así que las fuerzas sociales y populares del Ecuador se agrupan alrededor del movimiento indígena, ensayando otras formas de organización y resistencia, en una época en la que toda la región latinoamericana se movilizaba en contra del proyecto neoliberal, al cual se habían plegado todos los presidentes ecuatorianos a partir del retorno a la democracia.

En 1995 se crea la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), integrada por la CONAIE, la Confederación Única de Afiliados al Seguro Social

⁴¹ Dirigente social y actual asambleísta de Alianza País por la provincia de Pichincha.

⁴² Harnecker, Martha, Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud, Abya Yala, Quito, 2011, p. 57.

Campesino (CONFEUNASSC), la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC), así como varios movimientos de carácter urbano, de jóvenes y mujeres. Esta reconfiguración de fuerzas sociales pretende tomar distancia de organizaciones a las que se consideraba de la vieja izquierda, pues era la época en la que el denominado “socialismo real” había fracasado en Europa, desacreditando a las organizaciones de carácter marxista y abriendo un espacio para la incursión de nuevos actores en la escena política. Como lo afirma Franklin Ramírez Gallegos:

Se trataba del más ambicioso intento de articulación de la nueva corriente de organizaciones sociales. Su dinámica organizativa, más descentrada y compleja, difería de las instancias de coordinación controladas por la vieja izquierda partidaria: el Frente Popular, que agrupa al profesorado público y a los gremios estudiantiles y universitarios, bajo la tutela del Movimiento Popular Democrático (MPD-línea prochina); y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que articula a centrales sindicales y ha expresado históricamente a la izquierda socialista y comunista⁴³.

Por otro lado, en 1995 el movimiento indígena decide ampliar su acción al terreno electoral y funda el Pachakutik, un partido orientado a actuar como brazo político de la CONAIE pero que estaba integrado también por diversas fuerzas sociales. En 1996 Pachakutik entra a terciar en las elecciones presidenciales con un candidato no indígena, Freddy Elhers, dirigente del Movimiento Nuevo País, integrado por profesionales y sectores de clase media. La denominada vieja izquierda, de orientación sindical, no se sumó a este intento de alcanzar el gobierno, al que también se unieron la Izquierda Democrática y el Partido Socialista del Ecuador, pues participó en las elecciones con candidato propio. Elhers no ganó pero alcanzó una importante votación, mientras que el movimiento indígena también logró un importante posicionamiento.

⁴³ Ramírez Gallegos, Franklin, Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos Sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010). En Revista del Observatorio Social de América Latina Año XI Nro. 28, Noviembre de 2010, p. 21.

Apenas iniciaba 1997 y el escenario de lucha social se ubicó nuevamente en las calles cuando el denominado Frente Patriótico de Defensa del Pueblo (CMS, CONAIE, FUT, Frente Popular), convocó a una huelga nacional "por la dignidad, la honestidad y contra el neoliberalismo", mediante la cual llegaba a su punto más álgido la crisis política y social que vivía el país con el presidente recién electo Abdala Bucaram, líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el cual representaba un sector de la oligarquía costeña con orientación profundamente populista.

Dicho gobierno no solo que acarreaba los desastrosos efectos de la implementación del neoliberalismo en el país, sino que intentó hacer nuevos ajustes que beneficiaban al sector privado y afectaban aún más la situación de pobreza de la población, además de las denuncias de corrupción que enfrentó desde su llegada al poder. Las movilizaciones sociales provocaron la salida de Bucaram, pero dicha protesta fue aprovechada por facciones de derecha opuestas al roldosismo para hacerse del poder.

Es en el 2000 cuando el protagonismo del movimiento indígena y las fuerzas sociales articuladas a él alcanzan su punto más alto. Esto debido a la agudización del descontento social frente al desastre económico en el que estaba sumido el país al final de la década, de la mano del gobierno de la socialdemocracia, liderado por el entonces presidente Jamil Mahuad (1998-2000).

Mahuad, el cual estaba auspiciado por dos de los partidos de derecha más importantes del país, el Partido Social Cristiano (PSC) y la Democracia Popular (DP), decretó la dolarización de la economía en el 2000 y expidió la Ley de Salvataje Bancario, mediante la cual se retuvo el dinero de los cuenta ahorristas para salvar a la docena de bancos que se declararon en quiebra en 1999.

En respuesta a ello, se produjeron amplias movilizaciones populares que culminaron el 21 de enero del 2000 cuando se derrocó al gobierno de Mahuad y se estableció una “Junta de Salvación Nacional”, integrada por Antonio Vargas, líder de la CONAIE, Lucio Gutiérrez, entonces coronel del ejército, y el reconocido magistrado Carlos Solórzano. No obstante, a las pocas horas y por decisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se entrega el poder al Vicepresidente de Mahuad, Gustavo Noboa, en el marco de un llamado al restablecimiento de la democracia.

En 2003, fruto del descontento social generado por la continuidad de políticas de derecha llevadas a cabo por Noboa, triunfa el proyecto electoral del Partido Sociedad Patriótica (PSP), constituido por Lucio Gutiérrez, el cual abanderó un discurso supuestamente de izquierda y antiimperialista, sirviéndose del movimiento indígena para impulsar su candidatura. Como retribución a su apoyo, al movimiento indígena le fueron otorgados algunos cargos públicos.

Gutiérrez presentó pronto un viraje hacia la sujeción de su política económica a los Estados Unidos y los intereses del capital financiero internacional (FMI, BM) y de la oligarquía política tradicional. Es así que en 2005, en medio de una nueva movilización, esta vez de carácter urbano, pues el movimiento indígena había quedado desprestigiado, Gutiérrez es derrocado bajo la consigna “que se vayan todos”. El desprestigio de la clase política tradicional y de los movimientos sociales que apoyaron este proyecto se profundiza, generando las condiciones para la aparición de un nuevo proyecto político.

Es en este contexto que la situación política del Ecuador reflejaba la necesidad de una transformación de mayor envergadura. Así, los actores sociales que hemos revisado desde la década de los 80 tuvieron un papel clave para entender el proceso por el cual se constituye el movimiento Alianza País, en el cual confluyen las más diversas facciones políticas y que, como veremos más adelante, no está exento de contradicciones.

1.3 La Movilización Social en Bolivia

Bolivia es uno de los países andinos y de América Latina que más transformaciones ha sufrido en los últimos veinte años. Ha transitado de un modelo profundamente autoritario y neoliberal, al proyecto de construcción de un nuevo paradigma de nación.

Estas transformaciones han estado impulsadas fundamentalmente por las acciones de resistencia y protesta de los movimientos sociales y los grupos de ciudadanos descontentos que se articularon a través de la movilización social como un mecanismo no solo de acción política sino de participación social y comunitaria. Un ejemplo de ello está en la movilización del campesinado aimara en los distintos momentos de la historia reciente ante un modelo que ha demostrado, al menos en el caso boliviano, su completa inoperancia.

En este sentido este proceso ha conducido a la redefinición de sus postulados fundantes, con la propuesta de una nueva Constitución, diseñada a través de una Asamblea Constituyente con amplia participación social.

Pero, ¿cómo se llegó a este punto?, ¿cuáles son los momentos históricos que han contribuido a la transición del régimen político?, ¿qué actores han protagonizado esas transformaciones? Estas son algunas de las dudas que se desarrollan en el presente apartado, articulando la relación entre la participación política y los movimientos sociales en Bolivia, lo cual nos permite introducirnos a la problemática y los alcances de la movilización social, bajo un contexto histórico y político mucho más claro.

En Bolivia, al igual que en la mayoría de las naciones del continente americano, la existencia de una oligarquía burguesa y reaccionaria contribuyó a la creación de un Estado centralista que se encontraba estratificado en función de características raciales, en donde los criollos se encontraban en la punta más alta de la pirámide social, mientras que en la base se encontraban el resto de los grupos indígenas y negros que representaban la fuerza productiva y de explotación de los recursos.

Esta realidad fue determinante al enfrentar procesos cruciales de la historia boliviana como la Guerra del Pacífico (1879-1883)⁴⁴, en donde se pierde una gran cantidad de territorio, pero fundamentalmente lo que caracteriza a este conflicto y además marca gran parte del destino de Bolivia es sin duda la pérdida del mar.

Es bajo este contexto que Bolivia ha enfrentado una realidad política, social y cultural muy agitada, puesto que la pérdida de la salida al mar ha condicionado su proceso de desarrollo a una serie de arbitrariedades e imposiciones por parte del capital internacional y de sus socios comerciales, sin conseguir el desarrollo de una industria con características netamente nacionales. En tal sentido, la realidad social y cultural boliviana ha incidido en la conformación de una amplia gama de procesos sociales en los que encontramos todo tipo de reivindicaciones.

En el siglo XX Bolivia seguía siendo una nación con muchas convulsiones internas, en donde las pugnas por el poder político se dirimían muy

⁴⁴ A pesar de la firma del tratado de paz entre Chile y Bolivia de 1904, en el que el Estado boliviano reconoce la plena soberanía de Chile en el territorio ocupado y en disputa, la realidad es que esta situación desató muchas tensiones diplomáticas a lo largo del siglo XX e incluso en la actualidad en pleno siglo XXI, puesto que representa la imposibilidad de Bolivia para contar con una salida al mar. Ver más en: Querejazu, Roberto. Chile Enemigo de Bolivia antes durante y después de la Guerra del Pacífico. Sucre, Opinión y UPB, 2001.

constantemente a través del uso de la violencia, en este punto las demandas de la sociedad boliviana estaban enfocadas a lograr una mayor participación política de los sectores populares y el reconocimiento por parte de los indígenas a la ciudadanía, dado que la oligarquía los consideraba culpables de prácticamente todos los males del país como el atraso tecnológico o las derrotas militares puesto que señalaban al indígena como falto de sentimiento patriótico. A esto hay que sumarle la llegada del positivismo y la buena respuesta que este tuvo en las elites intelectuales latinoamericanas, incluida la boliviana.

Con estos criterios se elabora el censo de 1900 en el que se revelan estos postulados racistas:

Es preciso advertir que hace mucho tiempo se opera en Bolivia un fenómeno digno de llamar la atención: el desaparecimiento lento y gradual de la raza indígena. En efecto, desde el año 1878 esta raza está herida de muerte. En ese año, la sequía y el hambre trajeron tras sí la peste que hizo estragos en la raza indígena. Por otra parte el alcoholismo, al que son tan inclinados los indios, diezma sus filas de una manera notable, y tanto, que el número de los nacimientos no cubre la mortalidad (...) De manera que en breve tiempo, ateniéndonos a las leyes progresivas de la estadística, tendremos a la raza indígena, si no borrada por completo del escenario de la vida, al menos reducida a una mínima expresión. Si esto puede ser un bien, se apreciará por el lector, considerando que si ha habido una causa retardataria en nuestra civilización, se la debe a la raza indígena, esencialmente refractaria a toda innovación y a todo progreso⁴⁵.

Bajo esta lógica Bolivia enfrentó el nuevo siglo. Es evidente que en este punto podemos encontrar la semilla de la movilización y la protesta social de la primera mitad del siglo XX la cual alcanza su punto más importante en la revolución de 1952.

⁴⁵ Oficina Nacional de Inmigración Estadística y Propaganda Geográfica. 1901 Censo General de la Población de la República de Bolivia. Según el empadronamiento de 1ro. De Septiembre de 1900, La Paz.

En los primeros años del siglo XX se experimentó un breve periodo de calma impulsado por los liberales, el cual se vería interrumpido para mediados de la primera década, pues principalmente en las provincias del Altiplano surgían brotes de rebeldía. Es conveniente decir que estas rebeliones tuvieron un alcance regional más o menos amplio. Podemos destacar la de Pacajes (1914), otros más localizados y violentos como la sublevación de colonos y comuneros de Caquiaviri (1918), y la rebelión de Jesús de Machaca (1921).⁴⁶

Es importante resaltar que estos movimientos eran manifestaciones localistas fundamentalmente, con un carácter meramente endémico y eran claramente muy discontinuos, un ejemplo de esto es el de Achacachi (1920 y 1931). En relación con la movilizaciones y protestas sociales se puede decir que estos primeros treinta años de la historia boliviana transcurrieron con relativa calma, salvo las excepciones señaladas aquí como las más destacadas, aunque sin duda se pueden encontrar más a lo largo del territorio boliviano, el cual experimentaba un proceso de restablecimiento del orden social, impuesto ahora por la oligarquía liberal, la cual buscaba apagar las posibles insurrecciones y extender su hegemonía más allá del altiplano hacia todo el territorio.

En lo económico Bolivia siempre se ha respaldado en la extracción de minerales, metales preciosos y más recientemente en la extracción de petróleo y gas. En los primeros treinta años del siglo XX experimentó un periodo de estabilidad económica, en gran medida por el auge de la explotación del estaño. Este periodo estuvo acompañado del establecimiento de un modelo liberal, cuyas principales cabezas, tanto en la política como en la economía fueron Ismael

⁴⁶ Ver más en: Rivera, Cusicanqui, Silvia, “Oprimidos pero no vencidos”. Luchas del campesinado aymara y quechwa 1900-1980, La Mirada Salvaje, La Paz, Bolivia, 1984.

Montes, presidente de la República (1904-1909 y 1913-1917) y Simón Iturri Patiño, el magnate del estaño.

Se puede considerar que en esos años se experimentó una democracia restringida. A la par del auge comercial y el desarrollo mercantil boliviano, surgen también las grades agrupaciones obreras, por tanto este periodo es crucial para entender la movilización social y la importancia del sindicalismo como motor de cambio en la realidad política boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui señala lo siguiente sobre ese periodo:

La otra cara de la medalla es la creciente socialización del proceso de trabajo en las grandes empresas mineras y las primeras luchas obreras por la organización sindical. El republicanismo adopta inicialmente para con ellas una actitud conciliadora. Saavedra (1920-1925) dicta las primeras leyes sociales del país, como la jornada de ocho horas y la indemnización por accidentes de trabajo. Tolera y legaliza la actividad huelguística y amplía los sistemas clientelistas de la restringida “democracia” oligárquica, plebeyanizando los modos habituales de hacer política. No obstante, confrontado con las crecientes demandas políticas y económicas populares e incapaz de satisfacerlas, ordena la masacre de los comunarios de Jesús de Machaca en 1921 y de los mineros de Uncía en 1923⁴⁷.

En ese periodo en Bolivia se instituyó un modelo político que permitía a la oligarquía mantener sus privilegios desde una configuración civilista que consiguió establecer una serie de reformas que posibilitaron cierto nivel de desarrollo material, sin embargo este “progreso” no estaba acompañado de reformas estructurales profundas donde se reflejara esta bonanza económica.

Bajo esta dinámica la paulatina debilidad de la economía abierta y el modelo de “democracia restringida” respondían fundamentalmente a que en ese

⁴⁷ *Ibíd.*, pp.109-110.

proceso se había desconsiderado a la mayoría indígena y campesina que ahora se aglutinaban en organizaciones obreras y campesinas. En este contexto tiene lugar una de las guerras más inútiles del siglo XX entre las naciones más empobrecidas del Cono Sur, conocida como “la Guerra del Chaco”⁴⁸, la cual no solo fue un fracaso militar pues también representa el fin de los gobiernos liberales y abre el camino para la aparición de las dictaduras militares, así como a un nuevo periodo de inestabilidad política en el cual el ejército y la elite se alternaron el poder.

En los años de postguerra los sindicatos obreros cobraron mucha importancia en las pugnas por el poder. En este periodo las clases medias fungieron como intermediarios entre las diversas elites en el poder y los sectores populares con tendencias más radicales o con tendencias socialistas. Un momento clave se puede encontrar en el derrocamiento del general Enrique Peñaranda, en 1943, en medio de una insurrección cívico-militar encabezada por Gualberto Villarroel, quien asumiría la presidencia un año más tarde, cobijado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)⁴⁹.

⁴⁸ La Guerra del Chaco, que duró de septiembre de 1932 a de junio de 1935, enfrentó a Bolivia y a Paraguay y lo que se buscaba con esta guerra era hacerse con el control del Chaco Boreal. En los 3 años de duración, Bolivia terminó perdiendo una gran cantidad de soldados y recursos. Al final, perdió el conflicto en el que cedió 110.000 kilómetros de desierto que estaban en su poder antes de la guerra, sumando una derrota militar más a su agitada historia. Ver más en: Querejazu Calvo Roberto Masamaclay. Historia política, diplomática y militar de la guerra del Chaco. Cochabamba-La Paz (Bolivia): Los Amigos del Libro, 1981.

⁴⁹ El MNR representa una alianza entre sectores de la clase media, intelectuales jóvenes pertenecientes a la llamada Generación del Chaco y sectores obreros, este grupo buscaba tomar el poder bajo un plan nacionalista, ya sea por la vía electoral o por medio de la “revolución burguesa”, con la finalidad de acabar con el sistema político y modo de producción que se basaba en estructuras casi feudales, en donde se restringía el voto para las personas que supieran leer privando de este derecho a las masas de campesinos indígenas analfabetas.

El año de 1951 representa un parte aguas en la historia boliviana, puesto que el candidato del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Víctor Paz Estenssoro, consigue ganar la presidencia, con un discurso y propuestas de corte izquierdista. Es importante resaltar que este movimiento no era propiamente de la complacencia de la oligarquía burguesa ni de las empresas extranjeras que consideraban al nuevo presidente como una amenaza a sus intereses.

Para evitar la toma del poder de MNR, el presidente saliente, Mamerto Urriolagoitia, en complicidad con los militares fragua un autogolpe de Estado para anular las elecciones y ceder el poder a una Junta Militar. Bajo este clima político, se produce en 1952 la revolución, la cual encabezaba Víctor Paz Estenssoro. Es importante destacar la participación de los obreros organizados, quienes apoyaron al MNR derrocando la dictadura.

La movilización social se encaramó en el MNR para buscar generar las transformaciones sociales que eran tan necesarias para los sectores populares que para esa época ya se encontraban organizados en sindicatos obreros y organizaciones campesinas. A este respecto Silvia Rivera Cusicanqui señala lo siguiente:

Jacobinos sin burguesía, los dirigentes del MNR acaban en la cresta de la insurrección popular más importante de la historia boliviana contemporánea. Su resultado pareciera desproporcionado con respecto al programa de reformas que esgrimían los vencedores: para imponer la ampliación del control estatal sobre la economía (nacionalización de las minas), la destrucción de las relaciones servil-coloniales en la agricultura (reforma agraria) y la incorporación del campesinado-indio en el ámbito de la democracia formal (voto universal), los insurgentes habían tenido que dismantelar

Antezana Ergueta, Luis. Historia secreta del movimiento nacionalista revolucionario. (5 vols.) La Paz, Bolivia: Librería Editorial Juventud, 1984.

completamente al estado oligárquico, destruir físicamente su aparato represivo e imponer la capitulación material de todo el viejo orden.⁵⁰

En la revolución del 52, los intelectuales criollos consiguen imponerse al resto de los sectores populares y con ello también imponen la participación de los sectores burgueses que se habían mantenido al margen del conflicto. En el periodo de la revolución nacional se consiguen transformaciones fundamentales en todos los ámbitos que competen al Estado. A nivel político se consigue la universalización del voto, la reforma agraria y el reparto de tierras, así como la recuperación estatal de los recursos naturales en manos de particulares y empresas extranjeras. Otro de los grandes avances fue su ofensiva contra la oligarquía gamonal-terratiente responsable del empobrecimiento y marginación de una inmensa masa de campesinos indígenas.

Los grupos de campesinos indígenas y los obreros organizados fueron una pieza clave en esta transformación, es por ello que algunas de las conquistas más importantes del movimiento respondían a las necesidades y demandas de estos sectores de la población boliviana, que eran mayoritarios. Por ejemplo, la institución del voto universal y más radicalmente la reforma agraria, que buscaba dar fin al gamonalismo predominante, principalmente en el occidente del país.

Otro gran hito de la revolución del 52 es sin duda la creación de Central Obrera Boliviana (COB)⁵¹, la cual surge en medio del proceso revolucionario, con

⁵⁰ Rivera Cusicanqui, *op. cit.*, p. 142.

⁵¹ “La Central Obrera Boliviana (COB) se organizó casi de un modo natural el 17 de abril de 1952. La victoria de los trabajadores, al aplastar al gobierno de la rosca y a su ejército -no tiene que confundirse esto con la toma física del poder-, aplastó también a la estalinista Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, que tuvo el acierto de disolverse en un día que la historia no se ha detenido en consignar en sus anales. La sesión constituyente fue convocada por Juan Lechin (minero) y Germán Butrón (fabril), a la sazón ministros de Minas y de Trabajo. Los que entre bambalinas precipitaron esa reunión fueron Miguel Alandía Pantoja, Edwin Moller y José Zegada

la alianza de los mineros, el movimiento popular, obreros fabriles, trabajadores de los medios gráficos, periodistas y clase media empobrecida. La importancia de la COB radica en que constituyó un referente en la movilización social, así como un ejemplo de auto organización de los sectores obreros.

En resumen este fue un periodo de florecimiento de las organizaciones obrero campesinas bolivianas, alcanzando múltiples conquistas sociales. Además de representar el surgimiento de sectores otrora invisibilizados como los campesinos y las mujeres, mismos que fueron claves en la construcción de este proyecto.

Para la década de los 60, la Revolución Cubana tuvo una importante influencia en el resto de continente, impulsando a los grupos que habían venido organizándose bajo preceptos marxistas a que opten por la vía armada, zanjando las diferencias de criterio existentes en el Partido Comunista Boliviano respecto a la posibilidad de crear una guerrilla, más aun cuando varios de sus militantes y dirigentes habían recibido entrenamiento militar en Cuba.

Por su parte, la política estadounidense de frenar los intentos revolucionarios había alcanzado Bolivia, abriendo un amplio periodo de dictaduras, represión y cooptación de los movimientos sociales. En 1964, el general René Barrientos Ortuño, pieza clave del MNR durante la revolución del 52, orquestó un golpe de Estado mediante el cual se declaró presidente de la Junta Militar, permaneciendo al mando hasta 1965, para luego ser elegido Presidente Constitucional hasta 1969.

(todos militantes del POR, aunque el tercero pronto se trocó en movimientista), los dos primeros, gracias a su lucha tenaz, habían logrado ocupar importantísimos lugares dentro del movimiento sindical". Lora Guillermo, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, Capítulo V la Central Obrera Boliviana. Los Amigos del Libro, La Paz Bolivia. 1967, pp. 11-12.

Su mandato tuvo un enfoque claramente populista, disfrazando con políticas clientelares el giro a la derecha que había dado el proceso de refundación del Estado iniciado en 1952. La manipulación de las organizaciones campesinas, controladas a través del Pacto Militar Campesino (PMC), y las estrategias del gobierno para desarticular los movimientos sindicales obreros y mineros profundizó la desarticulación que ya venían enfrentando los sindicatos, cuyos líderes se encontraban en pugna, en el marco del deterioro del proceso del 52. A este respecto, Xavier Albó señala que:

Para los años 60s, conseguidas ya las tierras, el movimiento campesino quedó sin un claro objetivo de lucha y, por otra parte, era cada vez más dependiente del gobierno y del partido. En estas circunstancias aumentaron las pugnas internas por la hegemonía entre los principales líderes sindicales campesinos. Estas se veían amplificadas además por pugnas semejantes dentro del propio gobierno, que ya se había distanciado de la COB y recibía además presiones crecientes del gobierno de Estados Unidos que, preocupado por la creciente influencia de Castro (en Cuba desde 1959), buscaba un gobierno fuerte y de derecha⁵².

La política desarrollista de Barrientos se enfocó en el deterioro de las condiciones laborales de los obreros y mineros, mientras propiciaba las condiciones políticas y económicas para el afianzamiento de una elite campesina de los valles, propietaria de la tierra, que iba ocupando el lugar de los hacendados y reproduciendo las relaciones de dominación de corte latifundista. Dicha elite constituía el ala nacionalista en la cual se apoyaba el régimen y entre cuyas complejas relaciones se iba fraccionando el sindicalismo. En este sentido, Silvia Rivera Cusicanqui, afirma que:

A partir de la reforma agraria, como consecuencia de la eliminación de la renta señorial, se homogeneizan las antiguas distinciones entre la población de ex-haciendas y piquerías. Ya no se es más piquero, arrendero, arrimante o colono: se

⁵² Albó, Xavier, Movimientos y poder indígena en Bolivia Ecuador y Perú, CIPCA, La Paz, 2008, p. 32.

había ganado el apelativo de “campesino”, miembro de un Sindicato. Es bajo esta máscara igualitaria que prospera la diferenciación interna, con la emergencia de una capa de campesinos ricos, que diversifican sus actividades hacia el transporte, el comercio y la usura, y que intervienen activamente en la reorganización mercantil de los valles, bajo la égida del sindicalismo para-estatal⁵³.

Por otro lado, desde otra facción de corte izquierdista se asumió un proyecto no solo de oposición al gobierno sino con orientación revolucionaria, bajo la conducción de Ernesto “Che” Guevara, quien llegó a Bolivia en 1966 y ese mismo año formó, junto a integrantes del Partido Comunista de Bolivia, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, con vínculos en Argentina, Perú y Chile. Luego de varias arremetidas por parte del ejército boliviano, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, el grupo guerrillero fue desarticulado por completo en 1967, tras la captura y asesinato del Che.

Ese mismo año, Barrientos había mandado a asesinar a mineros del campamento Siglo XX de Potosí, de los ingenios de Catavi y de la población de Llallagua, confirmando la política de terror del régimen, el cual cesó en 1969 con el golpe de Estado del general Alfredo Ovando, en cuyo gobierno se nacionalizó el petróleo y se abrieron relaciones con los países de la Unión Soviética, todo lo cual dio pie a una efervescencia socialista liderada por la COB y movimientos docentes y estudiantiles. Así, en 1971 se creó el Partido Socialista y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).

En 1970 el general Juan José Torres sucede en el poder a Ovando con el apoyo de sectores campesinos, sindicalistas, estudiantiles y militares movilizados en un contexto de crisis orquestado por las fuerzas de la derecha que intentaban recuperar el poder, consiguiéndolo a través de la dictadura del general Hugo

⁵³ Rivera, Cusicanqui, Silvia, “Oprimidos pero no vencidos”. Luchas del campesinado aymara y quechwa 1900-1980, La Mirada Salvaje, La Paz, Bolivia, 1984, p. 44.

Banzer (1971-1978), apoyado por el MNR y la Falange Socialista Boliviana (FSB)⁵⁴ y con el auspicio de los Estados Unidos a través del operativo de represión de la izquierda latinoamericana, denominado Plan Cóndor.

Esta dictadura aplicó todo tipo de acciones de neutralización del pueblo organizado: ilegalizó los partidos políticos (incluidos sus aliados), utilizó su alianza con el MNR para controlar al campesinado a través del Pacto Militar Campesino y reprimió brutalmente al movimiento obrero y popular urbano, representado en la COB.

Además, Banzer emprendió una política desarrollista y modernizante que fortalecía la agroindustria e imprimía de una lógica empresarial a la política agraria, profundizando las condiciones de inestabilidad económica y endeudamiento del país lo que, sumado a episodios altamente represivos como las masacres a campesinos, acrecentó la oposición civil y militar que lo sacó del poder en 1978, abriendo un periodo de caos hasta 1982 cuando el país retorna a la democracia, aunque no por ello a la estabilidad política⁵⁵.

En lo tocante a la movilización social, la década de los 70 se cierra con el declive del carácter clasista de la organización social y el ascenso del problema étnico, en un escenario en el que, a nivel mundial, el socialismo real se encontraba

⁵⁴ Una agrupación de carácter nacionalista fundada en los años 30 por estudiantes universitarios con el objetivo de combatir todo tipo de injerencia extranjera, léase el capitalismo, el imperialismo, el marxismo. Disputó en la arena política pero también a través de acciones armadas. Combatió algunos gobiernos militares a la vez que persiguió al movimiento minero.

⁵⁵ Después de una sucesión de golpes y elecciones fallidas, en el 82 llega al poder la Unión Democrática Popular (UDP), una alianza formada en la década de los 70s por varios partidos de izquierda. No obstante, la crisis económica y social en la que estaba sumido el país lo llevó a renunciar en 1985, año en que se llamó nuevamente a elecciones.

en crisis y, en el ámbito regional, los movimientos campesinos se fortalecían bajo un proyecto político propio, que superaba la visión sindical.

En este proceso juega un papel muy importante el katarismo, un movimiento formado por estudiantes aimaras de La Paz que trabajaban con comunidades del altiplano y que estuvo inspirado en Tupac Katari, líder indígena que dirigió una rebelión contra el poder colonial en 1781. Este movimiento hace su primera aparición pública en 1971 y alcanza su consolidación en esa década, como lo expone Xavier Albó:

Ya a fines de los sesenta surgió, por la convergencia de distintas iniciativas - en La Paz y en Oruro, en el campo y entre migrantes urbanos-, el movimiento que desde un inicio se llamó katarista, en recuerdo del héroe aimara de 1781. Iniciado como un movimiento solo cultural, poco a poco se desarrolló una fuerte vertiente sindical y, desde 1978 otra, mas embrionaria, directamente política⁵⁶.

Al interior del katarismo se formaron dos tendencias que expresaban la transición que estaba experimentando el movimiento indígena-campesino. Por un lado, la corriente sindicalista, vinculada al movimiento minero, la cual emplea el término campesino como sujeto político, vinculando las reivindicaciones étnicas de los indígenas con las de clase. Por otro lado, la corriente indianista que antepone la figura del indio, como característica vinculante de obreros, campesinos y oprimidos, y propone la organización a través formas comunitarias ancestrales como el Ayllu, en lugar de la estructura sindical.

En 1978, bajo un contexto electoral, ambas corrientes se consolidan en partidos políticos. La corriente indianista funda el Movimiento Indio Tupaj Katari

⁵⁶ Albó, Xavier, Nación de muchas naciones: nuevas corrientes políticas en Bolivia. En González Casanova, Pablo y Roitman, Marcos (coord.), *Democracia y Estado Multiétnico en América Latina*, México, La Jornada/CCIICH-UNAM, 1996, p. 326.

(MITKA), bajo la conducción de figuras como Constantino Lima, Luciano Tapia y Julio Timir. Por su parte, la corriente sindicalista funda el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK) y cuenta entre sus ideólogos a Jenaro Flores, Macabeo Chila y Víctor Hugo Cárdenas.

En 1979 se consolida el sindicalismo campesino indígena, pero con una orientación más autónoma que buscaba superar la cooptación de que habían sido objeto los líderes indígenas campesinos por parte de los partidos tradicionales de izquierda y de las organizaciones sindicales. En ese año se funda Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), a través de un congreso convocado por la COB y el MRTK. La CSUTCB aparece como un espacio heterogéneo que aglutina a trabajadores y sindicatos campesinos pero que también representa a pueblos originarios como los quechuas y aimaras⁵⁷.

En 1983, en el marco del II Congreso CSUTCB, se genera un espacio de confluencia entre las distintas visiones de la lucha campesina. Las organizaciones asistentes deciden ratificar la lucha de clases del campesinado, pero a la vez denuncian la discriminación de la que han sido objeto los indígenas y proponen la formación del Estado Plurinacional.

Con ello, los sectores campesinos reconocen su condición tanto de explotados como de pueblos originarios oprimidos, si bien persistía una velada reticencia del movimiento sindical urbano, representado en la COB, de mirar a los indígenas como iguales e incorporarlos en espacios y cargos de representatividad.

En este escenario surgen también otras organizaciones relevantes como la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (CIDOB-1982),

⁵⁷ Ver más en Patzi Paco, Félix, Insurgencia y sumisión. Movimientos indígena-campesinos (1983-1998), Muela del Diablo, La Paz, 1999.

la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG-1987), la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB-1991), movimientos que también tuvieron una importante participación en la CSUTCB, diversificando los horizontes de lucha y articulación de las comunidades campesinas indígenas.

Destaca, por ejemplo, la Marcha por el Territorio y la Dignidad, organizada por la CPIB al poco tiempo de formarse. La marcha, que se trasladó durante cuarenta días desde la selva hasta los Andes, logró que el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), reconociera legalmente cuatro territorios indígenas: el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), el Territorio Indígena Multiétnico Chimanes (TIMCH), el Territorio Indígena del pueblo Sirionó en el Ibiato y un área de 30.000 hectáreas en el Monte San Pablo. Además, abrió paso al Proyecto de Ley para los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía.

Por otra parte, tras una nueva asunción a la presidencia del líder del MNR, Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Bolivia experimentaba la consolidación del modelo neoliberal a través de una serie de políticas propuestas por el empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces ministro de Planeamiento y Coordinación.

Ante la caída de los precios del estaño, principal recurso minero del país, el gobierno dispuso el despido de miles de trabajadores, quienes se desplazaron a los valles del Chapare y los Yungas y se dedicaron al cultivo de hoja de coca. De esta forma surgen las federaciones de cultivadores de hojas de coca como las federaciones del Chapare (Cochabamba) y Los Yungas (Valle de La Paz), los cuales defendían la legalidad del cultivo y reproducían la estructura de organización y estrategias del movimiento minero.

Al igual que sucede en el resto de América Latina, la caída del paradigma socialista y el recrudecimiento del modelo neoliberal, generan la emergencia de nuevos espacios de articulación y resistencia durante los 90. En Bolivia, el movimiento indígena y el cocalero alcanzan un importante protagonismo en la movilización social en esta década, marcada por las reformas privatizadoras y antipopulares del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).

En 1992, las organizaciones indígenas bolivianas se sumaron a las acciones de resistencia planteadas en 1990 en Quito (Ecuador), en el marco del Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios. Tras amplios procesos de debate, acordaron identificarse como pueblos y naciones originarias. Además, protagonizaron movilizaciones masivas en todo el país, así como la toma simbólica de la sede de gobierno⁵⁸.

Las reivindicaciones del movimiento indígena también calaron en el movimiento cocalero, un actor protagónico en las movilizaciones de las últimas décadas y que está constituido en gran parte por quechuas y aimaras, lo cual le imprime una importante orientación étnica. A este respecto Albó señala lo siguiente:

Aun cuando para muchos de ellos la coca tiene ante todo un valor económico de sobrevivencia (inevitablemente relacionado con la economía paralela de la cocaína), su discurso incorpora muchos elementos étnicos y culturales. El lema central es la defensa de “la sagrada hoja de coca” (...) Es significativo que los principales dirigentes de este sector hayan participado en varios encuentros internacionales de los pueblos indígenas⁵⁹.

⁵⁸ Albó, *op. cit.*, p 332.

⁵⁹ *Ibíd.*, p. 333.

En 1995 se configura el liderazgo de Evo Morales, entonces dirigente del Comité de Coordinación de las seis federaciones de productores de coca de la zona del trópico de Cochabamba (Chaparé), quien encabeza la defensa del cultivo legal de la hoja de coca, contra la erradicación forzosa de este producto y otras políticas que afectaban a los intereses de los productores de la región. En 1997, ante la voluntad del movimiento cocalero y de otros partidos indígenas de participar en las elecciones, se funda el Movimiento al Socialismo (MAS), con el cual Evo Morales llega a ser diputado del Parlamento Nacional y más adelante participará en dos elecciones presidenciales, la última de las cuales le lleva al poder.

La década de los 90 estuvo marcada por un creciente interés de los sindicatos y movimientos campesinos por participar del Gobierno, aunque, en un inicio, sin lograr consolidar una propuesta electoral propia ni alejada de estrategias populistas ensayadas por la derecha. Es el caso del binomio ganador en las elecciones de 1993, formado por Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, y Víctor Hugo Cárdenas, del Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL-1978), quien además estaba siendo considerado como candidato de la izquierda y los movimientos sociales bolivianos.

En la misma época, se hace presente otro enfoque de la lucha katarista, esta vez en oposición al gobierno y través de las armas. Se constituye el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) bajo el liderazgo del indígena Felipe Quispe Huanca, conocido como el Mallku (voz aimara que significa el cóndor y es símbolo de autoridad) y de un grupo de estudiantes mestizos de ideología marxista y vinculados a la acción sindical minera, entre los cuales destaca Álvaro García Linera, actual vicepresidente de Bolivia. Esta agrupación tiene su antecedente en los Ayllus Rojos, agrupación que venía articulando acciones de formación, trabajo de masas, sindicalismo campesino y entrenamiento militar desde mediados de los 80.

El EGTK empezó sus acciones armadas en 1991, varios meses después sus integrantes fueron apresados, hasta que en 1992 el grupo fue totalmente desarticulado. García Linera y Quispe cumplieron prisión durante cinco años, luego de los cuales se vincularon a nuevos espacios de acción política.

En 1998 Quispe fue elegido como Secretario Ejecutivo Nacional de la CSUTCB, desde donde lideró varias movilizaciones durante el periodo de agitación que vivió Bolivia la siguiente década. En 2001 fundó el partido Movimiento Indio Pachakuti (MIP), con el cual participó en las elecciones de 2002. García Linera, por su parte, se dedica a la vida académica hasta que es invitado por el MAS a participar en las elecciones de 2005 como binomio de Evo Morales, convirtiéndose de esta manera en el actual Vicepresidente de Bolivia, una victoria electoral que será analizada a profundidad más adelante.

Por el momento, es importante señalar que entre 2000 y 2005 Bolivia alcanza un auge de movilizaciones en donde se evidencia el acumulado de acciones de resistencia y organización social generadas en décadas anteriores y que abren todo un proceso de reconstitución social que todavía no se ha cerrado.

El 2000 inicia con el intento del ex general Hugo Banzer (1997 y 2001) de privatizar el abastecimiento de agua potable de Cochabamba y elevar los precios de este recurso a través de su concesión al consorcio Aguas del Tunari. Aquello genera una serie de movilizaciones conocidas como “la Guerra del Agua”, mediante las cuales se expulsa a la transnacional de la zona y se articula una nueva instancia de confluencia de colectivos, organizaciones sociales e individuos que se reúnen para tomar decisiones sobre la administración de los recursos naturales de Bolivia: la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida.

Esta novedosa instancia de deliberación, que integra a campesinos regantes, sectores populares y urbanos, coccaleros del Chaparé, profesionales, indígenas, entre otros, desbordó los espacios tradicionales de articulación, como los movimientos sindicales y los partidos políticos, y además generó un espacio distinto de acción política, horizontal, paralelo a la política formal generada desde el Estado.

Simultáneamente, el país experimentaba un ascenso de la lucha y los preceptos indígenas, con las acciones generadas por la CSUTCB, bajo el liderazgo de Felipe Quispe, y las acciones organizativas de las comunidades indígenas del altiplano, que protagonizaron movilizaciones y cierres de vías contra la política neoliberal y represiva de Banzer, y que ensayaron la formación de “una fuerza militar alterna al ejército regular boliviano”⁶⁰, el Cuartel Indígena Calachaka.

En febrero de 2003, durante el segundo Gobierno de Sánchez de Lozada se registran otra serie de movilizaciones y alzamientos en los que incluso participan policías, además de obreros. El conflicto se da como rechazo al impuesto aplicado por el mandatario a los salarios de los trabajadores bolivianos. En octubre del mismo año, el intento de exportar gas a través de un puerto chileno, exacerba la crisis social del país, que venía resistiendo las políticas neoliberales del Estado y que, además, como en un principio se dijo, quedó marcada por la Guerra del Pacífico.

La resistencia esta vez se ubica en las provincias altiplánicas, principalmente en las ciudades de El Alto y La Paz. Este periodo, al que se ha denominado “la Guerra del Gas”, abre nuevos espacios de solidaridad, articulación

⁶⁰ Chávez León Patricia, Mukrani Crespo Dunia, Uriona Crespo Pilar, Una década de movimientos sociales en Bolivia, Revista del Observatorio Social de América Latina Nro. 28, Noviembre 2010, p.76

y deliberación como las asambleas barriales y los cabildos, todo lo cual potencia la movilización, consiguiendo la renuncia de Sánchez de Lozada, quien es sucedido por su vicepresidente, Carlos Mesa.

El descrédito del gobierno del cual procede Mesa, no permite que cese la ebullición social, misma que exige un cambio de paradigma y comienza a esgrimir la tesis de una Asamblea Constituyente y que además encamina las articulaciones generadas en la protesta social hacia un proyecto electoral en diciembre de 2005:

Pensar en el poder era pensar en el poder del Estado, por eso gran parte de la experiencia popular pasó a centrarse en los tiempos electorales. Fruto de eso, se dio el surgimiento de una interesante mediación partidaria –el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), conjunción principalmente de sindicatos campesinos e indígenas y agrupaciones urbanas populares- que luego se constituyó en el Movimiento al Socialismo. Este alcanzó a tener presencia importante en el Parlamento en el año 2003 y se hizo Gobierno con las elecciones presidenciales de fines de 2005. También hubo otros partidos como el Movimiento Indígena Pachacuti, liderado por Felipe Quispe, que tuvo menos suerte en el terreno electoral pero que ejemplifica la fuerza de este horizonte⁶¹.

La correlación de fuerzas que permitió dicho escenario electoral será analizada más adelante. Lo que se puede concluir de este breve repaso histórico es la importancia de la profunda agitación política de los diversos movimiento sociales en la pugna constante y común a todos por la construcción de un país incluyente, en el que tanto los sectores obreros, campesinos, populares urbanos y principalmente indígenas determinan el destino histórico contemporáneo de Bolivia. No es extraño que los argumentos que se esgrimen en la construcción del nuevo modelo de nación, retomen gran parte de las demandas de estos sectores y también es justo decir que el actual proceso no se encuentra exento de disputas internas ni contradicciones.

⁶¹ *Ibíd.*, 78.

En este sentido, el ascenso al poder de Evo Morales se puede entender dentro de una dinámica casi natural, en las pugnas por definir la cultura política boliviana, marcada fundamentalmente por la movilización y la participación de los movimientos sociales como actores directos e indirectos de la política.

Capítulo 2. La izquierda en el poder: los proyectos políticos de Rafael Correa y Evo Morales

2.1. La ruptura del paradigma político boliviano y la emergencia del MAS

Como hemos visto, muchos son los puntos en los que podemos ubicar la emergencia de los sectores subalternos en Bolivia, pero sin duda dos son los que podemos considerar casi como los semilleros de la realidad política contemporánea, dado que canalizaron todo el descontento social hacia el paradigma político existente, mismo que posibilitó el establecimiento de un sistema social desigual y que auspició el despojo de los recursos estatales en favor de capitales extranjeros y la propia oligarquía boliviana.

En este momento de la historia contemporánea de Bolivia, que se inaugura con el nuevo milenio, pero que se gesta en el último año del siglo pasado, la Guerra del Agua y la Guerra del Gas representan los puntos de arranque del paradigma político actual, así como de la realidad político-social contemporánea, puesto que ha trastocado casi todos los ámbitos de la sociedad boliviana.

A manera de breve repaso histórico es importante destacar estos dos momentos, de tal forma que nos permitan comprender el fenómeno de la movilización política que desembocó en la elección de Evo Morales a la Presidencia de la República y la emergencia de los sectores subalternos en la arena electoral.

Por tal razón para comenzar cualquier análisis del contexto político contemporáneo en Bolivia es fundamental acercarnos a los acontecimientos que confluyeron en la articulación de diversos procesos políticos, los cuales alcanzaron

su punto de mayor trascendencia en la elaboración de la nueva Constitución. Además, es importante destacar que gran parte de la actual dirigencia política boliviana encabezó o tuvo participación en los momentos históricos antes mencionados.

¿Qué fue la Guerra del Agua y por qué es tan importante en la historia contemporánea de Bolivia? A continuación trataremos de abordar de forma breve pero concisa los elementos más característicos de estos acontecimientos con la intención de establecer una línea de análisis que los conecte con la realidad política contemporánea.

Cochabamba es la tercera ciudad más grande e importante de Bolivia solo después de Santa Cruz y La Paz. El terreno que ocupa es un amplio valle e históricamente ha padecido por la falta de agua, sin embargo en 1999 se desplegó un proyecto que tenía como base la privatización del recurso hídrico en favor de grupos económicos procedentes del extranjero que, apoyados por el gobierno boliviano, buscaban apoderarse de este recurso y lucrar con él en detrimento de las necesidades de la población local.

En septiembre de 1999 fue aprobada por el parlamento boliviano la llamada Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario que tenía como fin último la entrega de la empresa estatal de aguas al consorcio transnacional Aguas del Tunari⁶². La participación de la clase política boliviana en este despojo fue plena

⁶² La empresa transnacional norteamericana Bechtel, a través de una empresa subsidiaria Aguas del Tunari, asumió el control de la empresa estatal de aguas y de la prestación de servicio de agua potable de Cochabamba, incrementando en pocos meses las tarifas hasta en más del 50%. Sin embargo, para abril del 2000, el descontento de la población desembocó en una movilización masiva que se hizo con el control de la ciudad, así en la llamada Guerra del Agua las movilizaciones callejeras y la presión de la sociedad cochabambina expulsaron a la transnacional y recuperaron la empresa estatal. Ver más en: Kruse, Thomas. La "Guerra del Agua" en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas. En libro: Sindicatos y nuevos

pues, para garantizar su legalidad, el gobierno boliviano aprobó la Ley 2029, que revestía de “legitimidad” a este proceso, experimentando en el propio territorio boliviano la fase de mayor voracidad del sistema neoliberal. Thomas Kruse señala lo siguiente:

Luego de muchos años de intentos bloqueados por la resistencia campesina, con la Ley 2029 el Estado creó por fin una normatividad sobre el agua en consonancia con los principios del momento neoliberal. Entre otras cosas, la ley privilegiaba la creación de áreas de concesión monopólicas y la operación de concesionarios privados grandes. Mientras reconocía que podía haber diversos tipos de concesionarios y prestadores de servicios, las condiciones para el otorgamiento de concesiones (garantías, planes de inversión y criterios de rentabilidad), favorecían la formación de empresas grandes que operan de acuerdo con los criterios del mercado⁶³.

Sin embargo, pese a los procesos para legitimar el despojo de este vital recurso, la población se organizó para dar marcha atrás a esta medida que, en complicidad con la clase política, se trataba de consumir en Cochabamba. Bajo este contexto encontramos la participación dos organizaciones que resultaron claves para aglutinar el descontento popular y canalizarlo en la concreción de un proyecto que se centró en la recuperación de las instalaciones otrora estatales y privatizadas para entonces y la revocación de las reformas planteadas: el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar (integrado básicamente por agrupaciones vecinales, ecologistas, colegios de profesionales), la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), la Federación de Fabriles de Cochabamba y organizaciones ambientalistas.

movimientos sociales en América Latina. Enrique de la Garza Toledo (compilador). Colección Grupos de Trabajo de CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2005.

⁶³ *Ibíd.*p.145.

Estas organizaciones se articulan en la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida, fundada en 1999 como un espacio de convergencia de diversos sectores que habían venido construyendo un tejido comunitario mediante la gestión de las redes de agua, así como de la defensa y administración del uso de este recurso en función de los usos y costumbres de sus comunidades⁶⁴. Esta experiencia facilitó la organización y toma de acciones por parte de la Coordinadora.

Las protestas se fueron acrecentando desde los últimos meses de 1999 hasta alcanzar su punto más álgido en febrero de 2000 con lo que inicialmente estaba planeado como la toma simbólica de Cochabamba y que devino en el enfrentamiento entre las fuerzas del orden, apoyadas por el ejército, y la población aglutinada en un movimiento popular que para esos días (4 y 5 de febrero) pasó a una sublevación popular que logró expulsar -pese a la represión estatal- a las fuerzas del orden y allanar el camino para el retiro de la transnacional y la revocación de la ley que auspiciaba el despojo.

Es importante señalar que ya para ese momento en gran parte del territorio boliviano se hacía evidente un gran descontento con el gobierno de Hugo Banzer Suárez, ex dictador y entonces defensor del modelo neoliberal (1997-2001), puesto que en el resto del territorio surgían más movilizaciones de los sectores

⁶⁴ “La FEDECOR es básicamente una organización agraria para la gestión del agua, en medio de una disputa todavía no muy visible por su control, que para 2000 hacía ya más de 8 años que se venía ocupando de reconstruir y visibilizar las antiguas prácticas comunitarias de gestión del agua, dándoles simultáneamente “existencia legal” y un “nombre” moderno: la Federación de Regantes, con su personería jurídica. En sus estatutos, acordados en 1997, la FEDECOR establece que «es la organización matriz de todos los sistemas y organizaciones de regantes de los valles de Cochabamba, cuya principal característica es la gestión integral del recurso agua a través de usos y costumbres». Gutiérrez Aguilar, Raquel. Los ritmos del Pachakuti, Sísiso ediciones, Bajo Tierra Ediciones y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vález Pliego” de la BUAP, México, 2009, p. 66.

populares como la de los maestros de escuelas de gobierno que demandaban un aumento salarial y, por otro lado, en la Paz, se realizaban protestas de estudiantes. Así, se puede afirmar que en ese periodo la inconformidad del pueblo boliviano para con su gobierno y las transnacionales se estaba generalizando, aunque el descontento más grande manifestaba su punto más crítico en Cochabamba.

En marzo de ese año y con el apoyo de la mayoría de la sociedad boliviana la FEDECOR y la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida convocaron a un referéndum en el que se consultaba al pueblo de Cochabamba sobre la revocación de contrato de la empresa Aguas del Tunari y la revisión de la Ley 2029. Este referéndum fue un éxito pese a la campaña impulsada por el Estado en contra del movimiento, pues con un 90% de aprobación la sociedad cochabambina respaldó a la coordinadora. Al respecto Manuel de la Fuente destaca lo siguiente:

Radicalizando su posición tomó la decisión de reclamar al gobierno la anulación del contrato con Aguas del Tunari y para legitimar dicha decisión nuevamente la Coordinadora utilizó el dialogo con la población y organizó Consulta Popular. Era un desafío importante: el de organizar prácticamente un plebiscito de la ciudadanía. Y venció la prueba, ya que entre 30 y 50 mil personas expresaron su acuerdo con la Coordinadora, depositando su voto en alrededor de 150 mesas que se instalaron en distintos sectores de la ciudad. Votaron por él SI, lo que significaba que Aguas del Tunari tenía que irse de la Llañta. Que esa cantidad de vecinos hayan concurrido en un día domingo sin que hubiera mucha publicidad ya que la Coordinadora no tenía recursos económicos, y que lo haya hecho frente a la oposición o la indiferencia de casi el conjunto de las instituciones Cochabambinas es realmente una proeza, y así lo tomó la Coordinadora, que frente a ese mandato organizó la "batalla final", convocando a un nuevo paro indefinido que debía iniciarse el martes cuatro de abril⁶⁵.

⁶⁵ De La Fuente Manuel, La guerra por el agua en Cochabamba. Crónica de una dolorosa victoria. Número 15 de Documentos de reflexión académica, Universidad Mayor de San Simón, Programa de Mejoramiento de la Formación en economía, Cochabamba, 2000, p.12

Así, llegado el 4 de abril, Cochabamba pasó una semana tomada por los manifestantes, esto se consiguió por medio de bloqueos carreteros que paralizaron la ciudad. Lo anterior fue posible mediante la tenacidad de la protesta y el enfrentamiento frontal con las fuerzas del orden. El saldo de la protesta arrojó la muerte de una persona y una gran cantidad de heridos y detenidos, así como la declaratoria del estado de sitio. Sin embargo, pese a todo el amedrentamiento y a la declaratoria de estado de sitio, las movilizaciones y el enfrentamiento con el aparato estatal continuaron.

El 10 de abril en la plaza central de Cochabamba, una multitud de aproximadamente cincuenta mil personas recibió como un triunfo de los sectores populares, bajo el lema “¡el agua es nuestra, carajo!” la cancelación del contrato con Aguas del Tunari y la revocación de la Ley 2029.

La Guerra del Agua representa un hito en la historia contemporánea boliviana y en las luchas contra el neoliberalismo, pues no solo demostró la capacidad de la sociedad de articularse en defensa de un bien común, sino además que el proyecto neoliberal puede ser vencido, poniendo de manifiesto la posibilidad de articulación de los sectores subalternos de la sociedad cochabambina, ya sea del medio rural o urbano en torno a la necesidad de recuperar un recurso tan fundamental como el agua. En este sentido no es exagerado decir que la actual realidad política de Bolivia y la disputa de la construcción de un gobierno alternativo tienen su fecha de nacimiento entre noviembre de 1999 y abril del año 2000.

Ahora bien, si la Guerra del Agua es el nacimiento de un periodo crítico en la historia reciente de Bolivia, la llamada Guerra del Gas representa la ruptura definitiva con el eje de la política tradicional, encabezado por una oligarquía criolla, que se había encargado por años de afianzarse en las más altas esferas de la

vida política boliviana, impulsando un discurso de corte segregacionista. Pero, ¿cuáles son los desencadenantes de la Guerra del Gas y qué consecuencias tuvo para la historia política reciente de Bolivia?

Las condiciones generales de la movilización social después de la Guerra del Agua habían despertado en los sectores subalternos un sentimiento de politización y concientización amplio que consiguió rechazar un nuevo intento por la privatización del agua (2001) y una campaña para la erradicación del cultivo de la hoja de coca. En este punto la historia del proceso político no parecía tener un rumbo fijo dado que hasta ese momento, si bien los movimientos sociales se presentaban como los más organizados, no parecían representar una opción de una mayor envergadura, sin embargo esta situación cambiaría cuando una nueva intervención de las empresas transnacionales, ahora enfocados sobre el gas boliviano y en complicidad nuevamente con la clase política, desataría una crisis que colocó a Bolivia quizás en una de sus mayores etapas de antagonismo.

La llamada Guerra del Gas tiene su origen, como ya se mencionó, en las ambiciones de las transnacionales extranjeras. Al respecto Nicola Neso sintetiza muy bien la génesis del conflicto:

En los años noventa se descubrieron grandes yacimientos de gas natural en el Sureste del departamento de Tarija. La inevitable atención de los mercados extranjeros se hizo sentir rápidamente: un consorcio de tres multinacionales de hidrocarburos (Repsol, British Gas y BP-Amoco) presentó en 2001 un plano de utilización del gas boliviano para cubrir el déficit de la costa Oeste en los Estados Unidos. Transportado a través de los Andes hasta el Pacífico, el gas de Tarija tenía que licuarse y ser transportado a México en barco, para luego tornarse gaseoso y llegar a la costa de California. El mercado sugirió a los inversionistas una solución que a los bolivianos parecía una burla y que se iba a sumar al daño de perder sus

recursos por precios de transacción irrisorios, por debajo de los internacionales: en lugar de un puerto peruano de salida, la utilización de un puerto chileno⁶⁶.

Ahora bien, por extraño que parezca la clase política boliviana formulaba esta propuesta desconsiderando no solo el potencial conflicto que ello desataría sino la existencia de conflictos previos y contemporáneos que habían heredado ya la formación de organizaciones estructuradas y con una amplia capacidad de respuesta.

Así, el 2003 resultó ser un año crítico y decisivo. Gonzalo Sánchez de Lozada asumía su segundo mandato presidencial y, en un intento por paliar el déficit fiscal, propone aplicar un impuesto al salario, el denominado impuestazo, que afectaría principalmente a los trabajadores del sector estatal. Este impuesto coincide, por el contrario, con las demandas de aumento salarial de la fuerza policial lo que conduce a la huelga y el amotinamiento de este sector, alcanzando su punto más álgido en el enfrentamiento de la policía contra las fuerzas armadas en la Plaza Murillo de La Paz. El retroceso en la aplicación de esta medida consigue alargar unos meses más el gobierno de Sánchez Lozada.

Sin embargo, la intención de exportar gas boliviano por un puerto chileno y los irrisorios costos del recurso agudizaron la crisis política ya existente, mientras que en la ciudad de El Alto se desataba todo un proceso de rebeldía que no cesaría hasta la caída del gobierno de Sánchez de Lozada. En estos años se puede decir que confluyeron varios aspectos de la contradictoria realidad boliviana como lo señala Raúl Prada Alcoreza:

⁶⁶ Neso, Nicola, De la Guerra del Agua hasta la Guerra del Gas- Los Movimientos Sociales de Bolivia y la Elección de Evo Morales. Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VIII, No. 15. Enero-Junio de 2013, p. 216

La consigna de la defensa del gas resultó ser no sólo una consigna unificadora, sino también una consigna nacional. Una consigna que sintetiza varios planos de las luchas sociales. Uno de los planos tiene que ver con la resistencia a la globalización privatizadora, a la ejecución de las políticas neoliberales, a la rebelión social contra el ajuste estructural y las consecuencias agravantes de las reformas estructurales. Otro plano tiene que ver con la recuperación de la soberanía nacional frente a la supeditación nacional al nuevo orden mundial. Un tercer plano tiene que ver con la recuperación de los recursos naturales y la lucha por el excedente. Un cuarto plano viene dibujado por la lucha de clases. Fue el movimiento popular el que reivindicó, desde las profundidades de su propia memoria, el gas para los bolivianos, para los trabajadores, para los desocupados, para las familias humildes. En esta perspectiva se plantea un enfoque de distribución social del recurso energético. Un quinto plano, y quizás un primordial eje articulador histórico, condicionante de los otros planos, atravesados por éste, es el relativo a las reivindicaciones indígenas, entendidas como reivindicaciones culturales, nacionales y étnicas. Todos estos planos se entrelazaron en la Guerra del Gas. La consigna de la defensa del gas resumió las demandas desplegadas en todos los planos, despliegues que anidan sus propias particularidades, sus específicas lógicas de desenvolvimiento. No sólo se trata de una consigna nacional, sino de una consigna que replantea popularmente la concepción de nación⁶⁷.

Pese a la imposibilidad de sostener estas políticas, Sánchez de Lozada desató una brutal represión que costó la vida de 64 personas y más de dos centenares de heridos de diversa gravedad ya que para la represión se recurrió a todo tipo de tácticas de violencia y terror, sin embargo ni los militares ni el discurso oficialista de los medios de comunicación lograron doblegar la resistencia de la ciudad de El Alto ni de los otros puntos sublevados, la cual se caracterizó por los bloqueos de carreteros y por la resistencia de los habitantes que enfrentaban con piedras y palos a las armas de los militares.

⁶⁷ Prada Alcoreza, Raúl. Perfiles del movimiento social contemporáneo El conflicto social y político en Bolivia Las jornadas de septiembre-octubre de 2003. Revista OSAL, Nro.12, septiembre-diciembre, 2003.P.37.

En este punto es crucial identificar el papel que desempeñaron las organizaciones bien constituidas como la Confederación Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las cuales luego pasaron a formar parte del Movimiento al Socialismo (MAS)⁶⁸.

Así, Felipe Quispe y Evo Morales se convierten en los rostros más destacados de la resistencia que después de meses de presión consigue la renuncia de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003. Es importante resaltar que este proceso de politización sirvió para la conformación de un paradigma político distinto en donde los sectores sociales subalternos han cobrado particular importancia. En este sentido es fundamental retomar de forma breve los antecedentes del MAS, el cual ha sido el movimiento político más favorecido de este proceso de luchas e impulsor de la nueva Constitución.

Como hemos visto, los últimos veinte años de la historia boliviana están marcados por la canalización de la resistencia social ante las medidas neoliberales en proyectos antagonistas con orientaciones cada vez más claras hacia la ruptura de la hegemonía del modelo, sustentada en la figura del Estado-nación. En tal sentido, las organizaciones campesinas, bajo cuyo liderazgo se articularon las protestas sociales antes mencionadas, demandaban un instrumento político que les permitiera acceder a espacios de poder institucional y de nivel nacional.

Es así que en 1995 se funda en Cochabamba el Movimiento al Socialismo (MAS), como instrumento político del sector cocalero, el cual empieza a incursionar en contiendas electorales a nivel municipal. El MAS toma sus siglas de un

⁶⁸La participación de las organizaciones sindicales como la COB y la CSUTCB fue determinante para el desenlace del conflicto y la renuncia de Sánchez Lozada, por ejemplo la huelga nacional que convocó la COB y los bloqueos carreteros fueron determinantes para el colapso del aparato estatal.

movimiento creado por la Falange Socialista Boliviana a finales de los 80 pero marcando un distanciamiento con ella pues esta figura estaba orientada ahora a representar las reivindicaciones del movimiento cocalero que había adquirido protagonismo en esos años.

Para las elecciones de 1997, este espacio se refunda con el nombre de Movimiento al Socialismo Instrumento Político de Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), bajo la dirección de Evo Morales Ayma, entonces presidente de la Confederación de Trabajadores del Trópico Cochabambino.

En su primera lid electoral como MAS-IPSP, el movimiento obtiene una importante victoria pues Morales llega al Parlamento como diputado por Cochabamba con una amplia aceptación (70% de los votos). A partir de allí se mantiene en la escena política y electoral, liderando varias acciones de protesta durante el convulsionado escenario político y social que, como vimos, inaugura el nuevo milenio en Bolivia.

Tras una primera participación de Evo Morales y el MAS-IPSP en la contienda por las elecciones presidenciales en 2002, en la cual Morales obtiene el segundo puesto, detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada, para el 2005 este movimiento obtiene finalmente el poder con el binomio formado por Evo Morales y Álvaro García Linera, elegidos por mayoría absoluta (54%), consagrándose como el espacio de confluencia del proyecto político de los movimientos sociales obreros, campesinos e indígenas que pusieron fin al gobierno de Sánchez de Lozada y que demandaban un recambio institucional en todo el país.

De esta forma, la elaboración de una nueva Constitución para el Estado se convierte en la punta de lanza del nuevo gobierno, representando en ese momento el horizonte común entre las clases subalternas y el movimiento de gobierno, así como el principal capital político del MAS-IPSP que, luego de

obtener 142 de las 255 curules de la Asamblea Nacional, instalada en agosto de 2006, asumió en este espacio la defensa de la propuesta elaborada por el Pacto de Unidad.

El Pacto de Unidad es un espacio inédito de articulación política que agrupó a varias organizaciones sociales bolivianas con el objetivo de impulsar la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, desde el 2004, cuando fue creado en Santa Cruz, con la participación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de pacto unidad Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCIQB “BS”), la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Movimiento Sin Tierra (MST), la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y el Movimiento Cultural Afrodescendiente⁶⁹.

El Pacto de Unidad fue un espacio gestado por las organizaciones sociales, por tanto mantuvo una relación relativamente autónoma con el partido de gobierno. Si bien fortaleció la posición de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, también representó un espacio de crítica a las decisiones del MAS. Según Fernando Mayorga, los asambleístas indígenas fueron quienes más cuestionaron al partido de gobierno, aunque finalmente apoyaron la propuesta surgida de la Asamblea, en la medida en que vieron incluidas sus demandas:

La influencia del movimiento campesino e indígena se expresó en el diseño institucional aprobado en la nueva Constitución Política, que define la conformación de un Estado Plurinacional que se sustenta en el reconocimiento de derechos colectivos de las “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, ampliando la ciudadanía

⁶⁹ Ver más en: Garcés, Fernando, El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de una Propuesta de Constitución Política del Estado, Centro Cooperativo Sueco, La Paz, Bolivia, 2010.

como sistema de derechos y, también, como sentido de pertenencia a la comunidad política⁷⁰.

La orientación autónoma del Pacto de Unidad se diluye una vez que, en 2007, el Gobierno impulsa un nuevo espacio de articulación de los movimientos sociales, denominado Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), la cual integra a las organizaciones sociales que formaban parte del Pacto de Unidad, junto con nuevos movimientos de carácter urbano (juntas de vecinos, cooperativistas mineros, fabriles, jubilados, entre otras).

La Coordinadora actuó como fuerza social del MAS, movilizándolo sus bases en momentos de mayor conflictividad, bajo liderazgo del propio Evo Morales. Sus acciones fueron clave en 2008 y 2009 cuando la oposición “cívico-prefectural”, apostada en Santa Cruz, intentó bloquear la aprobación de la nueva Constitución y el desarrollo del referéndum revocatorio del mandato del presidente, vicepresidente y prefectos, con acciones violentas como la toma de instituciones en los departamentos de la denominada Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). La respuesta del Gobierno a estas acciones ha sido calificada por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, como una demostración de la articulación que existe entre el Estado y las organizaciones sociales:

La contundencia y firmeza de la respuesta político-militar del gobierno contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, creó una articulación virtuosa ‘social-estatal’ pocas veces vista en la historia política de Bolivia.⁷¹

⁷⁰ Mayorga, Fernando, Movimientos sociales y participación política en Bolivia. En Cheresky, Isidoro (comp.), *Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina*, Prometeo, Buenos Aires, 2011, p.27.

⁷¹ Stefanoni, Pablo, Ramírez, Franklin y Svampa, Maristella, Las vías de la emancipación. Conversaciones con Álvaro García Linera, Ocean Sur, México, 2009, p. 98.

La CONALCAM se constituye entonces como un espacio variopinto de coordinación-dirección entre el MAS y las organizaciones sociales que cumple el rol de fiscalizar la acción gubernamental pero sin mecanismos claros para garantizar la incorporación de sus recomendaciones, participa de la designación de candidatos del movimiento pero sin un significativo poder de decisión, se convierte en una herramienta para presionar la aprobación de leyes, aunque sin estar exenta de protagonizar acciones de protesta contra el gobierno cuando sus demandas no se cumplen.

La presencia de la CONALCAM, sin embargo, pierde fuerza cuando desde el gobierno se institucionaliza un espacio de participación de los movimientos sociales en el Estado, una vez aprobada la nueva Constitución, la cual garantiza este derecho. Este rol es entregado al Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, dependiente del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como la instancia gubernamental que coordina los mecanismos de participación de los movimientos sociales, los cuales deben obtener su personería jurídica.

Al respecto del posicionamiento hegemónico del MAS sobre la acción de los movimientos sociales, principalmente en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual se reflejará también en periodos posteriores del gobierno, en los cuales el MAS termina convirtiéndose en el bloque de poder al interior de la izquierda, Luis Tapia señala lo siguiente:

En todo caso el primer problema -y el central- es que a la Asamblea Constituyente que fue imaginada para pensar la forma de gobierno que incluya la gran diversidad cultural y política existente en el país, no asistirán de manera autónoma los sujetos que en las grandes movilizaciones habían reclamado el reconocimiento e inclusión de sus formas de gobierno. Algunas no estuvieron presentes y aquellas que estuvieron presentes no tenían una presencia autónoma, ya que esta fue controlada por la dirección del MAS. Se organizó una Asamblea Constituyente bajo el principio

del monopolio de la política, aunque moderado o combinándolo con la idea de una representación clasista y multicultural del manera secundaria⁷².

En este sentido, el MAS-IPSP debe ser analizado desde los diferentes momentos de la coyuntura política, puesto que, como vimos, se creó como un instrumento que en primera instancia representaba al campesinado en su intento por establecer un proyecto propio, es decir, generar una lucha de carácter autonómico diferenciada de la izquierda tradicional, la cual había jugado un pobre papel durante los noventas cuando el neoliberalismo consolidó su hegemonía.

En la fundación del MAS-IPSP se encuentran presentes varios factores como la crisis de representatividad que vivían los partidos políticos y movimientos tradicionales, la emergencia de las clases subalternas y su viraje hacia un periodo de antagonismo desatado por las evidentes contradicciones del modelo neoliberal, y el acceso del sector rural e indígena a la esfera político electoral, iniciado a mediados de los 90, mediante los procesos de descentralización del Estado, municipalización y las diputaciones uninominales; mecanismos contemplados en la Ley de Participación Popular expedida en 1994 por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)⁷³. Como lo afirma Moira Zuazo:

Esta descentralización política del Estado permitió la politización del clivaje campo-ciudad y determinó la ruralización de la política sobre la base de la llegada del Estado al ámbito local, donde antes no tenía presencia, y la articulación entre el

⁷² Tapia, Luis, El Estado de derecho como tiranía, CIDES-UMSA, La Paz, 2011, p. 67.

⁷³ Ver más en: Espósito, Carla y Arteaga, Walter, Movimientos sociales urbano-populares en Bolivia. Una ucha contra la exclusión social, económica y política, UNITAS – Programa Desarrollo del Poder Local, Fundación Carolina (España). En la web: <http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/archives/HASH010a.dir/AvanceInvestigaci%25F3n4UNITAS.pdf> (consultado el 10 de julio de 2014).

municipio y las formas de protesta antiinstitucionales, cuya raíz se encuentra en la ajenidad –o por lo menos distancia– entre el Estado y el campesino-comunario⁷⁴.

Siguiendo el razonamiento de Zuazo, las elecciones de 1997 permiten la consolidación de la unidad del movimiento, bajo el claro liderazgo de los cocaleros, representados por Evo Morales, los cuales consiguen acceder al poder en los municipios del Chapare. En ese momento, la estructura del MAS era de militancia indirecta, es decir, a través de las organizaciones campesinas que lo integraban y que promovían mecanismos de decisión horizontal.

Para el 2000, este mecanismo dificulta la conexión con el electorado urbano, por lo cual la estructura se torna directa, destacando fundamentalmente la incorporación del individuo más allá de la organización. Esto produce dos tipos de militancia en el movimiento, los cuales se articulan a través de la figura de Evo Morales, por un lado, la militancia orgánica rural, y por otro la urbana de clase media. Si bien esta última es la que ocupa los cargos públicos, está considerada como invitada, no orgánica, y dependiente del apoyo de Morales, sobre todo cuando éste asume la Presidencia de la República y el MAS pasa a tener una mayor centralización en la figura del líder.

De cualquier forma, la emergencia del MAS ha significado para Bolivia una ruptura en el paradigma político puesto que ha permitido a las clases subalternas entrar en la disputa por la hegemonía en todos sus ámbitos, incluso el cultural, reeditando las formas de ejercer la política desde los espacios de acción comunitaria abiertos en acontecimientos como los de la Guerra del Agua y el Gas, antes analizados, hasta la construcción de un proyecto hegemónico propio de las clases subalternas a través de mecanismos institucionales de acceso al poder. Como lo sostiene Moira Zuazo:

⁷⁴ Zuazo, Moira, ¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia, 2da. edición, Friedrich-Ebert-Stiftung / Ildis, La Paz, 2009, p. 68.

Con el acceso del MAS al poder, la sociedad boliviana vive un proceso de circulación de elites que ha llegado para quedarse y que supone un cambio estructural. Este proceso ha sido desencadenado por la grave crisis de representatividad del viejo sistema de partidos, junto con la politización del clivaje campo-ciudad. Ambos factores determinaron un desplazamiento de los antiguos criterios de acceso legítimo al poder. En efecto, el clivaje campo-ciudad reorganiza los valores de acceso al poder en tres órdenes: en primer lugar, por primera vez en la historia republicana se valoriza como capital la pertenencia o ascendencia étnica indígena, expresada en apellidos y en rasgos étnicos. En segundo lugar, el capital educativo y el mérito profesional dejan de ser criterios para el acceso al poder y se convierten incluso en obstáculos. En tercer lugar, hay una valoración del «capital organizativo» de la sociedad boliviana, expresado en la presencia de organizaciones sociales fuertes. Esta valoración recupera una tradición tanto urbana como rural⁷⁵.

Partiendo de lo anterior, podríamos decir que la capacidad organizativa del MAS, heredada de su participación en momentos decisivos de la historia contemporánea boliviana, como las protestas surgidas a partir del 2000, y su potencial electoral⁷⁶ demuestran que este movimiento no deja de ser un mecanismo efectivo, aun con las contradicciones que han supuesto a su proyecto autonómico los mecanismos de articulación entre los movimientos sociales y el Estado (el Pacto por la Unidad, la CONALCAM y el Mecanismo Nacional de Participación y Control Social), los cuales presentan distintos grados de relacionamiento que van de la autonomía a la resubalternización.

⁷⁵ Zuazo, Moira, ¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del mas en Bolivia, revista Nueva Sociedad No 227, mayo-junio de 2010, p. 125, <www.nuso.org>.

⁷⁶ En diciembre de 2005, el MAS ganó las elecciones nacionales con 54% de los votos, en julio de 2006, el partido se impuso en la elección de asambleístas con 51%, en agosto de 2008 el gobierno ganó el referéndum revocatorio con 67% de los votos, en las elecciones generales de diciembre de 2009, el MAS obtuvo un nuevo triunfo con el 64% de votos. En 2014 el binomio Morales-García Linera ha sido reelegido con el apoyo del 61% de los votantes para gobernar hasta el 2020, con lo cual sumaría 14 años en el poder. Ver más en: Tribunal Supremo Electoral de Bolivia <http://www.oep.org.bo/>.

El gobierno de Evo Morales representa, entonces, la canalización de las tensiones y el descontento social que caracterizaron el escenario político y cultural boliviano en el comienzo del nuevo siglo. Es justo decir, sin lugar a dudas, que la emergencia del MAS y de la propia figura de Evo Morales, si bien no han solucionado todas las problemáticas internas de la compleja realidad boliviana, sí representan un espacio de maniobra y distensión del conflicto dado que en la construcción del gobierno se condensan varias de las reivindicaciones de los sectores subalternos que participaron en las movilizaciones que permitieron el viraje del paradigma político.

Es en este sentido que podemos distinguir la promulgación de la nueva Constitución del Estado como un elemento canalizador del conflicto, en el cual se reconoce de cierta forma la participación de los diversos sectores de la sociedad boliviana. Así, la emergencia del MAS no constituye un punto de llegada sino más bien abre todo un nuevo horizonte de debate y de discusión de las diversas fuerzas sociales en Bolivia. Por tal motivo, los gobiernos encabezados por el MAS serán revisados en los apartados subsecuentes.

2.2 De la crisis del paradigma político al proyecto de la Revolución Ciudadana: la emergencia de Alianza País

La inestabilidad política ha sido el sello característico de los países latinoamericanos. Las constantes crisis económicas y políticas han devenido en continuos movimientos de las cúpulas gobernantes y han puesto de manifiesto también momentos de profundo antagonismo cultural, político, ideológico y hasta religioso. Sin embargo, es en las dos últimas décadas de la historia política latinoamericana cuando más se evidencian las constantes pugnas entre la clase

política tradicional, la ciudadanía y los sectores subalternos, fruto de una crisis hegemónica del modelo neoliberal.

Bajo esta dinámica, podemos colocar sin duda la emergencia de nuevos actores en la arena política, entre los que se destacan la población campesina, indígena y los sectores urbano-marginales. Estos actores son fundamentales para comprender la construcción de la realidad política contemporánea en el Ecuador pues, sin la participación de las organizaciones indígenas aglutinadas en la CONAIE, por ejemplo, las movilizaciones sociales que caracterizaron los primeros años del siglo XXI no hubiesen sido posibles, o bien sin la participación de los sectores subalternos urbanos no podríamos entender la articulación de grupos descontentos, los cuales apoyaron la propuesta electoral del movimiento Alianza País (AP). Por tal razón, en este apartado se analizarán los orígenes de AP y el papel de las movilizaciones sociales en la crisis del 2005, así como su participación en el ascenso de Rafael Correa a la presidencia.

El triunfo electoral de Rafael Correa Delgado en 2006 marca, sin duda, un parte aguas en la historia del Ecuador. Constituye la expresión del descontento popular contra la clase política tradicional, exacerbado en la última década por la imposibilidad del Estado de administrar el descontento causado por los efectos nefastos del modelo neoliberal. Crisis bancaria, congelamiento de depósitos de cuenta ahorristas, dolarización, incremento de los niveles de pobreza y exclusión, desempleo, corrupción, éxodo migratorio, inestabilidad política, Plan Colombia⁷⁷, son algunos de los fenómenos que caracterizaron este periodo.

⁷⁷ El Plan Colombia es un acuerdo bilateral suscrito en 1999 entre los Gobiernos de Colombia y EE.UU. con el objetivo supuesto de combatir el narcotráfico y terminar con el conflicto armado en el país sudamericano. No obstante, son públicas las denuncias realizadas por organizaciones sociales de toda Latinoamérica contra el Plan Colombia, identificándolo como una estrategia del país del norte para sofocar a la guerrilla colombiana y controlar los recursos naturales de la región. Por su ubicación geográfica, Ecuador ha sido clave en el desenvolvimiento

Como lo señalamos anteriormente, desde los 90 Ecuador experimenta con más fuerza la emergencia de las clases subalternas aglutinadas alrededor del movimiento indígena, cuyo momento antagónico más representativo lo constituyen las movilizaciones que expulsaron del poder a Jamil Mahuad, alcanzando por un brevísimo lapso de tiempo el poder.

El 21 de enero del 2000, luego de varios días de protesta y crisis social, Antonio Vargas, entonces presidente de la CONAIE, en conjunción con Lucio Gutiérrez, coronel del ejército, y Carlos Solórzano, reconocido jurista (en representación de la sociedad civil) conforman la “Junta de Salvación Nacional”, la cual pide la renuncia a Mahuad y asume el poder. No obstante, en la madrugada del 22 de enero este triunvirato se disuelve para dar paso a la posesión de Gustavo Noboa, vicepresidente de Mahuad⁷⁸.

En 2002, Gutiérrez forma el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y gana las elecciones en coalición con Pachakutik, brazo político de la CONAIE, y con el Movimiento Popular Democrático (MPD), identificado como izquierda radical. Debido a su discurso y a la manera en que irrumpe en el escenario político, Gutiérrez es identificado por la sociedad y la opinión pública con la izquierda, no obstante, una vez en el poder se alinea con las políticas del gobierno

del Plan, permitiendo la fumigación de los cultivos de coca en sus fronteras y concediendo en 1999 la ocupación de la Base Militar Eloy Alfaro, ubicada en la ciudad portuaria de Manta (Manabí) a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 2009, el presidente Correa cerró el convenio que permitía la presencia de EE.UU. en la denominada Base de Manta, luego de lo cual los militares norteamericanos abandonaron la zona.

⁷⁸ Esto sucede una vez que el general Carlos Mendoza, comandante general del Ejército, toma el lugar de Gutiérrez en la Junta para posteriormente renunciar a su cargo y facilitar el restablecimiento del orden constitucional. Ver más en Herrera Araúz, Francisco, Los golpes del poder...Al aire. El 21 de enero a través de la radio, Abya Yala, Quito, 2001.

estadounidense y los organismos de crédito internacional como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En su corto periodo (2003-2005) Gutiérrez es señalado por diversos casos de corrupción⁷⁹ y nepotismo, y por ejercer su gobierno en base a prácticas autoritarias y clientelares. Esto produce la ruptura con el MPD y la salida del movimiento indígena de las filas del Gobierno, generando una profunda fragmentación en el movimiento indígena y evidenciando las contradicciones del aparato político ecuatoriano, así como la imposibilidad de constituir un bloque de unidad que resultase realmente representativo tanto para los movimientos sociales como para los partidos de izquierda.

La mala administración pública sumada al desencanto de los sectores de izquierda frente a un nuevo engaño de la clase política tradicional que los había utilizado como una plataforma para alcanzar el poder, producen en 2005 las condiciones de un nuevo estallido social, el cual ahora acumulaba el descontento que se venía gestando desde la década de los 90, en la que el movimiento indígena había sido el catalizador del conflicto y que ahora pasaba la estafeta a los grupos subalternos urbanos y a las organizaciones compuestas básicamente por la sociedad civil y sectores progresistas de clase media y alta.

⁷⁹ Uno de los acontecimientos determinantes de la caída de Gutiérrez fue la destitución de la Corte Suprema de Justicia y nombramiento de una nueva por parte del Congreso Nacional en 2004. Varios medios de comunicación hicieron pública la compra de diputados por parte del partido de Gobierno con el objeto de lograr una Corte afín al régimen y a los partidos que tradicionalmente habían dominado al país. Para muestra un botón: los nuevos magistrados anularon los juicios que seguía el organismo contra el defenestrado presidente Abdalá Bucaram, líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), lo cual le permitió regresar brevemente al Ecuador. Tras el repudio general, Gutiérrez tuvo que anular la Corte. Ver más en: Diario el Universo, "Presidente decreta emergencia y disuelve Corte Suprema de Justicia", Quito, 16 de abril de 2005.

Resultado de estas contradicciones y tensiones políticas, en 2005 se hará evidente la necesidad de construir propuestas alternativas que refresquen la escena política tradicional, la cual se encontraba ya desde hace algunos años en una profunda crisis de representatividad. Es así que el derrocamiento de Gutiérrez pone de manifiesto nuevos escenarios de conflictividad puesto que, como ya se había señalado, desaparece la figura del movimiento indígena como actor articulador de la protesta, haciendo evidente una mayor participación de los sectores urbanos, pero sin una propuesta clara de salida política al conflicto, más allá de la demanda expresada en la consigna “que se vayan todos”.

En este sentido, entre 2005 y 2006 se produce lo que Franklin Ramírez Gallegos denomina “breve interregno de la multitud”⁸⁰, refiriéndose al periodo de efervescencia social que inicia con las protestas populares de abril de 2005 y que permanece activo hasta la consecución de un nuevo régimen institucional, encarnado en el mandato de Rafael Correa.

Como se mencionó antes, debido a su accidentado paso por el Gobierno, el movimiento indígena ecuatoriano no se hace presente en las calles durante las movilizaciones contra el régimen de Gutiérrez, siendo la primera vez, desde 1990, que este sector no actúa como eje articulador de la protesta.

En ese momento la movilización estuvo marcada más bien por la espontaneidad de sectores urbanos de clase media, auto convocados, carentes de una estructura organizacional aglutinante, lo cual, para seguir el razonamiento de Ramírez, es lo que caracteriza a la *multitud* que protagoniza esta fase de interregno y que no se desactiva después de la caída de Gutiérrez sino que mantiene vida colectiva a través de asambleas ciudadanas. Como afirma Ramírez:

⁸⁰ Ramírez, Franklin, Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010), en OSAL Nro. 28, noviembre de 2010, p. 28.

A diferencia tanto de la destitución de Bucaram en 1997, cuando las movilizaciones fueron encabezadas por los partidos y movimientos sociales –sobre todo la CONAIE–, como del derrocamiento de Mahuad, cuando los indígenas se enlazaron con mandos medios del ejército, las jornadas de abril de 2005 fueron resultado del desborde ciudadano a la tutela partidista y al comando de cualquier estructura organizativa. El tercer derrocamiento presidencial fue, así, fruto de un conjunto de demostraciones sin ninguna dirección política pre-estructurada. Jóvenes y amplios segmentos de las clases medias urbanas componían el núcleo central de la revuelta. Era la primera vez, desde el levantamiento indígena de 1990, que la movilización social no giraba en torno a, o no estaba liderada por, el MIE. Su lugar fue ocupado por una pluralidad de inexpertos marchantes y de neófitas iniciativas colectivas: un radical anti-partidismo acercaba a oleadas de heterogéneos manifestantes que, sin densas redes organizativas previas, lograron altos niveles de coordinación mientras se movilizaban⁸¹.

Con la salida de Gutiérrez y la toma de posesión de su vicepresidente, Alfredo Palacio, era muy difícil pronosticar el escenario que se vendría puesto que dentro de la dinámica política existían ciertas condicionantes que perfilaban los posibles escenarios que podía llegar a tomar el gobierno ecuatoriano. Así, en la escena política se destacaría pronto la figura de Rafael Correa Delgado, quien había participado en las protestas de los autodenominados “forajidos” en abril del 2005 y que luego aparecería como figura pública en el gobierno del Palacio.

Se puede decir, entonces, que la historia de la conformación de Alianza País tiene su origen en dos factores, primero la emergencia de las clases medias en el conflicto social de 2005 y, segundo, el surgimiento de Rafael Correa como una figura pública destacada por su discurso progresista y su capacidad técnica de maniobra durante su paso por el Ministerio de Economía, cargo que ocupó tres meses en el gobierno de Palacio. La figura de Correa empezó a destacar en la

⁸¹ *Ibíd.*, 27.

opinión pública debido a su posicionamiento de no sujeción a los organismos de crédito internacional, política que no fue respaldada por Palacio, ocasionando su renuncia.

Para este punto, podemos destacar que el carácter de las movilizaciones que dieron rumbo al proceso que conduce a AP hasta la Presidencia está marcado bajo la dinámica de la espontaneidad, la cual ya había conducido a la Presidencia a Lucio Gutiérrez y que ahora, bajo una nueva inercia, impulsaba la formación de un movimiento de carácter ciudadano integrado principalmente por colectivos de intelectuales, entre los que se destacan Ruptura de los 25, Iniciativa Ciudadana y Acción Democrática⁸². Al respecto Paola Sánchez señala lo siguiente:

El posicionamiento de las clases medias en la coyuntura de 2005 muestra un viraje en los sentidos comunes generados durante la década de los noventa, que responden a los discursos y propuestas planteadas por los propios movimientos sociales. El hecho de que hayan sido estas clases las que evidencian la participación de los partidos tradicionales, y con ello el proyecto de país definido desde las políticas neoliberales, ponen en la mesa de juego una necesaria modificación de los mecanismos implementados para la reproducción del capital. La conformación de Alianza País, y con ello la propuesta generada para las elecciones del 2006 que llevan a Rafael Correa a la presidencia, está definida en mucho por el derrocamiento de Lucio Gutiérrez y sobre todo por la emergencia política de las clases medias. No olvidemos que amplios sectores intelectuales de centro izquierda e izquierda fueron los fundadores de este partido y su vínculo –orgánico o no- con las organizaciones y los movimientos sociales permitía el reconocimiento de muchas de las demandas postuladas durante más de una década por estos sectores, que luego serían acogidas fundamentalmente en la asamblea Constituyente del 2007 y 2008⁸³.

⁸² Como se verá más adelante, estos grupos asumieron una dinámica de oposición con el AP y el Gobierno (con excepción de Iniciativa Ciudadana).

⁸³ Sánchez, Paola, Resistencia, consenso y disputa: reflexión sobre el conflicto social en Ecuador (1990-2012). En *¿A quién le importan los Guayacanes? Acumulación, gobierno y conflictos en el campo*, IEE-CDES, Quito, 2013, pp. 40-41.

Ricardo Patiño, quien fuera asesor del ministro Correa, narra que luego de su salida del Ministerio, aquel recibió varias invitaciones para rendir cuentas de su gestión. Recorriendo el país descubrieron el impacto que tenía la figura de un técnico sin pasado político y con una enorme capacidad de comunicación, como lo afirma Patiño:

Así fuimos armando un movimiento que no se generó necesariamente a partir de organizaciones sociales o de partidos políticos, sino a partir de la ciudadanía (...) Las organizaciones sociales, al igual que el resto de las instituciones de la sociedad ecuatoriana, estaban en crisis. Sus directivas y sus representantes tenían muy poca credibilidad entre el conjunto de la población. Si queríamos ganar una elección era muy importante apelar a la conciencia individual de las personas, identificadas allí donde ejercen o pueden ejercer ciudadanía, en su territorio, sin mediaciones; de allí el nombre de comités familiares”⁸⁴.

Será justamente el miedo a la individualización y la desarticulación de la organización social en el Ecuador lo que generará desde un principio dudas en el seno de los movimientos sociales, pues la ciudadanía ha sido en Ecuador un medio para homogenizar y excluir. Al respecto, Alberto Acosta, uno de los fundadores de AP (hoy opositor al Gobierno), explica que la ciudadanía de este proceso no debe ser entendida desde una visión liberal. Afirma que “sin negar la ciudadanía individual, tenemos que construir ciudadanías en plural (...) desde lo comunitario y desde lo ambiental”⁸⁵. El término, en todo caso, intentó ser ese elemento convocante que la izquierda tradicional obvió.

Cabe destacar que esta orientación obedece también a la génesis del movimiento. Su origen se remonta a la iniciativa de un grupo de intelectuales,

⁸⁴ En Harnecker, Martha, en colaboración con Federico Fuentes, Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud, Abya Yala, Quito, 2011, pp. 107 y 128.

⁸⁵ *Ibíd.*, p. 110.

entre los que destacan Alberto Acosta, Ricardo Patiño, Fander Falconi, Gustavo Larrea y Rafael Correa, entre otros, que desde distintos espacios de la sociedad civil y la academia venían denunciando las inequidades del modelo económico.

Lo que en un inicio se denominó Movimiento PAIS, se transformaría luego en la figura de Alianza País (Patria Altiva y Soberana) cuando se logró la coalición con más de 30 organizaciones sociales y políticas como el Partido Socialista Frente Amplio, Nuevo País, Acción Democrática Nacional, Iniciativa Ciudadana, Movimiento Ciudadano por la Nueva Democracia, Amauta Jatari (brazo político de la Federación de Indios Evangélicos, FEINE), Alianza Bolivariana Alfarista, Poder Ciudadano, Partido de Trabajadores del Ecuador, Alternativa Democrática, y Ruptura de los 25. Las organizaciones adheridas a AP que no son de corte clasista o étnico nacieron de las movilizaciones de abril de 2005.

Estas organizaciones se convirtieron en pieza clave para respaldar la candidatura de Correa, principalmente en la segunda vuelta electoral de 2006, cuando se requería conformar un bloque de fuerzas que lograra vencer al candidato de la derecha Álvaro Noboa, al cual respaldaban los grupos del empresariado y la oligarquía tradicional, principalmente de Guayaquil. Cabe resaltar que el movimiento indígena se mantuvo al margen de este proceso debido a la funesta experiencia que tuvo con el gobierno de Gutiérrez. Será más adelante cuando se sumen al proceso, en un afán de imprimir sus reivindicaciones en la nueva Constitución del Estado.

Sobre la formación de Alianza PAIS, Fernando Buendía y Virgilio Hernández señalan lo siguiente:

Luego de su salida del Ministerio de Economía, Rafael Correa lideró la constitución del Movimiento Alianza País para participar en las elecciones generales de 2006. Este se inicia con un reducido grupo de académicos e intelectuales que se plantearon la necesidad de construir un movimiento político con signo propio; al

mismo tiempo se intensificaron los esfuerzos para comprometer una amplia alianza de izquierda que permitiera la unidad de la tendencia para enfrentar las candidaturas de derecha que en ese entonces aparecían con amplias opciones de triunfo electoral. En lo organizativo, se constituyó un núcleo básico nacional que desarrolló un «método de penetración territorial» y se conformaron las primeras directivas provinciales que incidieron en la elección de autoridades en los niveles cantonal y provincial⁸⁶.

Otra de las características de AP fue su decisión de constituirse como movimiento y no como partido político a fin de no reproducir la estructura vertical y cerrada de la “partidocracia” a la cual enfrentaba. Así, para empezar a darle estructura al movimiento se crearon como organismos de base los Comités de la Revolución Ciudadana (CRC), integrados por un número no limitado de personas agrupadas bajo la intención de incidir en ámbitos más locales y de relación directa con la ciudadanía, es decir, sin necesidad de hacerlo a través de las organizaciones sociales existentes.

Cabe resaltar que estos mecanismos han tenido que ser actualizados en la medida en que el gobierno de Correa ha necesitado apoyarse en cuadros y organizaciones sociales más o menos ya estructuradas a fin de garantizar la continuidad del proceso. La relación que tiene hoy Alianza País con las organizaciones sociales ha sido modificada tanto por la coyuntura política como por la electoral, articulando a sus acciones a organizaciones históricas como la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), los sindicatos de trabajadores eléctricos, la Coordinadora de Movimientos Sociales, las Mujeres por la Vida, la Juventud Comunista del Ecuador, el Partido Socialista Frente Amplio, los trabajadores del sector público, una fracción del ex grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, entre otros. Los mecanismos de articulación entre el gobierno y estas organizaciones serán analizados en los siguientes apartados.

⁸⁶ Buendía, Fernando y Hernández, Virgilio, Ecuador: avances y desafíos de Alianza País, Revista Nueva Sociedad Nro. 234, julio-agosto de 2011, p. 132. Versión digital en www.nuso.org (visitada el 10 de agosto de 2014).

El 26 de noviembre de 2006, el binomio formado por Rafael Correa y Lenin Moreno, gana las elecciones con el 56% de la votación, tomando posesión en enero de 2007. Con su triunfo electoral AP da paso a la cristalización de la demanda enarbolada en las movilizaciones de abril de 2005: “que se vayan todos”. Este movimiento llega al poder sin postular candidatos al Congreso Nacional (poder Legislativo)⁸⁷, anticipando la posterior reconfiguración de este organismo por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual se instala en 2007 con el fin de elaborar una nueva Constitución para el Ecuador.

La Asamblea da cuenta de un “momento de fluidez en las relaciones entre los procesos sociales y las instancias de representación democrática”⁸⁸. Se trata de la confluencia, todavía sin límite claro, entre las prácticas de democracia directa de las asambleas ciudadanas, organizaciones sociales e incluso individuos que llevan sus propuestas a la ANC, y la democracia representativa, encarnada en los asambleístas, elegidos por votación popular, buena parte de ellos de trayectoria militante⁸⁹.

⁸⁷ De acuerdo a lo previsto en el Régimen de Transición de nueva Constitución (la de 2008), en 2009 se llamó a elecciones de todas las dignidades (presidente y vicepresidente, alcaldes, legisladores). Luego de estos comicios se estableció la figura de Asamblea Nacional en lugar del desprestigiado Congreso y sus integrantes pasaron a denominarse asambleístas en lugar de diputados. En estas elecciones, en donde se ratificó al binomio Correa-Moreno en primera vuelta, AP obtuvo el 51% de los escaños del órgano legislativo. Le siguió PSP con el 28,24%.

⁸⁸ Ramírez, Franklin, Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010), en OSAL Nro. 28, noviembre de 2010, p. 30.

⁸⁹ 80 de los 130 asambleístas constituyentes son de AP, el resto de escaños se distribuye entre las bancadas de Pachakutik, MPD e Izquierda Democrática (ID). Sin embargo, los legisladores de AP incluyen a representantes de movimientos populares de trayectoria y organizaciones formadas en las movilizaciones de abril. Ver más en: Consejo Nacional Electoral del Ecuador <http://cne.gob.ec/>.

En este escenario se produce un fuerte debate que evidencia los puntos neurálgicos sobre los que se teje el sistema de dominación y que estremecen todo el tejido social cuando se tocan. Se trata, en primer lugar, de la cuestión ecológica, es decir, las regulaciones a la explotación de recursos naturales, especialmente mineros y petroleros, el derecho al agua y la consulta o consentimiento previo de los pueblos y comunidades indígenas para la extracción de los recursos ubicados en sus territorios.

En segundo lugar, hay una fuerte tensión en torno a la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. La despenalización del aborto, el reconocimiento de las identidades de género, el matrimonio homosexual, la venta libre de pastillas de anticoncepción de emergencia, entre otros, son temas que en la ANC y durante el gobierno de AP han generado la reticencia de sectores conservadores y religiosos, y del mismo Correa.

Pese a ello, la movilización social alcanza grandes conquistas durante la Asamblea Nacional, muchas de las cuales se verán plasmadas en la Constitución, principalmente en lo relativo a la ampliación de derechos sociales y la transformación del modelo económico, en el marco del denominado paradigma del Buen Vivir, destacando los derechos que atañen a los pueblos y comunidades originarias y la novedosa incorporación de los derechos de la naturaleza.

Estas conquistas fueron el resultado de las demandas históricas del movimiento indígena ecuatoriano, lo cual viabilizó el apoyo de este sector (así como de otras organizaciones progresistas) al nuevo texto constitucional pese a los distanciamientos y diferencias generados entre el gobierno y los movimientos sociales durante este complicado proceso.

El movimiento indígena brindó un respaldo crítico a este documento pues, pese a las objeciones sobre la falta de profundidad en el debate del nuevo modelo,

impuesta por los tiempos récord de aprobación del documento, buena parte de lo consagrado en la Constitución encarnaba la cristalización de las reivindicaciones de la lucha popular que el movimiento indígena venía liderando desde los 90. Así, la nueva Constitución entró en vigencia en 2008 luego de la aprobación en las urnas de más del 80% de la población.

En general, el nuevo texto constitucional significó la ampliación de las conquistas sobre derechos colectivos y sociales alcanzados por la organización social ya en la Constitución de 1998, “pero en el contexto de una disputa global por la transformación del modelo de desarrollo. El horizonte aspiracional de la ANC combinó, en efecto, la superación del orden neoliberal y el desmonte de la dominación partidaria”⁹⁰.

En este sentido, podemos afirmar que la emergencia de Alianza País y de su figura más representativa, Rafael Correa, constituyen una salida a la crisis institucional que enfrentó el Ecuador por más de una década así como una amalgama entre las diferentes vertientes y corrientes políticas progresistas que, bajo la bandera de la Revolución Ciudadana, y al margen de los partidos políticos, intentaba proponer una alternativa a los mecanismos de la política convencional, rompiendo también, y este es quizás su mayor aporte, con la sujeción a los organismos de crédito internacional y privilegiando un proyecto nacionalista que puede ser enmarcado, como el mismo presidente Correa lo ha dicho, en la propuesta del Socialismo del Siglo XXI. Como lo señala Franklin Ramírez:

La emergencia de Correa y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (2007) quebraron el dominio de las fuerzas del *establishment*, profundizaron las perspectivas para la despartidización del orden político y abrieron una fase post-neoliberal de organización del Estado y la economía. Al interior de estas coordenadas,

⁹⁰ Ospina y Lalander, Razones de un distanciamiento político. Movimiento indígena ecuatoriano y revolución ciudadana, en OSAL Nro. 32, noviembre de 2012, p. 38.

las fuerzas progresistas y populares del país pujan –muchas veces entre sí– por fijar los contenidos específicos de los órdenes alternos. La derecha y los sectores neoconservadores, muy disminuidos electoralmente, apenas si han alcanzado a reconducir dicho campo de debate⁹¹.

Es importante resaltar que con la conformación del nuevo gobierno y la generación de una nueva Constitución no se anulan las contradicciones existentes entre el sistema político y la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, la valía que ha representado este proceso radica fundamentalmente en la capacidad de mantener y dar continuidad a un proyecto de corte progresista que aglutina las luchas históricas de los movimientos sociales pero que, sin embargo, no anula las contradicciones existentes entre las clases subalternas y el gobierno. Además, se inserta en la tendencia de los gobiernos latinoamericanos denominados progresistas que ante las constantes crisis del modelo neoliberal, intentan construir modelos alternativos con una orientación más social.

Al menos este fue el signo que marcó los primeros años de gobierno de Rafael Correa y que, como veremos más adelante, presenta bastantes matices y deudas entre las que tal vez las de mayor importancia son la desdolarización de la economía ecuatoriana y la profundización en la reestructuración del Estado, en donde que la oligarquía y los grandes grupos económicos han permanecido prácticamente intocados. Estos serán abordados con mayor profundidad en los siguientes apartados.

⁹¹ Ramírez, *op. cit.*, p. 19.

2.3 La construcción del nuevo pacto social en Ecuador y Bolivia: entre la irrupción de los movimientos sociales y la continuidad de las dinámicas de la vieja clase política

La coyuntura política de conflicto y antagonismo social en medio de la cual llegan a la presidencia Rafael Correa y Evo Morales pone en evidencia la necesidad de implementar las tan ansiadas reformas estructurales al sistema político y económico de ambos países, transformaciones que venían demandando los movimientos sociales desde la década de los noventa y que estaban sintetizadas en el proyecto electoral de Correa y Morales como una válvula de escape al conflicto.

Hay que destacar que ambos personajes gozaban para ese momento de un amplio respaldo de los movimientos y organizaciones sociales que habían liderado la resistencia al modelo neoliberal, conflicto que alcanza su punto máximo en las crisis institucionales que llevan a la destitución y renuncia de sus predecesores, ocasionando la emergencia de un proyecto autonómico en el que las clases subalternas pasan a ocupar un lugar central en el debate en torno a la construcción de un nuevo modelo económico, social y político que, al menos en la teoría, se sustenta bajo los preceptos básicos de soberanía y plurinacionalidad.

La necesidad de impulsar una nueva Constitución se puede enmarcar, como lo señala Raquel Gutiérrez, en la emergencia de un horizonte emancipatorio en ambos países, en el cual categorías como autonomía y autodeterminación, son las bases para establecer un proyecto alternativo al modelo de democracia liberal occidental, cuyos límites se habían evidenciado en medio del conflicto, dado que ocasionaron una crisis de representatividad en las instancias de participación por excelencia de los mecanismos de la democracia (sistema de partidos). Como señala la autora:

Una vez que una sociedad, a partir de las luchas locales de resistencia y a las múltiples acciones defensivas y ofensivas de confrontación explícita, entra en un momento de gran inestabilidad política, en el cual no funcionan ni las formas antiguas de ejercicio del mando ni los artefactos normativos para la gestión del conflicto en sus distintos niveles, entonces se abre un umbral de transformaciones posibles que permite pensar en una paulatina transformación social o “cambio de estado” (...) La emancipación consiste, básicamente, en un “cambio de estado” en la configuración social a lo largo del cual la sociedad recupera su posibilidad de decidir de manera no delegativa sobre el asunto público y donde paulatinamente se inhibe el predominio del valor sobre las personas concretas generalizándose otro modo de relación social que descansa en el despliegue del valor de uso de las cosas, a partir de su reapropiación por las personas libremente asociadas para sus fines autónomos. En este sentido, el “cambio de estado” que dota de contenido al concepto “emancipación”, está constituido por un conjunto de eventos que ocurren en el tiempo –ie, no es un lugar o un fin específico a conquistar que sea distinguible de manera discreta–, e históricamente, el más grande problema de las grandes acciones de confrontación social protagonizadas por hombres y mujeres situados histórica y geográficamente que han abierto umbrales emancipativos, ha sido el de la estabilización en el tiempo del ímpetu transformador, en tanto expansiva y permanente aunque intermitente acción de desconfiguración del orden, más allá de la propia acción de confrontación⁹².

Esta necesidad de formular un nuevo pacto ciudadano es resultado de la búsqueda de la superación de las contradicciones que agudizaban las dinámicas políticas entre la legalidad y la legitimidad, en las cuales se sustentaba la dominación y se hacía efectivo el despojo. No es un fenómeno carente de relación la discriminación étnica y el saqueo de los bienes estatales, sin embargo la necesidad de transformación del paradigma político primó sobre las diferencias gremiales e ideológicas que caracterizaban a los movimientos y organizaciones que participaron de las constituyentes, estableciendo puntos de acuerdo e integración entre las partes.

⁹² Gutiérrez, *op. cit.*, p. 23.

Es importante destacar que los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa se encontraban no solo condicionados sino obligados a establecer un nuevo proyecto de Estado. Es en este momento en donde la originalidad de estos procesos representa un verdadero punto de inflexión en la historia latinoamericana, puesto que si bien se encontraban montados sobre un ciclo de movilizaciones que desde la última década del siglo XX venían confrontando al modelo neoliberal, y para cuya superación se hacía indispensable contar con un nuevo marco institucional, es decir, una nueva Constitución, sus proyectos de Estado no hubiesen sido posibles de no haber contado con la amalgama de organizaciones y movimientos sociales que los respaldaban, volviendo indispensable la institucionalización de las demandas y transformaciones estructurales que las colectividades exigían.

Ahora bien, los respectivos procesos constituyentes no se encontraron exentos de contradicciones y disputas ideológicas en las que muchas veces se buscaba, por medio de algunos sectores oligárquicos que se mantenían aún en el juego político⁹³, conservar parte de su hegemonía sobre el Estado y el modelo de

⁹³ En el caso de Ecuador existía una fuerte presencia de la oligarquía guayaquileña y de la socialdemocracia que había logrado insertarse en AP, la cual pugnaba por dar continuidad al modelo económico neoliberal, así como el sector empresarial y bancario que no quería perder sus privilegios (Ver más en: Harnecker, Martha, Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud, Abya Yala, Quito, 2011). Mientras que en el caso boliviano encontramos elementos similares sumados a la emergencia del empoderamiento de algunos miembros del sector cocalero que buscaban, a través de su injerencia en el MAS, generar condiciones que les resultasen favorables para el desempeño de su actividad productiva. A esto se suma que, en ambos casos, existía aún en pleno proceso constituyente la presión de los sectores industriales y empresariales, muchas veces de capital extranjero que amagaban con retirarse del país si sus intereses se veía afectados. Al mismo tiempo, encontramos una fuerte campaña de desprestigio impulsada a través de los medios privados de comunicación, cuya regulación también se veía comprometida en los procesos constituyentes (Martínez González, Adriana Paola, Hacia la refundación de Estado boliviano. En Makaran, Gaya (coordinadora), *Perfil de Bolivia 1940-2009*, CIALC, México, 2009).

acumulación que lo caracterizaba. Es importante destacar desde ahora que esta referencia no parte del supuesto de que las nuevas constituciones hayan modificado de forma inmediata el sistema de acumulación capitalista, sin embargo, permitieron establecer mecanismos de regulación y control que, hasta antes de ellas, eran inexistentes.

En términos de construcción de la ciudadanía y de un proyecto de nación más amplio e incluyente se parte de la necesidad del reconocimiento legal y político de los elementos constitutivos que otorgan su carácter plurinacional a los estados de Ecuador y Bolivia. Por tal motivo, distinguimos dos elementos característicos en este punto, por un lado, la necesidad política y simbólica de integrar, no de “incorporar”, la diversidad de nacionalidades al proyecto de Estado, y por otro, el destacar la capacidad que estas colectividades como conjunto tuvieron para establecer sus mecanismos de resistencia y lucha cultural, que les permitieron existir como comunidades originarias hasta el día de hoy.

Por tal motivo, es fundamental establecer los criterios elementales de reconocimiento con un sustento legal sobre su territorialidad y autodeterminación de estas colectividades. En este sentido, las nuevas constituciones representan la posibilidad de establecer un punto de ruptura con el anterior modelo hegemónico en el que se parte de la incorporación y donde el reconocimiento de la particularidad de las comunidades originarias no atiende a cuestiones de fondo como el reconocimiento y delimitación legal de sus territorios (en el Ecuador este es un tema que aún suscita debate pues no se han establecido de manera clara las fronteras entre la autonomía, la autodeterminación y la capacidad de maniobra del Estado en los territorios con presencia de comunidades indígenas).

Lo anterior pone en evidencia la complejidad de plantear un nuevo modelo de Estado, basado en un paradigma político distinto y no solo como un remozado diseño institucional (peligro latente en ambos países). El nuevo que persiguen

Ecuador y Bolivia, al menos discursivamente, busca retomar los elementos constitutivos del Buen Vivir (Sumak Kawsay, en Ecuador, y Suma Qamaña, en Bolivia⁹⁴) como un modelo más incluyente y equitativo.

A esto tendríamos que sumar la dificultad de los movimientos de Evo Morales y Rafael Correa por conciliar las prácticas de democracia directa a las que aspiran los movimientos sociales a los cuales dicen representar, con las dinámicas tradicionales de deliberación política, en las que usualmente se han impuesto los sectores y agrupaciones con mayor número de adeptos o de mayor incidencia económica al interior de sus propios bloques (AP y MAS). Esto colocó, de arranque, a la bancada de AP y del MAS en una posición de privilegio puesto que estos movimientos se erigían como mayoritarios, encabezando y en alguna medida imponiendo los puntos a tratar y las transformaciones que buscaba el proceso constituyente.

⁹⁴ “El suma qamaña (vivir y convivir bien) es el ideal buscado por el hombre y la mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, el bienestar social, económico y político que los pueblos anhelan. Entendida como el desarrollo pleno de los pueblos”. Ver más en: Choque, María Eugenia, La historia del movimiento indígena en la búsqueda del suma qamaña (vivir bien), International Expert Group Meeting on the Millennium Development Goals, Indigenous Participation and Good Governance, United Nations, New York.

“El sumak kawsay (buen vivir) incorpora a la naturaleza en la historia, se trata de un cambio fundamental en la episteme moderna, porque si de algo se jactaba el pensamiento moderno es, precisamente de la expulsión que había logrado de la naturaleza de la historia. De todas las sociedades humanas, la episteme moderna es la única que ha producido tal evento y las consecuencias empiezan a pasar factura. El Sumak Kawsay (buen vivir) propone la incorporación de la naturaleza al interior de la historia, no como un factor productivo ni como fuerza productiva sino como parte inherente al ser social”. Ver más en: Dávalos, Pablo, Reflexiones sobre el sumak kawsay (buen vivir) y las teorías del desarrollo. ALAI, Quito, 2008.

En el caso de Ecuador Franklin Ramírez señala lo siguiente respecto al bloque mayoritario formado en la Asamblea Constituyente:

Entre el dinamismo participativo y las presiones del Ejecutivo para que el proceso ganara en celeridad –Correa ha tendido, regularmente a contraponer eficacia y participación-, AP decidió invitar a los asambleístas de las bancadas afines – Pachakutik, MPD e ID- a sus deliberaciones internas. Se formó así un “mega bloque” de 90 constituyentes. Tales reuniones funcionaron como instancias de debate y decisión partidaria. En su seno se coordinaban –bajo la hegemonía de AP- las resoluciones que luego serían votadas en conjunto. Los disensos podían aparecer en esta instancia pero no debían expresarse en las sesiones plenarias. La unidad del bloque se preservaba con sigilo al costo de evitar la amplificación de ciertos debates en el pleno de la Asamblea⁹⁵.

En lo que respecta a Bolivia, Luis Tapia sostiene que el MAS no actuó como mecanismo articulador del debate, el cual se generó más bien a partir del Pacto de Unidad, pero de manera paralela a las instancias institucionales, hegemonizadas por el movimiento de gobierno:

La asamblea constituyente es un momento de intensa lucha de clases, de una lucha cultural, en el sentido grueso de diversidad de diferentes pueblos y naciones. Es un momento de intensa lucha ideológico-política pero en el caso boliviano se desplegó sin haber generado un amplio debate público. De hecho, el MAS no hizo nada para convertir los temas centrales de la constituyente en temas de debate público nacional ampliado y sostenido (...) Lo que salvó un poco a la asamblea constituyente es el hecho que de manera paralela operó otra instancia de articulación en el nivel étnico-político que es el resultado de la acumulación de fuerzas previas. Esto tiene que ver básicamente, aunque no exclusivamente, con la articulación del Pacto de Unidad, que articula a las principales organizaciones campesinas sindicales y las centrales y asambleas de pueblos indígenas⁹⁶.

⁹⁵ Ramírez, *op.cit.*, pp. 38 y 39.

⁹⁶ Tapia, Luis, El Estado de derecho como tiranía, CIDES-UMSA, La Paz, 2011, p. 92.

Ahora bien, si partimos de considerar a los respectivos procesos constituyentes como una conquista de los sectores subalternos de ambos países lo más conveniente es señalar los puntos más innovadores y de mayor trascendencia que se plasmaron en las constituciones. A continuación se destacan algunos elementos del proceso constituyente (Bolivia de 2006 a 2007 y Ecuador entre 2007 y 2008) que resultan de interés en cuanto a las propuestas y debate, así como los resultados que se plasmaron en las nuevas constituciones y que reflejan elementos novedosos.

En el escenario político boliviano previo al proceso constituyente se había destacado la primacía de las organizaciones y movimientos sociales como elemento constitutivo que potencializó las transformaciones políticas que se sintetizaron en la aprobación de la nueva Constitución Política en enero de 2009, en la cual se transforma la componenda de normas y estatutos que estructuran y definen tanto la participación política como los elementos constitutivos de la ciudadanía.

Uno de los elementos que nos permite entender la fuerza del partido de gobierno en la transformación del Estado y su incidencia en la nueva Constitución es sin lugar a duda el vínculo entre el MAS y las agrupaciones sindicales urbanas y campesinas, así como la incorporación de un buen número de organizaciones populares, y en especial agrupaciones de los pueblos indígenas. La construcción de una nueva constitución se convertía en prioridad del proyecto político y el reconocimiento de las organizaciones en la nueva constituyente en una obligación ineludible.

En este punto es fundamental destacar que dicho vínculo no representa una relación en donde no tengan lugar los antagonismos y la búsqueda de autonomía propia en el interior de esta compleja amalgama política, puesto que si bien la

alianza entre organizaciones buscaba la transformación del Estado, también tuvieron lugar las luchas de intereses, las disputas por cargos públicos, así como las pugnas por imponer la posición de determinados sectores sobre otros. Lo anterior nos permite distinguir que tanto en la elaboración de la constitución como en el establecimiento del nuevo gobierno se reveló una serie de tensiones que incluso hoy se hacen latentes entre autonomía, colaboración y cooptación.

El resultado del proceso constituyente arrojó un documento donde prima, como se señalaba con antelación, la influencia de las organizaciones de carácter indígena. Esto no es de extrañarnos dado que Bolivia cuenta con una población mayormente indígena (sobre el 60%) y en ese sentido la constitución representa una respuesta a ese sector. Al respecto del proceso constituyente Fernando Mayorga señala lo siguiente:

Durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente, algunas organizaciones indígenas cuestionaron las negociaciones del MAS con la oposición y rechazaron incorporar enmiendas al proyecto de texto constitucional. Sin embargo, finalmente terminaron alineándose a las posiciones del Gobierno porque la nueva Constitución Política recoge sus demandas, aunque de manera moderada. La influencia del movimiento campesino e indígena se expresó en el diseño institucional aprobado en la nueva Constitución Política, que define la conformación de un Estado Plurinacional que se sustenta en el reconocimiento de derechos colectivos de las “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, ampliando la ciudadanía como sistema de derechos y, también, como sentido de pertenencia a la comunidad política⁹⁷.

En este sentido, si revisamos el proceso desde el principio, la convocatoria a la Asamblea Constituyente de Bolivia tiene su antecedente en 2003, cuando las organizaciones sociales indígenas y campesinas, tanto de tierras altas como del

⁹⁷ Mayorga, Fernando. Movimientos sociales y participación política en Bolivia. En Cheresky, Isidoro (compilador), *Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina*. Ediciones Prometeo, Buenos Aires, 2011, p 27.

Oriente, definieron como horizonte común de lucha la necesidad de impulsar una reforma constitucional. Para presionar por esta demanda, en 2004 se conforma una alianza denominada Pacto de Unidad con la presencia de organizaciones de carácter nacional como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSTB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y otras agrupaciones de menor tamaño.

Como se ha dicho, el Pacto de Unidad constituyó un espacio de articulación, deliberación y acuerdo entre las organizaciones sociales, logrando elaborar una propuesta de texto constitucional. Esta propuesta fue asumida en 2006 por el MAS, una vez que Evo Morales llega a la Presidencia de la República y cumple con el compromiso de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

En el caso de Ecuador, la convocatoria al proceso constituyente tuvo lugar en 2007, una vez que Rafael Correa se posesiona en la Presidencia y, al igual que en Bolivia, representa una respuesta a la demanda de las organizaciones sociales que impulsaron la victoria electoral de movimiento de gobierno. Cabe resaltar que Ecuador había pasado por un proceso constituyente apenas una década atrás, cuando la Asamblea Nacional, autodenominada constituyente, elaboró en cuatro meses y medio y a puertas cerradas una nueva Constitución, la cual fue expedida en junio de 1998.

Si bien este documento representó la cristalización del proyecto político y económico (neoliberalismo) de los partidos y sectores de derecha, los cuales consagraron en este texto el modelo neoliberal y privatizador de los recursos públicos, la presión de las organizaciones sociales, que se encontraban movilizadas desde inicios de la década, logró importantes conquistas en dicha

Constitución tales como la ampliación de los derechos sociales y colectivos, así como la inclusión de nuevos mecanismos de participación ciudadana.

No obstante, la crisis social en la que se encontraba sumido el país en 2005 activó nuevamente la demanda en torno a la convocatoria a una Asamblea Constituyente que, a diferencia de la del 98, se constituyera como el espacio de deliberación de los sectores mayoritarios del país e imprimiera en la nueva Constitución un modelo verdaderamente incluyente y equitativo. Es por ello que incluso simbólicamente este proceso marcó distancia con el del 98, pues a diferencia de aquella Asamblea, que sesionó en la Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas, la del 2008 se instaló en un centro cívico erigido en Montecristi en honor del líder de la Revolución Liberal (1895), Eloy Alfaro Delgado.

Ahora bien, tanto en el caso de Ecuador como en el de Bolivia las complejidades del proceso iniciaron en la definición de la convocatoria a la elección de los asambleístas, pues si bien el desafío era garantizar la presencia de las organizaciones sociales en la Asamblea, los mecanismos establecidos para su elección privilegiaban la figura de los partidos políticos, por lo cual las organizaciones sociales debieron articularse al MAS y a AP para poder competir contra la maquinaria electoral de los partidos tradicionales. Como lo señalan Blanca Fernández y Florencia Puente:

Al igual que en Bolivia, la Ley de Convocatoria promovió la participación exclusivamente a través del sistema de partidos, manteniendo el formato moderno y liberal. Si bien en Bolivia se alentó la postulación de agrupaciones ciudadanas y/o pueblos indígenas, al mantenerse la regla de representación de la mayoría, las organizaciones sociales debieron concentrarse en los dos polos que contaran con la mayoría electoral en cada circunscripción. Tanto en Bolivia como en Ecuador muchos

dirigentes de las organizaciones indígenas participaron como asambleístas a través de los partidos oficialistas⁹⁸.

Como parte de las bancadas del MAS y AP, los cuales alcanzaron la mayoría en sus respectivas Asambleas Nacionales⁹⁹, los representantes de las organizaciones sociales debieron sumarse a la posición del bloque, dándose fuertes debates al interior de los partidos de Gobierno, los cuales derivaron en distanciamientos incluso antes de finalizado el proceso. Este conflicto evidenciaba los límites que había tenido el consenso en torno a la propuesta de nuevo texto constitucional, en el marco de la tensión entre las demandas de las organizaciones sociales (algunas veces de orientación corporativa) y la visión que primaba al interior de ambos partidos de gobierno.

Como se dijo, en el caso de Bolivia la propuesta de nueva Constitución se construye en el seno del Pacto de Unidad y es presentada a la Asamblea Nacional en 2006, mientras que en Ecuador se nombra una comisión de juristas notables provenientes de varias universidades para integrar en una propuesta las demandas presentadas por las organizaciones sociales. En este último caso, sorprendió que la comisión no contara con la participación de representantes de la organización social¹⁰⁰.

Tanto en Ecuador como en Bolivia las rupturas más fuertes alcanzadas durante la Asamblea Constituyente tuvieron que ver con la disputa en torno al

⁹⁸ Fernández Blanca y Puentes Florencia, Configuración y demandas de los movimientos sociales hacia la Asamblea Constituyente en Bolivia y Ecuador, Revista Íconos Nro. 44, septiembre 2012, Quito, p. 61.

⁹⁹ En el caso de Ecuador 80 de los 130 asambleístas eran AP, mientras que en Bolivia el MAS contaba con 142 de los 255 asambleístas constituyentes.

¹⁰⁰ Ver más en: Larrea, Ana María, Encuentros y desencuentros: La compleja relación entre el gobierno y los movimientos sociales en Ecuador, OSAL 21, septiembre-diciembre, 2006.

carácter del Estado, tradicionalmente excluyente. En ambos países el papel que jugaron los movimientos indígenas fue fundamental para redefinir la estructura del mismo, en base a un reconocimiento de su carácter plurinacional.

Las reivindicaciones de estos movimientos, incluidas en la propuesta del Pacto de Unidad en el caso de Bolivia, y en el documento entregado a la Asamblea Constituyente por la CONAIE, en el caso de Ecuador, versaron en torno a la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial, que reconociera los derechos colectivos de estas comunidades, así como la autonomía y la autodeterminación de las nacionalidades que los ocupan.

En ambos países estos movimientos alcanzaron importantes conquistas puesto que de forma inédita en América Latina se los reconocía como Estados plurinacionales, legitimando el derecho a ejercer y mantener expresiones culturales propias de los pueblos y nacionalidades, reconociendo sus derechos colectivos en lo referente a la tierra, al uso de los recursos naturales y a la autonomía. Al menos en el papel, el nuevo modelo de Estado se dejaba ver como incluyente y garantista de los derechos de las mayorías. Cabe destacar que la implementación de estos derechos aún se mantiene como una deuda a cumplir por los gobiernos de Ecuador y Bolivia, los cuales todavía no han podido encontrar los mecanismos para hacerlos plausibles.

Aunque ciertos colectivos como los de las mujeres y los GLBT, entre otros, no lograron incluir en las Constituciones sus aspiraciones (la legalización del aborto o el matrimonio homosexual, por ejemplo), ambos textos constitucionales representan una ruptura en el paradigma político de Ecuador y Bolivia y un referente para el resto de países latinoamericanos en la medida en que plantean un modelo alternativo al neoliberalismo en base a la recuperación de la cosmovisión de los pueblos indígenas, expresada en el paradigma del Buen Vivir.

El Sumak Kawsay en Ecuador (por su traducción al quichua) o Suma Qamaña en Bolivia (según su traducción al aimara) se contraponen a la noción tradicional de desarrollo en tanto acumulación. En este sentido, la idea del buen vivir representa un viraje profundo en la visión occidental del bienestar, desarrollo y progreso pues para alcanzarlo se vuelve indispensable ampliar los derechos sociales y colectivos de la población en su conjunto, así como garantizar una vida plena en armonía con la naturaleza, poniendo énfasis en cuestiones que van más allá de los procesos de acumulación material y que significan más bien el fortalecimiento del sentido comunitario de convivencia.

Esta concepción ha permitido que las nuevas constituciones establezcan un nuevo paradigma político con la inclusión de nuevos mecanismos de participación, así como una ruptura con el modelo económico neoliberal al recuperar las capacidades del Estado de administrar sus recursos públicos y redistribuirlos e incluir en su modelo otras formas de economía como la social y solidaria. A ello se suma, en el caso de Ecuador, la inclusión de los derechos de la naturaleza, lo cual lleva al desafío de pensar en un nuevo modelo de desarrollo que supere el carácter extractivista del Estado. Al respecto José María Tortosa señala lo siguiente:

Sumak Kawsay y Suma Qamaña tienen, pues, importancia en primer lugar en el terreno simbólico: los que fueron marginados por conquistadores y criollos aportan ahora desde su visión del mundo palabras que pretenden colaborar con la solución de los problemas creados por aquellos. Y, en segundo lugar, porque señalan dónde han podido estar los errores del llamado desarrollo. El hecho de que hayan encontrado su camino para aparecer en estas dos constituciones [de Ecuador y Bolivia] puede ser una ocasión más para repensar el desarrollo, desde la periferia y no sólo desde el centro, y desde los marginados de la periferia y no sólo desde sus élites¹⁰¹.

¹⁰¹ Tortosa, José María, Sumak kawsay, suma qamaña, buen vivir, Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, San Juan, 2009, p. 5.

Como hemos visto los respectivos procesos constituyentes y los resultados de estos son todavía el reflejo de la institucionalización del momento de transformación política abierto en Ecuador y Bolivia y responden a la necesidad de convertir estas transformaciones en ley y en directrices de la nueva política estatal, dado que representan una “ruptura” con el paradigma político que las antecede.

Así pues, las nuevas constituciones se presentan como un mecanismo para garantizar la perdurabilidad del cambio y también para la integración de los sectores de la sociedad que han sido invisibilizados en la construcción de un proyecto de nación que ahora arranque del reconocimiento de la diversidad, expresado en la plurinacionalidad que caracteriza a ambas naciones y del reconocimiento legal del sujeto colectivo.

En tal sentido, se deberá revisar más adelante en qué medida estas transformaciones se hacen patentes en los respectivos gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales, así como cuáles son los temas en disputa que desde la elaboración de las nuevas constituciones de estos países evidencian la posibilidad o los límites de que estos procesos se consoliden como verdaderamente alternativos al modelo neoliberal.

Capítulo 3. La organización social en el gobierno de Rafael Correa

3.1 La correlación de fuerzas en el gobierno de Movimiento PAIS: escenarios de la disputa por el proyecto

Para comenzar, es importante distinguir un elemento político clave en el entendimiento de la conformación del primer gobierno de Alianza País (AP). La articulación de diversos sectores de los movimientos sociales y fuerzas progresistas que en un principio se mantuvieron distantes de la candidatura de Rafael Correa a la Presidencia de la República, se genera en la segunda vuelta electoral (2006) como un mecanismo de oposición al otro candidato finalista, Álvaro Noboa, quien representaba el proyecto de la derecha de mantenerse en el poder.

Este apoyo, en el cual coincidieron la Conaie, la Izquierda Democrática, Pachakutik (brazo político del Movimiento Indígena), el Partido Socialista, entre otros movimientos sociales urbanos y rurales, tuvo un doble efecto. Por un lado, el acercamiento del candidato de AP a sectores populares, sobre todo del medio rural, que no se sentían identificados con un movimiento gestado en el marco de un conflicto protagonizado en Quito por la clase media e intelectual (la salida de Lucio Gutiérrez)¹⁰².

¹⁰² “Una anécdota ocurrida con campesinos afiliados a organizaciones de Quevedo pinta a las claras a muchos de los votantes rurales de Gutiérrez. En una gran Asamblea realizada días después de la primera vuelta electoral en la Unión de Organizaciones Campesinas de Quevedo (UOCQ), la gran mayoría de campesinos tenía cierta vergüenza de asumir que había votado por [Gilmar] Gutiérrez [hermano de Lucio Gutiérrez]. Finalmente lo hicieron justificando su voto en que: [Lucio] “no había hecho paquetazos”, “fue el único presidente que se preocupó por los campesinos”, “fue botado por algunos sectores de Quito y Febres Cordero”. Al ser consultados por

Por otro lado, se evidenció la necesidad de la izquierda de formar un frente conjunto, pues una vez más estaba en peligro de perder la oportunidad de alcanzar un recambio político debido a la incapacidad de superar su división histórica. Esto se demostró en la primera vuelta electoral, en la cual el Movimiento Popular Democrático (representante del gremio magisterial e identificado discursivamente con la izquierda), el movimiento indígena y Alianza País participaron en las elecciones cada uno con candidato propio. Si bien AP era el mejor posicionado en la disputa por el cargo presidencial, los acercamientos con movimientos sociales, entre los que se destaca por su importancia el sector indígena, no fueron fructíferos sino hasta la segunda vuelta, en función de la polarización que había alcanzado el escenario político y social. Como lo afirma Juan Paz y Miño Cepeda:

Para la segunda vuelta presidencial debió concretarse la elección entre Rafael Correa y el multimillonario Álvaro Noboa. Entonces quedó clara la polarización social existente en el país, porque la idea que movilizó a la clase política tradicional, a las derechas ecuatorianas, a los altos empresarios y sectores oligárquicos, así como a los grupos otrora concentradores del poder económico y político fue la de “todos contra Correa”. Tras vencer con el apoyo ciudadano, el flamante presidente, dando cumplimiento al compromiso de cambiar al Ecuador dio inicio a un inédito proceso constitucional que cumplió varias fases, el llamado a una consulta popular para facultar o negar una convocatoria a una Asamblea Constituyente, la elección de los constituyentes, la elaboración de una nueva Constitución que fue sometida a referéndum; la elección bajo las normas de la Constitución aprobada del Presidente de la República así como de los integrantes de la Asamblea Nacional; y, además, de autoridades y parlamentarios andinos. En todos estos procesos triunfaron las tesis de

quien votarían en segunda vuelta, no dudaban en decir que lo harían por Correa y se repetía la frase “nunca votaría por un oligarca como Noboa”. En Lucas, Kintto, Rafael Correa, un extraño en Carondelet, Editorial Planeta, Quito, 2007, p. 123.

AP y del gobierno con las que se legitimó el proyecto político de la Revolución Ciudadana.¹⁰³

Es importante resaltar que en medio de todo este proceso emerge la figura de Rafael Correa Delgado, quien se convirtió –dada su potencia discursiva y la imagen pública que proyecta- en un capital político que tomó por sorpresa a todos, incluyendo a los propios sectores de izquierda que se integraron al proyecto de AP y de la denominada Revolución Ciudadana.

La figura de Correa demostró su efectividad en la potencia electoral que alcanzó AP en una serie de elecciones en las que obtuvo el triunfo (2006-2013), pese a que el movimiento aún estaba en proceso de formación y que estructuralmente tenía muchas dificultades para concretar alianzas, sobre todo a nivel local, en donde los liderazgos en los que se afincaban los partidos políticos tradicionales tenían hondas raíces. Esto fue subsanado por la potencia de la imagen de Correa, quien se ganó fácilmente la aceptación de la ciudadanía ya que su manejo mediático demostró ser muy efectivo, a lo que se sumó su trayectoria académica y como funcionario durante el gobierno de Alfredo Palacio, lo cual lo distanciaba de la desgastada imagen de los políticos tradicionales. Como lo señala Kintto Lucas:

En mayo de 2005, a solo un mes de ocupar el Ministerio de Finanzas, las acciones de Rafael Correa y su equipo demostraban que, como ya lo había pregonado a través de ensayos artículos y entrevistas, no llevaría adelante una política económica neoliberal como sus antecesores, porque prefería mantenerse fiel a que “la economía sirva al ser humano y no éste a la economía”, como gustaba decir. La sensibilidad social que parecía tener Correa y su equipo abrió una posibilidad distinta del manejo de la economía ecuatoriana, mucho menos dependiente de los

¹⁰³ Paz y Miño Cepeda, Juan, El gobierno de la revolución ciudadana: una visión histórica. En mantilla, Sebastián y Mejía Santiago (coord.), *Balance de la Revolución Ciudadana*, Editorial Planeta, Quito, 2012.

dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI). Correa era consciente de que en la coyuntura era necesario mantener buenas relaciones con los organismos multilaterales, pero sin someterse a ellos, sin creer ingenuamente que estos a veces pueden ser sensibles ante la realidad de un país como Ecuador, y sin olvidar que son, en última instancia, un elemento de presión hacia los gobiernos sudamericanos¹⁰⁴.

Sin embargo, la figura de Correa no consigue obtener una aceptación total en los sectores más radicales de la izquierda ecuatoriana tradicional, que no era capaz de distinguir en él una alternativa real para la transformación del paradigma político y económico. Fue entre las clases medias y profesionales en donde consigue tener una amplia respuesta a su discurso, justamente debido a que sus planteamientos y los de su corriente política no propugnaban por una transformación radical de la economía y se encontraban insertos dentro del discurso de la democracia. A lo anterior habría que sumarle que su discurso estaba compuesto fundamentalmente por reivindicaciones de carácter nacional y, en dicha reivindicación, se reafirmaba como un proyecto anti-neoliberal.

Todo lo anterior fue configurando a AP y a Correa, su figura principal, como un nuevo y potente mecanismo de articulación de diversos sectores de distinta procedencia y con una capacidad de movilización electoral indiscutible. Como lo afirma Franklin Ramírez:

El núcleo fundador de AP estaba compuesto por antiguos dirigentes de la izquierda tradicional, intelectuales y activistas de la nueva izquierda social, figuras provenientes de novísimas organizaciones ciudadanas y personajes sin trayectoria militante ni perfil ideológico, pero cercanos al entorno personal del nuevo Presidente. Emergía así una fuerza heteróclita amalgamada bajo un horizonte ideológico neo-

¹⁰⁴ Lucas, *op. cit.*, p. 39.

nacionalista y anti-neoliberal, un imaginario anti-partidista y el peso del liderazgo de Correa¹⁰⁵.

Recapitulando, para las elecciones de 2006 la crisis institucional en el país se encontraba en un punto crítico, pues como ya se ha revisado antes, los derrocamientos consecutivos de tres presidentes (Bucaram en 1997, Mahuad en 2001 y Gutiérrez en 2005), debido a la crisis económica y social que atravesaba el país por más de una década, habían desgastado profundamente la estructura política institucional, generando un estado de insatisfacción tal, que devino en una confrontación entre la sociedad civil y el sistema político representado fundamentalmente en los partidos. Un ejemplo de esto lo constituyen las acciones violentas generadas contra los diputados del Congreso Nacional durante el periodo de destitución de Lucio Gutiérrez.

En este sentido, una vez consolidado el triunfo electoral de Rafael Correa (2006) -el cual se distanció claramente del sistema político imperante puesto que no presentó candidatos para componer el Poder Legislativo (Congreso Nacional)-, la incorporación de las demandas históricas de los sectores sociales, resumidas en la convocatoria a una Asamblea Constituyente de plenos poderes, así como la elección de los legisladores que se encargarían de redactar la nueva Constitución del Estado, se convirtió en el mecanismo de articulación de muchos de los sectores denominados de izquierda en el nuevo proyecto político, los cuales distinguían en AP el mecanismo coyuntural para canalizar el cumplimiento de sus demandas.

Con Rafael Correa a la cabeza, las organizaciones sociales protagonizaron nuevos escenarios de antagonismo contra los sectores de derecha que seguían

¹⁰⁵ Ramírez Franklin, Reconfiguraciones estatales en Ecuador: 1990-2011. En Thwaites Rey, Mabel (Editora) *El Estado en América Latina: Continuidades y Rupturas*, Arcis-CLACSO, Buenos Aires, 2012, p. 355.

detentando espacios de poder, esta vez desde el Congreso Nacional, el cual intentaba bloquear el referéndum para llamar a la constituyente. Esta situación condujo a la expulsión de 57 de los 100 diputados que componían el Congreso.

Una vez que este proceso se abrió paso y la tesis de la Asamblea de plenos poderes triunfó en el referéndum, la siguiente batalla electoral fue en torno a las elecciones para asambleístas constituyentes. Estas dieron un amplio triunfo a AP, el cual obtuvo 80 de las 130 curules y además se alió con otros sectores denominados progresistas, entre ellos Pachakutik¹⁰⁶, sumando a su bancada 10 Asambleístas más. Con ello, la correlación de fuerzas en la Asamblea Constituyente quedaba compuesta por un bloque hegemónico de izquierda.

Así, el inicio del gobierno de Correa y el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente representaron un momento en el cual las organizaciones sociales y el gobierno recién electo mantenían una articulación en sus discursos y agendas, lo cual afirmaba que AP y Correa eran el instrumento mediante el cual las clases subalternas habían entrado en la disputa por la hegemonía del proyecto, más aun cuando el antagonismo estaba orientado hacia el bloque de las derechas aglutinadas en contra del proyecto, hacia la oligarquía económica y hacia el avance del imperialismo¹⁰⁷.

¹⁰⁶ El movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik es un partido compuesto mayormente por representantes de las corrientes indigenistas y socialdemócratas, el cual se funda en 1995 para representar el proyecto político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Ver más en: Ramírez, Franklin, El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en Ecuador. El caso del Movimiento de Unidad Purinacional Pachakutik – Nuevo País (PK), Los Andes en Movimiento, CEN – UASB – Universidad de Bielefeld, Quito, 2009.

¹⁰⁷ Apenas asumió el cargo, una de las decisiones más simbólicas del Presidente fue la terminación del convenio mediante el cual Estados Unidos había instalado una base militar en Manta. Además ratificó la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana Oxy, suspendió la firma del Tratado de Libre Comercio y declaró la ilegitimidad de la deuda externa. Esas sin duda

Respecto de las principales reivindicaciones que enarbolaban las organizaciones sociales y que fueron retomadas en el debate constituyente, Paola Sánchez afirma que:

El escenario previo a la elección de Rafael Correa como presidente acarrea una serie de demandas encaminadas fundamentalmente a la contención de las políticas neoliberales, a la apertura de espacios de participación, a la eliminación de la flexibilidad laboral, a procesos de redistribución de la tierra y desprivatización del agua, así como a la necesaria modificación del modelo de desarrollo a través de una demanda histórica de organizaciones y movimientos de izquierda: el proceso constituyente¹⁰⁸.

Sin embargo, es importante destacar que este proceso no estuvo exento de disputas internas entre los diferentes sectores que conformaban el proyecto. Además de la confrontación con lo que se podría denominar los grupos de poder que habían dominado tradicionalmente la escena política, es decir los partidos de derecha y de centro, existía al interior del proyecto una pugna que después se decantaría en la escisión de una parte del Movimiento Indígena, así como de uno de los ideólogos del proyecto de AP, Alberto Acosta¹⁰⁹.

Dicho distanciamiento evidenció una serie de diferencias de fondo que obedecían a un sentido más profundo de disputa respecto al nuevo modelo de

habían sido las demandas del movimiento social de los últimos años. Ver más en: Lucas, Kintto, Rafael Correa, un extraño en Carondelet, Editorial Planeta, Quito, 2007.

¹⁰⁸ Sánchez, Paola, Resistencia, consenso y disputa: reflexión sobre el conflicto social en Ecuador (1990-2012). En *¿A quién le importan los Guayacanes? Acumulación, gobierno y conflictos en el campo*, IEE-CDES, Quito, 2013, p. 41.

¹⁰⁹ Alberto Acosta es economista y político, uno de los fundadores del proyecto de Alianza País e ideólogo de la Revolución Ciudadana, quien fue electo como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, pero dejó ese cargo un mes antes de finalizada la Constitución. Actualmente es uno de líderes de la oposición al régimen de Rafael Correa.

desarrollo así como al sistema de valores imperantes, el que tenía su raíz en una estructura profundamente conservadora (católica), base ideológica de la construcción cultural de la sociedad ecuatoriana. Así, esta disputa estuvo expresada en torno a la permisividad de proyectos extractivos, por un lado, y al bloqueo de los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, por el otro. Como lo señala Franklin Ramírez:

Acosta y los asambleísta leales a Correa mantuvieron intensos duelos en relación a los límites ambientales de la explotación minera, a la declaración del agua como derecho humano fundamental y a la necesidad de consultar a las poblaciones y comunidades indígenas (tesis de Correa) u obtener su consentimiento previo (de Acosta), cuando el estado dispusiera la explotación de recursos naturales en los territorios que ellas ocupan. La influencia moral e intelectual del presidente de la Asamblea, que contaba con el respaldo del bloque de PK [Pachakutik], permitió que las tesis ecologistas salieran bien libradas en los dos primeros debates. Dio paso, además, a la *sui generis* consagración de los “derechos de la naturaleza”. El consentimiento previo fue, sin embargo, descartado. La dureza del debate dejó malogradas las relaciones entre las figuras más visibles de la Revolución Ciudadana y entre Correa y el Movimiento Indígena. Las primeras deserciones en AP vendrían, sin embargo, por otras razones. Algunas de sus facciones propendían hacia una modernización de la Carta Magna en materia de sexualidad. El activo rechazo de grupos cercanos a las cúpulas eclesiásticas y al Opus Dei aupó, entonces, la renuncia de dos asambleístas que decían defender la moral católica del país. Múltiples organizaciones de mujeres condenaron la timidez con que el oficialismo encaró el tema¹¹⁰.

Una vez concluida y aprobada la nueva Constitución política del Ecuador (septiembre de 2008), Alianza País pasó a incorporar a algunos de los sectores de los movimientos sociales dentro del gobierno, iniciando un periodo de

¹¹⁰ Ramírez, Franklin, Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010), en OSAL Nro. 28, noviembre de 2010, p. 39.

desmovilización de movimientos de corte *corporativo*¹¹¹ capaces de constituir una oposición fuerte al gobierno, entre los que más se destaca el movimiento indígena, el cual además venía arrastrando graves fracturas internas desde su fallida participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez.

Así, en las elecciones generales de 2009, AP demostró que se había constituido en la fuerza política más importante a nivel nacional, pues Correa fue reelegido en primera vuelta con el 52% de la votación, consiguió 80 de 221 alcaldes y además alcanzó 59 de los 124 asambleístas nacionales. Adicionalmente, AP se mantuvo en coalición con el Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik, movimientos que sumaban nueve asambleístas más. Por otro lado, su capacidad de negociación con otros sectores políticos le daba un importante poder de maniobra, como se verá más adelante, para la aprobación de las leyes necesarias para echar a andar el nuevo pacto social.

Derivado de la coyuntura electoral, se generó el escenario propicio para que otros sectores sociales se sumaran al proyecto, sobre todo en función de su participación en las elecciones. Sin embargo, el proceso electoral reveló las dificultades que aún tenía AP para articularse y generar alianzas con actores sociales a nivel local, en donde estaban profundamente arraigadas las raíces de los partidos políticos que habían detentado tradicionalmente el poder. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano en Guayas, una de las provincias económicamente más importantes del país, y el Partido Sociedad Patriótica (de Lucio Gutiérrez) en la Amazonia. En este sentido se podría decir que como resultado de las elecciones

¹¹¹ “En el centro de algunas disputas está la fuerte sensibilidad «anticorporativa» del gobierno ecuatoriano, que busca una proyección hacia los ciudadanos no organizados y desactivar privilegios sectoriales, pero que al mismo tiempo generó una serie de conflictos y tensiones posteriores con la «sociedad organizada», desde los indígenas hasta la Policía”. Hernández, Virgilio y Buendía, Fernando, Ecuador: avances y desafíos de Alianza País, revista Nueva Sociedad No 234, julio-agosto de 2011, p. 135.

de 2009, AP conformó un bloque de fuerzas sociales y políticas que no se respaldaba en el anterior sistema de partidos, y que, por el contrario, buscaba estructurar su proyecto en el apoyo popular.

Se puede decir que en este periodo Alianza País entra en una nueva faceta pues si bien por una lado el proceso electoral aglutina a fuerzas políticas de izquierda y progresistas en defensa del proceso de transformación iniciado en 2006, una vez que se empiezan a establecer proyectos orientados a la descorporativización y reforma del Estado, emergen posiciones abiertamente confrontadas con el proyecto de AP. Algunos de los personajes y colectivos que acompañaron desde el inicio el proceso liderado por Correa empiezan a marcar distancia ideológica con el Presidente, lo que más adelante les llevaría a abandonar definitivamente el movimiento y a buscar otros mecanismos de posicionamiento en los escenarios político electorales.

En 2009 despuntan las confrontaciones entre el movimiento indígena y algunas organizaciones afines a este sector, en contra del gobierno. Si bien la brecha había empezado a abrirse cuando Alberto Acosta renuncia a la presidencia de la Asamblea Constituyente, un mes antes de terminada la redacción de la nueva Constitución, la emisión de decretos y propuestas de ley encaminados a implementar el nuevo proyecto de Estado provoca nuevos procesos de antagonismo entre el gobierno y las organizaciones sociales de alcance nacional, generando una polarización al interior del propio proyecto. Como lo señala Paola Sánchez:

Si, durante los dos primeros años de gestión, la propuesta política estuvo acompañada de una crítica frontal contra la denominada “partidocracia” (...) a partir de este año los movimientos y organizaciones sociales serian el centro de atención de la campaña mediática del gobierno. Ese cambio de la perspectiva gubernamental se evidencia, de alguna manera en el desplazamiento de los objetivos de la movilización social. De una concentración del 40.90% en 2007 en relación a “otros objetivos”, en el

2008 hay una mayor concentración en los temas laborales (25.07%) y el rechazo a la política estatal (12.54%). Este último se muestra con mayor fuerza en las confrontaciones entre el régimen y las organizaciones sociales por la consecución del marco legal que aterrizaría en los principios constitucionales, lo que implica discusiones sobre los proyectos de leyes en temas fundamentales como: recursos estratégicos, derechos laborales, seguridad social, educación básica y universitaria, distribución de tierra y agua, entre otros¹¹².

Así, a partir de 2009 se registran movilizaciones en las zonas del sur del país, en donde se ubican los principales yacimientos mineros, en contra de la Ley de Minería, lo cual deja algunos dirigentes imputados legalmente. La eliminación de contratos colectivos, en los que se apoyaban ciertos privilegios de los sindicatos, también resultó ser causa de la movilización de los trabajadores.

Por otra parte, la Ley de Carrera y Escalafón del Magisterio, así como la aplicación de un examen de evaluación a los docentes, generó enfrentamientos con la Unión Nacional de Educadores. Asimismo, el traspaso de la administración de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) desde el movimiento indígena hacia el Ministerio de Educación profundizó la confrontación con este sector, que reclamaba su autonomía.

Para 2010 el amplio bloque que había constituido Alianza País comenzaba a generar algunas fisuras que a la postre ocasionarían cierta distancia respecto de sectores sociales (docentes, grupos indígenas, organizaciones sindicales, entre otros) que, en ausencia del rol regulador del Estado, se han ido configurando en grupos de poder a lo largo de la historia del Ecuador y que, ante un proceso de reordenamiento estatal, han visto confrontados sus intereses en defensa de lo

¹¹² Sánchez, *op. cit.*, pp. 45 y 46.

que Franklin Ramírez caracteriza como “la presencia de intereses e identidades políticas y gremiales dentro del Estado”¹¹³.

En el discurso político propugnado por AP y la Revolución Ciudadana se hace énfasis en la necesidad de acompañar dicho proceso con una suerte de revolución del aparato burocrático, es decir, de una modernización del Estado que establezca los criterios mínimos de regulación de los servicios y sectores considerados de interés para el bien común.

Es por ello que uno de los temas de mayor conflictividad, desde 2010, fue el de la reforma institucional del Estado, la cual se expresa en leyes como la de Ordenamiento Territorial y procesos como el de desconcentración y descentralización, mismos que han generado susceptibilidades incluso al interior de las instituciones públicas que fueron sujeto de reestructuración y ajuste al proyecto nacional¹¹⁴.

Confrontaciones similares surgieron con los gremios de maestros, cámaras empresariales, medios de comunicación y estudiantes universitarios, a quienes alcanzaban las regulaciones contenidas en las leyes propuestas por el Gobierno, a sabiendas de que la mayoría en la Asamblea le permitiría aprobarlas sin mayores modificaciones. La denuncia de una ausencia de diálogo y negociación por parte

¹¹³ Ramírez, Franklin, Post-neoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana, Temas y debates Nro. 20, CLACSO, octubre de 2010, p. 191.

¹¹⁴ Un ejemplo de ello fue la separación del cargo y la compra de renuncias de más de 3.000 de servidores públicos del Ministerio de Salud Pública en 2011 con el fin de mejorar la prestación de servicios en los hospitales públicos. Ver más en: Ospina, Pablo, La revolución ciudadana en Ecuador: conflicto social, régimen disciplinario y proyecto de Estado. En varios autores, *El correísmo al desnudo*, Montecristi Vive, Quito, 2013.

del movimiento oficialista para llevar a cabo este proceso ha sido uno de los principales reclamos de las organizaciones sociales.

En este periodo, y como producto de la discusión de las leyes propuestas por el Gobierno, se produce la ruptura con la coalición política que se venía manteniendo desde Montecristi, es decir Pachakutik y el MPD. Además, las discrepancias al interior de AP se vuelven a evidenciar, provocando el distanciamiento de algunos de sus asambleístas y figuras más representativas del movimiento, quienes finalmente se separan de la organización política en 2011. Como lo señala Franklin Ramírez:

Con la instalación del nuevo parlamento, por otro lado, la política “de puertas abiertas” de la constituyente se revirtió. La implementación revolucionario de Correa y AP en Montecristi obligó a la función legislativa, electa en abril de 2009, a aprobar más de 11 leyes en un año. Se trataba de un claro desincentivo institucional para la deliberación pública y para la búsqueda de acuerdos sustantivos entre AP y las minorías cercanas. Por lo demás, contener los problemas de heterogeneidad, diferenciación e incluso antagonismo al interior de la renovada bancada oficialista aparecía, más bien, como la prioridad de sus coordinadores. En el nuevo bloque mayoritario se cuentan menos legisladores cercanos al campo de las organizaciones populares. La ruptura de la coalición política –desaparición del “megabloque” – tejida en Montecristi redujo, además, las opciones de que estas últimas puedan incidir en el debate parlamentario¹¹⁵.

En este sentido, la consolidación de la hegemonía de Alianza País permitió al movimiento avanzar con las reformas propuestas como parte de su programa sin detenerse a consensuarlas con los grupos sociales, los cuales estaban pasando del “apoyo crítico” a la oposición. Por su parte el gobierno no daba el brazo a torcer sino más bien emprendía una estrategia de acercamiento directo

¹¹⁵ Ramírez, Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010), *op. cit.*, p. 41.

con las bases de las organizaciones, así como de potenciación de los espacios de participación institucional abiertos en la nueva Constitución. La entidad encargada de generar dicha inclusión era la recién creada Secretaria de Pueblos y Movimientos Sociales.

Esta dinámica se mantuvo así hasta el 30 de septiembre de 2010, fecha en la cual se produjo una revuelta policial contra una ley salarial emitida por el gobierno en la que se recortaba ciertos incentivos monetarios, principalmente a los altos mandos. La revuelta fue aprovechada por fuerzas de derecha y opositoras para tratar de propiciar la caída del Gobierno, la cual fue frenada por la intervención de las Fuerzas Armadas y la movilización popular a favor del régimen. Este acontecimiento, que dejó varios muertos y heridos, cimbró el interior del gobierno y de AP. Además, se produjo la ruptura definitiva e irreconciliable con Pachakutik, movimiento que manifestó públicamente su apoyo a la revuelta policial, afirmando que este sector estaba defendiendo un derecho legítimo¹¹⁶.

En ese sentido, Franklin Ramírez distingue dos momentos característicos de la configuración del movimiento de gobierno. Uno antes del 30 de septiembre y otro después de ese día. Al respecto sostiene que:

AP se forma durante el gobierno y se estructura como tal en Montecristi. Globalmente eso se mantiene así hasta el 2010, cuando el movimiento quiere constituir su propia fuerza sin las organizaciones sociales, incluso evitando la decisión de cooptarlas, como pasó en el caso del MAS en Bolivia. No obstante, el 30 de septiembre del 2010 tiene un efecto brutal en AP: Correa se da cuenta de que su organización es muy débil y ahí cambia la cosa. Entonces, se montó una Coordinadora de Movimientos Sociales y a raíz de eso hay un giro en la estrategia del propio movimiento. Para las elecciones generales de 2013 ya hay candidatos de los choferes, de los campesinos, de los barrios, algo que antes no formaba parte de su

¹¹⁶ Ver más en: Paz y Miño, Juan, Insubordinación o golpe. Ecuador, la trama del 30-S, Abya Yala, Quito, 2011.

lógica. En resumen, empezaron como cercanos a los movimientos, después dijeron “podemos hacerlos solos” y se fueron alejando de ellos. Luego hay unos efectos políticos que hacen que vuelvan a buscar a esas organizaciones, pero ya se encontraban tan distanciados de las grandes como la Conaie y la UNE, que tuvieron que mirar al resto, con las cuales nunca se perdieron las relaciones pues gran parte de las organizaciones tienen nexos muy fluidos con AP¹¹⁷.

Ante los acontecimientos del denominado 30-S, AP convocó en noviembre de 2010 a una Convención Nacional en la cual se eligió a la nueva directiva nacional y se ampliaron los ejes del Programa de Gobierno¹¹⁸. Además, se ratificó el liderazgo de Rafael Correa, como presidente del movimiento. Un tema fundamental que fue ampliamente discutido en este espacio, en el marco de la necesidad de fortalecer al movimiento, fue la tesis respecto a si AP debía constituirse como partido político, pero finalmente se resolvió mantener su estatus de movimiento puesto que su discurso debía seguir afianzándose en la oposición a la “partidocracia”. Como lo señalan Virgilio Hernández y Fernando Buendía:

La Convención de AP aprobó además el régimen orgánico, que en consonancia con sus propuestas programáticas define a la organización como un «movimiento político» de izquierda que propugna el socialismo del buen vivir, asume las vertientes de pensamiento libertario, crítico y revolucionario, aplicándolas creativamente a la realidad nacional y reconoce la pluralidad dentro de la tendencia de

¹¹⁷ En entrevista realizada el 08 de septiembre de 2014 en Quito.

¹¹⁸ Los ejes del primer programa de gobierno eran cinco: revolución constitucional, lucha contra la corrupción, revolución económica, revolución en educación y salud, y el rescate de la dignidad, la soberanía y la búsqueda de la integración latinoamericana. Luego de la Convención de AP del 2010, se integraron dos ejes más: la revolución judicial y la revolución ambiental. Estos lineamientos constituyen la base del proyecto nacional, el cual se encuentra plasmado en el Plan Nacional para el Buen Vivir. Cabe destacar que en una nueva convención del movimiento, desarrollada en 2012 se incorporaron además tres nuevos ejes: revolución urbana, revolución cultural y revolución del conocimiento. Ver más en: Movimiento Alianza País, 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir. Programa de Gobierno 2013- 2017, Quito, 2013. Versión digital disponible en <http://www.alianzapais.com.ec/fundamentos>.

izquierda –aunque en el proceso previo a la Convención se estableció que los diferentes movimientos que integraban AP debían disolverse para permitir la conformación de un sola estructura nacional–. El planteamiento de constituirse en partido político, presentado por la delegación de Pichincha en la Convención Nacional, no logró el apoyo mayoritario; los principales argumentos en contra fueron la historia de desprestigio de los partidos en el ámbito nacional y la idea de que el movimiento, sin dejar de tener principios y organización, se presentaba como más dinámico y flexible para responder a las complejas realidades nacionales¹¹⁹.

Por otra parte, el gobierno de AP decidió acelerar, vía aprobación directa de la ciudadanía, un conjunto de reformas en las cuales se jugaba la profundización de su proyecto puesto que tocaba intereses de importantes grupos de poder como los medios de comunicación y la banca. En mayo de 2011 se desarrollaron un referéndum constitucional y una consulta popular, en las cuales se planteaba al electorado de diez preguntas relativas a la aplicación de reformas al sistema judicial, la seguridad, el medio ambiente, la banca y los medios de comunicación.

Entre los temas más controvertidos de la consulta estuvieron la prohibición de que los accionistas del sector financiero participaran como accionistas o dueños de medios de comunicación y viceversa, la tipificación como delitos del enriquecimiento privado no justificado y de la no afiliación de empleados a la seguridad social, la sustitución del pleno de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura Transitorio, la obligatoriedad con plazos para que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Comunicación (en la cual se contemplaba la creación de un Consejo de Regulación de la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita), el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Penal, entre otros.

¹¹⁹ Hernández y Buendía, *op. cit.*, p. 139.

Esto generó la reacción de varios sectores tanto de adentro como fuera de AP. Alberto Acosta y el movimiento Ruptura de los 25, fundadores del proyecto, se separaron definitivamente de AP aduciendo la defensa de la recién creada Constitución, la cual iba a ser reformada por esta vía. Por otra parte, los dueños de los medios de comunicación y del sector financiero se abanderaron del discurso de la defensa de la “libertad de expresión”.

Entre las agrupaciones más visibles que promovieron el No a la Consulta estuvieron la Izquierda Democrática, Pachakutik, el Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador, el Movimiento Popular Democrático, la Ruptura de los 25, la Concentración de Fuerzas Populares, el Movimiento Concertación Nacional Democrática, el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, la Red Ética y Democracia, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, el Partido Social Cristiano y la Unión Demócrata Cristiana. Un amplio sector de movimientos sociales así como los partidos socialista y comunista se sumaron a la campaña a favor liderada por AP, creando un nuevo espacio de acercamiento entre el régimen y los sectores sociales. La tesis del Si triunfó con más del 50% de apoyo popular¹²⁰.

La presencia de un nuevo frente social de respaldo al Gobierno se mantuvo para las elecciones generales de 2013 en las cuales AP promovió todo un despliegue territorial que inició en el segundo semestre de 2012. Esta vez la estrategia del gobierno fue la de generar un imaginario de democratización al interior del movimiento, por lo cual realizó una serie de convenciones alrededor de todo el país en donde se fueron seleccionando, a modo de primarias, a los candidatos que participarían junto al binomio Rafael Correa-Jorge Glas, aprobado también mediante un encuentro que convocó a la militancia nacional de AP.

¹²⁰ Ver resultados en <http://app2.cne.gob.ec/resultados/resultadosn.aspx>

En estas elecciones se integraron como candidatos a asambleístas a varios representantes de movimientos sociales, pero en calidad de alternos. Ello generó, como se había mencionado, un frente de organizaciones que promovieron una campaña alternativa a la realizada por AP en favor de su proyecto. Formaron parte de este proceso organizaciones históricas como la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), la Red de Trabajadores de la Energía Eléctrica del Ecuador (ENLACE), la Confederación de Trabajadores del Sector Público Ecuatoriano (CTSPE), el Movimiento Nacional Mujeres por la Vida, la Juventud Comunista del Ecuador (JCE), así como otras organizaciones de composición más diversa (Surandantes, CRCInti, Bullazurda).

En este sentido, se puede vislumbrar cómo los movimientos sociales fueron cobrando un peso específico cada vez de mayor importancia e incidencia al interior de AP. Sin embargo, la pugna por el control del movimiento, como le hemos visto hasta ahora, ha tenido varias facetas y se ha caracterizado por la conformación de bloques de alianza al interior que, a su vez, canalizan la participación de las organizaciones sociales de formas distintas.

Es en esta dinámica en donde se determinará justamente el papel y el peso que dichas organizaciones pueden llegar a tener en la dirigencia del proyecto, puesto que mantener vigente la organización social no es una tarea de AP, sino de los propios movimientos sociales. No hay que olvidar que AP constituye principalmente un dispositivo electoral, como lo afirma Cristian Gonzáles, director de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gestión Política (antes denominada Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales):

Al interior del movimiento hay una izquierda popular, una izquierda social, un sector progresista y también otros sectores, por eso el movimiento ha entrado en una dinámica de reconstitución, con nuevos mecanismos de formación y carnetización. Ahora, en cuestión de movilización de bases es cierto que hay un vacío, pero son las organizaciones las que tienen la capacidad de articular un frente, ahí País es otro

actor más, no el que debería convocar. Movilizar a las organizaciones sociales no es responsabilidad de AP. O, si lo hace, tendría que ser en igualdad de condiciones. Lo cierto es que AP se ha convertido en un dispositivo electoral exacto que actúa muy bien en esa coyuntura, pero son las organizaciones las que deben marcar el rumbo para dar continuidad al proyecto político¹²¹.

Entonces, dentro del movimiento hay una pugna en la cual las organizaciones sociales intentan que prevalezca la hegemonía del sector más progresista de las fuerzas que lo integran (izquierda), en la medida en que dentro del equipo de gobierno existen distintas visiones de lo que implica el desarrollo, en las cuales se juega la verdadera transformación del patrón de acumulación del país, principalmente si seguimos el razonamiento de Roberto Follari, quien señala que los sectores conservadores que forman parte del gobierno se ubican principalmente en el área de Economía y las Fuerzas Armadas¹²².

Si bien es cierto el gobierno ha emprendido una verdadera transformación institucional, con una orientación de la política económica hacia la inversión social y la redistribución de ingresos, “los límites de la distribución productiva dejan ver los límites de la autonomía relativa del Estado en el gobierno de la Revolución Ciudadana: la capacidad de veto de determinados grupos de poder (dentro y fuera del gobierno) y de ciertos anillos burocráticos”¹²³. A esto se suma la distancia, al parecer irreconciliable, entre el gobierno y movimientos que en otro momento fueron los articuladores de la resistencia al neoliberalismo. La Conaie, por ejemplo.

¹²¹ En entrevista realizada el 09 de septiembre de 2014 en Quito.

¹²² Follari, Roberto, La Revolución Ciudadana: un lugar para los de abajo. En Núñez, Jorge (coord.), *Ecuador: Revolución Ciudadana y Buen Vivir*, Yulca Editorial, Quito, 2014.

¹²³ Ramírez Franklin, Reconfiguraciones estatales en Ecuador: 1990-2011. En Thwaites Rey, Mabel (Editora) *El Estado en América Latina: Continuidades y Rupturas*, Arcis-CLACSO, Buenos Aires, 2012, p. 367.

La ausencia de estas organizaciones en la disputa por la dirección del proyecto, al interior de los espacios institucionales conquistados mediante la protesta social, de alguna manera ha facilitado el avance dentro de AP de sectores más afines a proyectos desarrollistas, en los cuales se ven comprometidas políticas que mantienen vigente la dependencia económica de los proyectos extractivos.

Esa es la imagen que proyectó el gobierno en 2013 cuando, luego de amplias deliberaciones internas, fue elegido como candidato a la Vicepresidencia de la República el entonces ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, Jorge Glas, cartera en la cual se había concentrado una buena parte de la conflictividad de las organizaciones defensoras de las tesis ecologistas. Este candidato se impuso al promovido por un sector identificado con la izquierda, Fander Falconí, quien había liderado la propuesta de no explotación del Parque Nacional Yasuní.

Desde la perspectiva de Franklin Ramírez¹²⁴, los problemas que ha tenido AP para conectarse con la ciudadanía y a las organizaciones sociales, e incluirlas en su proyecto de gobierno, responden a cuatro elementos. En primer lugar, la formación de AP como herramienta electoral y en el marco de un profundo malestar social contra toda forma de partido u organización, situación fundante que le ha llevado a enfocarse más en el apuntalamiento del gobierno que en su relación con la sociedad. En segundo lugar, una suerte de “redistribución sin reconocimiento”, es decir, la subestimación de la contribución histórica de las fuerzas sociales al proceso redistributivo abierto en el país. Esto le ha llevado, como se mencionó antes, a apuntalar las decisiones gubernamentales en la fuerza de la figura presidencial.

¹²⁴ Ver más en: Ramírez, Post-neoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana, *op. cit.*, pp. 190 - 191.

En tercer lugar, la ampliación de la cobertura de las políticas públicas, dinámica en la cual ya no hace falta una intermediación de las organizaciones sociales ha tendido a desestructurar sus agendas que, en el marco del neoliberalismo, atendían a dinámicas reivindicativas así como a una corporativización de las instituciones del Estado. Y, por último, Ramírez señala la preeminencia que tiene la publicidad en el gobierno del Rafael Correa, el cual tiende a reemplazar la deliberación democrática por el marketing.

Los problemas que ha tenido el movimiento desde el principio para generar una movilización a nivel territorial se dejaron ver con mayor fuerza en las elecciones de autoridades seccionales en 2014, proceso en el que AP perdió las alcaldías de las tres ciudades más importantes del Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca, así como varias prefecturas estratégicas para el proyecto. Esto, además de demostrar una dinámica de rearticulación de la derecha, respaldada incluso en los dirigentes sociales que se pasaron al lado de la oposición, muestra la dependencia política de AP a la figura de Rafael Correa, quien debió hacer campaña personalmente para la promoción de sus candidatos, además de anunciar su candidatura a la reelección para los próximos comicios (2017). Como lo afirma Fernando Buendía, asesor de AP:

Las elecciones seccionales fueron un campanazo no solamente de que grupos de oposición oligárquicos, rentistas, se están rearmando sino también de que esa pérdida de base social es una debilidad que no se puede compensar con ingeniería política, es decir a través de juegos de alianzas, a veces no muy claras. Sin sujeto político no hay transformación posible. Ahí hay un déficit que como una deuda se puede ir acumulando y se puede generar traspies en el proceso de cambio que se está viviendo. Las elecciones reflejan la problemática respecto del distanciamiento

entre el movimiento y los sectores sociales. La agenda de ahora es distinta de la del 2006, es incluso a contracorriente de la agenda con la que se arrancó¹²⁵.

Por último, solo restaría enfatizar que, como vimos a lo largo del presente apartado, los movimientos sociales en el Ecuador fueron esenciales para la conformación y consolidación del proyecto político enarbolado por AP, configurando en el interior de éste un mecanismo de articulación de distintas fuerzas políticas, así como un mecanismo estructurante de las disputas con los sectores de centro y de derecha que forman parte del proyecto, en donde las contradicciones internas aún no se resuelven para ninguno de los bandos.

Lo que sí se hace evidente es el desgaste que estas pugnas han generado al interior de AP y para muestra están las derrotas electorales de 2014 y el reposicionamiento de la derecha. Así, el proyecto encabezado por AP corre el riesgo de una potencial resubalternización en la medida en que los movimientos sociales no sean capaces de afincar un proyecto político que se fundamente en la búsqueda de las transformaciones que ya se plasman en la Constitución pero que aún no se han implementado en la práctica.

Por otro lado, la organización social también se enfrenta a la dificultad de impulsar el proyecto más allá de la figura de Rafael Correa, la cual se encuentra siempre expuesta a los embates de una derecha conservadora que busca debilitar la credibilidad del proyecto a través del control de los medios de comunicación.

La realidad actual de los movimientos sociales se enfrenta a estos retos sumados al peligro de la pérdida gradual de autonomía, por lo cual se puede decir que la lucha por la construcción de una nueva hegemonía sigue vigente y, en ese sentido, la oligarquía busca a través de los dispositivos ideológicos de control

¹²⁵ En entrevista realizada el 10 de septiembre de 2014 en Quito. Fernando Buendía es sociólogo y asesor del asambleísta de AP, Virgilio Hernández.

(medios de comunicación masiva) el debilitamiento de la credibilidad del gobierno, estableciendo así una franca disputa por la hegemonía política.

Es por ello que el papel que a futuro jueguen los movimientos sociales en la conformación y continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana será determinante tanto por el posible apoyo que estos puedan brindar al proyecto como por los distanciamientos que a la larga tengan con este, puesto que AP no es en sí misma capaz de sostener el proyecto, al margen de los movimientos sociales, como ya se demostró en el periodo electoral de 2014 y como ha demostrado históricamente la izquierda ecuatoriana, la cual ha estado tradicionalmente dividida.

3.2 Organizaciones sociales y Estado: entre la institucionalización y el antagonismo

Como ya se mencionó en el apartado anterior, la composición del gobierno es bastante heterogénea dado que el régimen es consecuencia directa de un proceso político en el que se sumaron distintos sectores en el marco de la crisis política y económica que vivía el país desde hace más de una década y en la cual las instituciones de gobierno, los partidos políticos y las organizaciones sociales tradicionales habían caído en un profundo descrédito.

En este sentido, para efecto del presente apartado revisaremos cómo las organizaciones sociales existentes se han integrado o distanciado del proyecto electoral que enarbola Alianza País y cómo en este nuevo escenario político han emergido nuevos actores sociales o se han reconfigurado los existentes.

La revisión de las organizaciones y agrupaciones sociales que se han integrado a los distintos periodos de gobierno de Rafael Correa, nos permitirá

entender cuál ha sido el rumbo y la trayectoria política e ideológica por la que ha transcurrido el gobierno en estos últimos ocho años, lo mismo que los rumbos adoptados y los mecanismos de supervivencia de las agrupaciones sociales que tradicionalmente articularon el conflicto social en el Ecuador.

Retomando los elementos identificados por Pablo Ospina¹²⁶, hay cinco elementos por los cuales el gobierno se ha distanciado de los movimientos y organizaciones sociales, demostrando que si bien el actual régimen es producto de la movilización social, esto no implica necesariamente que sea el movimiento en el gobierno. El primer punto que destaca es la agenda minera, en la cual se ven involucrados los territorios que habitan los pueblos y comunidades indígenas, convirtiéndose a la larga en uno de los temas más cuestionados a nivel nacional e internacional, dado el impacto generado en estos pueblos.

Otro punto que destaca Ospina es la ausencia de una política agraria democratizadora sobre los recursos productivos. En este punto también se ven involucrados los pueblos y comunidades indígenas y ha sido fuente importante de las movilizaciones sociales a lo largo de la historia del Ecuador. Un tercer elemento importante del distanciamiento entre el Gobierno y las organizaciones sociales sería la implementación de una política que los sindicatos públicos consideran que debilita su accionar y funcionamiento. En cuarto lugar se encuentra la percepción que existe en algunos sectores de las clases medias y las burguesías de que la organización del gobierno se ha enfocado en la construcción de un régimen fuertemente presidencialista. Esto, finalmente, cuestiona la

¹²⁶ Ver más en Ospina, Pablo, La unidad de las izquierdas, en revista virtual la Línea de Fuego, 2011, <http://lineadefuego.info/2011/09/08/la-unidad-de-las-izquierdas-por-pablo-ospina-peralta>

autonomía organizativa de los movimientos sociales, la cual debería ser el eje por el cual se articule la Revolución Ciudadana.

En este sentido, es importante revisar a las organizaciones que decidieron no participar en el proyecto, así como sus razones objetivas y subjetivas para no hacerlo. Para comenzar, es importante establecer el peso específico que los movimientos sociales han tenido en la historia política reciente del Ecuador, empezando por el movimiento indígena, uno de los actores más importantes de la década de los noventa por su capacidad articuladora de la protesta social, así como su oposición al sistema neoliberal.

El movimiento indígena, si bien en un primer momento respalda al gobierno de Rafael Correa después se distancia profundamente de su proyecto, y dicha distancia con el paso del tiempo y de las políticas adoptadas por el gobierno se ha ido incrementando, lejos de encontrar un punto de confluencia. Sin embargo, al interior del propio movimiento se han generado escisiones, principalmente de organizaciones de carácter provincial que se han incorporado al proyecto de Alianza País.

Es importante destacar que pese a las fracturas internas del movimiento indígena y al acercamiento que ha tenido con sus bases el gobierno, la importancia política que han cobrado las organizaciones que lo encabezan (Conaie y Pachakutik) las afianzan como un actor de primer orden en la articulación de los sectores subalternos. Como lo afirman Pablo Ospina y Richard Lalander:

En el movimiento indígena, la CONAIE ha tenido una posición casi hegemónica, dado que alrededor de 80% de las organizaciones indígenas de base están afiliadas a ella (Van Cott, 2005). Esta fortaleza de la CONAIE ha beneficiado a Pachakutik en sus avances electorales. En comparación, la gran mayoría de los partidos políticos ecuatorianos no tienen ese vínculo estrecho con los movimientos sociales, lo que ha contribuido a la atracción que provocó Pachakutik como aliado

político-electoral. Así, PK se constituyó en un movimiento político-electoral abierto a las alianzas estratégicas (interculturales) en diferentes niveles político-territoriales, más allá de la identificación estrictamente étnico-cultural¹²⁷.

En este sentido podemos distinguir también que el distanciamiento entre la Conaie y el gobierno la llevó a convertirse en el eje de articulación de la oposición al régimen de Correa, lo cual ha pasado factura principalmente en su relación con las bases, mismas que han sido beneficiadas con los programas y proyectos emprendidos por el gobierno. A nivel local la realidad de las organizaciones indígenas mantiene una dinámica diferente, que muchas veces se encuentra desconectada con las acciones realizadas por la organización a nivel nacional. Como lo afirma Miguel Lluco, ex presidente de la Conaie¹²⁸:

La Conaie se ha quedado sin poder de convocatoria porque los dirigentes no responden a la visión de la mayoría, eso es perder el norte y la dirección del proceso. En Chimborazo soy coordinador de Pachakutik y estamos aliados con el gobierno y por eso somos acusados por nuestros compañeros. La Conaie que nosotros construimos ya no existe, porque sus dirigentes están perdidos. Lo que ahora existe es una dirigencia que esta con el discurso de oposición pero que no tiene convocatoria. Cuando la dirigencia convoca las bases no van porque están de acuerdo con el gobierno y las obras, pero no lo dicen. Mientras tanto, el gobierno tiene una alta capacidad de convocatoria. Entonces, si no se abren al debate va a ser muy complicado porque las reuniones de la Conaie se han convertido en espacio de agresión y no análisis.

¹²⁷ Lalander, Richard y Opina Peralta, Pablo, Movimiento indígena y revolución ciudadana en Ecuador. Cuestiones Políticas. Vol. 28 N° 48 (enero-junio 2012), p. 15.

¹²⁸ Miguel Lluco fue uno de los fundadores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), participó activamente el 'levantamiento' (movilización general) de 1990, cuando el movimiento empezó a avanzar hacia el área política. Fue además Coordinador de Pachakutik y ha sido una de las caras visibles del movimiento indígena ecuatoriano en los últimos años.

La apreciación de Miguel Llucó nos refiere directamente a una multipolaridad en el discurso de la movilización indígena puesto que como él lo señala, las bases del movimiento, que anteriormente se movilizaban de acuerdo a la conducción de la Conaie, componiendo un bloque más o menos sólido, actualmente se han ido repartiendo entre los distintos movimientos y agrupaciones políticas, entre las que tenemos que incluir al propio AP.

La fractura entre la base y la dirigencia, obedece al propio ciclo de vida del movimiento, como lo señala Jorge Resina de la Fuente¹²⁹, quien sostiene que los movimientos sociales con el tiempo pueden caer en situaciones como la oligarquización y el distanciamiento de sus objetivos iniciales. A ello se sumaría, en el caso de la Conaie, un proceso de elitización que pone al movimiento frente a la necesidad de un proceso de autocrítica.

En este sentido es importante hacer un breve esbozo de los motivos políticos e ideológicos que llevan a la ruptura de la Conaie con AP y de las implicaciones políticas que esta separación ha tenido en el gobierno de Rafael Correa. Recordemos que, como se había mencionado, la articulación del movimiento indígena a la propuesta electoral de Rafael Correa en 2006 no se dio sino hasta la segunda vuelta y como medida coyuntural para evitar un posible triunfo del empresario Álvaro Noboa. Esto, una vez que no fue posible establecer una alianza entre AP y Pachakutik, bajo la propuesta de que el dirigente Luis Macas se presentara como binomio de Correa. La tesis del movimiento indígena era la de una inversión de papeles (Correa como candidato a vicepresidente y Macas como presidente), además de la llamada a elecciones primarias, dinámicas en las que Rafael Correa se negó a participar.

¹²⁹ Resina de la Fuente, Jorge, La plurinacionalidad en disputa: el pulso entre Correa y la CONAIE, Abya Yala, Quito, 2012, p. 117.

La decisión del movimiento indígena de presentar candidaturas propias, sin aliarse a otro movimiento se vio fuertemente incidida por su participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez y la sensación que había dejado este breve paso por las esferas del poder de haber sido utilizados, todo lo cual generó una fuerte fractura al interior del movimiento.

Ya con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, instrumentada mediante el gobierno de Alianza País, el movimiento indígena se integra directamente a participar en el proyecto tanto mediante mecanismos institucionales, como a través de la movilización social. Mientras Pachakutik se suma al megabloqueo que mantuvo AP durante la Asamblea, la Conaie elabora en conjunto con otros sectores sociales un mandato que es entregado a los asambleístas constituyentes, el cual integraba las reivindicaciones de las organizaciones sociales a ser plasmadas en la nueva Constitución. Una de las principales es el reconocimiento del Estado plurinacional.

La Conaie y Pachakutik afirmaron brindar un “apoyo crítico” al proyecto puesto que, si bien se encontraban impulsando la aprobación de la nueva Constitución, en el desarrollo del proceso mantuvieron espacios de disputa en relación a temas vinculados a la limitación de actividades extractivas, manteniendo la tesis principalmente de la necesidad del consentimiento de los pueblos indígenas ante la extracción de recursos. En la nueva Constitución se impuso la propuesta de AP de que se realice una consulta previa pero sin carácter vinculante.

Es en esta lógica es en donde se ha ido actualizando el conflicto entre el gobierno ecuatoriano y la Conaie, articulada a los movimientos ecologistas, que a su vez se aglutinan alrededor de la lucha contra la extracción de recursos naturales. Las primeras confrontaciones se produjeron en 2009, año en que entró en vigencia la nueva Ley de Minería, sin consulta previa. Ese mismo año se

planteó el proyecto de Ley de Aguas, el cual generó nuevos conflictos debido a que, a decir del movimiento indígena, proponía una autoridad única del agua, por sobre los usos y costumbres de las comunidades. Mientras, por parte del Gobierno, en su afán por impulsar una reforma institucional del Estado y poner límite al corporativismo que ha caracterizado a la administración de los servicios públicos, se pretendía regular a las Juntas de Regantes, administradas por el movimiento indígena.

Otro de los temas que fueron sumando razones al conflicto fue el lanzamiento de nuevos proyectos para la extracción de recursos naturales, entre los que se destacan el proyecto para la explotación de cobre a cielo abierto con la empresa china Ecuacorrientes S.A. (ECSA) en el marco del Proyecto Mirador, ubicado en la parroquia Tundayme-El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, zona Shuar; los contratos petroleros firmados con las empresas Schlumberger (EUA) y la Tecpetrol (Argentina), para la optimización de la producción de los campos maduros Libertad y Shushufindi, de la provincia de Sucumbíos.

A esto se sumó el lanzamiento por parte del Gobierno, en 2012, de la convocatoria a la XI Ronda de Licitación Petrolera Ronda Sur Oriente Ecuador, por la cual se identificaron 21 bloques, de los cuales trece saldrían a licitación, cinco quedarían pendientes (aún faltan los estudios previos), y tres ya fueron adjudicados a la Empresa Pública Petroamazonas.

El conflicto más fuerte en 2013 lo provocó la finalización de la propuesta gubernamental de dejar bajo tierra el crudo de los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha del Parque Nacional Yasuní, la reserva más importante de biodiversidad en el planeta, que alberga los dos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, los Tagaeri y los Taromenane. Para dejar intactos estos campos se requería la corresponsabilidad de la comunidad internacional para reunir al menos el 50% de los recursos que generaría su explotación (en total 7.000 millones de

dólares). Las contribuciones obtenidas no superaron ni los 150 millones. Frente a estos resultados, el gobierno dio paso a los procesos de exploración para iniciar explotación de los campos ITT del Parque Yasuní.

En este sentido, no podemos dejar de lado que la conformación de las naciones andinas tiene un fuerte componente colonial puesto que las condiciones materiales que necesita el capitalismo para su reproducción se contraponen con las demandas de autorregulación de los bienes comunitarios y la defensa del territorio como derecho ancestral, enarboladas desde movimientos de carácter étnico como la Conaie.

Sin embargo, hay que resaltar que actualmente es muy difícil, sino imposible, que cualquier movimiento u agrupación política que se haga de la presidencia en el Ecuador construya un proyecto que esté ajeno a la explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, debido a la dependencia que históricamente ha caracterizado a la economía de la región. Asimismo, el aprovechamiento de la minería representa una fuente de ingresos que resulta clave para la aplicación de la política económica y la estabilidad macroeconómica, tomando en cuenta que el país no tiene moneda propia y depende del dólar.

Es la misma acumulación de estos programas y proyectos (extractivos), los que, a decir de Agustín Paladines, facilitarán los recursos para, por un lado, distribuir la riqueza y, por otro, salir progresivamente del modelo primario exportador, para lo cual ha sido necesario restituir al Estado las concesiones que se encontraban en manos de empresas privadas. Un ejemplo de ello es la creación de la Empresa Nacional Minera, de propiedad pública¹³⁰.

¹³⁰ Ver más en Paladines, Agustín, Ecuador, un país geodiverso y una minería para el Buen Vivir. En Núñez, Jorge (coord.), *Ecuador: Revolución Ciudadana y Buen Vivir*, Yulca Editorial, Quito, 2014.

Alrededor de esta realidad también se establecen una serie de conflictos de interés que no se empatan con el discurso auténticamente conservacionista de la naturaleza así como la defensa del territorio de los pueblos y comunidades originarias. Aquí el papel de la Conaie se torna un tanto confuso dado que ésta no ha logrado construir una propuesta de lucha que aglutine a sectores que planteen una alternativa viable al modelo capitalista, dada también la limitación de su acción, como lo analiza Jorge Resina de la Fuente, a las dinámicas electorales en las que se encuentra inmersa desde hace más de dos décadas¹³¹.

Sin embargo, no podemos pasar por alto que la disputa generada en torno a este tema es más compleja que el simple protagonismo político, al cual lo han reducido tanto el gobierno como la dirigencia indígena, puesto que en el fondo el tema central es la disputa por la hegemonía del modelo político, económico y cultural, vinculada estrechamente a la implementación de la nueva Constitución.

En otro sentido, encontramos a la oposición sindical, la cual se aglutina bajo la dirigencia de organizaciones de carácter histórico como las que integran el Frente de Unitario de Trabajadores (FUT)¹³², actualmente sumado al boque de oposición. Los conflictos con este sector iniciaron también en el segundo periodo de Correa (2009) y en función de las regulaciones establecidas por parte del gobierno a las prebendas con las que han contado los sindicatos, lo cual le sumó al escenario político varios conflictos por temas salariales y por la expedición, en

¹³¹ Ver más en: Resina de la Fuente, *op.cit.*

¹³² El FUT se creó en 1980 como un espacio de articulación de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (CEDOCUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (COSL) y la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). Al igual que el movimiento indígena es una de las organizaciones que más se ha destacado por su capacidad de movilización. Discursivamente se identifica con la izquierda marxista. Cabe destacar actualmente la CTE ha tomado distancia del Frente y ha expresado su apoyo al régimen de Rafael Correa.

2010, de la Ley de Servicio Público, normativa mediante la cual entre 2011 y 2012 se separó de su cargo a miles de funcionarios públicos, principalmente del Ministerio de Salud, mediante un sistema de compra de renuncias obligatorias y bajo la justificación de denuncias de corrupción y mala calidad en la prestación de servicios.

Las acciones del gobierno generaron en el interior de una parte de los sectores de la clase media y media alta lo que se podría considerar un posicionamiento antagónico, el cual se ve influenciado por el manejo mediático que la oposición ha hecho sobre temas como democracia y libertad de expresión, lo cual han dotado de un sentimiento de inconformidad a estos sectores y evidencia que los medios de comunicación “operan ahora como actores políticos, desencadenando una guerra sin tregua y frontal”¹³³.

A esta oposición habría que sumarle la de los sectores medios que también se han aglutinado en torno al discurso ecologista y de “defensa de la democracia”, cuya principal bandera de lucha ha sido el mantenimiento del proyecto Yasuní ITT así como el tema de la “libertad de expresión”, una vez que se establecieron regulaciones para los contenidos emitidos por los medios de prensa mediante la aprobación de la Ley de Comunicación (2013).

Este mismo sector se visibiliza en los reclamos concernientes a la búsqueda de la autonomía de ciudades como Guayaquil, en vista de que desde el gobierno se han emprendido procesos de descentralización que establecen, por un lado, la equidad en la distribución de presupuestos (más presupuesto a las provincias con menor nivel de desarrollo y mayores carencias estructurales) y, por

¹³³ Peña y Lillo, Julio, Comunicación y Revolución Ciudadana, política agonística frente a la comunicación nihilística. En Núñez, Jorge (coord.), *Ecuador: Revolución Ciudadana y Buen Vivir*, Yulca Editorial, Quito, 2014, p. 275.

el otro, la transferencia de competencias que son responsabilidad de las autoridades locales y que tradicionalmente habían sido concentradas en el Estado central.

Otro sector que se ha constituido en fuerte oposición al proyecto del Gobierno son los estudiantes y el magisterio, los cuales se resistieron a las reformas realizadas al sistema educativo medio y superior. Estos grupos han generado acciones conjuntas que se orientan a defender los espacios de poder que organizaciones como el Movimiento Popular Democrático (MPD) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), mantenían al interior de las instituciones de educación media, así como en las universidades públicas.

Las políticas que han generado mayor conflicto con los sectores antes mencionados han sido las relacionadas con la evaluación de docentes y con la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), la cual integra regulaciones al funcionamiento de las universidades ecuatorianas, así como parámetros de calidad que deben cubrir estas instituciones.

Dichas medidas pueden ser consideradas como una respuesta a la situación de descomposición en la que había caído el sector universitario desde hace décadas, la cual se evidenciaba en problemas como la inequidad en el acceso a la educación pública, la falta de regulación a las universidades privadas, la proliferación de las universidades denominadas de “garaje” que no cumplían con estándares mínimos de calidad, la mercantilización de la educación, el rezago académico y la ausencia de investigación en los centros de educación superior,

entre otros problemas, a lo cual se sumaban serias denuncias de corrupción en contra del Conseup (Consejo Nacional de Educación Superior) ¹³⁴.

Sin embargo, para Pablo Ospina uno de los grandes problemas que se considera en términos generales en el desarrollo del sistema educativo ecuatoriano es la ausencia de un modelo autonómico por el cual se rijan las instituciones de educación superior, en el que cada institución establezca sus normativas y parámetros en respuesta a sus necesidades propias (regionales).

En este sentido, lo que se proponía con la reforma al sistema de educación superior era una modernización profunda y necesaria para regularlo, en el cual la corrupción y los malos manejos eran una constante. Modernizar por tanto significó terminar con viejas prácticas corporativas, pero en su lugar abrir la posibilidad de que el Gobierno controle a este sector, como lo señala Pablo Ospina Peralta:

Está propuesto en el proyecto de Ley de Educación Superior, donde se elimina el Consejo de Universidades y Escuelas Politécnicas, dirigido por los rectores, y en su lugar se crea una “Secretaría” cuyo directorio está compuesto paritariamente por representantes del ejecutivo y de la ciudadanía. En lugar de los rectores, estos “ciudadanos” serán escogidos por méritos y concurso. Como dice el artículo 181 del anteproyecto de Ley, “no podrán ser candidatos las autoridades académicas o administrativas de los organismos o instituciones objeto del control y regulación del sistema”. Basados en esta peculiar concepción de la “democracia participativa”, ni los rectores (que, recordémoslo, fueron nombrados en elecciones) ni representantes de

¹³⁴ Para acceder al informe completo respecto a los problemas de calidad que presentaban las instituciones de educación superior una vez que fue aprobada la Ley Orgánica de Educación Superior, proceso que llevó a la clausura de 14 universidades en 2012, se puede revisar la publicación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) denominada “*Suspendida por falta de calidad*”. *El cierre de catorce universidades en Ecuador*. Versión digital disponible en: <http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/CIERRE-DE-UNIVERSIDADES-placas-ok.pdf>

docentes, estudiantes o trabajadores, sino “ciudadanos” presuntamente independientes. Mientras tanto, el poder ejecutivo se reserva la mayoría en el sistema de educación superior con el argumento de que la “autonomía” universitaria se aplica a cada universidad pero no al “sistema” de educación superior¹³⁵.

Transcurridos los primeros años de estas reformas el conflicto derivado de la implementación de la Ley de Educación Superior fue superado y la transformación del sistema se echó a andar constituyéndose en uno de los principales pilares de la Revolución Ciudadana. Para ello AP buscó el respaldo de organizaciones afines al régimen como la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador (FEPE) y además impulsó un recambio de autoridades en la FEUE (universidad pública) con la elección de representantes marcadamente opuestos al Movimiento Popular Democrático, partido político que tenía una incidencia directa en esta organización.

Otro de los gremios que se configuró en oposición de Correa fue el de los médicos el cual, también por mantener una serie de conquistas que con el tiempo se fueron convirtiendo en prebendas económicas, encabezó protestas en contra de las tentativas del Gobierno de incidir en sus intereses. Este sector rechazaba principalmente las regulaciones establecidas a su actividad profesional como por ejemplo la institucionalización de un horario de ocho horas diarias de trabajo, la inclusión en el nuevo Código Penal de un inciso que castiga la mala práctica médica y la separación de su cargo de varios profesionales de la salud acusados de corrupción, una vez que se expide la Ley de Servicio Público en 2011.

En resumen, analizando los conflictos expuestos y volviendo al señalamiento de Franklin Ramírez¹³⁶ respecto a la existencia de un pulso entre el

¹³⁵ Ospina, Peralta, Pablo, Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana. El Ecuador de Rafael Correa, Instituto de Estudios Ecuatorianos, 2010, <http://www.iee.org.ec/index-txt.htm>.

¹³⁶ Ver más en Ramírez, Franklin, Post-neoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana, *op. cit.*

gobierno y las organizaciones sociales en función de la defensa que hacen estas de su presencia al interior de las instituciones del Estado, podemos identificar como trasfondo de los conflictos sociales, que se desataron una vez rebasado el campo de entendimiento abierto por la Asamblea Nacional Constituyente, una disputa en torno de la defensa de intereses específicos de ciertos gremios que se han replegado en torno a agendas particulares. Como lo afirman Pablo Ospina y Richard Lalander:

La Revolución Ciudadana de PAIS es un proceso que incluye propuestas que podríamos llamar de dessectorización y/o descorporativización de la sociedad, es decir, la abolición de los clivajes sociales, económicos, y, en este caso, étnicos, en la esfera política y, en su lugar, potenciar el ejercicio de la ciudadanía. Progresivamente, luego de la aprobación de la Constitución de 2008, la CONAIE y el gobierno de AP fueron distanciándose políticamente hasta el punto que el día de hoy las organizaciones indígenas, una parte del PSE (la llamada “Corriente Socialista Revolucionaria”) y las principales organizaciones sindicales, se declaran abiertamente en la oposición al gobierno¹³⁷.

Sin embargo, para Ospina, es necesario cuestionar en qué medida la descorporativización del Estado que impulsa AP ha alcanzado a los verdaderos grupos de poder que se encuentran enquistados en la institucionalidad del país, por ejemplo los gremios empresariales. Al respecto, el autor señala que:

Para garantizar esta “visión nacional e histórica”, el gobierno entiende que debe eliminar toda participación sectorial o gremial en el Estado. En efecto, si la finalidad de los sindicatos, las organizaciones indígenas o de maestros es defender sus intereses particulares, es imposible que defiendan intereses “nacionales” e “históricos”. Los primeros convidados a salir del comando de las instituciones del Estado, son los grupos empresariales. Los estudios disponibles muestran que de los 75 organismos con presencia “corporativa” (entre consejos, institutos, comisiones y fondos) existentes en 2007, en el 62% de los casos se trataba de la representación de

¹³⁷ Lalander y Opina, *op. cit.*, p. 17.

grupos empresariales. Esta lucha contra esa representación gremial es sistemática hasta el dogmatismo¹³⁸.

Ahora bien, es importante mencionar que los sectores de oposición al gobierno de Rafael Correa conforman, desde 2011, una coalición política denominada Unidad Plurinacional de las Izquierdas, en la cual se han aglutinado una diversidad de actores que están en contra del proyecto, partiendo de los grupos de intelectuales y organizaciones políticas que en un inicio apoyaron la llegada de Correa al poder y participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, pero que luego marcaron una oposición abierta con su gobierno. El sector que articula esta coalición es el movimiento indígena, representado en la Conaie y Pachakutik, y uno de sus principales voceros es Alberto Acosta.

Adicionalmente, la Unidad Plurinacional integra a organizaciones como el Movimiento Popular Democrático, Montecristi Vive, Partido Participación, Socialismo Revolucionario, Movimiento Participa Democracia Radical, Poder Popular, Movimiento Convocatoria por la Unidad Provincial, Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE), movimientos sociales como el Frente Popular¹³⁹, las centrales sindicales representadas en el FUT y otras

¹³⁸ Ospina, Peralta, Pablo, Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana. El Ecuador de Rafael Correa. <http://www.iee.org.ec/index-txt.htm>.

¹³⁹ En este espacio están representadas agrupaciones como la Unión Nacional de Educadores-UNE, la Federación de Estudiantes universitarios del Ecuador-FEUE, la federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador-FESE, la Unión General de Trabajadores del Ecuador-UGTE, la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador-CUBE, la Confederación de Mujeres por el Cambio-CONFEMEC, la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino-FEUNASSC, la Juventud Revolucionaria del Ecuador-JRE, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador-CUCOMITAE, la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador-UNAPE, la Unión de organizaciones campesinas del Ecuador-UCAE, Unión de Organizaciones Indígenas del Cantón Saquisilí-JATARISHUN y la Unión Académica Profesional-UNAP.

organizaciones indígenas como la ECUARUNARI (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) y la CONFEUNASSC-CNC (La Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino - Coordinadora Nacional Campesina). La mayoría de estas organizaciones tiene una esfera de acción política muy reducida, por lo cual ha tenido que aliarse al movimiento indígena.

La Unidad Plurinacional de las Izquierdas ha sido la figura mediante la cual se han convocado una serie de marchas de oposición al gobierno, articulando consignas de varios tipos, que se van acomodando a la coyuntura del país, por ejemplo, la promoción del No a la Consulta Popular de 2011, la defensa del proyecto Yasuní ITT, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y el rechazo a reformas como las citadas en el sector educativo y laboral. Dependiendo de los aires políticos se van sumado a dichas movilizaciones diversos grupos (ecologistas, movimientos de mujeres y sectores de clase media) en función de la expedición de políticas o medidas con las que están en desacuerdo.

La Unidad Plurinacional de las Izquierdas participó en las elecciones generales de 2013 con la candidatura de Alberto Acosta a la presidencia, la misma que consiguió apenas el 3% de la votación. Además, no logró presentar una propuesta conjunta para la elecciones seccionales de 2014, demostrando un reducido poder de acción y convocatoria. En tal sentido podemos decir que la única agrupación con posibilidades de convertirse en una oposición real al gobierno de AP, dada su trascendencia histórica, es el movimiento indígena siempre que recupere un trabajo de base y busque alianzas con otros sectores.

Ahora, es importante destacar que el proyecto que enarbola AP sufrió un revés considerable en las elecciones de 2014 puesto que si bien se logró la reelección de Rafael Correa, a nivel local se evidencia un avance de la derecha

que se ha venido reconstituyendo en el marco de los conflictos generados al interior de las fuerzas sociales que se han distanciado del gobierno.

AP perdió la alcaldía de Quito, la cual había ganado en la elección anterior, quedando esta vez en manos de una de las figuras más visibles de la oposición Mauricio Rodas (Partido Sociedad Unida Mas Acción, SUMA). Además, volvió a perder la alcaldía de Guayaquil, la que desde hace más de una década ha sido ocupada por el Partido Social Cristiano, representado en la figura de Jaime Nebot. En Cuenca, la tercera ciudad más grande del Ecuador, AP también perdió la elección a la alcaldía. Además, en este caso, el mayor revés fue el de la pérdida de la Prefectura del Azuay, en cuyo cargo fue reelecto Paul Carrasco (partido Participa Democracia Radical), uno de los líderes más visibles de las movilizaciones generadas en el sur del país en contra del Gobierno a propósito del conflicto antes mencionado de la minería.

No obstante, en gran medida la derrota electoral no se debe solo al avance de los movimientos y organizaciones sociales de oposición sino más bien a la incapacidad de maniobra política de AP y a los déficits que el gobierno de Rafael Correa ha generado en el incumplimiento de algunos planteamientos de índole más bien económico (este tema se revisará en el siguiente apartado). A esto habría que sumarle la presión ejercida desde los medios de comunicación, en cuyo discurso uno de los aspectos que más impacta sobre los sectores urbanos medios y la burguesía es la supuesta semejanza con el proceso venezolano, al cual se evalúa como un proyecto fallido.

En síntesis, es importante resaltar la situación que en la actualidad enfrentan las organizaciones sociales tradicionales, las cuales se caracterizan por la división de posicionamientos, que internamente van generando facciones tanto a favor como en contra del gobierno (el movimiento sindical, el estudiantil, el de mujeres, el socialista y el movimiento indígena tienen organizaciones tanto de lado

de la oposición como de lado del gobierno), mismas que ya no pueden ser conciliadas como sucedió en la década pasada por el eje de la resistencia frontal al neoliberalismo y su sistema político (democracia liberal). Esta situación mantiene a las organizaciones sociales en un estado de incertidumbre, como señala Franklin Ramírez:

Todo indica, en suma, que el combate a la «partidocracia» dejó de funcionar como nodo articulador del conjunto de fuerzas y actores que resistieron y hoy tratan de desmontar el neoliberalismo. Ciertas inconsistencias programáticas del gobierno, su unilateralismo político y el cortoplacismo de múltiples demandas gremiales desmigajan, y confrontan entre sí, al «campo del cambio». Esta confrontación exagera la incertidumbre estratégica en que se mueven todos los actores sociales y políticos en el contexto de transición hegemónica al que asiste el Ecuador. El errático comportamiento de los cívicos guayaquileños y de cierta dirigencia indígena se sitúa en este entorno de elevada incertidumbre¹⁴⁰.

Frente a esta situación, el gobierno ha buscado potenciar los mecanismos de participación institucional establecidos en la Constitución de 2008 y que tienen la finalidad de implicar a la ciudadanía (se privilegia la figura del ciudadano por sobre la del colectivo) en las decisiones concernientes a las políticas públicas. Por ejemplo, desde los ministerios de gobierno se promueve el funcionamiento de los consejos ciudadanos sectoriales (nivel nacional) y locales (nivel territorial), los cuales tienen la misión de hacer el seguimiento de la implementación y evaluación de las políticas públicas¹⁴¹.

Así, apoyándose en este mecanismo, el Gobierno afirma que se ha emprendido un proceso participativo de planificación del proyecto nacional, el cual

¹⁴⁰ Ramírez, Franklin, Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales, revista Nueva Sociedad No 227, mayo-junio de 2010, p. 100.

¹⁴¹ Ver más en Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Arts. 52,53, 54 y 55.

se reflejaría en el Plan Nacional para el Buen Vivir, documento que contiene los objetivos, políticas y metas del proyecto liderado por AP. Como espacio de seguimiento a estas políticas se promueven además veedurías ciudadanas, cuyos informes son presentados en las instancias de Gobierno de manera sistemática pero sin una claridad en la incidencia que pueden llegar a tener dichas observaciones en el cambio de rumbo de la política pública. Cabe resaltar que pese a los años que han pasado desde la aprobación de la nueva Constitución, estos espacios de participación no han logrado un funcionamiento sostenido, puesto que no entran en la lógica organizativa de los movimientos sociales, los cuales no han hecho un mayor esfuerzo por insertarse en ellos¹⁴².

Otro espacio de participación institucional abierto por la nueva Constitución es la Asamblea Ciudadana Plurinacional Intercultural para el Buen Vivir, la cual se instaló en mayo de 2013 con la participación de alrededor de 250 delegados de las asambleas locales de participación, organizaciones sociales nacionales y consejos ciudadanos sectoriales.

Esta Asamblea tiene la finalidad de convertirse en el máximo órgano de participación institucionalizada del país, así como de alcanzar una incidencia directa en la definición de los contenidos del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) y en la evaluación del cumplimiento de las políticas del Gobierno. Cabe destacar que este sí ha constituido un espacio de disputa en el cual las organizaciones que participan en el proyecto de AP han buscado quedar posicionadas de la mejor manera posible. Como lo señala Liliana Durán, coordinadora Nacional del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas y presidenta de la Asamblea Ciudadana Plurinacional:

¹⁴² Según la meta 1.8 del Objetivo 1 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, hasta el 2013 solo estaban conformados un 66,7% de Consejos Ciudadanos Sectoriales. En <http://www.buenvivir.gob.ec>.

La Asamblea es una instancia que se crea mediante la Ley de Participación Ciudadana con la finalidad de formular políticas públicas, hacer el seguimiento y vigilar el cumplimiento del PNBV. Tiene tres fuentes de representación: los consejos ciudadanos sectoriales, que son espacios ciudadanos que se han estado conformando en cada uno de los ministerios y secretarías para que acompañen todo el proceso de organización de política pública de cada sector; las organizaciones nacionales, que según la ley son las de tercer grado debidamente registradas y las de pueblos y nacionalidades; y las asambleas locales de participación. Estas últimas tienen una enorme potencia pues en cada uno de los territorios se han ido creando por iniciativa ciudadana. Para poder llegar a la Asamblea Ciudadana Plurinacional se juntan todas las asambleas existentes a nivel provincial y se nombran tres personas como representantes a la instancia nacional. Ahí tendríamos 72 personas por las asambleas locales, que es la más fuerte delegación. A eso se suman alrededor de 40 organizaciones registradas en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). La primera reunión fue casi una matanza porque habíamos muchos que no sabíamos de qué se trataba el tema y había otros que sí sabían, entonces fueron armados para tratar de cooptar el espacio. Incluso mucha gente ha perdido la perspectiva respecto a las asambleas ciudadanas ya que piensan que nos conviene más pedir que la Asamblea Nacional (es decir, el Legislativo) nos reciba como colegisladores y olvidarnos del objetivo fundamental por el que se crea la Asamblea Ciudadana que es acompañar la formulación e implementación de la política pública. Esta Asamblea tiene un enorme potencial en tanto no se pierdan los objetivos con los que se formó¹⁴³.

Ahora bien, volviendo al análisis de las organizaciones sociales, encontramos en otro eje de la arena política a los movimientos que se incorporaron directamente al proyecto de AP, tomando como propias las reivindicaciones y el programa de gobierno de esta organización. Como vimos, después de la Asamblea Constituyente y de los primeros dos años del gobierno de Correa se definieron en cierta forma los bandos que tendrían las organizaciones que habían participado en la crisis política que llevó a la conformación del

¹⁴³ En entrevista realizada el 18 de septiembre de 2015 en Quito.

gobierno, y de a poco también se establecieron los bloques en los que se repartirían las organizaciones a favor y en contra del proyecto de AP.

Antes de cerrar el presente apartado es importante señalar cuáles han sido las organizaciones que se incorporaron al proyecto de Alianza País y, en este sentido, destacar cuál ha sido el rol que estas han jugado en estos ocho años de gobierno, situación particularmente anómala en el sistema político ecuatoriano de las últimas décadas en el que varios presidentes han sido derrocados por la movilización social.

Como se mencionó en el apartado anterior, siguiendo el análisis de Franklin Ramírez¹⁴⁴, a raíz de la sublevación policial de 2010 el gobierno reconfigura su bloque de fuerzas, generando una apertura hacia las organizaciones sociales, lo cual se evidencia en los posteriores procesos electorales en donde se articulan acuerdos con dichas organizaciones, en base a lo cual se apuntalan las candidaturas de AP.

Estos acercamientos también impactan en la capacidad que mantiene el gobierno de convocar a contramarchas y otras acciones organizadas en respuesta a las movilizaciones de la oposición, para lo cual no solo se apoya en los recursos del partido de gobierno sino también en la estructura organizativa de dichas organizaciones que tienen un carácter nacional y local que, ya sea por acuerdos con el Gobierno, ya sea por un franco respaldo al proceso, han fortalecido la capacidad movilizadora del régimen.

Entre las organizaciones afines más representativas por su peso en el escenario político del país se encuentran el sindicato de trabajadores eléctricos

¹⁴⁴ En entrevista realizada el 08 de septiembre de 2014 en Quito.

(ENLACE), un ala de Central Unitaria de Trabajadores (CUT)¹⁴⁵, la Confederación de Trabajadores del Sector Público del Ecuador (CTSPEC), la recién creada la Confederación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras Autónomos del Ecuador (Cuttae), la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales; la organización de Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE), la Confederación de Estudiantes Universitarios y Politécnicos del Ecuador (CEUPE), la Coordinadora Nacional Campesina “Eloy Alfaro” y varias filiales y confederaciones indígenas que han marcado distancia con la representación nacional de la Conaie y Pachakutik.

Entonces, se puede decir, a modo de balance, que la oposición al gobierno generada desde las organizaciones identificadas con la izquierda agrupa a las figuras que salieron del gobierno, algunos líderes locales de Cuenca, a sectores de la Conaie y Pachakutik, al PCMLE y a fuerzas estudiantiles que se opusieron a la Ley de Educación Superior, a sectores de la salud producto de la firma del nuevo Código Integral Penal, a algunos sectores de mujeres que rechazan el mismo código en donde no se logró incorporar la despenalización integral del aborto y a las centrales sindicales opuestas al Código del Trabajo.

No obstante, de lado del gobierno se encuentran fuerzas similares que se disputan las dirigencias de estos gremios o que a su vez han constituido organizaciones paralelas. Es el caso de los indígenas, los estudiantes y los sindicatos que ya no constituyen un bloque homogéneo sino que evidencian posiciones disímiles entre sus diferentes filiales, por su posicionamiento ya sea a favor como en contra del proyecto de Correa.

¹⁴⁵ Integra a trabajadores petroleros, del seguro social, del seguro campesino, de los centros de salud de Pichincha, de los artesanos y una red de maestros no afín a la Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otros.

Esta situación da cuenta de las complejidades del momento que experimenta actualmente la organización social en el Ecuador, lo cual no permite hacer juicios a priori respecto a la existencia de un proceso de desmovilización en el Ecuador o de un distanciamiento definitivo entre el gobierno y los sectores sociales organizados; de la misma manera que no se puede afirmar que el gobierno de Correa ya represente “el movimiento en el poder”.

3.3. A modo de balance: avances y desafíos a ocho años de gobierno

El presente apartado está dedicado a realizar una rápida revisión, desde un punto de vista analítico, de los elementos que han caracterizado al proyecto político de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, los cuales permitan comprender el rumbo que ha tomado este proceso luego de ocho años de Gobierno, así como analizar los avances y limitaciones que a lo largo de este periodo ha experimentado dicho proyecto, para conocer cuáles han sido los resultados y las deudas pendientes del actual proceso político, así como vislumbrar algunas de las posibilidades a futuro.

Los avances y limitaciones del programa con el que nació este gobierno en el 2006, así como los desafíos que se desprenden de la nueva Constitución pueden generar algunas reflexiones respecto a las posibilidades que abre este proceso en la disputa por la hegemonía del modelo económico, político y social, y establecer cómo esto tiene una relación con los escenarios de participación y conflicto protagonizados por la organización social, así como por los nuevos actores colectivos que han emergido en el escenario político.

En tal sentido, si bien el Gobierno aun presenta muchas deudas en materia de política económica y social también podemos decir que ha avanzado bastante en términos de estabilidad económica e inclusión, sin que esto represente el

cumplimiento pleno de los desafíos abiertos por la nueva Constitución y que fueron la bandera de lucha con la que emergió este proceso y en la cual se vieron reflejadas las aspiraciones de las organizaciones sociales tanto afines como opuestas al gobierno.

Así, siguiendo las reflexiones de Franklin Ramírez podemos afirmar que el gobierno de Rafael Correa ha abierto en el Ecuador un nuevo ciclo económico marcado por un escenario posneoliberal en la medida en que incorpora políticas por un lado de recuperación de los recursos nacionales, que ahora han pasado al control estatal, y con ello los ingresos derivados de su explotación. Y, por otro, por la inclusión de medidas redistributivas de la riqueza nacional, así como como el reordenamiento de las estructuras estatales promoviendo, como lo habíamos visto antes, la búsqueda de la descorporativización del Estado en favor de establecer mecanismos distintos de participación política signados por un proyecto nacional.

Siguiendo el razonamiento del autor, la nueva Constitución de la República, la cual –como se ha dicho- contó con un bloque hegemónico de izquierda liderado por Alianza País, abrió un nuevo horizonte de posibilidades para la superación del neoliberalismo en la medida en que generó una estructura institucional orientada a la recuperación de las ganancias generadas por la explotación de recursos naturales (por ejemplo mediante la renegociación de los contratos petroleros y la definición de nuevas reglas de distribución de las regalías de los proyectos mineros), la reducción del pago de la deuda externa y la disminución de su peso en la economía, el reforzamiento de la política tributaria con una mayor afectación a los grupos de poder, la reforma institucional del Estado orientada a la descorporativización y la recuperación de su centralidad en la rectoría de la política pública.

Según Ramírez, la apertura de este nuevo horizonte institucional permitió que Ecuador se embarque en un proceso de transición posneoliberal con una

política heterodoxa de desarrollo, lo cual se refleja en la evaluación de las políticas de gobierno implementadas entre 2007 y 2011. Ese periodo evidencia ejes de ruptura como la recuperación de las capacidades de planificación y regulación del Estado, la cual se convirtió en el principal promotor del desarrollo y de la redistribución de recursos. De ello se desprenden mayores niveles de inversión productiva, la activación de la banca pública, el incremento de la inversión y la generación de proyectos nacionales estratégicos.

Por otra parte, señala el autor, existe una mayor regulación y control de las finanzas públicas, se ha promovido la integración económica regional con el impulso de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y se han priorizado políticas públicas orientadas a la equidad social como la eliminación de la tercerización laboral, la universalización de la salud, la educación y la seguridad social, el mantenimiento de subsidios como el del gas, la gasolina y los servicios públicos así como de transferencias monetarias directas a sectores más pobres mediante programas como el Bono de Desarrollo Humano¹⁴⁶.

Lo anterior se traduce en procesos de crecimiento económico y de modernización de la estructura institucional del Estado inéditos en la historia del Ecuador después del retorno a la democracia (1979) y la implementación del modelo neoliberal. Según cifras oficiales¹⁴⁷, entre 2007 y 2014 la pobreza nacional por ingresos se redujo de 36,7 a 22,5%, lo cual significaría que un millón y medio de ecuatorianos ha superado la condición de pobreza. A nivel urbano, la pobreza

¹⁴⁶ Ver más en Ramírez, Reconfiguraciones estatales en Ecuador: 1990-2011, *op. cit.*, pp. 341-375.

¹⁴⁷ Tomado del documento *8 años de Revolución Ciudadana*. Informe publicado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en enero de 2015. Versión digital disponible en <http://www.planificacion.gob.ec/biblioteca/>.

se redujo de 24,3 a 16,4%, mientras que a nivel rural la reducción registrada en ese periodo es de 61,3 a 35,3%.

En lo referente a la reducción de la desigualdad, la relación del ingreso promedio del 10% más rico respecto al 10% más pobre, se redujo de 42 veces en 2007 a 22 veces en 2014. Asimismo, entre 2007 y 2012, Ecuador disminuyó su coeficiente de Gini en 7 puntos, es decir de 0,55 a 0,48¹⁴⁸. En materia de empleo, entre 2007 y 2013 la tasa de subempleo nacional urbano cayó de 50 a 43%, mientras que la de ocupación plena subió 43 a 52%. Para diciembre de 2014 la tasa de empleo adecuado a nivel nacional registró un 49,3%, la de empleo inadecuado (en donde se mide el subempleo) se ubicó en 46,7% y la tasa de desempleo alcanzó el 4,5% (la más baja de Sudamérica). Por otra parte, el 44% de la Población Económicamente Activa se encuentra afiliada a la seguridad social, a diferencia de 2007 cuando solo el 26% lo estaba.

Respecto al gasto social, el gobierno ha reorientado las prioridades pues en 2014 destinó 8.849 millones de dólares a inversión social frente a los 1.944 millones que se destinan a la deuda externa. En 2006 el pago de la deuda ascendía a 2.180 millones mientras que la inversión social apenas representaba 1.976 millones. Así también, en materia de inversión pública actualmente se destina el 11% del Producto Interno Bruto, frente al 4,6% en 2006.

Entre las inversiones más importantes del gobierno se encuentran 10 proyectos destinados a la generación de energía renovable y cinco destinados a la infraestructura hídrica. Asimismo, se ha emprendido el programa de cocinas de inducción, el cual tiene por objetivo el cambio de la matriz energética.

¹⁴⁸ Siendo 0 el parámetro que expresa la perfecta igualdad y el 1 el que expresa la perfecta desigualdad (concentración total de recursos).

Otro tema fundamental ha sido el de la revolución educativa, la cual pretende a largo plazo dar un viraje a la economía del país, orientándola hacia la exportación de conocimiento. Para ello, se ha puesto mayor énfasis en la educación superior con la inversión en alrededor de 1500 becas para estudios de tercer y cuarto nivel en el exterior, así como la creación de cuatro nuevas entidades de educación superior que se encuentran funcionando desde marzo de 2014: la Ciudad del Conocimiento Yachay, la Universidad Regional Amazónica Ikiám, la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de Educación.

Inversiones como estas tienen como correlato una profundización en la política fiscal, la cual registra actualmente mayores niveles de recaudación tributaria. Entre 2007 y 2014 el Estado recaudó por concepto de impuestos 74.310 millones de dólares, frente a los 21.995 millones que se recaudaron entre 2000 y 2006.

No obstante, el gran reto del gobierno que aún se encuentra en ciernes es el de la transformación de la matriz productiva, mediante la cual el país pueda abandonar su patrón de acumulación que históricamente ha estado basado en la extracción de recursos no renovables. No obstante, hasta 2014 no se registran grandes modificaciones en este sentido puesto que mientras en 2007 el peso del sector primario en el PIB era de 21%, el del sector industrial de 14% y el de servicios (con bajo valor agregado) de 60%; para 2014 estos porcentajes han variado ligeramente a 19% en el primer caso, 12% en el segundo y 65% en el tercero.

Es por ello que uno de los grandes límites que ha dejado ver el proyecto de la Revolución Ciudadana es el de la transformación productiva, lo cual se evidencia en temas pendientes como el de la reforma agraria y las leyes destinadas a la redistribución de los medios de producción como el agua y la tierra. Así, para 2011

el nivel de concentración de la tierra no había variado, alcanzando un Gini de 0,79, pues el 52% de las tierras agrícolas se encontraba en manos del 5% de los propietarios¹⁴⁹. Este ha sido uno de los mayores temas de crítica por parte de las organizaciones sociales quienes identifican en este tema uno de los factores decisivos para la profundización del proceso.

A lo anterior habría que agregarle el problema no superado en materia económica de la dolarización, la cual implica la sujeción del país a una moneda extranjera, lo cual pone en riesgo la estabilidad económica del Ecuador, de la cual ha dependido su estabilidad política puesto que para mantenerla se han generado políticas que buscan fortalecer la industria nacional, tratando de evitar con ello la fuga de capitales al extranjero, manteniendo a través de ello un impulso en el fortalecimiento de la industria ecuatoriana.

Este tipo de medidas han generado la reacción de la clase media, puesto que afectan directamente su economía. También es importante destacar que es justamente este sector el que resulta más “crítico” al respecto de la política interna, sin embargo, no ha demostrado la capacidad de agruparse y generar con ello una oposición directa al proceso, no obstante, apuntala discursos de oposición como los generados desde la derecha en los cuales se enarbolan los comparativos con el proceso venezolano, al cual se le mide como un régimen autoritario y en crisis económica debido a su política interna.

Sin embargo, las reformas al sistema de gobierno han generado el fortalecimiento de la clase media y al empoderamiento de este sector pues es el

¹⁴⁹ La fuente de esta información es el informe *5 años de Revolución Ciudadana*, publicado por la Senplades en 2011. Dicha medición no fue incluida en informes posteriores. Versión digital disponible en <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/5-a%C3%B1os-de-Revolucion-Ciudadana.pdf>.

que se ve más beneficiado con políticas como las becas universitarias y el incremento de salarios.

Por otro lado, el que la economía continúe bajo el modelo de la dolarización implica que amplios sectores rurales permanezcan al margen de esta abrupta bonanza económica. Al respecto Raúl Zibechi señalaba desde el comienzo del proceso de Correa las complicaciones de mantener una economía dolarizada:

El desafío que tiene por delante el presidente Correa es darle transparencia y eficiencia al sistema político, lo que supone reformarlo a fondo. Primero debe superar la resistencia de las élites y de los funcionarios estatales. Pero en segundo lugar, debe afrontar la contradicción que supone no salir de la dolarización, que convierte al país en una colonia de la economía estadounidense, mientras enarbola un discurso de soberanía nacional y se resiste a renovar el contrato por la base de Manta. Si retorna a la moneda nacional, las capas medias se sentirán defraudadas ya que su capacidad de consumo no se podrá mantener. Pero si no lo hace, millones de campesinos y de pobres urbanos, o sea indígenas, se seguirán empobreciendo ya que sus economías fueron destruidas por la dolarización. A la larga, deberá optar entre los ganadores y los perdedores de la dolarización. Una elección difícil pero imposible de eludir.¹⁵⁰

Ya desde 2007 Zibechi distinguía los retos del proceso que Alianza País y Rafael Correa tenían por delante y que incluso hoy permanecen en gran medida como desafíos que en algunos aspectos se ven más asequibles de solucionar, mientras que en otros ni el gobierno ni los sectores críticos son capaces de vislumbrar posibles soluciones. Uno de los temas que se ven más complicados de afrontar es, sin duda, la dolarización que a estas alturas del partido representa un tema de alta sensibilidad (tabú) que ninguno de los sectores involucrados en la política económica estatal se atreve a tocar.

¹⁵⁰ Zibechi Raúl, Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento, Lima, septiembre de 2007, p.175.

Así, el robustecimiento del aparato burocrático nacional responde a un proceso de modernización profundo y necesario del Estado. Dicha modernización ha implicado en términos económicos el ensanchamiento de las clases medias y la ascensión en algunos casos de capas medias altas a pequeña burguesía. Convirtiendo dicho proceso en uno de los motores de la Revolución Ciudadana, la cual puede ser catalogada como una auténtica “revolución burocrática”, puesto que es a nivel institucional en donde evidencia mayores trastrocamientos.

Las transformaciones generadas en el aparato estatal tienen intención política de profesionalizar el servicio público, para lo cual ha sido necesario sacar de los organismos del Estado a grupos de poder. Así, entre 2007 y 2014 el gobierno ha descorporativizado 65 cuerpos colegiados, a lo que se suma la eliminación de 101 instituciones y la transformación de otras 98¹⁵¹.

Con el emprendimiento de esta campaña de descorporativización estatal también podemos explicar en términos políticos la resistencia de varios sectores sociales, quienes identifican como una amenaza la presencia del Estado en todos los organismos de control que fueron reformados, en donde los representantes del gobierno tienen un mayor poder de decisión. Esto ha contribuido a que dichos sectores se agrupen y se constituyan en oposición al proyecto.

Bajo esta lógica, podemos vislumbrar el desgaste en la aceptación del proceso, cuyas fisuras se han evidenciado en la pérdida de la efectividad que había alcanzado Alianza País como mecanismo electoral, puesto que en las últimas elecciones seccionales tuvo mayor peso el discurso de la oposición que, en las ciudades más grandes del país, orientó la preferencia electoral hacia

¹⁵¹ Tomado del documento *8 años de Revolución Ciudadana*. Informe publicado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en enero de 2015. Versión digital disponible en <http://www.planificacion.gob.ec/biblioteca/>.

propuestas no solo directamente opuestas al proyecto de Correa sino que se han ido configurando en el escenario político como “nuevos y renovados liderazgos” que en el futuro podrían incluso presentarse como contendores de Rafael Correa. Es el caso de Mauricio Rodas en la alcaldía de Quito o de Paúl Carrasco en la prefectura de Cuenca.

El avance del discurso de la oposición se complementa con los problemas que ha tenido AP para articularse con los movimientos sociales, que como hemos visto, se encuentran en un proceso de fragmentación e “incertidumbre” (como señalaba antes Franklin Ramírez¹⁵²), demostrando que el gobierno de Correa no solo tiene una oposición de derecha sino también de izquierda. Si bien en los procesos de distanciamiento entre las organizaciones sociales y el gobierno han mediado intereses particulares de liderazgos alejados del compromiso militante, también es cierto que de parte del régimen ha operado una lógica de verticalidad y una mirada burocrática desde la cual se pretende administrar la relación con estos sectores.¹⁵³

Por ejemplo, en 2013 se transformó a la Secretaria de Pueblos y Movimientos Sociales en una Secretaria Técnica de Gestión de la Política, desde la cual se ha pretendido irradiar el proceso de modernización a estos sectores bajo los mismos parámetros que en el resto de instituciones del Estado. En 2014 se expidió el Decreto 016 que establece la necesidad de que todas las organizaciones sociales se acrediten en dicha Secretaria con el fin de integrarlas a un Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y

¹⁵² Ramírez, Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales, *op. cit.*

¹⁵³ “El peso del liderazgo presidencial centraliza así la dinámica decisional y absorbe la conflictividad. A medida que las críticas de algunos movimientos han subido de tono –dirigentes indígenas acusaron a Correa de neoliberal por su apertura a la minería–, se ha hecho más visible la baja disposición presidencial a reconocer la especificidad de las dinámicas de acción colectiva autónoma”. Ramírez, Post-neoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana, *op. cit.*, p. 190.

Ciudadanas. Ello obedece a la aplicación de criterios de modernización y profesionalización que orientan el accionar del proyecto de Correa, pero que no se corresponden con las lógicas de la acción social, como lo afirma Fernando Buendía:

El Decreto 016 obedece a una visión funcionalista del Estado en la que se ve al orden como la mejor forma de encaminar las cosas hacia el mejoramiento de la vida. En esa lógica funcional nadie puede quedar afuera¹⁵⁴.

En base a lo señalado previamente podríamos decir, a modo de balance al respecto de la relación entre AP y los movimientos sociales, que existe un riesgo latente de que las organizaciones que han decidido apoyar el actual proceso pierdan su capacidad crítica, pasando del antagonismo que caracterizó el escenario político la década de los noventas, a una resubalternización, lo cual pondría en riesgo la capacidad de los sectores sociales de disputar la hegemonía del sistema, como lo advierte Massimo Modonesi,:

Más allá del debate sobre las luces y sombras de las experiencias de gobiernos progresistas en América Latina y sus proyecciones, resulta central valorar las apuestas y la intervención de los movimientos sociales en la esfera institucional. La independencia y el capital moral de las organizaciones así como la acumulación en el terreno de las identidades y las culturas políticas están amenazadas por la cooptación y la frustración. La posibilidad de un retorno a la subalternidad en un nuevo contexto se contraponen a la construcción antagonista. En este sentido, el recorrido de la CONAIE desde el levantamiento de 2001, pero en particular en el gobierno de Lucio Gutiérrez, suscitó reflexiones autocríticas y un debate particularmente significativo sobre los límites de las perspectivas de poder de los movimientos sociales en los marcos institucionales existentes. Esta experiencia ronda la coyuntura actual (...)¹⁵⁵.

¹⁵⁴ En entrevista realizada el 10 de septiembre de 2015 en Quito.

¹⁵⁵ Modonesi, Massimo, Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina.

Una lectura gramsciana del cambio de época, A Contracorriente, Vol. 5, 2008, pp. 127 – 128.

Esto es lo que critican las organizaciones que han decidido distanciarse del proceso, puesto que consideran que mantenerse adentro significaría caer en una institucionalización de la participación, así como la desmovilización de los sectores sociales y, a su vez, respaldar el proyecto que para los sectores que se constituyen en oposición representa la continuidad del modelo neoliberal (extractivismo). Y, por el otro, mucho más inclinado a la derecha, el riesgo latente de equiparar la política económica ecuatoriana al modelo venezolano y construir con ello las bases de un sistema que les reste poder. Como podemos apreciar, en el caso ecuatoriano la oposición se compone de muchas oposiciones que van desde las posturas ecologistas al discurso de la libertad de expresión y el respecto a la democracia.

Es importante destacar que para académicos como Franklin Ramírez y Fernando Buendía las organizaciones sociales ya se encontraban fragmentadas y desmovilizadas desde antes del Gobierno de Correa, debido al impacto que tuvo el neoliberalismo en el tejido social. Adicionalmente, no ven en la integración de estos sectores en el actual proyecto político una amenaza puesto que las organizaciones sociales no son entes pasivos ni acrílicos que puedan ser absorbidos por la institucionalidad sino más entran al juego político institucional a negociar de acuerdo a sus intereses. Al respecto Franklin Ramírez señala lo siguiente:

Mi hipótesis es que ya desde el gobierno de Gutiérrez se ve una crisis del movimiento indígena como actor hegemónico del campo popular y una pérdida de influencia de los movimientos sociales. Los noventa si se caracterizan por un ciclo de lucha, pero en el 2000 se produce una derrota histórica del movimiento popular, el cual quedó estancado. Entonces, a diferencia de los noventa, cuando Correa llega al poder había una crisis de legitimidad, de hegemonía e incluso de movilización, es decir, había un reflujo. Ahora, el gobierno ha hecho muy poco para salir de esta situación y la movilización sigue en crisis. Los espacios de participación abiertos por la nueva Constitución son débiles, pero están ahí. La sociedad no termina de empoderarse de ellos por la tensión que existe entre el gobierno y los grandes

movimientos sociales, la cual acaba por debilitar esos espacios. No obstante, los movimientos sociales son listos saben que si necesitan algo tienen que sentarse con el gobierno. La movilización también implica la cooperación no solo la protesta. Entonces, las relaciones son más complejas que pura movilización y pura cooptación

¹⁵⁶

Entonces, la cuestión a analizar sería cuáles son los desafíos abiertos por el nuevo escenario político que está viviendo el país, en el cual las organizaciones sociales, principalmente las tradicionales que se configuraron en una lógica de oposición a los gobiernos neoliberales, no saben cómo reestructurarse frente a este proceso, lo cual estaría generando un retroceso en los avances conseguidos con la Constitución de 2008 pues la correlación de fuerzas dentro de AP se está inclinando hacia sectores de derecha, a diferencia de los primeros años del proyecto cuando primaba una visión más progresista. Esta es una disputa que a decir de Fernando Buendía les corresponde sostener a los movimientos sociales:

Se llega al gobierno de Rafael Correa como parte de un proceso histórico de maduración de la conciencia popular que se proyecta en el ámbito político como expresión de un voto antisistema. Por ello el tipo de actores que estuvieron en la conformación del bloque recogía a todos los sectores tradicionales como el movimiento indígena, campesino, ambientalista, de mujeres, de trabajadores, a movimientos alternativos que cuestionaban la deuda externa, a movimientos de participación ciudadana y a movimientos urbanos. Todo esto se ve plasmado en la agenda de AP. No obstante, el movimiento social estaba acostumbrado a trabajar desde una lógica corporativa que el propio neoliberalismo se encargó de profundizar. La atomización se vio reflejada en el planteamiento de lógicas corporativas no solo en el proceso constituyente sino después. Esta es una de las causas más importantes del debilitamiento del movimiento social. Los actores no comprendían el momento político que se estaba viviendo y no hubo actualización de sus agendas. Los movimientos sociales y de la izquierda tradicional no hemos aprendido a jugar en el escenario en el que nos toca, generando procesos que consigan incidencia y eso ha generado un debilitamiento dentro de Alianza País. En Montecristi el brazo derecho de AP era muy

¹⁵⁶ En entrevista realizada el 08 de septiembre en Quito.

débil, estaba localizado en dos o tres figuras, ahora los ministerios de la producción, economía y finanzas están en manos de ese brazo y la izquierda está un poco recogida en planificación y en los ministerios sociales. En el bloque parlamentario todavía hay un importante número de asambleístas con una línea identificada con la izquierda, pero la derecha es más fuerte¹⁵⁷.

En tal sentido, los movimientos sociales han compuesto los dos ejes más importantes de la política contemporánea del Ecuador, en tanto que han rebasado a los partidos políticos como el mecanismo intermediario por el cual se ejercía la participación política. Y, en el medio de la coyuntura, derivada de las constantes crisis económicas, convirtieron en su escenario de acción y disputa las más altas esferas del poder. AP constituye un ejemplo contundente de la necesidad de una ruptura entre los movimientos sociales y la política tradicional, sin que con ello se den por superadas las prácticas tradicionales de corporativización o gremialización que han predominado en la historia política del país.

Tras casi 10 años del gobierno de Rafael Correa podemos decir que la participación de los movimientos sociales, si bien ha incidido profundamente en la conformación del gobierno y del proyecto que este enarbola, no ha logrado ponerse al frente del proyecto de AP y, por el contrario, ha ido retrocediendo en los puestos de poder que tenía al inicio. En su lugar se ha posicionado una “elite académica” que responde ciertamente a intereses de clase (media y alta) en la preservación de un discurso y de una forma de hacer política que gira en torno a los mecanismos tradicionales de representación.

Esto coincide con una idea de modernización y profesionalización de la burocracia que se apoya en una nueva elite de técnicos formados en el extranjero

¹⁵⁷ En entrevista realizada el 10 de septiembre en Quito.

(una nueva tecno burocracia, como la denomina Mario Unda¹⁵⁸), en muchos casos con una visión alejada de la problemática nacional, pero que tienen un gran poder de decisión, incluso frente a las exigencias realizadas por los dirigentes de movimientos sociales, puesto que cuentan con el supuesto respaldo de su formación altamente técnica. Un ejemplo de ello lo constituyen las visiones contrapuestas en la construcción del Plan Nacional para el Buen vivir, que si bien se basó en un proceso participativo que recogió aportes alrededor de todo el país a través de encuentros y talleres con sectores sociales, la decisión final respecto a sus contenidos recayó sobre los técnicos del gobierno.

Al respecto del proceso liderado por AP encontramos también una amplia gama de posturas, algunas de ellas bastante críticas y otras que responden más bien posicionamientos de índole político y que tienen como base intereses particulares o de clase. En este sentido, podemos citar el posicionamiento de Alberto Acosta, quien se ha convertido en el principal vocero de una oposición auto denominada de “verdadera izquierda”, la cual sin embargo con el tiempo ha ido sumando todo tipo de sectores y posicionamientos contra el proyecto que encabeza Correa, que no necesariamente tienen una correspondencia ideológica¹⁵⁹.

Las críticas más importantes que se han hecho a la administración del gobierno de Correa estriban alrededor de varios ejes. Como ya lo hemos señalado

¹⁵⁸ Ver Más en Unda Mario, Modernización del capitalismo y reforma del Estado. En *El Correísmo al desnudo*, Montecristi Vive, Quito, 2013.

¹⁵⁹ Podemos citar como ejemplo la reunión sostenida en abril de 2015 entre el movimiento Pachakutik y el representante de la banca y líder de la derecha Guillermo Lasso, con el fin de trabajar conjuntamente por una consulta que bloquee las posibilidades de reelección de Rafael Correa. En el encuentro también estuvieron presentes representantes del Partido Sociedad Patriótica, liderado por Lucio Gutiérrez. Diario La Hora, “Izquierda y derecha se reúnen por consulta”, Sección País, 16 de abril de 2015.

antes, encontramos, por un lado, la continuidad de modelo extractivista que no permite al país separarse plenamente del modelo neoliberal, aun y cuando el Estado haya retomado el control de muchos aspectos de la economía y la industria nacionales. Así, encontramos la participación de muchas empresas extranjeras en las actividades extractivas, base de la economía nacional, las cuales además ponen en disputa el uso de la tierra y el territorio nacional, una de las principales reivindicaciones de los movimientos indígenas y campesinos, en cuyo capital simbólico radica además las posibilidades de construir el Estado Plurinacional, un tema pendiente en la agenda del gobierno.

Por otro lado, encontramos la crítica al presidencialismo, puesto que la figura del Presidente se ha priorizado incluso por encima del propio movimiento que lo llevó al poder, y sus niveles de aceptación entre la población han permitido la promulgación de políticas muchas veces sin necesidad de negociarlas con los propios sectores involucrados, lo cual deja una imagen de autoritarismo y verticalidad en el proceso.

Además, no es posible establecer una claridad ideológica al interior de AP, cuya composición resulta relativamente confusa dado que en el movimiento encontramos la participación de las más diversas corrientes políticas (sectores progresistas y conservadores), lo cual representa una amenaza y un límite en el accionar de los sectores de izquierda que respaldan al proceso.

A lo anterior habría que sumarle, como sus propios críticos lo hacen, la hiper exaltación de la figura de Correa y los riesgos de caer en un presidencialismo autoritario que pase por encima incluso de la Constitución, en la cual teóricamente se integran las visiones más diversas que componen al Estado ecuatoriano. Bajo esta dinámica de control estatal presidencial se posibilitaría incluso el que los propios movimientos sociales se aglutinen en función del carisma de la figura del Presidente, perdiendo su potencialidad crítica. Al respecto

de este tema, el crítico más importante del proceso, Alberto Acosta, señala lo siguiente:

El bonaparatismo es una amenaza casi inherente a todo proceso que se autodefine como revolucionario. En algún momento la búsqueda de cambios estructurales deviene en una concentración de poderes. Emerge un caudillo. Y la misma lucha en contra de la opresión abre las puertas a nuevas formas de opresión...esta parecería ser la suerte inexorable de todo proceso revolucionario, que difiere de un proceso de refundación (...) sin embargo, antes de ver si esa es la realidad concreta del Ecuador, habría que preguntarse si la “revolución ciudadana” es realmente revolucionaria. La pregunta no es de fácil respuesta. Si nos atenemos a los discursos oficiales no cabría la menor duda, viviríamos en una revolución. Incluso si se hacen algunas comparaciones con lo sucedido en gobiernos anteriores, con gobernantes de marcada mediocridad política se podría aceptar que hay cambios importantes, por ejemplo en lo que se refiere a la inversión social y la misma obra pública, que se ha incrementado de manera sustantiva. Esta comparación también se podría hacer con algunos procesos a nivel internacional, especialmente en algunos países donde el neoliberalismo goza de buena salud, como es el caso de varios países europeos. Pero de allí a concluir que si se esté en medio de un proceso revolucionario hay mucho trecho, inclusive cabe indagar si en algún momento el proceso si fue revolucionario pero que posteriormente fue traicionado¹⁶⁰.

El planteamiento que nos presenta Acosta sin duda aporta elementos de análisis importantes respecto a la existencia de dinámicas presidencialistas y autoritarias dentro del proyecto de Correa, y evidencia además un debate más amplio para el caso de los gobiernos denominados progresistas, el hecho de si se trata o no de procesos revolucionarios o si son más bien reformas que dan continuidad a una estructura de poder, el Estado burgués, anulando de principio su carácter de revolucionario.

¹⁶⁰ Acosta, Alberto, El correísmo-un nuevo modelo de dominación burguesa. En *El Correísmo al desnudo*, Montecristi Vive, Quito, 2013, p. 9.

Este debate ya lo planteaba John Holloway haciendo referencia a la posibilidad de “cambiar el mundo sin tomar el poder”. El autor sostiene que la lucha de clases tiene que ser antagónica a la del capital y a cómo este hace las cosas puesto que si los movimientos sociales aceptan la invitación a participar en sus métodos, han perdido el juego antes de empezar. Para Holloway no hace diferencia quién controle Estado, pues mientras este exista el capital, es esta fuerza la que lo va a controlar en la medida en que el Estado es una forma burguesa de relacionamiento social¹⁶¹.

Así mismo, el potencial riesgo que pueden sufrir estos procesos de entrar en una dinámica de lo que Gramsci denominara *revolución pasiva*, es decir la generación procesos de modernización desde arriba, que sirven para contener la explosión de las fuerzas sociales que demandan cambios profundos al sistema hegemónico, lo cual permitiría la permanencia del sistema tal como está pero bajo una máscara de innovación pactada por las fuerzas dominantes, sin la afectación de sus intereses¹⁶².

Entonces, cabría preguntarse si realmente en el Ecuador los movimientos sociales, que innegablemente se encuentran protagonizando este proceso, tienen la fuerza suficiente para contener este riesgo que, como señala Massimo Modonesi, no es otra cosa que la resistencia del neoliberalismo a perder su hegemonía¹⁶³.

¹⁶¹ Ver más en Holloway, John, La lucha de clases es asimétrica, en Chiapas 12, México, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM-Era, 2001.

¹⁶² Ver más en Modonesi, Massimo, Subalternidad, antagonismo, autonomía: marxismos y subjetivación política, CLACSO, Buenos Aires, 2010.

¹⁶³ “Al terminarse la etapa hegemónica del neoliberalismo, la dominación neoliberal se resiste a morir. Las resistencias al cambio de época se bifurcan entre reacción y revolución pasiva: la reacción violenta que se asoma en el retorno de prácticas represivas focalizadas y la revolución pasiva que asume el rostro de gobiernos que defienden la continuidad mediante correctivos conservadores”. Modonesi, Massimo, Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época. A contra corriente. Vol. 5, No. 2, 2008, p. 139.

Si bien es cierto que no podemos afirmar que el caso del Ecuador la toma del poder estatal se haya gestado únicamente desde las fuerzas dominantes, lo cual sería desconocer el acumulado de luchas de los movimientos sociales que de una u otra medida se encuentran tratando de reconfigurarse dentro de las arenas del nuevo momento político que vive el país; también es importante reconocer que tanto dentro como fuera del gobierno los movimientos sociales han ido cediendo espacio a las dinámicas de la política tradicional, ya sea por su incapacidad de constituirse en un verdadero mecanismo de presión al interior del gobierno, ya sea por prestarse desde la oposición como plataforma a sectores de derecha que han logrado avanzar electoralmente como se pudo ver en los comicios de 2014.

En tal sentido, uno de los principales desafíos que enfrenta a futuro el gobierno de Rafael Correa es el de su propia permanencia, puesto que tras el desgaste de la figura presidencial y el avance de los discursos en pro de la democracia liberal, el próximo proceso electoral se presenta cada vez más difuso para el proyecto de AP, tanto que Correa ha tenido que dar marcha atrás en su decisión inicial de no presentarse como candidato en las elecciones de 2017, realizando incluso reformas a la Constitución para poder hacerlo.

Adicionalmente, los movimientos sociales continúan en un proceso de reconfiguración, puesto que aún no ven clara la estrategia para asumir las riendas del proceso y darle un viraje hacia la izquierda, como originalmente se demandaba. Lo que sí es claro es que mientras no alcancen una posibilidad real de disputa del proyecto, planteando dinámicas que se encuentren a la altura de las posibilidades abiertas por la toma del poder estatal, el horizonte emancipatorio que se plantearon como objetivo en un principio no va a concretarse por sí solo, es decir, sin la intervención de las fuerzas sociales que le dieron origen

Capítulo 4. La organización social en el gobierno de Evo Morales

4.1 La correlación de fuerzas en el gobierno del MAS: escenarios y sentidos de la disputa por el proyecto

Tras las movilizaciones y el complejo periodo de rebeldía política que había experimentado Bolivia durante el periodo 2000-2003, se produce un punto de quiebre institucional que da lugar al derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, asumiendo el poder el entonces vicepresidente Carlos Mesa. Este buscó el restablecimiento del Estado neoliberal, pero sin éxito dado que se encontraba bajo la presión de los movimientos sociales, los cuales habían abierto un nuevo periodo encaminado a la construcción de un proyecto contra hegemónico, basado en la Agenda de Octubre¹⁶⁴, misma que tenía como punto prioritario la convocatoria a una Asamblea Constituyente en donde se haría efectiva la refundación del Estado.

De lo anterior se destaca el largo proceso de movilizaciones que configuran las pugnas entre el Estado y los movimientos sociales en el escenario previo a la llegada de Evo Morales y el MAS al gobierno, pugnas generadas principalmente en torno al control de los recursos nacionales (los hidrocarburos), con lo cual se acrecienta el escenario de crisis del modelo neoliberal en el marco del cual se inauguró un periodo claro de antagonismo frente al sistema político tradicional, por un lado, y frente a las oligarquías que lo controlaban, por otro. Esto se tradujo en

¹⁶⁴ La llamada agenda de octubre es la condensación de las demandas populares surgidas en plena movilización política del año 2003, la cual expulsó del poder al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y se puso un alto al proyecto neoliberal. Esta se cimentaba bajo los pilares ideológicos de la nacionalización de los hidrocarburos, la conformación de una Asamblea Constituyente cuya finalidad era la refundación nacional, y la construcción de una industria propia.

la renuncia de Carlos Mesa en 2005 y la disputa por la sucesión del cargo, así como en la vigencia de las movilizaciones aún después del derrocamiento de Sánchez de Lozada. Como lo señalan Jorge Viaña, Miguel Foronda y Hernán Pruden:

La movilización nacional que expulsó a Mesa fue detonada precisamente por la aprobación y promulgación de la Ley de Hidrocarburos, e impidió que Vaca Díez [presidente del Senado] y [Mario] Cossío [presidente de la Cámara de Diputados] asumieran siquiera transitoriamente la Presidencia. Fue una movilización fundamental, se daba más de un año y medio después de la última gran movilización de masas y lo fundamental que logró fue la nacionalización y generalización a gran escala de la consigna de nacionalización de los hidrocarburos y planteó claramente la cuestión del poder en una crisis estatal terminal del Estado neoliberal (...) era evidente que los antiguos actores, particularmente los partidos políticos tradicionales ya habían marcado el final de su era porque la crisis estatal ya era terminal. Claramente se iniciaría un periodo de posicionamiento de liderazgos que en muchos casos solo eran locales, pasando al ámbito nacional. Asimismo se veía venir un proceso creativo, desde la sociedad civil, que alcanzó su mayor auge en el proceso constituyente que se iniciaría en el año 2006¹⁶⁵.

Así, en medio de la coyuntura política y el crispado escenario social que antecedió al proceso electoral de 2005, el liderazgo en las protestas que había demostrado el bloque cocalero y sindical, encabezado por Evo Morales, le allanaba al MAS el camino para su participación en la contienda electoral. Esto, en un ambiente de conflicto que demandaba como prioritario el proyecto de reestructuración del Estado, una de las principales banderas de lucha de los movimientos sociales que a su vez había hecho propia el MAS, logrando concentrar alrededor de su propuesta electoral a las diversas fuerzas sociales, las organizaciones políticas de izquierda y los sectores progresistas que protagonizaron este ciclo marcado por el antagonismo (2000-2005).

¹⁶⁵ Viaña, Jorge (Coord.), Configuración y horizontes del Estado Plurinacional, Vicepresidencia del Estado, La Paz, 2014, p. 105.

Aquí, el papel que los grupos indígenas habían jugado en las movilizaciones sociales de principios del siglo XXI (Guerra del Agua, Guerra del Gas, bloqueos de caminos, etc.) volvería a ser determinante para la campaña política que se tenía por delante. Sin el apoyo pleno de estos sectores, así como del sindicalismo y los grupos progresistas que buscaban un viraje en la política interna la historia reciente de Bolivia no se habría desarrollado con las características que hoy tiene.

Con el diseño de una nueva Constitución se busca, al menos teóricamente, una transformación profunda de las bases por las cuales se había fundado la nación boliviana. Es por ello que en esta primera etapa se puede distinguir, como uno de los elementos más potentes del proceso inaugurado, lo que Pablo Stefanoni denomina un sentido refundacional del Estado¹⁶⁶ bajo la premisa del reconocimiento legal del carácter plurinacional de Bolivia y con ello la afirmación de la diversidad de naciones que la integran.

En este sentido, como veremos más adelante en el presente apartado, uno de los elementos que mejor capitaliza el MAS es el origen indígena de su figura más destacada, Evo Morales, el cual en honor a la justicia gozaba de un amplio apoyo entre los intelectuales, incluso a nivel mundial, convirtiéndose por más paradójico que parezca, en el primer presidente indígena de un Estado compuesto por mayorías indígenas.

El apoyo electoral que logró Evo Morales fue rupturista incluso en términos de la política tradicional pues según el reglamento boliviano, el candidato ganador debía sumar más del 50% del apoyo del electorado, caso contrario, la presidencia

¹⁶⁶ Ver más en: Stefanoni, Pablo, Bolivia hoy: rupturas, inercias y desafíos, Revista de Estudios Bolivianos, Vol. 18, 2011.

pasaba al titular del Congreso. Como ya se mencionó antes, los últimos mandatarios de Bolivia tuvieron que hacer alianzas de última hora para sumar dicho porcentaje, el cual no lograban alcanzar por votación directa. En las elecciones generales de 2005 Morales ganó con un amplio 53.8%. Le siguieron PODEMOS con el 28,6%, UN (Frente de Unidad Nacional) con el 7,8%, el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) con el 6,5% y, al final, con apenas 2,2% la propuesta del MIP (Movimiento Indígena Pachakuti) de Felipe Quispe.

El triunfo electoral de Evo Morales se desprende de un largo ciclo de movilización social, particularmente encabezado por las organizaciones indígenas, el cual alcanza su punto más alto tras la victoria electoral de 2005 y que, a su vez, antecede a un periodo de confrontación entre el bloque indígena campesino y las fuerzas de derecha (oligarquía criolla) que se encontrarán apostadas en el oriente boliviano, evidenciando el componente colonial en medio del cual se disputa la construcción de un nuevo modelo de Estado. Como lo señala Gaya Makaran:

La victoria de Evo Morales de diciembre de 2005 fue la consecuencia lógica de todo un ciclo de movilizaciones y protestas indígenas-populares, como la lucha cocalera, la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” de 1990, la Guerra del Agua del 2000 y la Guerra del Gas de 2003. En fin, de un “despertar” étnico y social que año tras año, como la gota que perfora la roca, fue cambiando la escena política de Bolivia. No debe extrañarnos, entonces, que sobre su presidencia se enfocaran grandes expectativas del sector indígena popular, igual que el profundo rencor de la elite criolla perdedora. De hecho sus gobiernos desde el principio están marcados por el factor étnico, donde las reivindicaciones populares de diversa índole y el postulado de la reforma estatal se enraízan en la cultura indígena. Sin embargo, este nuevo gobierno “indio” en su intento de atender a las identidades étnicas, y buscarles un lugar digno dentro de lo nacional boliviano, “despertó” a las identidades regionales confrontadas “a muerte”, con el centralismo andino. De esta manera el proyecto “refundación del Estado”, promovido por el movimiento indígena-popular y retomado por el gobierno de Evo Morales, en vez de reconciliar las identidades en pugna,

resultó ser un detonante para el conflicto identitario a escala poco conocida en la historia reciente de Bolivia¹⁶⁷.

Cabe señalar que las elecciones generales se realizaron el mismo día que las elecciones de prefectos, las cuales se habían venido postergando desde el año pasado. En este marco se produjo un fenómeno contradictorio. Mientras que a nivel nacional se consolidaba la propuesta del MAS, que en ese momento sintetizaba la agenda de transformación abierta por la movilización social, a nivel territorial se afianzaba la elite política, que enarbolaba propuestas separatistas.

Así, mientras el MAS obtuvo el 32,9% de votos en las elecciones para prefectos, la oposición, en la cual se aglutinaron agrupaciones políticas como PODEMOS, Autonomía para Bolivia, Alianza de Unidad Cochabambina, Cambio al Cambio y Alianza Departamental sumaron el 41,6% de aceptación. Así, la vieja clase política se atrincheró en el oriente y en el sur del país, desde donde hizo resistencia al proyecto del MAS y principalmente a la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La victoria del MAS condujo a un viraje en el aparato estatal, en el cual ganaron un peso importante los movimientos sociales, sindicales e indígenas, generando un viraje en el paradigma político. Como lo señala Pablo Stefanoni, “la incorporación de sectores plebeyos a las prácticas de la democracia representativa (aunque ello fuera desde sus *habitus* corporativos o comunitarios) y los contextos internacionales favorables a las causas étnicas e identitarias (Convenio 169 de la OIT, etc.) fue incluyendo *otros colores y otros olores*, al decir

¹⁶⁷ Makaran, Gaya, Identidades confrontadas. Conflictos identitarios en Bolivia. CIALC, México, 2012, pp. 281 y 282.

del propio Felipe Quispe, en el paisaje político boliviano y en la propia institucionalidad estatal¹⁶⁸.

Entonces, podemos decir que con la victoria electoral del MAS se abrió todo un proceso de disputa del escenario estatal por parte de las clases subalternas, el cual se fue configurando gradualmente y termina de consolidarse con la aprobación de la nueva Constitución, en el marco de un enfrentamiento permanente con los poderes políticos de los departamentos que conformaban la Media Luna (prefecturas opositoras al gobierno del MAS).

En tal sentido, ya con el MAS en el poder se cristalizan dos puntos fundamentales de la denominada agenda de octubre, por un lado el decreto de la nacionalización de los hidrocarburos, expedido en mayo de 2006. Y, por otro, la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, el desarrollo de las elecciones de asambleístas y su instalación en agosto de ese mismo año.

La nueva Constitución estuvo lista en 2007, para lo cual fue fundamental como ya se ha visto, la articulación de los movimientos sociales nacionales en el Pacto de Unidad, el cual venía impulsando el proceso constituyente como un eje fundamental de la refundación del Estado. No obstante, su aprobación se constituyó en un proceso complejo de negociación política en el marco del cual se modificaron 100 artículos antes de la aprobación definitiva de la nueva Carta Magna, en octubre de 2008.

Este proceso no estuvo exento de actos de violencia e intentos de desestabilización protagonizados por los prefectos de la denominada Media Luna. No obstante, como lo señalan Jorge Viaña, Miguel Foronda y Hernán Pruden, es

¹⁶⁸ Stefanoni, Pablo, Bolivia hoy: rupturas, inercias y desafíos, Revista de Estudios Bolivianos, Vol. 18, 2011, p. 30.

con la exitosa superación de estos conflictos que el MAS logra consolidar su hegemonía política, abriendo una nueva fase en su proyecto de gobierno, que se caracterizó por la consolidación del liderazgo de las fuerzas sociales favorables al proyecto del MAS, las cuales prima el bloque indígena-campesino:

Entre agosto y octubre de 2008 se trenzan los cuatro hechos fundamentales que definen esta etapa. Primero la victoria del MAS en el referéndum revocatorio, con 67% de los votos. Segundo, la derrota de los intentos desestabilizadores en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Tercero, la masacre de Porvenir y la reacción estatal rápida y firme que fue fundamental. Fue un momento de derrota político-militar de la derecha más conservadora. Y, finalmente, la negociación parlamentaria y la viabilización de la aprobación de la nueva Constitución. El periodo final del proceso constituyente coincide con el máximo momento de tensión de fuerzas entre las que pugnan por abrir la nueva etapa estatal y las transformaciones sociales y los sectores conservadores que intentaban desestabilizar el proceso, la constituyente y al gobierno. Este es el momento de inflexión definitiva que abre las posibilidades de construcción de un liderazgo nacional mucho más pleno y profundo, debemos recalcar que recién a fines de 2008 estamos en una nueva correlación de fuerzas que permite empezar a construir las bases institucionales del Estado Plurinacional¹⁶⁹.

Una vez perfilado el contexto político y social que caracterizó la llegada a la presidencia de Evo Morales es fundamental resaltar tres aspectos importantes para comprender el desenvolvimiento de su proyecto político. Primero, los actores que integran el MAS, lo cual ciertamente ya hemos venido revisando; segundo, cómo es que estos se estructuran y, por último, una breve introducción a la figura que caracteriza este proceso, Evo Morales Ayma.

Como ya se mencionó, el MAS se origina como el instrumento político del movimiento cocalero y campesino, el cual desde mediados de los noventa se

¹⁶⁹ Viaña, *op. cit.*, p. 121.

encontraba disputando el poder por la vía institucional, tanto desde el ámbito de la movilización social, como desde los espacios de elección popular.

Si bien las siglas de MAS-IPSP se empiezan a usar oficialmente desde 2002, como instrumento político este organismo se fundó en 1995 bajo la denominación de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, en el marco de un encuentro en el que participaron la CSUTCB, la CSCB (Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia), las Bartolinas y la CIDOB, entre otras organizaciones¹⁷⁰.

El MAS tenía la función de ser un instrumento de participación y acción política principalmente de sectores del medio rural, pero con el surgimiento de las coyunturas políticas derivadas de las movilizaciones en defensa del agua y el gas fue fortaleciéndose como herramienta de articulación de los sectores movilizadas en torno al proyecto que encabezaba Evo Morales. También se perfilaba como la herramienta con la cual se impulsaron sus candidaturas a la presidencia (2002 Y 2005), así como en el núcleo de participación electoral de los movimientos sociales afines al proceso una vez constituido el nuevo gobierno.

¹⁷⁰ Como ya se mencionó antes, el origen del MAS como partido denominado de “izquierda nacionalista” se remonta a 1987 como resultado de la escisión de una corriente de “izquierda” de la Falange Socialista Boliviana. Esta se separa constituyendo un nuevo bloque político denominado Movimiento al Socialismo-Unzaguista (MAS-U). Estos buscaban ser un eje de articulación del movimiento cocalero, oponiéndose a la criminalización que en ese periodo vivía ese sector, derivada de las políticas antidrogas que Estados Unidos, en colaboración con los gobiernos bolivianos de ese periodo, implementó en el territorio. Con los años este partido fue incorporando las reivindicaciones de los grupos indígenas y como producto de estas reconfiguraciones se elabora al interior del partido un nuevo posicionamiento que busca la construcción de lo que ellos llaman como “capitalismo de estado andino”. Ver más en: Stefanoni, Pablo, Conflicto social, crisis hegemónica e identidades políticas en Bolivia: la emergencia del MAS-IPSP. Informe de investigación Clacso, Buenos Aires. 2003.

Para las elecciones de 2002 el MAS consigue posicionarse como la segunda fuerza política de Bolivia, quedando muy cerca de que Evo Morales (20.9%) ocupara la presidencia, sin embargo por un reducido 2% Sánchez de Lozada (22.9%) consigue acceder una vez más al sillón presidencial con el desenlace que ya es bien conocido. Lo destacado de este proceso es el estrepitoso asenso del MAS en la dinámica electoral, logrando superar a partidos de amplia tradición y bien consolidados como el MNR, MIR y ADN.

El MAS del primer periodo de gobierno (2005-2009) respondía a una composición relativamente diversa, pero sus núcleos de mayor consistencia recaían en el campesinado indígena (CSUTCB-CONAMAQ) y en los movimientos urbanos surgidos o consolidados del periodo de movilización de 1999-2003 (Asambleas de Regantes-FEJUVE). Este es el bloque de fuerzas con las cuales el MAS y Evo Morales se preparaban para encarar su primer mandato.

Al respecto del proceso de conformación del MAS así como de la participación de los movimientos sociales, principalmente del sector campesino e indígena, dentro de la estructura política de esta organización, Rodolfo Machaca, secretario ejecutivo de la CSUTCB señala que:

El movimiento campesino se ha constituido en un sindicalismo agrario, asumiendo la defensa de su sector y del país. Desde el año 1979 se había planteado la necesidad de refundar al país, puesto que el Estado republicano era un Estado de castas y explotador. En este sentido el movimiento campesino ha planteado al país constituir la Asamblea y refundar el nuevo Estado. Por otra parte, el movimiento campesino logró, después de muchos ensayos configurar su partido político, el cual en esa época se afianzó en sus principales líderes: Evo Morales y Felipe Quispe. Con la CSUTCB, las Bartolinas y otras instituciones nacionales a la cabeza, hemos configurado el instrumento político denominado MAS-IPSP. Somos parte del MAS pues este instrumento político ha nacido de nuestro vientre, con él hemos ido

participando en los procesos electorales, lo cual marca la decadencia de los partidos neoliberales¹⁷¹.

Es importante resaltar que el MAS ha apuntalado en la figura de su líder Evo Morales buena parte de sus éxitos electorales, cuya notoriedad se fue configurando en la década de los noventas, en el marco de la lucha contra los esfuerzos del gobierno por erradicar el cultivo de la hoja de coca, la cual no solo constituía la labor más rentable para los campesinos del Chapare, sino que al ser una herencia ancestral se consideraba de carácter sagrado, aportando un importante elemento simbólico al proceso de “indianización”¹⁷² del movimiento cocalero.

Si bien Evo Morales se destaca como líder sindical al colocarse al frente de la Federación Especial del Trópico de Cochabamba, simbólicamente una de los elementos que más ha contribuido a su posicionamiento a nivel nacional e internacional es su origen étnico, un factor determinante en el viraje del escenario político boliviano.

Evo Morales pertenece a la comunidad aymara de la marka¹⁷³ Orinoca (Oruro), desde donde salió muy joven para emigrar a la región del Chapare/Chimoré, en donde el cultivo de hoja de coca se encontraba en auge. Es importante resaltar que muchos indígenas andinos migraron en la década de los setentas a esta región puesto que presentaba mayores oportunidades de empleo

¹⁷¹ En entrevista realizada en La Paz, Bolivia, el 10 de noviembre de 2014.

¹⁷² Pablo Stefanoni explica que este proceso de “indianización” se realiza en la década de los noventas como una estrategia de articulación de la resistencia al neoliberalismo, ante el debilitamiento de la identidad obrera. Lo indio, dice, actúa como una suerte de “identidad subalterna cohesionadora de los sectores sociales enfrentados a los efectos de las políticas de libre mercado”. Stefanoni, Pablo, Bolivia hoy: rupturas, inercias y desafíos, Revista de Estudios Bolivianos, Vol. 18, 2011, p. 30.

¹⁷³ Delimitación territorial ancestral de los pueblos indígenas de los Andes.

en varios tipos de actividades relacionadas con la producción agrícola y comercialización de la hoja de coca.

Además a inicios de la década de los 80s, cuando Evo Morales y su familia llegan al Chapare, la actividad minera experimentaba una caída debido al cierre de varias minas, lo cual produjo una segunda ola migratoria hacia esa provincia. De allí el importante componente sindical que caracteriza a las luchas de los campesinos contra la erradicación del cultivo de hoja de coca (como ya se mencionó en los capítulos precedentes, el reacomodo de la economía en los años 80 estribó en el cierre de minas, lo cual obligó a modificar el estilo de vida de muchos ex mineros que se vieron obligados a migrar fundamentalmente a tierras bajas, dedicándose al cultivo de hoja de coca).

Vinculado al movimiento cocalero, Evo Morales se integró a las acciones de resistencia frente al gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), quien había dado paso a la política estadounidense de la “Guerra contra las Drogas”. Además se vinculó a las actividades realizadas por el movimiento indígena en conmemoración de los 500 años de resistencia a la conquista. En los noventa Evo Morales y el movimiento cocalero participan en las primeras elecciones municipales, aprovechando el nuevo escenario político abierto por la Ley de Participación Popular, mediante el partido Asamblea Soberana del Pueblo, espacio de convergencia que –como se ha dicho- antecede al MAS.

En esta primera incursión electoral Morales y su movimiento lograron la primera mayoría en las alcaldías rurales de departamento. Y, en las elecciones nacionales de 1997, el movimiento cocalero consiguió cuatro escaños en el Congreso, uno de ellos lo ocupó Evo Morales. Esto, en un contexto en que la lucha por la defensa del cultivo de la hoja de coca alcanzaba puntos climáticos pues el entonces presidente Hugo Bánzer Suárez había emprendido el plan para

erradicar definitivamente los cultivos, generando enfrentamientos en la zona de Cochabamba entre los cocaleros y las fuerzas policiales.

En enero de 2002, Evo Morales es expulsado del Parlamento bajo la acusación de liderar acciones violentas que dejaron cuatro oficiales muertos, en el marco de lo que se había denominado la “Guerra de la Coca” en el departamento Cochabamba. Esto generó la reacción no solo del sector cocalero sino de todo el movimiento indígena campesino, una vez que Felipe Quispe Huanca, líder de la CSUTCB expresara su solidaridad con Evo Morales, llevando al conflicto a proporciones de carácter nacional.

En febrero de 2002, luego de varios bloqueos de caminos protagonizados por comunidades quechuas y aymaras convocadas por la CSUTCB y los cocaleros, el gobierno levanta las medidas de presión contra los manifestantes y llega a un acuerdo con los cocaleros, lo cual decanta en la ruptura entre los dos principales líderes del escenario del conflicto, Evo Morales y Felipe Quispe, puesto que los cocaleros levantaron el bloqueo, mientras que los demás sectores, convocados por la CSUTCB lo mantuvieron.

Como hemos visto, esta diferencia de criterios se mantuvo en acciones posteriores como la Guerra del Gas, volviendo irreconciliables las posturas entre estos dos dirigentes, escisión de la cual salió fortalecida la figura de Morales. Como lo afirman John Crabtree y Ann Chaplin:

Los movimientos sociales, durante este proceso, tenían dinámica propia, aun cuando en muchos de ellos estaban involucrados partidarios del MAS. De hecho, en la “guerra del gas” de 2003 (...) Evo Morales no estuvo presente. No obstante, en términos electorales Morales pudo capitalizar la atmósfera del descontento y articular un discurso que era compatible con la búsqueda de alternativas a la política hasta entonces dominante. Hubo otros dirigentes del movimiento de protesta que no lograron proyectar una popularidad que sobrepase el estrecho interés de grupo. Es el

caso de Felipe Quispe, el dirigente campesino del “nacionalismo aymara” que estaba detrás de diversas protestas en el Altiplano en el periodo posterior a la Guerra del Agua. El interés que fue capaz de crear Quispe se limitó a su propia circunscripción étnica, mientras que Morales obtuvo cerca del 54 por ciento de los votos nacionales en las elecciones de 2005, Felipe Quispe apenas obtuvo el 2%¹⁷⁴.

De hecho, en este escenario y las posteriores acciones que llevaron a la crisis general del sistema político institucional en Bolivia, se pueden distinguir dos posicionamientos que constituyen un antecedente de las fracturas internas al interior del proceso, una vez que el MAS llega a la Presidencia. Por una parte, la postura de Morales y su movimiento, quienes asumen la toma del poder del Estado como estrategia para transformar el sistema y, por otra, la de Felipe Quispe y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), con una visión más radical orientada a la reconstrucción del Estado indio. Como lo señala Raquel Gutiérrez Aguilar:

A diferencia de la lucha de 2000, en 2003 había una clara polarización entre dos posturas políticas confrontadas que dividían al conjunto de los movilizados: por un lado, la postura de Evo Morales y el MAS, que propugnaba por reformas parciales en la estructura estatal, en lo que avanzaba la acumulación de “capacidad política electoral”; y, por otro, la postura de transformación social radical propugnada desde las comunidades aymaras, enredada con las pugnas partidarias al interior del MIP de Felipe Quispe, de modo que si bien lo profundo del malestar social se expresaba coreando la consigna “guerra civil” y hablando de la posibilidad de “Refundar el Quyasuyu”, no se ponían en práctica enérgica y explícitamente los contenidos de la transformación política anhelada¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Crabtree, John, Chaplin Ann, Bolivia: procesos de cambio, OXFAM, CEDLA, Fundación PIEB, La Paz 2013, p. 20.

¹⁷⁵ Gutiérrez Aguilar, Raquel, Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005), Sísifo ediciones, bajo Tierra ediciones y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vález Pliego de la BUAP”, México DF, 2009, p. 249.

Tras los confrontaciones y las divisiones de liderazgos entre los sectores progresistas y de izquierda que se posicionaban a la cabeza del proceso de reorganización nacional y que a la postre llevarían a la consolidación de Evo Morales como su principal figura, no podemos pasar por alto que uno de los elementos que impulsó el despunte político del MAS y su dirigencia es, como ya lo mencionamos, un posicionamiento menos radical y, de alguna forma, más abarcador al respecto de la realidad política que tenía que transformarse (a diferencia de la propuesta de Quispe).

Dicho posicionamiento a decir de Pablo Stefanoni, tiene tintes de carácter mayormente nacionalista, aunque sin dejar de lado una importante orientación étnica, lo cual puede explicarse por la configuración misma de la historia boliviana, en el marco de la cual emerge la figura de Evo Morales:

Evo Morales no se formó políticamente en el indianismo/katarismo ni en las regiones aymaras duras sino en el Chapare, una geografía de migrantes, “mestiza”, donde el antiimperialismo es sentido común, con fuertes tradiciones campesinistas entre los productores de coca y con una notoria influencia de la “vieja izquierda”. Una zona ubicada en la carretera troncal Cochabamba–Santa Cruz con fuertes vínculos con el mercado y en la que a menudo predominan las identidades de matriz productiva/corporativa (campesino–cocalera) por sobre las étnico–culturales. De hecho, el MAS representa un tejido socio–antropológico estructurado alrededor de economías familiares y una ideología en gran medida heredera del nacionalismo popular y de sus clivajes característicos (nación/antinación, pueblo/oligarquía), aunque se trata sin duda de un nacionalismo más “indianizado” que el de los años cincuenta. Por ello, el “evismo” y el MAS fueron capaces de desbordarse al conjunto del país, a diferencia del MIP —el partido de los comunarios aymaras— que quedó limitado a la región aledaña al lago Titicaca y algunas zonas del Altiplano¹⁷⁶.

¹⁷⁶ Stefanoni, Pablo, Bolivia hoy: rupturas, inercias y desafíos, Revista de Estudios Bolivianos, Vol. 18, 2011, p. 29.

Así en un momento dado, Morales y el MAS se presentan como la mejor vía para articular a todos los sectores que componen la sociedad boliviana, en función del proyecto de refundación del Estado, vía Asamblea Constituyente. Es por ello que la conformación de la Asamblea así como la posterior aprobación de la Constitución, una vez superados los intentos de la derecha conservadora y regionalista de desestabilizar el proceso, constituyen el mayor logro del primer periodo de gobierno de Morales, pues permiten la consolidación del sector indígena campesino en la dirección del Estado, abriendo un nuevo periodo para el gobierno del MAS a partir del cual empieza una real disputa por la implementación del nuevo modelo, pactado en la Constitución.

Durante este proceso el gobierno de Evo Morales enfrentó una ardua resistencia por parte de los sectores más conservadores de la sociedad boliviana, aglutinados en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, El Pando y Beni (la Media Luna), los cuales apelaron a un discurso, primero clasista y después racista, a partir del cual se articularon ideológicamente en oposición al proyecto del MAS.

Si bien estos sectores sufrieron un revés político y una derrota simbólica al no conseguir que triunfara su proyecto autonómico, ni obstaculizar la aprobación de la nueva Constitución, todavía mantienen un importante poder de veto en la economía boliviana, constituyéndose en el bloque que representa a los sectores de la oligarquía tradicional. Además habría que resaltar que el conflicto de la denominada Media Luna, también revela una confrontación de carácter étnico cultural, que sobrepasa en muchos casos las fronteras de lo económico y lo político, poniendo en primer orden una serie de reivindicaciones que, bajo el signo de la búsqueda de la “autonomía”, enmascara un discurso abiertamente racista. Al respecto de la construcción identitaria de estos sectores. Sobre aquello, Gaya Makaran señala lo siguiente:

El núcleo central del cruceñismo es la idea sobre la existencia de una identidad específica llamada cruceña o camba y une a todos los habitantes de la región. En nombre de esta se lleva la lucha autonomista, se justifica el rechazo hacia el gobierno central y su proyecto, se moviliza en contra de los inmigrantes andinos. En realidad, como hemos visto, no es la identidad la que provoca el conflicto o hace ineludible la confrontación, son los intereses económicos y políticos concretos a los que la identidad solo sirve de tapadera. No podemos ignorar, sin embargo, que aquella identidad manejada adecuadamente por la elite ha logrado movilizar a las masas sustancialmente ajenas y contrarias a los intereses elitistas. Además, la misma elite obsesionada por la búsqueda de raíces, acabo creyéndose su propio discurso. Los ejes alrededor de los cuales se articula esta identidad polarizada son, por lo menos tres: geográfico, político y étnico-cultural. Los tres recurren a la diferencia, entendida en términos de conflicto y oposición, donde el oriente se ve enfrentado con el occidente, el centralismo estatal con el proyecto de autonomías departamentales y lo camba con lo colla¹⁷⁷.

Es importante resaltar que durante el primer mandato de Evo Morales se generó un recambio de las elites en el poder, pues por un breve periodo de tiempo los sectores burgueses y oligárquicos pasaron a conformar una suerte de sector subalterno, dado que habían sido desplazados en este breve lapso de la principal órbita del poder, conducida históricamente de manera catastrófica y con una profunda insensibilidad política, en particular en el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Por tal motivo, si bien este sector no comprende propiamente una clase subalterna, si enfrentó brevemente un proceso que podríamos considerar como de subalternización, en el cual buscó establecer una oposición violenta y organizada (el conflicto de la Media Luna). Lo que al final nos revela esta etapa de la historia contemporánea boliviana es el sustento ideológico de los sectores oligárquicos que al verse completamente derrotados mostraron su aspecto más retrograda (racista, clasista, etc.).

¹⁷⁷ Makaran, *op. cit.*, p. 236.

Así, el primer mandato del gobierno del MAS revela que en ese momento histórico particular el universo de posibilidades de acción estaba abierto, es decir, existía una amplia expectativa de los sectores populares de conformar un proyecto alternativo de gobierno, mismo que para hacer honor a la justicia se ve reflejado en la nueva Constitución, que pone el énfasis en el reconocimiento legal, con todas sus implicaciones, de la plurinacionalidad.

Sin embargo, la necesidad de continuidad del proyecto del MAS lleva a la insólita conformación de pactos de alianza entre los sectores oligárquicos (Media Luna) y el nuevo gobierno que supuestamente buscaba erradicar la primacía de estos de la vida política del nuevo estado boliviano. Esto ha despertado dudas al interior del bloque de fuerzas sociales que apoyan el proceso y del bloque de gobierno respecto a las posibilidades reales del gobierno del MAS de construir un verdadero proyecto alternativo.

En este sentido Luis Tapia señala que las contradicciones se encontraban ya de origen en la expectativa de creer que con el MAS se daría una composición diferente de la organización del poder, el cual –dicho sea de paso- formaba parte de la estructura política tradicional. Aquí se resalta su papel como instrumento del sistema político para canalizar las distintas fuerzas aglutinadas en contra del proyecto neoliberal y los sectores oligárquicos, misma que a su vez le permite consolidarse como la primera fuerza política. Al respecto Tapia señala lo siguiente:

En el mismo momento en que la forma de partido articulada por algunas de estas fuerzas está sirviendo para cuestionar el monopolio de la clase dominante y sus organizaciones partidarias, opera ya la sobre determinación que consiste en que los partidos, sobre todo electorales, forman parte de los espacios de monopolio y, en ese sentido, de la reproducción de las estructuras de dominación. Por un tiempo se componen dos movimientos, es decir, se despliegan paralelamente. Por un lado, este proceso por medio del cual el MAS se vuelve una forma de canalizar un voto contra el

modelo económico y político neoliberal y los sujetos que lo administraron, organizaron, reprodujeron y definieron, no solo para campesinos e indígenas que fueron parte de la fundación del partido sino también para otros sectores e individuos que estaban contra el modelo neoliberal y a favor de un cambio en la dirección del país que responda en mayor medida a intereses populares y nacionales. A la vez se puede ver desde el inicio que el más desarrolla la otra veta contenida en la forma partido, (...) que es la reorganización del monopolio de la representación y de la política¹⁷⁸.

Siguiendo el planteamiento de Tapia, una vez que el MAS se consolida como la primera fuerza política y asume plenamente el control del aparato del gobierno, también retoma con este las características propias del sistema político precedente. En este sentido es muy importante recalcar que el accionar del gobierno en este periodo se sitúa aún en un punto de indefinición política al respecto de las fuerzas de derecha, centro e izquierda que se disputan el proyecto.

Además, una vez que el MAS se consolida como bloque de poder comienza actuar como tal y, a la vez, responde al sistema de intereses del aparato institucional ya constituido en el que la clase política previa, si bien se ve afectada no desaparece y, en muchos casos, se reagrupa o se integra en la constitución de amplios bloques de alianza. Por tanto, sería ingenuo obviar el posterior actuar del gobierno con relación a las demandas de los sectores populares que lo integran. Esta falta de sensibilidad política va a ser clave para comprender los distanciamientos con los movimientos indígenas de tierras bajas aglutinadas en la CIDOB.

El distanciamiento de varias organizaciones sociales del gobierno constituye la principal característica del segundo mandato de Morales, momento que se caracteriza, en primero lugar, por un mayor protagonismo de los cuadros

¹⁷⁸ Tapia, Luis, El Estado de derecho como tiranía, CIDES-UMSA, La Paz, 2011, p. 65

técnicos al interior del partido de gobierno por sobre los representantes de movimientos sociales, así como por un mayor peso de las disposiciones de Morales en las decisiones del partido. Y, en segundo, por los conflictos, principalmente con sectores indígenas de tierras bajas debido a la expedición de leyes y políticas que se contraponen a sus intereses.

Siguiendo el razonamiento de Jorge Viaña podemos decir que una vez derrotados los proyectos desestabilizadores de los sectores de derecha, el MAS queda consolidado, como se había dicho, como la principal fuerza política de Bolivia, lo cual le otorga la capacidad de llevar adelante la elaboración de las leyes necesarias para la implementación de la nueva Constitución, dos de las cuales resultan de una alta sensibilidad, principalmente para los sectores indígenas y campesinos, La Ley de Órgano Electoral Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías, cuyos contenidos marcan el inicio del distanciamiento entre los indígenas y el gobierno.

Este análisis nos ayuda a ubicar el trasfondo de los actuales fraccionamientos tanto al interior del bloque de gobierno, cuanto en el seno del bloque de fuerzas sociales que lo sustentan, en donde se evidencian a su vez las contradicciones y límites que presenta la construcción del Estado Plurinacional. Los temas en disputa, señala el autor, giran en torno a la cuestión de las autonomías indígenas, en el marco de un Estado que no deja de ser liberal, así como a los conflictos de tierras, que no solo se libran entre las clases terratenientes y los indígenas, sino principalmente entre los grupos étnicos de tierras altas y bajas.

Así, a partir de 2008, la principal fuerza de oposición ya no se ubica en los sectores conservadores de la Media Luna sino al interior del propio proceso. En 2010 se produce el primer conflicto con la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), en el marco de la resistencia a la construcción de una

carretera al interior del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS).

Dicha carretera constituye un intento de los colonizadores para ganar mayor territorio al interior del parque, lo cual pone de manifiesto el problema de la regulación del uso de las Tierras Comunitarias de Origen, en el cual se habían visto beneficiados los sectores de tierras altas, principalmente cocaleros, motivo por el cual parte del conflicto fue la exigencia por parte de los indígenas del oriente de que se eliminen los cultivos de hoja de coca en los parques nacionales, todo lo cual deja ver el posicionamiento de una nueva elite indígena al interior del gobierno. Al respecto Jorge Viaña sostiene que:

La principal demanda estaba vinculada al delicado tema de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO's). Se exigía la aprobación de mecanismos para respetar las TCO's. La ley electoral y la ley sobre autonomías del gobierno detonaron este primer conflicto, que mostró en pequeña escala lo que pasaría con el conflicto del TIPNIS un año después, en el 2011. La forma concreta de implementar la constitución se convirtió en el punto de partida del alejamiento del gobierno y organizaciones indígenas de tierras bajas. De hecho, el conflicto sobre el camino a través del TIPNIS fue puesto en el tapete del debate como algo secundario (en este primer conflicto del 2010). Los dirigentes del TIPNIS se incorporaron a la marcha con sus demandas concretas, de rechazo a la construcción de la carretera, pero en especial denunciando la expansión de los cultivos de los colonizadores cocaleros, o sea, un problema de disputa de territorios. (...) Por estos antecedentes tan importantes es que toda la cadena de desatinos y errores en todo el proceso de desarrollo del proyecto de construcción de la carretera por medio del TIPNIS, incluida la represión en Chaparina a la VIII marcha indígena de septiembre del 2011 y los excesos policiales, han configurado un nuevo escenario político, en el que el aspecto fundamental es esta

fisura del bloque de poder en el gobierno y en el bloque social de sostén del proceso¹⁷⁹.

A partir de estos conflictos se genera una nueva polarización de fuerzas al interior del MAS, en donde quedan por un lado, como afines al gobierno, la CSUTCB, las Bartolinas y el movimiento de Colonizadores y, por otro, ya como oposición declarada, la CONAMAQ y la CIDOB. Cabe resaltar que ante este fraccionamiento la respuesta del gobierno, en un escenario más contemporáneo, ha sido la generación de dirigencias paralelas, afines al poder, al interior de las organizaciones disidentes.

Otro conflicto de importancia que esta vez tocaba intereses de sectores de clase media fue el causado por el intento de subir los precios de los combustibles hasta en un 80% en 2012, lo cual fue denominado como el “gasolinazo” y frenado por la fuerza de la movilización social¹⁸⁰. Ello, sumado a la vigencia de los conflictos en torno a la tierra, así como el rechazo a proyectos de carácter extractivo y la exigencia del consentimiento de los pueblos indígenas para el ingreso a sus territorios, ha profundizado el distanciamiento con los movimientos sociales, principalmente indígenas, y otros sectores de clase media, lo cual ha dificultado un verdadero ejercicio de cogobierno, el cual fue emprendido con el sector indígena –campesino que llevó al MAS al poder.

Es por ello que este tipo de conflictos, según señala Maristella Svampa, ponen sobre el tapete el debate respecto a la necesidad soslayada de imprimir

¹⁷⁹ Viaña, Jorge, Estado plurinacional y nueva fase del proceso boliviano. En Thwaites, Mabel (Editora), *El Estado en América Latina: Continuidades y Rupturas*, Santiago de Chile, Arcis-CLACSO, 2012, pp. 378 y 379.

¹⁸⁰ Ver más en Agencia de noticias Reuters, “Crisis en Bolivia por el Gasolinazo”, 29 de diciembre de 2010.

pluralidad en el proceso de construcción de la hegemonía, en el marco del esquema del “mandar obedeciendo”¹⁸¹.

Esto no quiere decir que esta posibilidad no siga abierta al interior del movimiento, puesto que a diferencia del caso ecuatoriano, en donde Alianza País se crea como un instrumento electoral para impulsar la candidatura de Rafael Correa en 2006, con la posterior inclusión de las fuerzas sociales y progresistas a dicha propuesta electoral. En el caso boliviano el proyecto político del MAS se concibe como un horizonte de autorepresentación en el gobierno de los sectores sociales subalternos que, bajo el liderazgo del movimiento campesino e indígena, se insertaron en la esfera de lo político institucional para disputar la hegemonía del poder, como un escalón hacia la construcción de un nuevo Estado de carácter plurinacional.

La cuestión es que este proyecto no está exento de las contradicciones que entraña el intentar desmontar a la institucionalidad liberal desde sus mismas estructuras. Respecto a los límites que se evidencian al interior del bloque de gobierno en torno a la posibilidad de cogobernar entre la dirigencia política y la dirigencia social, Pablo Stefanoni señala que:

A diferencia de Venezuela y Ecuador, la boliviana es una sociedad densamente organizada, por lo que bastaría –según la concepción oficial– con incorporar a las organizaciones sociales al Estado; de allí que se utilice la figura del “gobierno de los movimientos sociales” para definir su identidad y que la nueva Constitución aprobada en 2009 incorpore el “control social” como la fiscalización de las organizaciones sociales sobre la gestión estatal. De esta forma, se consolida una suerte de democracia corporativa en la que diversas organizaciones sindicales y territoriales (a las cuales el partido de gobierno está relativamente subordinado) se transforman en el canal de selección para ocupar cargos en el gobierno, especialmente a partir de las segundas líneas del Estado (...). No obstante, la apuesta

¹⁸¹ Svampa, Maristella, Bolivia, modelo 2013, en perspectiva, www.sinpermiso.info, p. 4.

original de nombrar a los funcionarios bajo consulta con las organizaciones sociales se desvirtuó al conocerse que algunos dirigentes vendieron “avales” en varias oportunidades, a lo que se suma el bajo desempeño de varios ministros puestos en sus cargos por “las bases”, que mostraron escasa capacidad de gestión y/o un exagerado apego corporativo. En ese marco, se observa una vuelta silenciosa a cierta lógica “legal-racional” weberiana –con los límites que tal lógica de gestión estatal encuentra históricamente en Bolivia– en detrimento del movimientismo social; y el “cogobierno” con las organizaciones está relegado a algunos viceministerios, como Coca –en permanente conflicto–, Defensa Social (control del narcotráfico) o Microempresa. Contrariamente, el área económica del gabinete fue prudentemente “blindada” y su acceso fue vedado a las organizaciones sociales¹⁸².

Ahora, es importante destacar que pese a las contradicciones al interior del bloque social en el que se sustenta el gobierno, el MAS no ha perdido su capacidad de canalizar el apoyo electoral lo cual ha quedado demostrado en varias elecciones mediante las cuales se ha asegurado la continuidad al frente del proyecto del principal líder del movimiento, Evo Morales. En 2009, el dirigente cocalero alcanzó la reelección con el 64% de los votos. Además, el MAS obtuvo 88 de los 130 legisladores que conforman la cámara de diputados, y 26 de los 36 que integran el Senado.

De forma similar, en 2014 el líder del MAS nuevamente fue reelegido, triunfando en las elecciones generales con una amplia mayoría del 61%. Aunque el porcentaje es menor al de la pasada elección, cabe resaltar que la candidatura de Evo Morales se impuso en ocho de los nueve departamentos del Estado boliviano. Adicionalmente, el partido de gobierno alcanzó, de manera muy similar a las elecciones anteriores, 88 de los 130 escaños de la Cámara de Diputados y 25 de los 36 que conforman el Senado¹⁸³.

¹⁸² Stefanoni, Pablo, Estado de la democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador, OSAL Nro. 30, noviembre de 2011, p. 95.

¹⁸³ Ver más en: Tribunal Supremo Electoral de Bolivia <http://www.oep.org.bo/>

Derivado de la consolidación política del MAS, en el escenario social encontramos el impacto que a lo largo de un poco más de diez años ha tenido, en términos de consolidación del modelo político, este proyecto, fundamentalmente en los sectores de base que históricamente han constituido a los movimientos sociales. La capacidad de desmovilización que algunas políticas han tenido, fundamentalmente en el sector campesino (indígena), y una dinámica de concertación con los sectores económicamente más poderosos (oligárquicos), ha permitido al gobierno tener una continuidad relativamente estable en este periodo de tiempo, la cual se ha visto acompañada de un periodo de bonanza económica derivada en gran medida de las políticas de “renacionalización” de los recursos naturales, principalmente el gas y los hidrocarburos.

Así, a modo de conclusión podemos decir que estos casi diez años del gobierno del MAS, que se han afianzado fundamentalmente sobre la figura de Evo Morales, despiertan dos posicionamientos que dominan en el ámbito académico. Por un lado, encontramos una postura completamente acrítica, la cual es incapaz de distinguir las contradicciones de origen que tiene el proyecto así como también las malas decisiones políticas del gobierno (represión de las movilizaciones indígenas) que han estado acompañadas en gran medida por el repunte del corporativismo estatal y la generación de políticas asistencialistas, así como también la cada vez más evidente consolidación de un modelo presidencialista con tintes “autoritarios”; sin que con esto nos coloquemos en el otro extremo, para el cual la faceta política actual que vive Bolivia constituye una continuidad plena y profundización del modelo neoliberal, además de la anulación total de las fuerzas sociales cooptadas por el gobierno o perseguidas por este.

En este sentido, para comprender las complejidades de este proceso es importante analizar también cómo se han ido modificando las dinámicas de los movimientos sociales una vez que han entrado a disputar el poder en la arena

estatal, lo cual será analizado en el siguiente apartado como un elemento indispensable para comprender la estructura social que sostiene al proyecto y que, si bien en un momento se aglutinó en torno al MAS como partido de gobierno, este instrumento político se ve sobrepasado por la densidad organizacional que ha tenido Bolivia históricamente y que se evidencia en las contradicciones internas que se han ido generando en el marco de la implementación del proyecto, cuyo punto de referencia es la nueva Constitución del Estado como elemento que condensa la agenda social y como potencialidad política y legitimadora del proyecto del MAS.

4.2. Organizaciones sociales y Estado: entre la institucionalización y el antagonismo

Como ya se había mencionado, la composición que va a caracterizar la administración pública y la distribución de los cargos del mismo orden, durante el primer gobierno de Evo Morales, responde a la imperante necesidad en el interior del MAS de repartir los espacios de poder entre los distintos sectores que le apoyaron y le reconocieron como el principal interlocutor de lo que pretendía ser un gobierno dirigido por los movimientos sociales y que, al menos teóricamente, respondería a las demandas fundamentales que impulsaban dichos movimientos.

Estos sectores, en los cuales el sindicalismo tiene un importante peso político, constituyen lo que Pablo Stefanoni denomina “redes de confianza” incorporadas al Estado, en el marco de un proceso de democratización de largo aliento. “En este punto es necesario resaltar que en Bolivia predomina una concepción de ciudadanía mediada, o más bien subordinada a identificaciones corporativas (sean éstas de carácter gremial, étnico o territorial), y es desde allí

desde donde debe leerse la autoidentificación de la actual administración como un ‘gobierno de los movimientos sociales’¹⁸⁴.

Esta característica es importante porque reflejará la composición política y cultural del nuevo gobierno, en el cual los grupos indígenas, confederaciones obreras y sectores urbanos organizados (FEJUVE, por ejemplo) serán los elementos más distintivos de la composición política de los gobiernos del MAS y pasarán a constituir nuevas elites de poder. Aquí es importante resaltar la ausencia o poca participación de los indígenas de tierras bajas, así como de otros sectores no incorporados a los grandes colectivos sociales antes mencionados (GLBT, jóvenes, mujeres, etc.).

En este sentido, la representación indígena en el gobierno fue uno de los elementos que más creció en términos proporcionales en referencia a otros sectores que integraron las movilizaciones que llevaron al MAS al poder. La participación del sector indígena campesino, uno de los de mayor peso político en términos de conformación sindical (CSUTCB-COB), así como en cuestión de movilización social, constituye un buen ejemplo de la reconfiguración de las estructuras de poder al interior del gobierno, el cual se verá marcado en su primera etapa por la imperante necesidad de defender la continuidad del proyecto, en particular, y como ya lo mencionamos, ante la intentona desestabilizadora de los sectores conservadores y oligarcas (Media Luna).

Así, uno de los puntos clave a resaltar es el de la composición de la administración pública, en la cual el sector indígena que es favorable al gobierno

¹⁸⁴ Stefanoni, Pablo, Bolivia hoy: rupturas, inercias y desafíos, Revista de Estudios Bolivianos, Vol. 18, 2011, pp. 32 y 33.

(tierras altas), tendrá una participación nunca antes vista en la historia política boliviana. Al respecto Daniela Franco señala que:

Entre los nuevos funcionarios públicos del Estado Plurinacional han aparecido masivamente hombres y mujeres cuya principal característica no se avoca únicamente a la formación profesional o a la pertenencia al partido político de turno, sino al hecho de formar parte de una base orgánica sindical y por lo tanto de haber adquirido una amplia experiencia política, previa al ejercicio de la función pública. Históricamente, las bases orgánicas-sindicales se conformaron como un movimiento indígena-campesino estructurado para defender sus derechos y cuestionar las políticas excluyentes del Estado colonial, en este sentido, apareció una oposición “natural” entre las organizaciones de base y el aparato burocrático estatal. Sin embargo, el proceso político actual rompe la oposición “natural” entre las organizaciones sociales y el aparato burocrático, gestando así una importante imbricación política entre ambos sectores. Si bien la incorporación al estado de miembros provenientes del mundo indígena-campesino no es reciente, dado que a partir de la aplicación de la Ley de Participación Popular ellos habrían comenzado a poblar los gobiernos municipales del país, hoy presenciamos una inserción cuantitativamente más extensa e institucionalmente más generalizada respecto a la primera. Esto se produce (...) porque el Estado Plurinacional no es la causa de la incorporación de los sectores populares a la política, sino que es más bien el resultado del protagonismo simbólico y de la movilidad social del mencionado sector¹⁸⁵.

Entonces, una de las preguntas que surge casi de inmediato tiene que ver con la capacidad que este sector pueda o pudo llegar a tener para superar la influencia colonial sobre la cual se montó el Estado y por ende las instituciones que lo componen, es decir si estos funcionarios tienen la capacidad de establecer un giro decolonial.

¹⁸⁵ Franco, Daniela, Subjetividades plurinacionales, En Soruco, Ximena (coord.), *Composición social del Estado Plurinacional. Hacia la descolonización de la burocracia*, Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado, La Paz, 2014, p. 116.

La respuesta a este planteamiento será interesante al menos en términos administrativos, pues en el gobierno de Evo Morales se crea el Viceministerio de Descolonización¹⁸⁶, único en la región, el cual tiene como finalidad superar los elementos culturales que son herencia de la época republicana y que se extiende hasta la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. A esto se suma toda una institucionalidad creada después de la aprobación de la nueva Constitución y destinada a viabilizar la construcción del Estado Plurinacional, partiendo de la reconstitución de los elementos de la matriz cultural indígena, desarticuladas por el proceso de colonización, como lo señala Xavier Tito, coordinador del Viceministerio de Descolonización:

El Estado Plurinacional de Bolivia y su proyecto no son la continuación mejorada de la república, es la reconstitución de esta otra forma de Estado que siempre ha existido pero de forma clandestina. Con la nueva Constitución las naciones indígenas ya no son el otro que hay que atender sino que son un socio del Estado, son el mismo Estado. Por citar algunos ejemplos la ministra de desarrollo rural es una indígena de tierras bajas y el viceministro un indígena de tierras altas. De hecho en toda la estructura del área de desarrollo rural están presentes los indígenas que son propuestos por sus organizaciones y nombrados por el Presidente. Otro ejemplo: se quiere sacar de la clandestinidad a la medicina tradicional y para eso se ha expedido la Ley de Medicina Tradicional para ejercerla de forma legal. La entidad de gobierno que gestiona este proceso es el viceministerio de Medicina Tradicional, en cuya cabeza esta un médico tradicional. Así también en el campo de la justicia indígena, la viceministra de la Gestión de la Política de Reconstitución de la Justicia Indígena Originaria Campesina en Bolivia es una señora de tierras altas. Entonces, ya no hay movimientos indígenas porque ya no están en un proceso de luchas y

¹⁸⁶ El Viceministerio de Descolonización fue creado en 2009 en función de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Es dependiente del Ministerio de Cultura y busca generar espacios de discusión teórica, práctica académica y política para superar la supremacía educativa occidental, con el objetivo de abrir nuevos paradigmas en los procesos de descolonización del conocimiento científico. Ver más en: <http://www.descolonizacion.gob.bo/>

contestación a las políticas estatales. En este caso el Estado y el indígena son una sola cosa.¹⁸⁷

Para hacer efectivo el Estado Plurinacional, Bolivia se ve enfrentada a la necesidad de configurar una forma alternativa de hegemonía que parta de un nuevo paradigma ético y cultural en el cual se revaloricen los componentes identitarios indígenas que han sido invisibilizados en su historia política y cultural, como lo señala Xavier Tito:

Lo que estamos haciendo es la consolidación de la institucionalidad en las naciones indígenas originarias que, con casi 500 años de colonización, se han desestructurado de muchas formas. Las políticas culturales que el Estado implementa no están enfocadas a fomentar la división de la nación indígena, sino la formación de núcleos con políticas culturales para cada una de las matrices existentes. No se trata de las individualidades, hay que ir por las colectividades, debemos por tanto propender a la reconstitución de las naciones y sus instituciones, por ejemplo, la educación y los conocimientos ancestrales, los sistemas de la preservación de la salud humana a partir de los propios conocimientos indígenas, el sistema de justicia y administración local de la paz social, las formas económicas de producción, la elaboración de las artes en cerámica, piedra, madera y tejido, entre otras. Esos son los retos que enfrentamos como naciones indígenas originarias, ya no como movimientos sociales¹⁸⁸.

Esta reconfiguración evidencia una intencionalidad política que el gobierno está buscando afianzar y profundizar, a través del posicionamiento al menos ideológico de un proyecto descolonizador, con la finalidad de generar una plataforma que le permita su continuidad como la principal opción política. El MAS, al reivindicarse como un partido con ascendente indígena¹⁸⁹, pero un indigenismo

¹⁸⁷ En entrevista realizada el 12 de enero de 2015 en La Paz.

¹⁸⁸ En la entrevista citada.

¹⁸⁹ “Desde su creación en 1995, el mas de Morales articuló a los principales sindicatos campesinos de Bolivia y mantiene una tensión constante entre nacionalismo popular y posiciones

moderno que parte de una lógica menos radical y más tendiente a lo institucional (nacionalismo) se conduce, en palabras de Maristella Svampa, a través de dos narrativas que se entrelazan y a la vez compiten entre sí: “la narrativa indianista, centrada en la creación del Estado Plurinacional y en el reconocimiento de las autonomías indígenas (administrativas y territoriales); y la otra, la narrativa nacional-popular, marcada por una dimensión estatista, reguladora y centralista”¹⁹⁰.

Este posicionamiento del MAS como gran mecanismo de articulación tanto de las corrientes indianistas como sindicales, es uno de los ejes que caracterizó al primer mandato de Evo Morales, momento en el que encontramos todavía una efervescencia política que permitió al gobierno respaldarse en los movimientos sociales, sobre todo para hacer frente al proyecto separatista de las oligarquías regionales. Con la nacionalización de los hidrocarburos y la aprobación de la Constitución el MAS y su gobierno aún se encontraban impulsados por ese primer halo transformacionista “revolucionario” que había derrocado a los gobiernos neoliberales y dentro de un universo de posibilidades en el que las fronteras de la emancipación aún se encontraban abiertas.

Aquí encontramos una de las piezas medulares para entender la consolidación del MAS en el poder y el apuntalamiento de la figura de Evo Morales, pues a diferencia del caso ecuatoriano, en Bolivia el componente más importante que estructura la fuerza política del MAS son sin duda las organizaciones que se incorporan al gobierno por intermediación de su movimiento, el cual a su vez impulsa las candidaturas de los representantes de los

indianistas, que forman parte de su agenda pero de manera ambivalente”. Cordero Ponce, Sofía, Estados plurinacionales en Bolivia y Ecuador Nuevas ciudadanía. ¿más democracia?, revista Nueva Sociedad Nro. 240, julio-agosto de 2013, p. 141.

¹⁹⁰ Ver más en: Svampa, Maristella, Bolivia, modelo 2013, en perspectiva, www.sinpermiso.info.

diversos sindicatos favorables al gobierno u organizaciones sociales que también se encuentran respaldando el proceso¹⁹¹. A esto se suma la articulación de movimientos y organizaciones que impulsan el proceso constituyente a través del Pacto de Unidad y que hasta antes de 2010 mantenían una alianza con el gobierno.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la CSUTCB y también en una de sus organizaciones filiales más importantes, Bartolina Sisa. En este sentido, Anselma Palacios, dirigente del movimiento Bartolina Sisa y senadora, señala lo siguiente:

El MAS ha nacido de las organizaciones sociales en donde ha jugado un papel fundamental la confederación Bartolina Sisa, pero también el resto de organizaciones que formaron parte del Pacto de Unidad. Como organización tenemos una representante dentro del MAS y en varios departamentos tenemos ejecutivas que hacen escuchar su opinión y se toma en cuenta el posicionamiento que tienen las organizaciones sociales y se respeta la opinión que damos como mujeres indígenas. En esta gestión como candidatas electas, el 48% somos mujeres, tanto como diputadas cuanto como senadoras, también tenemos ministras, alcaldesas, concejalas. Por ejemplo, de estas últimas elecciones yo ya soy una autoridad electa de la Asamblea, estoy como cuarta senadora por el departamento de La Paz¹⁹².

Así, uno de los componentes más importantes que tiene, desde su primer mandato el gobierno de Evo Morales, es la capacidad de incorporación gremial de las organizaciones sociales afines al proyecto que este representa. En este punto, podríamos decir que nos encontramos en los albores de la construcción de un nuevo proyecto hegemónico, entendido bajo la dinámica de reconfiguración de las

¹⁹¹ Ver más en: De la Fuente, Manuel, La Consolidación del Poder de Evo Morales. En Mouries, Thomas (coordinador), La legitimidad del poder en los países andino-amazónicos. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, Instituto de Investigación y debate sobre la gobernanza, Francia, 2011.

¹⁹² En Entrevista realizada el 19 de diciembre de 2014 en La Paz.

estructuras del Estado (instituciones), con la finalidad de que estas respondan ideológica y culturalmente al nuevo modelo planteado (Estado plurinacional).

Este nuevo proyecto estatal viene gestándose en correlación de las distintas fuerzas políticas desde la Asamblea Constituyente, dado que aquí podemos situar el universo de interacción de posibilidades políticas que llevará a la reformulación del Estado, con Evo Morales a la cabeza, quien mantiene un discurso de corte reivindicativo de lo indígena, pero enmarcado en los intereses de la institucionalidad política, y en contraparte encontramos el proyecto de características más indianista, impulsado por el malku Felipe Quispe que se fundamenta bajo la idea del resurgimiento del Collasuyo.

Ahora, para entender estas posiciones, que marcan una contradicción de base en el gobierno, hay que retomar nuevamente el análisis del largo proceso de lucha social en medio del cual se fue configurando el nuevo paradigma político en Bolivia, el cual no estuvo exento de contradicciones internas. Siguiendo el análisis de Luis Tapia¹⁹³, y como ya se había mencionado antes, el MAS no representaba a los sectores más radicales de la organización social. Para comprenderlo habría que volver al momento en que desde el movimiento indígena y campesino se articula la resistencia al modelo neoliberal y empieza a gestarse la necesidad de una refundación del Estado vía una asamblea constituyente.

Tapia hace énfasis en la complejidad de la organización social existente en Bolivia pues no se puede hablar solo de un movimiento indígena sino de varios, agrupados en dos ejes. Un eje es el movimiento indígena de tierra bajas, que a lo largo de la década de los 80 logró unificar a al menos 33 pueblos del oriente boliviano. Como señala el autor, es aquí en donde nace la propuesta de la

¹⁹³ En entrevista realizada el 22 de diciembre de 2014 en La Paz.

Asamblea Constituyente y donde además se logra el primer reconocimiento de las tierras comunitaria de origen en los noventas.

El otro eje corresponde al movimiento indígena de tierras altas, con características muy deferentes al de tierras bajas. Estas comunidades se agrupan alrededor de la CONAMAQ¹⁹⁴, organización que no emerge como actor antagónico, sino hasta los últimos años, teniendo un papel fundamental en la conformación del Pacto de Unidad, junto a la CIDOB¹⁹⁵, alianza que se mantendrá hasta el 2010, momento en que se disuelve el Pacto y se marca una ruptura entre ambos ejes del movimiento indígena.

Ahora, otro componente fundamental de la movilización social en Bolivia lo constituye el movimiento campesino de carácter sindical, el cual se encuentra agrupado en la CSUTCB y ha tenido un papel fundamental en la resistencia al neoliberalismo así como en la construcción del nuevo proyecto de gobierno. Debido al fuerte componente indígena que tiene el campesinado boliviano, en la conformación de la CSUTCB se puede evidenciar la presencia de los dos proyectos que marcan el desarrollo de la organización social boliviana, es decir, la visión de la izquierda tradicional ligada al sindicalismo y la visión indigenista. No obstante, y pese al discurso de orientación pro indígena que enarbolan el MAS y Evo Morales, es con este gobierno en donde se da una ruptura total entre el movimiento campesino y el movimiento indígena, quedando este último relegado del proyecto nacional. Como lo señala Luis Tapia:

Siempre ha habido una pugna interna muy fuerte en la CSUTCB. Durante un tiempo estuvo dirigida por kataristas e incluso se radicalizó a fines de los noventa. Con la influencia del indianismo, impulsado principalmente por Felipe Quispe, incluso consideraron cambiar su nombre a central indígena pero no lo hicieron. Ahora están

¹⁹⁴ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (tierras altas).

¹⁹⁵ Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (tierras bajas).

con una política diferente. Se han separado de los movimientos indígenas y están negando su identidad indígena porque tienen un proyecto político diferente y porque son el principal aliado del MAS. La central campesina es de propietarios de la tierra, pequeños y medianos y, como el gobierno pactó con los terratenientes que no habría reforma agraria, entonces los campesinos están pidiendo que se privatice la tierra colectiva de los territorios indígenas. De ahí viene la ruptura y creo que ya es de largo plazo, porque la central campesina tiene un proyecto de desarrollo capitalista con la idea de privatizar la tierra¹⁹⁶.

En este sentido, la continuidad del gobierno también estribará no solo en el apoyo que este ha tenido de las organizaciones sociales que lo integran sino también, como ya los hemos mencionado, en su capacidad de establecer vínculos e incluso alianzas con los sectores oligárquicos. Esto, porque en palabra de Luis Tapia el MAS no ha sido capaz de representar la visión de las organizaciones sociales en su conjunto, principalmente luego de la disolución del Pacto de Unidad, que era el espacio real de articulación y deliberación de los movimientos sociales, y poseía mayor legitimidad que el MAS, el cual constituye más bien una herramienta electoral. Como lo señala el autor:

No todas las fuerzas estaban concentradas en el MAS, de hecho el MAS era la fuerza más moderada a fines de los noventa y del 2000 en adelante. Cuando todos querían nacionalización total, la propuesta del MAS era cincuenta y cincuenta en hidrocarburos. Lo que pasa es que el MAS en los noventa al ser un partido de cocaleros se enfrentó a la política norteamericana y apareció parcialmente como un defensor de lo nacional, cuando ya estaba debilitado el movimiento obrero y parte de la izquierda electoral. El MAS no planteó la constituyente, sino la CIDOB y luego del 2000 es la Coordinadora del Agua la que generaliza y vuelve programa nacional la propuesta. Luego, las fuerzas que se movilizaron fueron el sindicalismo campesino, bajo el liderazgo catarista de Felipe Quispe y las juntas vecinales. Esa movilización pone en crisis a los gobiernos neoliberales y la salida fue institucional, es decir vía elecciones, y como el MAS era el único partido que estaba adentro del sistema y no era del bloque neoliberal, el voto se canalizó por ahí porque en el pasado era parte de

¹⁹⁶ En entrevista realizada el 22 de diciembre de 2014 en La Paz.

las luchas. Luego de la victoria electoral, quienes hicieron proyecto político fueron las organizaciones que estaban en el Pacto de Unidad. Solo que el pacto tenía una gran diferencia, constituía la unión de campesinos y organizaciones indígenas, que ya en 2010 se quiebra¹⁹⁷.

Otro punto a considerarse es dónde se sitúa la oposición al proyecto (CIDOB, CONAMAQ, el Malku), dado que la forma de participación formal (MAS), se encuentra vedada para ellos por diversas incompatibilidades, ya sea políticas, como económicas y culturales. Pero, ¿cómo se ha conducido esta oposición formal? Y aquí el fantasma de la derecha aparece como una de las opciones más tentadoras y, en algunos casos, la única capaz de canalizar la participación de los indígenas y sectores disidentes en el ámbito electoral, sin que esta sea capaz tampoco de resolver dicha participación.

Es decir, que en el seno de la política real en Bolivia encontramos una fragmentación relativa en la cual el proyecto del MAS se ha venido favoreciendo, dado que las organizaciones opositoras o se quedan en el ámbito de su comunidad (Felipe Quispe) sin tener una mayor trascendencia nacional, o se ven hasta cierto punto infiltradas por los intereses de sectores oligárquicos, en función de frenar el avance político del MAS cuando no le convenga a sus intereses.

Y cuando el proyecto se presenta afín a sus necesidades, principalmente económicas, vamos a encontrar también la participación de sectores de la burguesía al interior del movimiento y como candidatos del MAS, convirtiéndose en este punto y para este sector en un medio de introducir su representación en el gobierno y en el proyecto nacional. Por tal motivo no es de extrañarnos el reposicionamiento favorable del MAS en territorios otrora hostiles al proyecto (Media Luna).

¹⁹⁷ En entrevista realizada el 22 de diciembre de 2014 en La Paz.

Aquí, siguiendo a Silvia Rivera Cusicanqui cabría preguntarnos, cuáles son las organizaciones que están definiendo verdaderamente el rumbo del Estado plurinacional y si estas alianzas con los sectores oligárquicos y de derecha no terminarán pasando factura al proceso de refundación estatal. De hecho, el conflicto por la defensa de la tierra así como la reivindicación de la autonomía indígena, el cual fue uno de los principales elementos de la primera etapa de resistencia al neoliberalismo en los noventas, se ha reeditado en este gobierno, dejando ver los intereses de sectores oligárquicos que han adquirido un perfil importante dentro del mismo, generando un importante distanciamiento entre varios sectores sociales que en un primer momento formaron parte del MAS y el gobierno, principalmente el bloque indígena. Al respecto Silvia Rivera señala lo siguiente:

Varios de los movimientos que protagonizaron la resistencia al neoliberalismo se vinculan al MAS en su periodo de oposición e incluso ya en el gobierno. La ruptura empieza en 2010 a partir de la firma del contrato para la construcción de una carretera al interior del TIPNIS. Ya se habían realizado esas tratativas desde 2008, pero apenas en 2010 sale a la luz. Otro elemento fue que en la Constitución se reconoce el carácter plurinacional de Bolivia y la posibilidad de que los indígenas tengan una participación directa en el Parlamento, siguiendo sus propios sistemas de elección, no obstante, estas demandas se van recortando poco a poco. Primero, se exigía la mayoría en el Parlamento, luego la demanda se reduce a 16 y, finalmente, a siete, pero incluso esas siete representaciones están manipuladas por el Estado. Entonces la marcha indígena de 2010 ya es una marcha de ruptura con el Estado, porque las dos anteriores marchas fueron en defensa del gobierno de Evo Morales, en el contexto de toda la sublevación que hubo de la oligarquía del Oriente. Todo eso se ha revertido porque el gobierno ha optado por aliarse con los sectores de la Media Luna que antes eran oposición. Paralelamente el Estado interviene y divide la CONAMAQ y la CIDOB, creando organizaciones paralelas que responden directamente a los lineamientos del MAS. Esa es la situación actual con el agravante de que en esta elección (2014) hay una serie de concesiones a la oligarquía de Santa Cruz. Han ganado muchos más votos en Santa Cruz y lo que han ganado allí lo han perdido en territorios indígenas. Es decir, en el gobierno se ha perdido el perfil indígena, que

marcaba el cambio de paradigma frente al desarrollismo. La CSUTCB no tiene ya un perfil de movimiento social, es un aparato burocrático¹⁹⁸.

Entonces, uno de los conflictos más trascendentes en los periodos de gobierno de Evo Morales es sin duda el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), el cual ya mencionamos anteriormente. Este representó un momento crítico para el gobierno de Morales y, como se ha dicho, el punto de partida del distanciamiento con los movimientos indígenas de tierras bajas. La oposición a la construcción de una carretera al interior del parque reveló un conflicto de tierras, que se estaba librando entre los grupos indígenas de tierras altas y bajas, en lugar de hacerlo con la clase terrateniente.

Por otra parte contribuyó a fortalecer los discursos críticos respecto a dos aspectos fundamentales del gobierno de Morales, por un lado, el de la profundización del modelo extractivista que ha caracterizado históricamente al país y que se contrapone con el proyecto del Estado plurinacional que rescata una visión distinta del relacionamiento con la naturaleza; y, por otro, el de la dureza con la que respondió el gobierno a las movilizaciones indígenas, lo cual ha pasado a asumirse por parte de sectores que dicen defender la “democracia”, como un proceso de criminalización de la protesta social.

Lo anterior nos revela un escenario que no es homogéneo y que más bien es contrario a lo que tradicionalmente, en el ámbito académico, se maneja sobre el caso boliviano, es decir la existencia de un conflicto entre los diferentes sectores de la llamada ala progresista que está impulsando el cambio, la cual ha decantado en la fragmentación de las organizaciones sociales, principalmente del movimiento indígena, el cual se mantuvo articulado cuando la resistencia era en contra de los gobiernos neoliberales. Una vez que el MAS llega al poder, y principalmente a

¹⁹⁸ En entrevista realizada el 9 de enero de 2015 en La Paz.

partir del conflicto por el TIPNIS, se evidencia una dificultad de articular un proyecto en común capaz de disputar la hegemonía del modelo, como lo señala Maristela Svampa:

El conflicto mostró las brechas abiertas entre organizaciones campesinas (cocaleros/colonizadores de origen aymara y quechua) e indígenas (amazónicos y de las tierras bajas), una tensión que la nueva Constitución había intentado zanjar desde el punto de vista simbólico, hablando de “indígenas-originarios-campesinos”, “como si construir una voluntad colectiva fuera una mera adición matemática, cuando estos grupos tienen a menudo visiones diferentes sobre los problemas nacionales e incluso intereses divergentes” (Stefanoni, 2011). Así, lo que se deshizo en Bolivia es también la supuesta articulación entre lo campesino y lo indígena, ya que en términos tendenciales, estos sectores proyectan una visión diferente del territorio y del desarrollo. Mientras cocaleros y campesinos colonizadores buscan apropiarse y explotar económicamente el territorio, sin muchos recaudos, los indígenas de las tierras bajas (sobre todo los de la Amazonía) parecieran tener una perspectiva más respetuosa del mismo. Por ende, lo que también está en disputa es lo que se entiende por proyecto de descolonización¹⁹⁹.

Así, para el segundo mandato de Evo Morales podemos encontrar la relativamente lenta pero constante emergencia de los sectores de oposición, indígenas, los cuales reivindican un discurso de índole más radical, principalmente en función del modelo económico (superación de las dinámicas capitalistas hegemónicas) y político (autonomía indígena). En respuesta a ello encontramos la construcción de un proyecto de control estatal de las organizaciones de oposición como la CIDOB y la CONAMAQ, a las cuales se les han creado organizaciones gemelas en cuya directiva se ha colocado a personajes afines al gobierno.

¹⁹⁹ Svampa, Maristella, Bolivia, modelo 2013, en perspectiva, www.sinpermiso.info, p. 5.

Al interior de las fuerzas sociales que en otro momento participaron en la construcción del proyecto, principalmente a través del Pacto de Unidad, se han generado procesos de enfrentamiento en donde cada sector se asume como la organización “auténtica”. No obstante, más allá de la existencia de confrontaciones internas, ya sea por los procesos de cooptación generados desde el Estado, como por las desviaciones en las que han caído los dirigentes de ciertas organizaciones sociales que han pasado a formar parte del bloque un oposición que no está exento de la injerencia de la derecha²⁰⁰; lo cierto es que a nueve años de gobierno hay temas que permanecen intocados (la autonomías indígenas, por ejemplo) y que son fundamentales para la implementación del nuevo paradigma político que se aprobó en la Constitución.

Como ya se ha venido mencionando a lo largo de la investigación, al igual que en el Ecuador los sectores que se han agrupado como oposición al gobierno se ven fundamentalmente enfrentados con sus bases, las cuales están sujetas a la presión constante de una política en la que prima un enfoque asistencialista, mismo que se respalda en la deuda histórica que tiene el Estado con estos sectores profundamente empobrecidos, pero que indudablemente les introduce en una dinámica de cohesión política con el proyecto del gobierno.

Sin embargo, el matiz que cabría aplicar al caso boliviano está marcado por la generación de una política social que lentamente ha desvinculado, de forma consciente e intencional, a las bases de la arena política, con lo cual también se han ido acercando a la órbita que el gobierno requiere y a la que busca encausar

²⁰⁰ “Las alianzas político y sociales en torno al conflicto del TIPNIS fueron marcadamente heterogéneas, ya que incluyeron, junto a sectores y organizaciones indígenas y mestizos, rurales y urbanos, ligados al proyecto de cambio, a sectores de la derecha, que históricamente se han situado en las antípodas del respeto de los derechos indígenas y la defensa del ambiente. Estas alianzas contra natura fueron aprovechadas por el oficialismo, que no vaciló en descalificar al conjunto de los actores movilizados y estigmatizar a las poblaciones amazónicas contrarias al proyecto gubernamental”. Svampa, *op. cit.*, p.4.

la participación, es decir, a la vía electoral. La tesis del gobierno es que estos sectores ya están representados en los liderazgos de las distintas organizaciones que se aglutinan en el gobierno y participan políticamente a través del MAS como instrumento de deliberación entre las fuerzas sociales y el gobierno. Como lo señala Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia:

El nuevo bloque de poder ha ido creando tres mecanismos de conducción del Estado, de cierto modo complementarios: por una parte, mediante la presencia directa de las organizaciones sociales en la definición de las principales políticas públicas que son formuladas en ampliados y congresos, y que son la base de las acciones de gobierno que impulsa tanto el poder ejecutivo como la bancada mayoritaria del Congreso. En segundo lugar, por medio de la presencia directa de representantes de los sectores sociales movilizados en distintos niveles del aparato estatal (presidencia, ministerios, direcciones, Parlamento, Asamblea Constituyente). Por último, a través de la lenta promoción de una nueva intelectualidad en funcionarios públicos vinculados a las expectativas y necesidades de este bloque de productores. En ese sentido, hay nuevas clases sociales políticamente visibilizadas a partir de nuevas identidades étnicas-culturales regionales, en el control de los principales mecanismos de decisión estatal, y hay una sustitución y ampliación de las élites administrativas del Estado²⁰¹.

Lo cierto es que una vez consolidado el gobierno de Evo Morales se ha venido favoreciendo es la desarticulación de los movimientos que se han convertido en oposición, buscando alejar de las órbitas de la dirigencia a los sectores de base, con el fin de neutralizar la capacidad de movilización de estas organizaciones, en las cuales se fundamenta su fuerza, y favoreciendo una “hegemonía gubernamental consolidada sin polarización”²⁰².

²⁰¹ García Linera, Álvaro, El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación. En Varios autores, *El Estado. Campo de lucha*, CLACSO, Muela del Diablo, Comuna, La Paz, 2010, p. 20

²⁰² Svampa, *op. cit.*, p. 9.

Por el contrario, en el Ecuador se puede hallar una fragmentación previa a la llegada de Correa al poder, debido a la deslegitimación y al desgaste político en el que había caído el sector articulador del conflicto social, es decir, el movimiento indígena. Así, para el caso ecuatoriano, el acercamiento del gobierno a los sectores populares ha buscado reorientar la participación de los actores sociales, para canalizarla mediante los mecanismos institucionales de participación abiertos por la nueva Constitución.

Como consecuencia del fortalecimiento del gobierno y de una política de cooptación de la dirigencia, fundamentalmente del sector indígena, en Bolivia encontramos la emergencia de una nueva élite política y económica de origen aimara. Esta se ha visto fortalecida y ampliamente representada por el MAS. Fortalecida en la medida en que tuvo la capacidad para articularse económicamente como grupo de poder y negociación en el interior del MAS, presionando principalmente por la generación de políticas que han favorecido la ampliación del uso de los territorios comunitarios de origen a favor de un sector, los coccaleros. Y favorecida porque muchos de sus miembros han pasado de financiar las campañas a participar directamente como candidatos de elección popular. Esta es una situación que ha caracterizado la expansión del MAS en el interior del territorio boliviano, particularmente en las zonas urbanas. Al respecto, García Linera señala que:

La nueva coalición dominante con poder del Estado, es evidente que en Bolivia hubo una modificación de las clases sociales y de sus identidades étnicas culturales, las cuales asumieron, primero, el control del gobierno y, gradualmente, la modificación del poder político, el control del excedente económico y de la estructura del Estado. Esto es verificable a partir del origen social, trayectoria laboral y educativa, y estructura de los capitales (económicos, culturales y simbólicos) de los actuales gobernantes que permiten hablar no sólo de una clásica renovación de élites del poder del Estado sino, fundamentalmente, de un desplazamiento radical de las élites del gobierno y de las propias clases sociales que toman las decisiones políticas

fundamentales, que filtran la selección de la administración burocrática y que son objeto de mayor cercanía en las políticas de distribución de la riqueza pública²⁰³.

Todo esto ha devenido en el fortalecimiento del gobierno y en la consolidación de su proyecto, al menos en términos electorales. Un ejemplo de esto lo encontramos reflejado en los resultados de las últimas elecciones, en las cuales el voto de los sectores populares estuvo marcado por el signo de la cohesión corporativa²⁰⁴.

Otro aspecto a destacar estriba en las deudas que acarrea este proceso a lo largo de nueve años dado que en Bolivia si bien se ha crecido mucho en términos macroeconómicos, aún se pueden ver y palpar las enormes brechas en términos de pobreza extrema así como de desigualdad, las cuales afectan principalmente a los sectores indígenas que no son propietarios de tierras.

En este sentido, también se puede decir que si bien se ha avanzado bastante no se han encausado todos los esfuerzos necesarios que permitan a Bolivia abandonar el último lugar en términos de pobreza en América del Sur, pese a la recuperación de la economía nacional que ha impulsado el gobierno de Evo Morales y que se ha visto favorecido por los precios del gas y de los hidrocarburos. En este sentido, una de las grandes deudas que aún sostiene el MAS en relación a los movimientos que le llevaron al poder es establecer de forma cabal el cumplimiento de los postulados del Estado Plurinacional, así como el reconocimiento de los sectores minoritarios que de a poco se han constituido en un conjunto de agrupaciones subalternas (la CIDOB, por ejemplo).

²⁰³ García Linera, Álvaro, *op. cit.*, pp. 16 y 17.

²⁰⁴ En las elecciones generales de 2014, Evo Morales es reelecto como Presidente con una votación del 61%, quedando triunfador en ocho de los nueve departamentos de Bolivia. Ver más en <http://www.oep.org.bo/Computo2014/>

Finalmente es justo señalar también qué es lo que ha sucedido con el ala más radical de la organización social que caracterizó a Bolivia y que estuvo liderada principalmente por Felipe Quispe. Este sector ha optado por disputar el proyecto también desde el ámbito electoral, no obstante, para ello y una vez que ha marcado una ruptura total con el MAS, ha buscado aliarse a sectores de la derecha.

Por ejemplo, en las últimas elecciones generales, Felipe Quispe se presentó como candidato a vicepresidente por el Frente de Unidad Nacional, identificado con una posición de centro derecha a favor del liberalismo económico. Su líder y fundador es Samuel Doria Medina, uno de los empresarios más ricos del país, dueño de la franquicia de hamburguesas Burger King en Bolivia y de la Sociedad Boliviana de Cemento. En las elecciones de 2015 el Frente de Unidad Nacional quedó en segundo lugar con el 24% de los votos, pero ganó la alcaldía de El Alto, una de las más importantes del país por su trayectoria política de resistencia social.

Por su parte, las organizaciones disidentes, representadas en el ala de la CIDOB y del CONAMAQ opuestas al gobierno han optado por la movilización social, articulándose en torno a la resistencia ante proyectos de carácter extractivo y, principalmente, en rechazo a la construcción de la carretera en el TIPNIS, todo lo cual les ha llevado a pedir la salida del MAS de gobierno.

Por último, solo resta mirar el impacto que en términos generales ha logrado el gobierno del MAS, con Evo Morales a la cabeza, en la conformación de un proyecto que busca la refundación de un Estado como el boliviano, en el marco de un escenario en el que encontramos complejas y contradictorias reivindicaciones de corte clasista, indigenista, racistas, sindicales, etc. Y que, por otro lado, a lo largo de diez años ha conseguido establecer niveles de crecimiento económico nunca antes visto, pero sin transformar la relación capitalista que

Bolivia guarda en el escenario de la geopolítica regional y mundial (minería e hidrocarburos).

A esto podríamos agregar el empoderamiento relativo de algunos sectores del campesinado indígena en pos de la construcción del proyecto del MAS, en el cual no obstante predomina una pugna interna entre los sectores que se inclinan más hacia el modelo extractivista y los grupos que proponen la superación de este modelo en pos de una economía de características redistributivas y que busque a su vez la generación de las condiciones necesarias que permitan una mayor armonía con la naturaleza.

En medio de todo esto, encontramos a los movimientos sociales, los cuales han transitado de estados relativos de subalternidad al intento de construcción de una nueva hegemonía en la que primen sus valores (indígenas y campesinos) y que se confronta con la resistencia de los sectores que constituyeron por siglos la hegemonía política boliviana (criollos o “cambas”).

El proceso que hoy se vive en Bolivia se encuentra en una situación de indefinición en el sentido de que encontramos la reemergencia paulatina de la vieja oligarquía (burguesía) al interior del MAS, que busca controlar este nuevo aparato político de participación que se ha establecido como el nuevo modelo hegemónico y que aún hoy lleva a los movimientos sociales a orbitar alrededor de él. A esto habría que sumar la incorporación de la nueva dirigencia, principalmente sindical e indígena, a las dinámicas de la política tradicional.

El MAS es pues el nuevo paradigma institucional, pero también el botín político por el cual entran en pugna todos los sectores que constituyen la realidad democrática en Bolivia. Aquí, los movimientos sociales han apostado por, de una u otra manera, contribuir en el proceso de permanencia del gobierno del MAS. Salvo las excepciones de las agrupaciones que han roto definitivamente con el gobierno, principalmente los movimientos indígenas de tierras bajas (2010), el MAS del 2015

sigue representando en el imaginario colectivo de Bolivia una opción para construir un proyecto alternativo (Estado Plurinacional).

4.3. A modo de balance: avances y desafíos a nueve años de gobierno

En 2005, tras un largo proceso de lucha, se abrió paso a la confrontación de las clases subalternas con los sectores de la burguesía que detentaban el poder, pero esta vez desde dentro del Estado. Así, lo que empezó como una grieta en la estructura política del poder hegemónico terminó como un boquete que a la postre haría caer gran parte de la fachada que representaba la construcción social de la república boliviana, en la cual, si bien no se derrumbaron todos los cimientos de poder hegemónico, sí gran parte de ellos mientras que el resto quedó muy trastocado.

En este escenario el pueblo boliviano se vio ante la posibilidad no de refundación del Estado como posibilidad teórica y práctica, lo cual dio paso a un universo de posibilidades que giraban alrededor de muchas propuestas de entre las cuales, el MAS, manteniéndose alineado a la izquierda y sus reivindicaciones, logra canalizarlas en su búsqueda por la consolidación de su proyecto político orientado a la construcción de un escenario pos neoliberal.

Ahora bien, a modo de un breve balance, sobre todo en lo concerniente a política económica y social, desde el gobierno se han resaltado varios logros alcanzados en nueve años de gestión, los cuales hacen referencia, por un lado, a un viraje nacionalista del proyecto político y, por otro, a la generación de programas sociales con un importante impacto en la reducción de las brechas de pobreza y desigualdad que han caracterizado históricamente a Bolivia.

Así, desde el gobierno se resalta la política de nacionalización de hidrocarburos, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Morales, la cual causó un golpe de efecto mediático tanto a nivel nacional como internacional, pues evidenciaba un alineamiento de Morales con el nuevo bloque de gobiernos antiimperialistas y con proyecto pos neoliberales²⁰⁵. Según cifras oficiales, esta política permitió que en 2012 el Estado llegue a percibir 3.500 millones de dólares, a diferencia de los 945 millones que percibía en 2005 por la explotación de dichos recursos²⁰⁶.

Ahora, a los procesos de nacionalización de recursos se suman políticas de redistribución pues lo recaudado a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), por ejemplo, ha sido destinado a la inyección de mayores ingresos a los presupuestos de municipios, gobernaciones y universidades, según señala el gobierno. Asimismo, los recursos obtenidos por concepto de nacionalización de empresas productivas se han invertido en programas de corte social como la entrega de los bonos Renta Dignidad, dirigido a los adultos mayores, el Bono Juana Azurduy, destinado las a madres y sus hijos, y el Bono Juancito Pinto, entregado a estudiantes.

A ello se suma la nacionalización de empresas estratégicas para el Estado boliviano como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), las empresas eléctricas Corani, Guaracachi, Valle Hermoso, Luz y Fuerza de Cochabamba y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Adicionalmente, el

²⁰⁵ De la Fuente, Manuel, La Consolidación del Poder de Evo Morales. En Mouries, Thomas (coordinador), La legitimidad del poder en los países andino-amazónicos. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, Instituto de Investigación y debate sobre la gobernanza, Francia, 2011.

²⁰⁶ Estas cifras ha sido consultadas en el documento denominado *Logros de la Gestión del Presidente Evo Morales Ayma*, publicado en octubre de 2012 por el Ministerio de Comunicación del estado Plurinacional de Bolivia. Versión digital disponible en www.comunicacion.gob.bo.

gobierno transfirió a ENDE el paquete accionario de la Empresa Transportadora de Electricidad.

No obstante, existe una fuerte crítica a los alcances del proyecto nacionalista y antiimperialista de Evo Morales, pues según académicos como Luis Tapia, lo que en realidad ha hecho el gobierno del MAS ha sido nacionalizar parcialmente los hidrocarburos, puesto que la “producción sigue en manos de transnacionales dado que no existe una empresa nacional, la diferencia es que ahora el Estado retiene entre 50 y 70 por ciento de ganancias. Sin embargo, eso es solo en el área de hidrocarburos porque en los otros rubros como la minería hay un mayor peso del capital transnacional sobre el capital nacional”²⁰⁷.

A esto se suma la crítica que ya se ha referido a lo largo de este capítulo respecto a la dificultad del gobierno de superar el modelo extractivista basado en la explotación de recursos mineros e hidrocarburíferos. Esta es una de las principales deudas del proyecto y uno de los mayores obstáculos en la construcción del Estado Plurinacional, pues esta política, a decir de Maristella Svampa, demuestra un retroceso de la narrativa indigenista del gobierno del MAS frente a la preeminencia del proyecto nacional popular, al cual califica como “neodesarrollista” puesto que coloca el acento en la expansión de las industrias extractivas (explotación del litio, expansión de la megaminería a cielo abierto, construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras en el marco del IIRSA)²⁰⁸.

Por su parte, el gobierno ha impulsado algunos intentos por avanzar hacia un proceso de industrialización, principalmente en el área de hidrocarburos. Por

²⁰⁷ En entrevista realizada el 22 de diciembre de 2014 en La Paz.

²⁰⁸ Svampa, Maristella, *op. cit.*, p. 4.

ejemplo en 2012 se suscribió el contrato para la construcción de la primera planta de urea y amoniaco para la producción de fertilizantes nitrogenados, la cual deberá entrar en operación el último cuatrimestre de 2015.

Por otro lado, en 2013 se inició la construcción de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande, la cual busca el autoabastecimiento en la producción y consumo de gas licuado de petróleo (GLP) en Bolivia, además de la exportación de su excedente a países como Paraguay, Argentina, Perú y Brasil, entre otros. Al momento la planta ya ha iniciado operaciones.

Así, siguiendo las cifras oficiales, se muestra una recuperación del país en términos macroeconómicos, pues entre 2005 y 2013 el PIB se triplicó, pasando de 9.6 millones de dólares a 29.7 millones en el periodo señalado. Asimismo, entre 2006 y 2013 el país registró un superávit en la balanza comercial, mientras que entre 1998 y 2005 el déficit fiscal se mantenía constante y en un promedio de 5,4% del PIB²⁰⁹.

No obstante, las dinámicas primario exportadoras no se han modificado sustancialmente, lo cual se ve reflejado en la Balanza de Pagos pues según cifras del Banco Central entre enero y abril de 2014, la principal actividad económica registrada en las exportaciones fue la extracción de hidrocarburos con 2.201 millones de dólares, le siguió la industria manufacturera con 1.139 millones, en tercer lugar se ubicó la extracción de minerales con 643 millones y por último el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 174 millones.

Dentro de la actividad correspondiente a extracción de hidrocarburos el mayor peso lo tuvo el gas natural, con un monto ascendiente a 2.066 millones de

²⁰⁹ Cifras tomadas del documento *Principales logros económicos y sociales 2006-2013* publicado por el Banco Central de Bolivia. Versión digital disponible en <http://www.bcb.gob.bo>.

dólares, mientras que la diferencia (135 millones) correspondió a combustibles. Cabe destacar que el gas es exportado principalmente a Brasil y Argentina²¹⁰.

Una de las actividades que más ha crecido durante los periodos de gobierno de Evo Morales es la minería, pues si bien en 2005 los ingresos generados por este sector ascendían a 630 millones de dólares, en 2013 el monto se ubicó en 3.386 millones, a lo cual le corresponde un mayor porcentaje de producción de tipo cooperativista, misma que tuvo un importante impacto en el aumento de empleo en este sector.

Con respecto al “gran salto industrial” que persigue el gobierno boliviano, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera señala que:

Hoy, con la inversión estatal, se está comenzando a industrializar el gas (con una planta de GLP en Campo Grande, una planta separadora de gas en el Chaco, una Termoeléctrica en el Chapare), se está relanzando actividades mineras metalúrgicas (Huanuni, Vinto, Corocoro, colas y desmontes, etc.), se está apoyando a los pequeños productores vinculados al mercado interno a través de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), a fin de garantizar la soberanía alimentaria del país, y se está creando fábricas para abastecer el mercado interno (de papel, de cartón de cítricos, leche, etc.)²¹¹.

Por otro lado, uno de los mayores logros alcanzados por el gobierno de Evo Morales ha sido la estabilización de la economía boliviana, la cual había alcanzado una profunda crisis luego de la implementación del neoliberalismo. Así, entre 1985 y 2005 la inflación promedio fue de 400% mientras que entre 2006 y 2013 dicha tasa se redujo y estabilizó en un promedio del 6,7%. Asimismo, la inversión pública, que registraba niveles muy bajos en 2005 (5.078 millones de bolivianos),

²¹⁰ Ver más en <http://www.ine.gob.bo>

²¹¹ García Linera, Álvaro, El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación. En Varios autores, *El Estado. Campo de lucha*, CLACSO, Muela del Diablo, Comuna, La Paz, 2010, p. 26.

se incrementó sustancialmente para el 2013, sobrepasando los 28.000 millones de bolivianos.

La estabilización y crecimiento de la economía boliviana se ve reflejada también en los indicadores sociales, pues las cifras oficiales²¹² demuestran que las políticas del gobierno han logrado un impacto en la reducción de fenómenos como la pobreza y la desigualdad. La extrema pobreza se redujo de 38,2 a 18,8% entre 2005 y 2012. En el área urbana, este indicador descendió de 24,3, a 12,2% y, en el área rural, de 62,9 a 40,9%, en el mismo periodo.

Lo mismo ocurrió con la desigualdad pues en 2005 el 10% de la población más rica tenía 128 veces más ingresos que el 10% más pobre, mientras que en 2012²¹³ esta diferencia se redujo a 46 veces. Además, según los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2013 la pobreza extrema en Bolivia se redujo todavía más, llegando a niveles del 18,8%, mientras que la pobreza nacional pasó de 59,6% en 2005 a 39,1% en 2013. Adicionalmente, el coeficiente de Gini se redujo de 0,6 a 0,4 en el mismo periodo, demostrando un mayor acercamiento hacia la línea de igualdad.

Por otra parte, la situación del empleo también muestra mejoras. La tasa de desempleo urbano descendió de 8,2 a 3,2% entre 2005 y 2012. Sin embargo, esta reducción encuentra su correlato en el incremento del empleo informal, el cual se ubica en 70%, según datos del Observatorio Boliviano del Empleo y Seguridad Social del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Ahora, para el porcentaje que se encuentra en el sector formal las condiciones salariales han mejorado pues el salario mínimo se incrementó de 355 a 1.200 bolivianos entre 2005 y 2013.

²¹² Ver más en <http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos//pobreza,7526.html>.

²¹³ En este tema el informe del Banco Central presenta cifras solamente hasta el 2012.

Por otro lado, uno de los temas de mayor sensibilidad a lo largo del gobierno del MAS ha sido el de la distribución de tierras, cuyo proceso de titulación se ha incrementado. Por ejemplo, entre 1996 y 2005 se titularon 9,3 millones de hectáreas mientras que entre 2006 y 2013 la titulación alcanzó a 59,2 millones de hectáreas, lo cual benefició a 1,2 millones de personas. Sin embargo, como ya se había revisado, en el segundo periodo de gobierno se hacen visibles importantes contradicciones que evidencian la inequidad existente en la distribución de la tierra, tema que constituye una de las principales deudas del gobierno y una fuente permanente de presión y conflicto. Como lo señala Jorge Viaña:

Si analizamos la estructura actual de la propiedad de la tierra veremos, en primera instancia, la supremacía absoluta de la gran propiedad empresarial de la tierra: entre 51% (según algunos datos) y 60% (según otros datos) está en manos de grandes y medianas empresas, y representan aproximadamente 50 millones de hectáreas. En segundo lugar, están cerca de 26 millones de hectáreas en manos de Territorios Comunitarios de Origen (TCO's), mostrando una exitosa gestión y consolidación, al menos formal-legal del movimiento indígena de tierras bajas, que desde 1994 ha logrado consolidar aproximadamente el 28% de tierras en el país (...) Y en tercer lugar, que campesinos e indígenas de tierras altas están en una enorme desigualdad en la distribución de la tierra, que presiona sobre los parques nacionales e intereses, tanto de terratenientes como de TCO's (...) En total, están en manos de campesinos y comunidades del altiplano y valles 17 millones de hectáreas que representan 19% de las tierras en el país. Estos datos son significativos, ya que nos dan una idea clara de que la expansión de colonizadores y campesinos del occidente del país, incluidos especialmente los cocaleros, se basa en la presión objetiva de una asimetría estructural de la distribución de la tierra en el país, y en particular, en medio de los intereses del actual bloque de poder que coloca al gobierno en una disyuntiva compleja. Si analizamos más detalladamente, en las 26 millones de hectáreas de las TCO's hay aproximadamente 77 mil personas de grupos indígenas de tierras bajas y en las 17 millones de hectáreas de propiedad de campesinos-indígenas de tierras altas hay aproximadamente 600 mil personas concentradas. Estas son las bases

materiales que han hecho entrar en contradicciones profundas tanto al gobierno como a las organizaciones, tanto indígenas como campesinas.²¹⁴

En lo referente a política fiscal el gobierno boliviano también ha generado importantes ajustes que demuestran una nueva orientación en la correlación de fuerzas. En 2013 las recaudaciones tributarias y aduaneras registraron montos cuatro veces mayores en comparación con 2005. Por ejemplo, la renta interna recaudada en 2013 ascendió a 45.840 millones de bolivianos, mientras que en 2005 este monto era de 12.171 millones.

Finalmente, es importante destacar que la llegada del MAS al poder marca también una reorientación de la política exterior de Bolivia, pues este gobierno se ha distanciado económica e ideológicamente de los Estados Unidos, insertándose a su vez en espacios de integración regional como la UNASUR, el MERCOSUR, la CELAC, el ALBA y la Comunidad Andina de Naciones.

Frente a este breve balance es importante retomar aquí nuevamente el análisis del vicepresidente de la República y uno de los principales ideólogos del proyecto boliviano, Álvaro García Linera, quien sintetiza las políticas de redistribución del gobierno en tres ejes: tierras, bonos y derechos. Adicionalmente, señala que la sustitución de élites gubernamentales se produjo en 2006 con la llegada de Evo Morales a la presidencia, no obstante, “la construcción del nuevo bloque de poder económico y el nuevo orden de redistribución de los recursos se viene dando hasta el día de hoy”²¹⁵. Es por ello que se refiere a Bolivia como un Estado en transición.

²¹⁴ Viaña, Jorge, Estado plurinacional y nueva fase del proceso boliviano. En Thwaites Rey, Mabel (Comp.), *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas*, CLACSO, Santiago de Chile, 2012, p. 384.

²¹⁵ García Linera, *op. cit.*, p. 14.

Como hemos visto hasta aquí, tras dos periodos de gobierno de Evo Morales se puede afirmar que Bolivia está frente a la construcción de un nuevo proyecto nacional, cuyos puntos más sólidos son la estabilidad macroeconómica, la integración social y el combate a la pobreza. Estos logros han potencializado la consolidación del MAS como la primera fuerza política del país, pese a las contradicciones estructurales y conflictos que se han ido evidenciando principalmente a lo largo del segundo periodo de gobierno.

Entonces, si bien encontramos un proceso de consolidación económica que ha aportado gran parte de la estabilidad que hoy tiene el gobierno, otro de los ejes en donde se apuntala ha sido sin duda la capacidad política que ha tenido el MAS para formar alianzas y generar una correlación de fuerzas favorable para el proyecto.

Por lo tanto, en materia política cabría pues establecer dos análisis al respecto de los casi diez años de gobierno de Evo Morales. En primer lugar, en términos estrictamente formales, hay que hacer énfasis en las posibilidades reales de maniobra que tiene el Presidente frente a la necesidad de fortalecer y apuntalar su gobierno, estableciendo mecanismos de participación de los sectores sociales dentro de la esfera institucional, lo cual a su vez logre cooptar y desmovilizar a los sectores subalternos.

Esta situación parte de la premisa de que este gobierno representa a “la movilización social en el poder” y que, por tanto, sus decisiones y políticas vienen directamente del seno de los propios movimientos sociales. Por tanto, cualquier movilización o protesta realizada es vista por el gobierno como producto de la conspiración de los grupos oligárquicos, aun cuando en términos reales no sea así. Si bien es cierto que podemos encontrar la infiltración de algunos de estos grupos en las movilizaciones indígenas, principalmente de tierras bajas (el conflicto del TIPNIS en 2010, por ejemplo), esta penetración tiene un carácter de

oportunismo político y no es determinante dado que -como vimos- el conflicto en este caso obedece a la defensa del territorio y no por intereses políticos o de particulares.

Sin embargo, la desmedida respuesta del gobierno a las movilizaciones protagonizadas por movimientos indígenas, principalmente en la Amazonia, es el resultado de abrogarse para sí el liderazgo ideológico y político del nuevo proyecto de Estado dado que se asume, como se dijo anteriormente, como un gobierno emanado de la movilización social y que responde a la necesidad imperante de darle continuidad en el tiempo al nuevo horizonte de posibilidades que quedó acordado con todo el pueblo boliviano, una vez que se aprobara la nueva Constitución y, con ella, la refundación del Estado.

Para tal fin, en los dos periodos de gobierno del MAS se estableció una serie de políticas redistributivas que, en honor a la verdad, han reforzado su apoyo entre los sectores más desposeídos y de a poco han ido fortaleciendo al partido durante los sucesivos procesos electorales, los cuales siguen confirmando la hegemonía política del MAS, aun cuando este instrumento electoral ha evidenciado en los últimos años que en sus plantillas de candidatos caben también varios grupos de poder.

En segundo lugar, cabría analizar lo que ha representado la búsqueda del MAS por posicionarse en términos formales como la primera fuerza política del país y en qué medida esto ha favorecido a los sectores que en términos formales no se integran al proyecto de este movimiento ni como bloque ni individualmente. Para estos grupos el principal pendiente es la puesta en marcha de los lineamientos elementales de la nueva Constitución, la cual sí representó un elemento articulador de las aspiraciones abiertas por el largo periodo de lucha que experimentó Bolivia. Al respecto Silvia Rivera Cusicanqui señala lo siguiente:

En algún momento, desde las federaciones departamentales y las centrales de la organización sindical hay un proceso de cooptación, pero a nivel de bases está fragmentada la disidencia. Son cooptaciones cupulares, pues las bases están neutralizadas por los apoyos prevendales pero eso no quiere decir que no haya oposición. El desafío de las organizaciones sociales es articularse en torno a un programa más claro de alternativa al desarrollismo, a base de modelos de desarrollo propios. En la constituyente sí hubo una dinámica de discusión desde abajo que se vio un poco coartada por la obligación que tuvo la gente de adscribirse al MAS para participar, pero sí hubo una cierta autonomía sobre todo de sectores indígenas, pero posteriormente eso se fue debilitando y con la marcha del TIPNIS el Pacto de Unidad dejó de existir. Este proceso fragmentado va a ir articulándose de alguna forma a partir de las crisis económicas, de los desastres naturales, el tema de la seguridad alimentaria amenazada, etc. Y la dinámica de unidad aparente con el Estado va a quedar sobrepasada por los hechos. Las condiciones de este nuevo gobierno están dadas para un viraje mucho más claro hacia la derecha y, por lo tanto, se van a articular elementos disidentes con mucha mayor fuerza²¹⁶.

Para los sectores no incorporados al bloque del MAS la refundación camina muy lentamente, los logros económicos no son suficientes y el país sigue vinculado a una política extractivista, en la cual hay muy poca opción de maniobra. En este sentido podríamos decir que poco a poco Bolivia comienza a realinearse en las dinámicas productivas del sistema capitalista, aunque no podemos negar que estamos frente a una reconfiguración del sujeto social y a la emergencia del sector indígena como nuevo sujeto político que ha entrado en un proceso de disputa de la hegemonía del Estado boliviano, todo lo cual ha aportado elementos complejos a la posibilidad de construcción de un proyecto alternativo, dado que - como también ya se mencionó- la nueva elite aimara se ha empoderado a un punto de no retorno. Es decir, ahora existe una disputa formal de este sector por las esferas de poder en prácticamente todos los niveles, en esta lógica es donde podemos situar al sector cocalero.

²¹⁶ En entrevista realizada el 9 de enero de 2015 en La Paz.

Todas estas contradicciones han generado un desgaste del MAS incluso en la capacidad que este tuvo de convertirse en una herramienta electoral efectiva, de lo cual a su vez sigue dependiendo la continuidad del proyecto político iniciado en 2006, en la medida en que actualmente existe una enorme fragmentación de las fuerzas sociales que en un momento se articularon para proponer un nuevo paradigma estatal, fragmentación que ya no permite vislumbrar una orientación única, o un polo específico que concentre a las fuerzas emancipatorias.

Si bien es cierto esta diversidad expresa la riqueza de los procesos participativos del nuevo siglo, sean o no institucionales, también se hace evidente que dicha diversidad puede y se ha convertido en una dinámica de fraccionamiento y conflicto al interior de las propias fuerzas sociales progresistas, en el marco de la cual los sectores de derecha han aprovechado para reconstituirse y recuperar espacios dentro del poder político. Respecto a las complejidades organizativas en medio de las cuales nació y se ha desarrollado el MAS, Ann Chaplin y John Crabtree lo sintetizan de la siguiente forma:

La relación entre el MAS y los movimientos sociales que lo llevaron al gobierno no necesariamente careció de ambigüedades. Como habría de constatarse posteriormente, esta relación se tornó más tensa, pues el gobierno tomó decisiones que tocaron intereses sectoriales. Asimismo, el gobierno no siempre pudo responder a las demandas populares que se habían ido acumulando durante décadas. Desde el principio, hubo algunos movimientos sociales que mantuvieron cierta distancia con el gobierno, ansiosos por mantener cierto grado de autonomía. Este era el caso de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), una organización que representa a los numerosos pueblos indígenas de las tierras bajas, principalmente de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Como hemos mencionado, entre los miembros más integrados al MAS estaban los cocaleros, la confederación campesina CSUTCB, los colonizadores (ahora conocidos como comunidades interculturales) y la federación de mujeres campesinas Bartolina Sisa. La posición de la COB, ahora una organización mucho menos influyente que en el pasado, era más ambivalente, dependiendo de su propia política interna y de la relación con el gobierno respecto a temas como la política salarial. En general, y aunque el MAS ha afirmado

siempre ser un “partido de los movimientos sociales”, la relación con ellos ha sido errática y fluctuante, y quizá el intento más cercano de desarrollar una instancia de coordinación entre el MAS y los movimientos sociales sobrevino con la creación de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) en 2007, una instancia organizativa que se reunía más o menos regularmente durante la primera gestión de Morales. En general, en las organizaciones sociales, antes que un apoyo ciego al gobierno, ha primado la defensa de sus intereses²¹⁷.

Ahora, como se había observado antes, es importante destacar que al igual que está sucediendo en el Ecuador, el propio desgaste del movimiento que se encuentra en el poder, en este caso el MAS, debido a los sucesivos procesos electorales en los que ha participado para ratificar su liderazgo político, el distanciamiento cada vez más amplio con sectores y dirigentes históricos de la lucha social e incluso los rumores de fraude electoral que rodearon la elección de Evo Morales para un nuevo periodo de gobierno (2015-2020); han abierto a nivel local grietas por donde la oposición y los sectores de la oligarquía tradicional han buscado reposicionarse.

Así, en la elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015, el MAS sufrió un importante revés electoral, pues perdió las alcaldías de El Alto y Cochabamba, y las gobernaciones de La Paz y Tarija, las cuales hasta ahora habían estado bajo su control. Además, no consiguió arrebatarse a la oposición espacios de poder que ya venía detentando tales como la alcaldía de La Paz y la gobernación de Santa Cruz. En el caso de la gobernación del Beni, uno de los departamentos que forman parte de la Media Luna, el MAS no consiguió la mayoría por lo cual irá a una segunda vuelta electoral, a realizarse en mayo.

²¹⁷ Crabtree, John, Chaplin, Ann, Bolivia: proceso de cambio, OXFAM, CEDLA, Fundación PIEB, La Paz, 2013, p. 22.

En este sentido, y de forma muy similar a los resultados de las últimas elecciones seccionales del Ecuador (febrero de 2014), vemos que el partido de gobierno (MAS) en términos generales aún se mantiene como la fuerza política más importante del país pues ganó cuatro gobernaciones y la mayoría de municipios de Bolivia. No obstante, es evidente su desgaste político en un nivel en el que incluso se pone en riesgo la continuidad del gobierno a mediano plazo, pues en términos cualitativos se han perdido espacios estratégicos del país tanto en términos políticos como simbólicos. El departamento de La Paz, por ejemplo, es el centro de poder político del país y El Alto constituye un espacio estratégico debido a su tradición de lucha (fue el terreno del enfrentamiento durante la Guerra del Gas), así como a la concentración de importantes sectores de la organización social, por ejemplo La Fejuve.

Llama mucho la atención que en el caso del El Alto haya triunfado la indígena aimara Soledad Chapetón, quien pertenece al Partido Unidad Nacional, el cual a su vez está liderado por Doria Medina, uno de los hombres más ricos del país y representante del sector empresarial. Como se había mencionado antes, Doria Medina quedó en segundo lugar en las últimas elecciones para la Presidencia de la República (2014), en las cuales tuvo como compañero de fórmula a Felipe Quispe, quien participó como candidato a vicepresidente. Es llamativo también el caso Félix Patzi, también aimara, quien quedó electo como gobernador del departamento de La Paz en representación de la alianza Soberanía y Libertad (SOL.bo), movimiento en el cual se han aglutinado varios ex partidarios del MAS que ahora se reconocen como oposición. De hecho Félix Patzi fue ministro de educación de Evo Morales entre 2006 y 2007, pero fue expulsado del movimiento en 2010 por diferencias ideológicas con el MAS.

Lo anterior demuestra que los fraccionamientos generados al interior del otrora sólido bloque indígena-campesino que apoyó la candidatura de Evo Morales y que se mantuvo articulado en defensa del proceso constituyente y la aprobación

de la nueva Constitución están pasando factura al apoyo político con el cual contaba el MAS a nivel de las bases, las cuales al parecer se encuentran buscando nuevos ejes y nuevos liderazgos para articular sus demandas²¹⁸. Para ello, el perfil indígena no deja de ser una de los golpes de efecto más importantes durante esta disputa, elemento que ha sido aprovechado incluso por ciertos sectores de derecha (Doria Medina) para ganar espacios de poder político.

En otro escenario, para los sectores que siguen formando parte del bloque de fuerzas sociales que sostiene al gobierno, el desafío es el de la real implementación de la nueva Constitución lo cual implica, de manera prioritaria, la construcción del Estado Plurinacional, proceso que apenas empezará a perfilarse en el nuevo mandato de Evo Morales, es decir a partir de este año cuando al menos en el ámbito legislativo el gobierno ha inclinado favorablemente la balanza de la correlación de fuerzas.

Es decir, con la mayoría de diputados y senadores alcanzados por el MAS en la elecciones de 2014 se tiene que dar paso a las leyes y mecanismos institucionales necesarios para la puesta en marcha del proyecto alternativo pactado en la nueva Constitución, pues este periodo que empieza es el decisivo para que el proyecto encabezado por el MAS se juegue las posibilidades de su profundización. Como lo señala Rodolfo Machaca, secretario Ejecutivo de la CSUTCB:

²¹⁸ “Se verifican un conjunto de tensiones críticas porque en este caso no provienen de la amenaza de la oposición política sino que tienen que ver con su militancia, sus aliados y sus bases sociales que ponen en entredicho tanto el liderazgo de Evo Morales como aspectos de su gestión gubernamental y denotan un resquebrajamiento de aquel acuerdo monolítico que en su momento sostuvo incondicionalmente al proyecto de Gobierno mientras que al mismo tiempo, despliegan una serie de estrategias para recuperar o en su caso reencaminar el proceso de cambio”. Arce Claudia, Canedo, Gabriela, Quispe, Alber, Zegada, María Teresa, La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano, CLACSO, La Paz, 2011, p. 98.

La propuesta que llevó el movimiento campesino a la Asamblea Constituyente fue tomada en cuenta en un 80 por ciento. Por ejemplo, en el tema de tierras no hubo una real trascendencia de lo que se pretendía, es decir, eliminar a los latifundistas. Esto porque en el parlamento había un buen grupo de representantes de terratenientes que no permitieron aprobar todo lo que se construyó en la Asamblea. Pero con el nuevo gobierno y con los asambleístas que ganamos vamos a modificar a la constitución y ahí le toca nuevamente al movimiento campesino salir a mejorarla para ponerla al servicio de los más pobres, ahora que tenemos mayoría en el parlamento. Lo que nos falta es insertar en la estructura del Estado la plurinacionalidad. No vamos a aplicar el mismo racismo que ha aplicado la oligarquía, más bien vamos a demostrar cómo se gobierna con verdadera democracia²¹⁹.

En este sentido, se puede afirmar que el reto de la sociedad boliviana es construir un modelo sobre el cual se superen las condiciones previas con las que se construyó la República, la cual se fundó sobre las bases de un sistema excluyente. Por otro lado, el dilema en lo económico gira en torno de la generación de transformaciones que impacten en las dinámicas económicas primario exportadoras y extractivistas, y que consoliden un modelo de producción alternativo, fundamentado en el Estado plurinacional y capaz de establecer un nuevo paradigma en lo político y en lo económico.

Sin embargo, la realidad social y política en la que se ubica el actual proceso se encuentra entrecruzada por un sin número de intereses en los que encontramos la emergencia de nuevas élites aimaras pactando y cogobernando con las viejas oligarquías, así como un amplio proceso de corporativización estatal en el cual el MAS lleva la batuta. Sin duda, el impase actual en el que se encuentran los movimientos sociales responde a este proceso de condicionamiento político de las dirigencias, el cual ha sido la clave para

²¹⁹ En entrevista realizada en La Paz, Bolivia, el 10 de noviembre de 2014.

comprender la relativa tranquilidad de Bolivia, escenario en el cual la continuidad del gobierno del MAS evidencia una lógica distinta a la del caso ecuatoriano.

Lo cierto es que para ambos gobiernos, el de Evo Morales y el de Rafael Correa, el periodo actual para el cual fueron reelegidos (2015 y 2013 respectivamente) se presenta como decisivo, tanto en lo relativo a la posibilidad de un reencuentro con las organizaciones sociales en la medida en que se logre una profundización del proceso de acuerdo al nuevo paradigma social que definen sus Constituciones; cuando en lo que refiere a la permanencia del proceso político y que en gran medida depende de que logren la reelección. A esto hay que sumarle las condiciones geopolíticas actuales que han evidenciado un peligro de retroceso para otros gobiernos progresistas o revolucionarios (Venezuela y Cuba), así como las coyunturas económicas cuyas crisis pueden impactar directamente en las condiciones de estabilidad generadas por estos gobiernos en la medida en que no han logrado modificar su patrón de acumulación.

Conclusiones

A modo de cierre, en un balance final sobre los procesos analizados (Ecuador y Bolivia) podríamos decir que la historia reciente de la movilización social que ha caracterizado a estos dos países se enmarca en un proceso histórico de larga data que buscó, en primera instancia, el establecimiento de un sistema político capaz de garantizar mayores horizontes de participación (luchas sindicales de la primera mitad del siglo XX y los proyectos nacionalistas) y, posteriormente, se enfocó en la búsqueda de un Estado más incluyente y equitativo (emergencia del movimiento indígena y campesino).

Tanto Ecuador como Bolivia están marcados por dinámicas históricas similares debido a su matriz cultural andina y a los procesos de dominación colonial (gamonalismo) que han caracterizado su constitución como Estado-nación, lo cual hace viable una comparación en cuanto a la construcción del sistema hegemónico, así como a las dinámicas de resistencia.

Es por ello que cuando analizamos los procesos históricos de ambos países encontramos que están marcados por una profunda inestabilidad política y económica, que a su vez ha determinado la construcción de los distintos procesos de movilización social que, según sea el caso, van a responder a los intereses de los sectores subalternos. Es en esta dinámica en donde podemos enmarcar los distintos procesos de lucha por la participación, la inclusión o el mejoramiento de las condiciones de vida.

Tanto en Ecuador como en Bolivia, el proceso histórico de movilización social ha estado determinado por dos ejes, el primero, por las distintas luchas de clases que focalizan los procesos de resistencia en los sectores urbanos, y el segundo, por la aparición fundamentalmente en los años 70 del siglo XX, de un movimiento indígena que en un primer momento se focalizó en las áreas rurales

pero que, como vimos en la presente investigación, va a cobrar mayor dinamismo con la llegada del modelo neoliberal, alcanzando un matiz nacional. En ambos casos, este movimiento fue determinante para la articulación de los procesos de lucha y resistencia que caracterizaron los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI.

Sería muy difícil sino imposible entender el triunfo político y la consolidación de Alianza País sin la asociación que este proyecto mantuvo con el momento indígena encabezado por la CONAIE. Del mismo modo, no podríamos entender el vertiginoso ascenso político del MAS en Bolivia sin la determinante presencia de este sector. En ambos casos estos procesos de ruptura tienen su origen en las últimas dos décadas del siglo XX, cuando estos movimientos sociales toman la estafeta de la movilización social de manos de los sindicatos y partidos comunistas, dando lugar a la configuración de nuevos sujetos sociales, los cuales van a ser claves para entender los procesos de quiebre del sistema político y económico (neoliberalismo) que experimentaron tanto Ecuador como Bolivia.

En este sentido, la experiencia acumulada por el movimiento sindical, los movimientos guerrilleros y los partidos de izquierda aportan un elemento fundamental que las confederaciones indígenas y los movimientos encabezados por estos van a retomar para fortalecer su dinámica organizativa, sus reivindicaciones y sus estrategias de movilización.

La conformación de un nuevo proyecto nacional está entonces marcada por la emergencia de los liderazgos de Evo Morales y Rafael Correa, mismos que fueron determinantes en la configuración del nuevo proyecto nacional y que responden a la crisis del sistema político tradicional y al descrédito de los mecanismos institucionales de representación (los partidos políticos), todo lo cual generó una ebullición social que logró ser canalizada por ambos personajes hacia

la configuración de una propuesta electoral alternativa en un escenario de conflicto determinado por el avance de la política neoliberal.

La convivencia de un sistema económico y político marcado por prácticas oligárquicas, con las dinámicas de inserción del Estado en el mercado mundial a través del modelo neoliberal, han mantenido latentes en estas sociedades formas de articulación comunitarias que han convivido con espacios de organización por excelencia (obreros y estudiantes), evidenciando la complejidad de los procesos de resistencia social en estos países, todo lo cual ha decantado en que en el nuevo siglo la ebullición social y la estructuración de un proyecto político alternativo se construyan al margen de las organizaciones políticas de la izquierda tradicional, elevando el protagonismo de nuevos sectores sociales.

Para el caso boliviano, se evidencia como característica principal la presencia de una clase sindical fuerte, primero ligada a la minería y posteriormente al cultivo de la hoja de coca, pero cuya composición mayoritariamente indígena generó que apareciera temprano en su historia una corriente de reivindicación étnica (katarismo), enfocada a la refundación de formas estatales ancestrales (collasuyo), y que estará presente a lo largo de todas sus luchas, marcando también la actual disputa que viven las clases subalternas por la hegemonía del Estado.

Entonces, ya desde la revolución nacionalista de 1952 se evidencia el protagonismo del sector indígena campesino, el cual en los primeros años de la revolución actuó como aliado del gobierno nacionalista pero que después pasó a constituirse solamente en una base clientelar. Esta experiencia es trascendental en la medida en que deja ver que en Bolivia las clases subalternas, principalmente el sector indígena campesino, han estado tradicionalmente en interacción con la esfera del poder estatal buscando incidir en ella por medio de diversos mecanismos. Una de las principales conquistas de esta temprana movilización fue

sin duda la reforma agraria que, a su vez, va a posibilitar la formación de un Pacto Militar Campesino, el cual frenaría el avance del comunismo en Bolivia.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, esta dinámica ha hecho que en el caso de Bolivia la presencia del movimiento indígena y campesino, en un primer momento de tierras altas y, posteriormente tierras bajas, sea determinante en las luchas del periodo 2000-2005 que permitieron la ruptura en el paradigma político boliviano. Y también nos permite entender cómo su articulación con el sector sindical, mediante organizaciones como la CSUTCB y la Federación de Cocaleros, logró consolidar una organización política capaz de triunfar electoralmente (MAS).

Estas organizaciones permiten entender el grado de articulación que tuvieron los movimientos sociales en el proceso de ruptura del viejo sistema político pues tanto en la Guerra del Agua como en la Guerra del Gas la experiencia aportada por los sectores subalternos (COB, CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, etc.) resulta fundamental para dimensionar las conquistas obtenidas en función de la ruptura con el paradigma político neoliberal.

Por otro lado, en el caso ecuatoriano encontramos la consolidación del liderazgo de Rafael Correa como un proceso marcado por la irrupción espontánea pero decidida de las clases medias y progresistas, como resultado del descontento que se venía acumulando desde hace dos décadas en rechazo a la implementación del modelo neoliberal que tuvo funestas consecuencias en el país, entre las más importantes, la crisis bancaria y la dolarización.

Entonces, las protestas de abril de 2005 que dieron origen a la posibilidad de configurar un movimiento alternativo con proyección electoral (Alianza País) encontró el camino abonado en la serie de luchas y acciones de movilización generadas en el país desde la década de los noventas (este periodo está

caracterizado por la emergencia del movimiento indígena encabezado por la CONAIE), así como en la inestabilidad política y la crisis económica que precedieron al derrocamiento de Lucio Gutiérrez en 2005.

El escenario político y social ecuatoriano de ese momento está signado por el liderazgo del movimiento indígena durante la primera etapa de las acciones de resistencia al modelo neoliberal, que enarbolaba como principal bandera de lucha la refundación del Estado mediante la generación de un nuevo pacto social (constituyente). No obstante, con la fallida experiencia de este sector en el gobierno de Gutiérrez (2003-2005) y la fragmentación que esto causó en su interior, se evidencia un retroceso e incluso ausencia del movimiento indígena durante los conflictos sociales que marcaron el quiebre de la etapa neoliberal.

Si bien Alianza País (AP) surge como un movimiento que reivindica la primacía de la condición de ciudadano en oposición a las organizaciones políticas tradicionales (partidos, sindicatos, movimientos sociales), la presencia de diversos sectores al interior del mismo, muchos de los cuales estaban ligados a la lucha social, así como la capacidad de este proyecto de retomar las reivindicaciones de los movimientos sociales ecuatorianos, principalmente la convocatoria a Asamblea Constituyente, logran convertir a AP en un nuevo espacio de articulación de los sectores progresistas y de izquierda, incluso el movimiento indígena.

A diferencia de Bolivia, en el Ecuador históricamente no existe la formulación de un pacto o alianza entre las clases subalternas y el Estado, por lo tanto, el peso de las determinaciones del gobierno golpeó sin intermediación de aparatos políticos de mediación efectivos (sindicatos, organizaciones campesinas, etc.). Por tal motivo, la ampliación del modelo neoliberal solo tendrá respuesta por parte de la única organización capaz de articular al resto de organizaciones y hacer frente como conglomerado a las reformas estatales, es decir, la CONAIE,

movimiento que en la década de los noventa lidera la protesta contra la ampliación del modelo neoliberal.

En este sentido, dicho posicionamiento va a permitirle después incorporarse al sistema político de partidos y a la estructura burocrática del Estado, desde la cual mantuvo un muy pobre posicionamiento una vez conformado el gobierno de Lucio Gutiérrez del cual forman parte, inclusive cuando este dio un vuelco más amplio en la profundización del neoliberalismo. Con la profundización del modelo neoliberal y el deterioro que las instituciones y el gobierno venían arrastrando, se genera el escenario para la emergencia de lo que va a ser un movimiento (AP) dirigido en cierta forma por los sectores progresistas del Estado y de la sociedad que se caracterizan tradicionalmente por su poca o nula participación política.

Es en este sentido que AP, bajo el liderazgo de Rafael Correa, tiene la capacidad de canalizar para su proyecto toda la ebullición social generada en el seno de la multiplicidad de movimientos sociales. Este movimiento representa pues un conglomerado dirigido por la clase media como alternativa al sistema político tradicional en el que predominaban los partidos y los sindicatos u organizaciones afines y construye desde una visión propia de la clase media un proyecto de inclusión en el cual van a participar también los sectores subalternos para la construcción de un nuevo pacto social.

Aquí las evidentes diferencias entre el proceso por el cual el MAS irrumpe en la arena política en relación a la consolidación de AP como el movimiento de la clase media capaz de orquestar un proyecto “progresista” (en AP participa un amplio conglomerado de sectores entre los que se encuentran tanto representantes de movimientos sociales como sectores vinculados a la derecha) va a ser determinante para comprender el accionar y los alcances de ambos proyectos pues si bien en ambos casos se elabora una nueva Constitución y se refunda al Estado bajo el paradigma de la plurinacionalidad no existe una

confluencia plena entre ambos casos sobre los procesos de movilización y los niveles de accionar que alcanzaron tanto Evo Morales como Rafael Correa.

El MAS como “herramienta” de los movimientos sociales representa el punto de canalización, por la vía institucional (electoral), de un arduo proceso de lucha y movilización en el que la presencia de sectores como el indígena y el urbano popular van a ser determinantes para darle cara, al menos en el primer mandato de Evo Morales, al proyecto de la constituyente.

Por otro lado, en el caso de AP lo que encontramos es una ebullición que responde ciertamente a varios años de inestabilidad política y movilización social que al momento de derrocar gobiernos se mostraba incapaz de generar un proyecto más allá de la inmediatez y la coyuntura; sin embargo, no busca de entrada una refundación profunda del Estado sino que esta se incorpora después por parte de los movimientos sociales organizados que buscan la transformación profunda de la estructura estatal y que forman parte de la plataforma político electoral de Rafael Correa desde su primera candidatura, convirtiendo así en una parte medular de su discurso de campaña la refundación del Estado (Asamblea Constituyente).

En este sentido, el movimiento propuesto por AP de refundación nacional estará enmarcado por la primacía de una clase media que tomó para sí el proceso de refundación estatal. Entonces, las diferencias que se pueden esgrimir casi de forma inmediata entre AP y el MAS pasan por el origen mismo del proyecto puesto que, por un lado, el MAS como instrumento político viene de una ardua tradición de incorporación sindical y del movimiento indígena organizado en confederaciones.

El MAS representa la búsqueda por el control del Estado, la cual no es nueva dado que en Bolivia existe una tradición de participación política por

intermediación de organizaciones bien estructuradas (sindicatos, partidos políticos y confederaciones), mientras que con AP lo que encontramos es la confluencia de una gran variedad de organizaciones y movimientos sociales en pos de la construcción de un modelo que estabilice económica y políticamente al país y, en esta confluencia, casi desde el principio se evidencia una gran cantidad de divisiones, mismas que han representado uno de los grandes problemas de origen en el proceso ecuatoriano.

Es quizá por estas diferencias que, en el caso boliviano, encontramos un avance electoral cada vez más constante del proyecto que impulsa el MAS aún y cuando en este existe la participación también de una amplia gama de sectores sociales pero bajo el discurso de la superación del modelo neoliberal y la generación de un proyecto de índole “nacionalista”, con un fuerte componente étnico. Sin duda, en este caso las condiciones históricas que señalábamos anteriormente nos permiten estructurar el análisis en función de la continuidad del MAS en la Presidencia y del proyecto que este encabeza, el cual, dicho sea de paso, pinta un mejor escenario que en el caso ecuatoriano con AP.

Ahora bien, en Ecuador lo que encontramos es el avance cada vez más contundente de la derecha sobre los espacios políticos que habían sido ocupados por los sectores progresistas a través de AP. Si bien, en este proceso también existe una oposición gestada desde los movimientos sociales que han marcado un total distanciamiento con el proyecto, estos no constituyen una fuerza de choque real que consiga equilibrar la balanza hacia su lado, a diferencia de lo que sucede en Bolivia con movimientos sociales de oposición que tienen una enorme capacidad de movilización tales como la CIDOB y el CONAMAQ.

En Ecuador la amenaza al proyecto original, como estaba planteado en 2006, la encontramos dentro de las propias estructuras de AP y las disputas internas de grupos sin una filiación ideológica clara que han tenido la capacidad de

ir ganando cada vez más espacios en puestos de decisión. Dicha inestabilidad se refleja en los resultados desfavorables de las últimas elecciones seccionales así como en la dependencia innegable que tiene el movimiento de la figura de Rafael Correa como el único candidato viable para el proyecto electoral.

A lo anterior se suma la capacidad que han tenido los sectores de derecha (cámaras empresariales, representantes de la banca, partidos políticos tradicionales, dueños de medios de comunicación) de reconstituirse y reagruparse, tomado en cuenta la abigarrada presencia de los sectores oligárquicos en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Así, no es de extrañarse que pese a los esfuerzos por parte del gobierno de regular sectores como la banca y los medios de comunicación, ellos sigan teniendo un enorme poder de veto en el proyecto así como una gran capacidad de influencia en la opinión pública.

Como producto del posicionamiento en el ámbito burocrático o por su relación con el Estado, se puede decir que a la par de la emergencia de nuevas dirigencias que han revitalizado el sistema político (mujeres, indígenas, jóvenes) también han aparecido nuevos liderazgos que se han favorecido en estos procesos de cambio de tal forma que han pasado a constituir nuevas élites tanto en el ámbito económico como político.

En el caso boliviano, este proceso se refleja en la consolidación de una dirigencia cocalera influyente y enriquecida, capaz de disputar los puestos de elección popular, haciendo un gran despliegue de recursos en sus campañas. Por otro lado, en el medio urbano (El Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro, entre otras ciudades) los comerciantes, transportistas y, en menor medida, una nueva élite burocrática mayormente aimara se incorporan a los sectores mejor acomodados económicamente.

En este sentido, podemos afirmar que la aparición de esta nueva élite indígena y sindical no representa en modo alguno la superación del paradigma político y económico de dominación al que se ha venido sometiendo a los grupos indígenas históricamente, dado que lo que busca es profundizar su posicionamiento y aumentar sus riquezas, muchas de las cuales están basadas en la propiedad y explotación de la tierra.

Entonces, la cuestión recae en si el recambio de élites representa de algún modo una consecuencia favorable del proceso o si aquellas están reproduciendo una relación de exclusión que refleja las dinámicas propias de un sistema de clases, pero con un matiz étnico.

Esta es una desviación que se encuentra presente en ambos procesos, puesto que en el caso ecuatoriano también se ha producido un recambio de cuadros al interior del aparato burocrático, en el que ha primado una clase media acomodada proveniente del sector académico, pero que prioriza una visión unidireccional y ajena a la realidad de los sectores subalternos que fueron los que se encargaron de posibilitar el nuevo proyecto de gobierno. Sin duda esta nueva élite, que además de haberse fortalecido económicamente también ha visto favorecido su posicionamiento político, en la medida en que ha desplazado lentamente a los cuadros dirigentes provenientes de los movimientos sociales, bajo un discurso de “profesionalización” burocrática.

Como consecuencia del posicionamiento de este sector, podemos afirmar que, en la medida en la que se ha robustecido teórica y técnicamente al Estado ecuatoriano, también se ha debilitado su capacidad de articulación social, fundamentalmente con los sectores más populares al desplazar sus cuadros dirigentes de puntos estratégicos del gobierno, con lo que podríamos decir de cierta forma que, en pos de la profesionalización y la denominada reforma del Estado, se han descuidado los rubros que en un momento dado podrían o pueden

responder por el proyecto de Correa y que fundamentalmente se encuentran en los sectores que se han visto desplazados, es decir, las clases subalternas. En este sentido, al menos en el caso ecuatoriano estos elementos nos permiten vislumbrar de cierta forma los escenarios futuros en términos electorales, puesto que el distanciamiento de los sectores populares pone en peligro la continuidad del proyecto.

Por último solo restaría agregar que los escenarios que en términos futuros se vislumbran para ambos países (Ecuador y Bolivia) tienen matices distintos. Por un lado, encontramos que el Ecuador se ha venido caracterizando los últimos dos años (2013-2014) por un marcado retroceso de AP en los procesos electorales y por el avance de una efectiva campaña de descrédito, la cual en cierta medida se podría vincular con dicho retroceso.

Aquí es clave el papel que, por omisión, el gobierno de Correa ha tenido en relación con la participación de los movimientos sociales en el Gobierno y el desplazamiento estratégico de dichos sectores de la administración pública, en beneficio de sectores medios que se han mostrado incapaces al momento de responder al proyecto electoral, dado que tienen una muy pobre o nula capacidad de convocatoria y que es justo en este sector en el que el avance del discurso de la derecha (medios de comunicación masiva) ha pegado con mayor éxito.

En tal sentido, se puede entender que a futuro sin la figura de Correa el propio proyecto de AP carece de sentido. A esto habría que sumarle, como mencionamos anteriormente, que la composición de AP es tan amplia que ha permitido el avance de corrientes marcadamente de derecha, vinculadas a un pensamiento conservador en detrimento de las organizaciones de izquierda. Pareciera que de a poco pero de manera segura el gobierno de Correa se ha distanciado de su base original y esto, electoralmente al menos, comienza a pasarle una importante factura en la medida en la que estructura una política que

responde más a los intereses de una clase que al real ímpetu progresista que, al menos discursivamente, le llevó al poder.

En contraposición, en el caso boliviano podemos observar una consolidación electoral y política del proyecto, misma que le ha permitido afianzarse en su control de la estructura estatal que permanecía bajo la dirección de otros sectores políticos (grupos conservadores, oligarquía, partidos políticos tradicionales). Sin embargo, en este afán por el control pleno de la estructura estatal, también como en el Ecuador pero con un matiz distinto, se ha distanciado de algunas organizaciones que fueron su base inicial y que tienen un carácter relativamente más progresista. Aquí, a diferencia del caso ecuatoriano, el gran eje de la disputa política que está caracterizando el proceso al interior del MAS es la profundización de las contradicciones generadas entre los nuevos miembros del MAS (clases medias y burguesía), y las bases originales (sector cocalero, sindical, indígena), sin negar que al interior de estos, como lo mencionamos anteriormente, existe una élite que se ha favorecido del proceso.

Esta disputa configurará a la larga el gran escenario sobre el cual se establezcan los criterios respecto quienes conducirán el proyecto, es decir, el reto del MAS entonces radicará en mantenerse sobre el eje de la izquierda, caso similar al del Ecuador, solo que en el Bolivia encontramos una mayor estructura organizativa, misma que se apoya en las bases de las grandes confederaciones y sindicatos.

Entonces bien, la gran cuestión que enfrentan a futuro estos gobiernos en tanto proyectos progresistas es el mantenerse dentro de un eje de transformación vinculado a un proyecto de izquierda, el cual será fundamental en términos políticos para conservar la alianza o la participación de las organizaciones sociales, pues de lo contrario existen los riesgos para ambos procesos de caer en una dinámica abiertamente de revolución pasiva. Por tanto, para la continuidad de

los proyectos (Ecuador y Bolivia) es clave que en su interior exista la participación del abanico de los movimientos sociales sobre los cuales se construyeron.

Bibliografía

- Acosta, Alberto, El correísmo-un nuevo modelo de dominación burguesa. En varios autores, *El Correísmo al desnudo*, Montecristi Vive, Quito, 2013.
- Agencia de noticias Reuters, “Crisis en Bolivia por el Gasolinazo”, 29 de diciembre de 2010.
- Albó, Xavier, Movimientos y poder indígena en Bolivia Ecuador y Perú, CIPCA, La Paz, 2008.
- Albó, Xavier, Nación de muchas naciones: nuevas corrientes políticas en Bolivia. En González Casanova, Pablo y Roitman, Marcos (coord.), *Democracia y Estado Multiétnico en América Latina*, México, La Jornada/CCIICH-UNAM, 1996.
- Antezana Ergueta, Luis. Historia secreta del movimiento nacionalista revolucionario. (5 vols.) La Paz, Bolivia: Librería Editorial Juventud, 1984.
- Arce Claudia, Canedo, Gabriela, Quispe, Alber, Zegada, María Teresa, La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano, CLACSO, La Paz, 2011.
- Ayala Mora, Enrique, El Partido Socialista en la historia, Ediciones La Tierra, Quito, 1988.
- Banco Central de Bolivia. Principales logros económicos y sociales 2006-2013. Versión digital disponible en <http://www.bcb.gob.bo>.
- Bensaïd, Daniel y Naïr, Samy, El problema de la organización. Lenin y Rosa Luxemburgo. En *El desafío de Rosa Luxemburgo*, Buenos Aires, Proceso, 1972.
- Bonfil Batalla, Guillermo. Identidad y pluralismo cultural en América Latina, Buenos Aires, CEHASS. 1992.
- Buendía, Fernando y Hernández, Virgilio, Ecuador: avances y desafíos de Alianza País, Revista Nueva Sociedad Nro. 234, julio-agosto de 2011, p. 132. Versión digital en www.nuso.org (visitada el 10 de agosto de 2014).

- Bruckmann, Mónica, Dos Santos, Theotonio. Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico, Revista Prokla, Nro.142, 2008.
- Calderón Fernando, Movimientos sociales y política. La década de los 80s en Latinoamérica, siglo XXI, México, 1995.
- Crabtree, John, Chaplin Ann, Bolivia: procesos de cambio, OXFAM, CEDLA, Fundación PIEB, La Paz 2013
- Chávez León Patricia, Mukrani Crespo Dunia, Uriona Crespo Pilar, Una década de movimientos sociales en Bolivia, Revista del Observatorio Social de América Latina Nro. 28, Noviembre 2010.
- Choque, María Eugenia, La historia del movimiento indígena en la búsqueda del suma qamaña (vivir bien), International Expert Group Meeting on the Millennium Development Goals, Indigenous Participation and Good Governance, United Nations, New York.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, Santiago de Chile, 2014.
- Cordero Ponce, Sofía, Estados plurinacionales en Bolivia y Ecuador Nuevas ciudadanías, ¿más democracia?, revista Nueva Sociedad Nro. 240, julio-agosto de 2013.
- Cueva, Agustín, El desarrollo del capitalismo en América Latina, Siglo XXI editores, Octava reimpresión, México DF, 2009.
- Dávalos, Pablo, Reflexiones sobre el sumak kawsay (buen vivir) y las teorías del desarrollo. ALAI, Quito, 2008.
- De la Fuente, Manuel, La Consolidación del Poder de Evo Morales. En Mouries, Thomas (coordinador), *La legitimidad del poder en los países andino-amazónicos. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú*, Instituto de Investigación y debate sobre la gobernanza, Francia, 2011.
- ----- La guerra por el agua en Cochabamba. Crónica de una dolorosa victoria. Número 15 de Documentos de reflexión académica,

Universidad Mayor de San Simón, Programa de Mejoramiento de la Formación en economía, Cochabamba, 2000.

- Diario el Universo, “Presidente decreta emergencia y disuelve Corte Suprema de Justicia”, Quito, 16 de abril de 2005.
- Diario La Hora, “Izquierda y derecha se reúnen por consulta”, Sección País, 16 de abril de 2015.
- Espósito, Carla y Arteaga, Walter, Movimientos sociales urbano-populares en Bolivia. Una ucha contra la exclusión social, económica y política, UNITAS – Programa Desarrollo del Poder Local, Fundación Carolina (España). Versión digital disponible en: <http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/archives/HASH010a.dir/Avancelnvestigaci%25F3n4UNITAS.pdf> (consultado el 10 de julio de 2014).
- Fernández Blanca y Puentes Florencia, Configuración y demandas de los movimientos sociales hacia la Asamblea Constituyente en Bolivia y Ecuador, Revista Íconos Nro. 44, Quito, septiembre de 2012.
- Follari, Roberto, La Revolución Ciudadana: un lugar para los de abajo. En Núñez, Jorge (coord.), *Ecuador: Revolución Ciudadana y Buen Vivir*, Yulca Editorial, Quito, 2014.
- Franco, Daniela, Subjetividades plurinacionales, En Soruco, Ximena (coord.), *Composición social del Estado Plurinacional. Hacia la descolonización de la burocracia*, Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado, La Paz, 2014.
- Garcés, Fernando, El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de una Propuesta de Constitución Política del Estado, Centro Cooperativo Sueco, La Paz, Bolivia, 2010.
- García Linera, Álvaro, El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación. En Varios autores, *El Estado. Campo de lucha*, CLACSO, Muela del Diablo, Comuna, La Paz, 2010.

- Gutiérrez Aguilar, Raquel. Los ritmos del Pachakuti, Sísifo ediciones, Bajo Tierra Ediciones y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, México, 2009.
- Harnecker, Martha, Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud, Abya Yala, Quito, 2011.
- Hernández, Virgilio y Buendía, Fernando, Ecuador: avances y desafíos de Alianza país, revista Nueva Sociedad No 234, julio-agosto de 2011.
- Herrera Araúz, Francisco, Los golpes del poder...Al aire. El 21 de enero a través de la radio, Abya Yala, Quito, 2001.
- Holloway, John, La lucha de clases es asimétrica, en Chiapas 12, México, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM-Era, 2001.
- Kruse, Thomas. La "Guerra del Agua" en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas. En libro: Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina. Enrique de la Garza Toledo (compilador). Colección Grupos de Trabajo de CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2005.
- Lalander, Richard y Opina Peralta, Pablo, Movimiento indígena y revolución ciudadana en Ecuador. Cuestiones Políticas. Vol. 28 N° 48 (enero-junio 2012).
- Larrea, Ana María, Encuentros y desencuentros: La compleja relación entre el gobierno y los movimientos sociales en Ecuador, OSAL 21, septiembre-diciembre, 2006.
- Larson, Judith, La guerrilla en América Latina ¿terrorismo o guerra popular?, revista de Sociología número 7, septiembre-diciembre de 1977.
- Lora Guillermo, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, Capítulo V la Central Obrera Boliviana. Los Amigos del Libro, La Paz Bolivia. 1967.
- Lucas, Kintto, Rafael Correa, un extraño en Carondelet, Editorial Planeta, Quito, 2007.

- Maira Aguirre, Luis, Las relaciones entre América Latina y Estados Unidos: balance y perspectivas. En *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina*. Boron, Atilio A.; Lechini, Gladys. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2006.
- Makaran, Gaya, Identidades confrontadas. Conflictos identitarios en Bolivia. CIALC, México, 2012.
- Martínez González, Adriana Paola, Hacia la refundación de Estado boliviano. En Makaran, Gaya (coordinadora), *Perfil de Bolivia 1940-2009*, CIALC, México, 2009.
- Maldonado Donoso, Fernando, Militares y política en Ecuador de 1830-1980, en Ayala, Mora, Enrique (coord.), *Política y Sociedad. Ecuador: 1830-1980*. Corporación Editora Nacional, 1980.
- Mayorga, Fernando, Movimientos sociales y participación política en Bolivia. En Cheresky, Isidoro (compilador), *Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina*, Ediciones Prometeo, Buenos Aires, 2011.
- Meyer, Jean. El movimiento estudiantil en América Latina. Revista Sociológica, año 23, número 68, septiembre-diciembre de 2008.
- Ministerio de Comunicación del estado Plurinacional de Bolivia. Logros de la Gestión del Presidente Evo Morales Ayma, 2012. Versión digital disponible en www.comunicacion.gob.bo.
- Modonesi, Massimo, Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época. A contra corriente. Vol. 5, No. 2, 2008.
- ----- Subalternidad, antagonismo, autonomía: marxismos y subjetivación política, CLACSO, Buenos Aires, 2010.
- Movimiento Alianza País, 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir. Programa de Gobierno 2013- 2017, Quito, 2013. Versión digital disponible en <http://www.alianzapais.com.ec/fundamentos>.

- Neso, Nicola, De la Guerra del Agua hasta la Guerra del Gas- Los Movimientos Sociales de Bolivia y la Elección de Evo Morales. Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año VIII, No. 15. Enero-Junio de 2013.
- Ospina, Peralta, Pablo, Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana. El Ecuador de Rafael Correa, Instituto de Estudios Ecuatorianos, 2010, <http://www.iee.org.ec/index-txt.htm>.
- ----- La unidad de las izquierdas, en revista virtual la Línea de Fuego, 2011, <http://lineadefuego.info/2011/09/08/la-unidad-de-las-izquierdas-por-pablo-ospina-peralta>.
- ----- La revolución ciudadana en Ecuador: conflicto social, régimen disciplinario y proyecto de Estado. En varios autores, *El correísmo al desnudo*, Montecristi Vive, Quito, 2013.
- Ospina y Lalander, Razones de un distanciamiento político. Movimiento indígena ecuatoriano y revolución ciudadana, en OSAL Nro. 32, noviembre de 2012.
- Patzi Paco, Félix, Insurgencia y sumisión. Movimientos indígena-campesinos (1983-1998), Muela del Diablo, La Paz, 1999.
- Paz y Miño, Cepeda, Juan, El gobierno de la revolución ciudadana: una visión histórica. En mantilla, Sebastián y Mejía Santiago (coord.), *Balance de la Revolución Ciudadana*, Editorial Planeta, Quito, 2012.
- -----, Insubordinación o golpe. Ecuador, la trama del 30S, Abya Yala, Quito, 2011.
- Pérez Lara, Alberto, Sujeto histórico y revolución. Articulación del movimiento político y social. En: *Filosofía Marxista I*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2009.
- Prada Alcoreza, Raúl. Perfiles del movimiento social contemporáneo El conflicto social y político en Bolivia Las jornadas de septiembre-octubre de 2003. Revista OSAL, Nro.12, septiembre-diciembre, 2003.

- Querejazu, Roberto. Chile enemigo de Bolivia antes durante y después de la Guerra del Pacífico. Sucre, Opinión y UPB, 2001.
- Quiñones de la Rosa, Isabel, Movimientos indígenas contemporáneos en Ecuador y México. CIALC, México, 2010.
- Ramírez, López, Berenice, América Latina: los saldos de la reestructuración neoliberal. En *hacia un nuevo modelo económico*, Juan Pablos: U. de C. Juárez editorial, México, 1998.
- Ramírez, Franklin, Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales, revista Nueva Sociedad No 227, mayo-junio de 2010.
- -----, El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en Ecuador. El caso del Movimiento de Unidad Purinacional Pachakutik – Nuevo País (PK), Los Andes en Movimiento, CEN – UASB – Universidad de Bielefeld, Quito, 2009.
- -----, Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010), en Observatorio Social de América Latina, Nro. 28, Noviembre de 2010.
- -----, Post-neoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana, Temas y debates Nro. 20, CLACSO, octubre de 2010.
- -----, Reconfiguraciones estatales en Ecuador: 1990-2011. En Thwaites Rey, Mabel (Editora) *El Estado en América Latina: Continuidades y Rupturas*, Arcis-CLACSO, Buenos Aires, 2012.
- Rauber, Isabel. Poderes y hegemonías. Gramsci en el debate actual latinoamericano, Sindicato Luz y Fuerza Mar de Plata, Argentina. Septiembre 2010.
- -----, Sujetos políticos. Rumbos estratégicos y tareas actuales de los movimientos sociales y políticos, Pasado y presente XXI, Santo Domingo, 2006.

- Resina De la Fuente, Jorge, La plurinacionalidad en disputa: el pulso entre Correa y la Conaie, Abya Yala, Quito, 2012.
- Rivera, Cusicanqui, Silvia, “Oprimidos pero no vencidos”. Luchas del campesinado aymara y quechwa 1900-1980, La Mirada Salvaje, La Paz, Bolivia, 1984.
- Rodas, German, La izquierda ecuatoriana (aproximación histórica), Abya Yala, Quito, 2004.
- Sánchez, Paola, Resistencia, consenso y disputa: reflexión sobre el conflicto social en Ecuador (1990-2012). En *¿A quién le importan los Guayacanes? Acumulación, gobierno y conflictos en el campo*, IEE-CDES, Quito, 2013.
- Somuano Ventura, María Fernanda, Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una relación cambiante y compleja, Revista Política y Cultura, núm.27, 2007, pp. 31-53.
- Santos Alvite Eduardo, Mora Duque Mariana. “Ecuador, la década de los 80” Crisis económica y ensayo neoliberal. Corporación editora nacional, Quito, 1987.
- Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 5 años de Revolución Ciudadana, Quito, 2011. Versión digital disponible en <http://www.planificacion.gob.ec/biblioteca/>.
- -----, 8 años de Revolución Ciudadana, Quito, 2015. Versión digital disponible en <http://www.planificacion.gob.ec/biblioteca/>.
- Seoane, José; Taddei, Emilio; Algranati, Clara. Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina. *En publicación: Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina*. Boron, Atilio A.; Lechini, Gladys. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2006.
- Silva, Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución Mexicana. La etapa constitucionalista y la lucha de facciones, Fondo de Cultura Económica, México, 1960.

- Stefanoni, Pablo, Bolivia hoy: rupturas, inercias y desafíos, Revista de Estudios Bolivianos, Vol. 18, 2011.
- -----, Conflicto social, crisis hegemónica e identidades políticas en Bolivia: la emergencia del MAS-IPSP. Informe de investigación Clacso, Buenos Aires. 2003.
- -----, Estado de la democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador, OSAL Nro. 30, noviembre de 2011.
- ----- La “indianización” del nacionalismo o la refundación permanente de Bolivia. En *Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanía?* *Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil*, Gabriela del mata (coord.), Biblos, Buenos Aires, 2009.
- Stefanoni, Pablo, Ramírez, Franklin y Svampa, Maristella, Las vías de la emancipación. Conversaciones con Álvaro García Linera, Ocean Sur, México DF, 2009
- Svampa, Maristella, Bolivia, modelo 2013, en perspectiva, www.sinpermiso.info.
- Tapia, Luis, El Estado de derecho como tiranía, CIDES-UMSA, La Paz, 2011.
- Tischler, Sergio, La crisis del sujeto leninista y la circunstancia zapatista, en Chiapas 12, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM-Era, México, 2001.
- Tortosa, José María, Sumak kawsay, suma qamaña, buen vivir, Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, San Juan, 2009
- Tuaza, Luis Alberto, Las principales teorías sobre los movimientos sociales. En Mancero, Monica y Polo, Rafael (coomp.), *Ciencia, política y poder. Debates contemporáneos desde Ecuador*, FLACSO, Quito, 2010.
- Unda Mario, Modernización del capitalismo y reforma del Estado. En *El Correísmo al desnudo*, Montecristi Vive, Quito, 2013.

- Viaña, Jorge (Coord.), Configuración y horizontes del Estado Plurinacional, Vicepresidencia del Estado, La Paz, 2014.
- -----, Estado plurinacional y nueva fase del proceso boliviano. En Thwaites, Mabel (Editora), *El Estado en América Latina: Continuidades y Rupturas*, Santiago de Chile, Arcis-CLACSO, 2012.
- Wray, Natalia, La construcción del movimiento étnico nacional indio en Ecuador". En Díaz-Polanco Héctor (compilador), *Etnia y nación en América Latina*, Conaculta, México DF, 1995.
- Zibechi Raúl, Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento, Lima, 2007.
- Zuazo, Moira, ¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia, 2da. Edición, Friedrich-Ebert-Stiftung / Ildis, La Paz, 2009.
- Zuazo, Moira, ¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del mas en Bolivia, revista Nueva Sociedad No 227, mayo-junio de 2010, p. 125, <www.nuso.org>.

Páginas web consultadas:

- Tribunal Supremo Electoral de Bolivia <http://www.oep.org.bo/>
- Consejo Nacional Electoral del Ecuador <http://cne.gob.ec/>.
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Arts. 52,53, 54 y 55.
- Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: En <http://www.buenvivir.gob.ec>

Otras fuentes:

- Entrevista a Franklin Ramírez, académico ecuatoriano. Realizada el 08 de septiembre de 2014 en Quito.
- Entrevista a Cristian Gonzáles, director de Participación Ciudadana de la Secretaria de Gestión Política del Ecuador. Realizada el 09 de septiembre de 2014 en Quito.

- Entrevista a Fernando Buendía, sociólogo ecuatoriano. Realizada el 10 de septiembre de 2014 en Quito.
- Entrevista a Liliana Durán, presidenta de la Asamblea Ciudadana Plurinacional del Ecuador. Realizada el 18 de septiembre de 2015 en Quito.
- Entrevista a Miguel Llucó, ex presidente de la CONAIE. Realizada el 15 de septiembre en Quito.
- Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui, académica boliviana. Realizada el 9 de enero de 2015 en La Paz.
- Entrevista a Luis Tapia, académico boliviano. Realizada el 22 de diciembre de 2014 en La Paz.
- Entrevista a Rodolfo Machaca, secretario Ejecutivo de la CSUTCB. Realizada en La Paz, Bolivia, el 10 de noviembre de 2014.
- Entrevista a Anselma Palacios, dirigente del movimiento Bartolina Sisa y senadora boliviana. Realizada el 19 de diciembre de 2014 en La Paz.
- Entrevista a Xavier Tito, coordinador del Viceministerio de Descolonización de Bolivia. Realizada el 12 de enero de 2015 en La Paz.